



TESIS DOCTORAL

**CONEXIONES TRANSNACIONALES y EXTRACCIÓN
PETROLERA:
LENGUAJES y DINÁMICAS de CONTESTACIÓN en
TORNO al DELTA del NÍGER (1958-2015)**

Aloia Álvarez Feáns

Programa de Doctorado en Estudios Internacionales y Africanos

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Facultad de Derecho

Directora de la tesis

Alicia Campos Serrano

MADRID, noviembre de 2015

Para Él, que está llegando

La nueva ciencia

*en el nombre del mercado, ellos necesitaban
un pueblo sin la indisciplina del río
que se introduce al mar en un delta; ellos dijeron,
un río debe sostenerse en contra de los arroyuelos;*

*en el nombre del mercado, ellos necesitaban
rehenes de los pantanos y del cieno antiguo
que superasen los axiomas de los sabios
en busca de un delta que fluye y confluye*

*en el nombre del mercado ellos necesitaban un pueblo
que se inclinase antes de que el viento hiciese de ellos sauces
o los pusiese fuera de combate, ellos dijeron, si no van a servir
derríbenlos en el nombre del mercado*

*bajo los arcos triunfales de la nueva ciencia
la paz ofrecida sólo a ciudades reducidas a polvo
por fuegos amistosos en el nombre del mercado,
ellos necesitaban un pueblo que creciese en inercia*

*ellos necesitaban un pueblo que creciese en aceptación
y se postrase en el nombre del mercado
al sino primitivo de oro negro fluyendo
hacia los desiertos de cuentas bancarias extranjeras*

*ellos necesitaban un pueblo cuyas calles en silencio
tuviesen la alquimia suficiente para convertir el rugido
de los estómagos y el llanto de los niños muriendo de kwashiokor
en una música de baile más allá de las silbantes ventiscas*

*ah! ellos necesitaban de la música en el nombre del mercado
para poder probarlo, necesitaban de vidas enteras
más allá del caminar y del anhelo; tenían que probarlo
probar que su ciencia funciona -que su ciencia en verdad funciona-*

Poema de Odia Ofeimun, traducción de Raúl Jaime

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. LAS CONEXIONES TRANSNACIONALES EN TORNO AL DELTA DEL NÍGER: INDUSTRIA PETROLERA, CONFLICTO Y MOVIMIENTOS SOCIALES	19
Introducción. Recursos naturales y conflicto en África subsahariana	19
1.1. De la “maldición de los recursos”... ..	23
1.2. ... a la movilización de agravios colectivos	26
1.3. Enfoques críticos sobre la globalización y el poder corporativo	33
1.4. Cuestionando los discursos celebrativos sobre la “sociedad civil global”	37
1.5. El Delta como espacio de procesos transnacionales complejos	41
1.6. Los efectos de las conexiones transnacionales en el activismo	44
CAPÍTULO 2. EL “COMPLEJO PETROLERO” EN EL DELTA DEL NÍGER: TRAYECTORIAS HISTÓRICAS DE LAS CONEXIONES TRANSNACIONALES (1958-1986)	49
Introducción. Aproximación geográfica al Delta del Níger	49
2.1. El Delta como espacio de procesos transnacionales	52
2.1.1. De la trata atlántica a la economía petrolera	52
2.2. El Delta en la construcción del Estado nigeriano	59
2.2.1. Federalismo, recursos naturales y redistribución de rentas	63
2.2.2. Del “principio de derivación” a la <i>Distributive Pool Account</i>	67
2.3. La guerra de Biafra como punto de inflexión	70
2.3.1. La creación de estados	75
2.3.2. El proceso de centralización fiscal	77
2.3.3. La nacionalización del petróleo	79
2.3.4. La emergencia de las “minorías petroleras”	82
2.4. De la euforia petrolera a los Planes de Ajuste Estructural	83
2.4.1. Shagari y la “economía mixta”	84
2.4.2. Buhari y la “guerra contra la indisciplina”	90
2.4.3. Babangida y el Plan de Ajuste Estructural	92
Conclusiones	94

CAPÍTULO 3. DINÁMICAS Y LENGUAJES DE CONTESTACIÓN EN TORNO AL PETRÓLEO: EL CASO DEL MOSOP (1986-1999)..... 99

Introducción. Petróleo y contestación en el Delta del Níger	99
3.1. Petróleo, ajuste estructural y el lenguaje de la etnicidad.....	102
3.1.1. El MOSOP y la cuestión ogoni	106
3.1.2. Pueblos indígenas, medioambiente y empresas transnacionales.....	109
3.2. Petróleo y autoritarismo: debates en torno a los derechos humanos	115
3.2.1. La transnacionalización de la cuestión del Delta.....	122
3.2.2. El MOSOP después de Saro-Wiwa	126
3.3. El legado del MOSOP: “minorías petroleras” y conexiones transnacionales ...	131
3.3.1. El encuadre global: indigenidad y “conexión vertical”	133
3.3.2. Petroviolencia y control de los recursos: la emergencia de la minoría ijaw	135
Conclusiones.....	137

CAPÍTULO 4. POLÍTICAS DE JUVENTUD Y PETROVIOLENCIA: LA LUCHA POR EL CONTROL DE LOS RECURSOS EN EL DELTA DEL SIGLO XXI. 141

Introducción. “Democratización” y nuevas trayectorias de conflicto	141
4.1. De la <i>Declaración de Kaiama</i> a la agudización de la petroviolencia (1998-2000)	147
4.1.1. Nuevos lenguajes, viejas demandas: reclamaciones en torno al petróleo ..	154
4.2. El nacionalismo ijaw: alianzas, fracturas y rearticulaciones en torno a la etnicidad (2000-2005)	159
4.2.1. Trayectorias históricas: políticas de juventud y petroviolencia.....	163
4.3. Del surgimiento del MEND al proceso de “amnistía” (2005-2009)	169
4.3.1. La sofisticación de la lucha armada.....	170
4.3.2. El Delta en el marco de la “Guerra global contra el terrorismo”	175
4.4. Abordajes institucionales: el <i>Programa de Amnistía del Delta del Níger</i> (2009-2015).....	180
4.4.1. Las ambivalencias del proceso de “amnistía”	183
Conclusiones.....	188

CAPÍTULO 5. CONEXIONES TRANSNACIONALES EN EL ACTIVISMO EN TORNO AL PETRÓLEO: ENTRE LA DENUNCIA Y LA NEGOCIACIÓN ... 195

Introducción. El activismo transnacional en el Delta del Níger	195
5.1. El fenómeno de las ONGs en el Delta desde 1999.....	198
5.1.1. Estrategias y lenguajes de denuncia frente a los impactos de la industria petrolera.....	202

5.1.2. La negociación con la industria como estrategia.....	204
5.2. Prácticas y lenguajes en torno a los derechos humanos y medioambientales: de lo “universal” a lo “occidental”	207
5.2.1. Discursos sobre los derechos de las minorías.....	216
5.2.2. Visiones sobre el medioambiente	219
5.3. Prácticas y lenguajes en torno a la industria petrolera: de la RSC a la transparencia	227
5.3.1. El lenguaje de la RSC: oportunidades y limitaciones.....	230
5.3.2. La retórica de la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno: ambivalencias y contradicciones	236
Conclusiones.....	244
CAPÍTULO 6: CONSIDERACIONES FINALES	247
ANEXO.....	257
BIBLIOGRAFÍA	263

INTRODUCCIÓN

12 de septiembre de 2008. Asisto a la conferencia del representante de Shell en Nigeria durante la celebración en Abuja de la Conferencia de África Occidental de la EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)¹. En su alocución, el portavoz de la principal empresa transnacional del sector petrolero con negocios en el país manifiesta el compromiso de esta con la promoción del desarrollo, la creación de empleo y la protección del medioambiente local para terminar asegurando que “la sociedad civil tiene un papel clave en la resolución del conflicto del Delta del Níger”. Tras su intervención, que es recibida con gestos de desaprobación por algunos de los activistas de la citada región presentes en el auditorio, el ministro nigeriano de Energía sonríe y saluda al público, carraspea y cuando se dispone a hablar, el micrófono le niega la palabra. Se ha ido la luz en la sala.

Esta inconveniencia es asumida con absoluta normalidad por todos los presentes. Entre risas, algunos me cuentan que están habituados a sufrir constantes cortes de electricidad, a pesar de que fuera del Palacio de Congresos en el que nos encontramos se erigen majestuosos hoteles, lujosos centros comerciales y las sedes de algunas de las principales empresas transnacionales del mundo, símbolos todos ellos de la pretendida prosperidad de una de las tres principales potencias económicas del continente africano. Si nos alejamos de la capital, comprenderemos qué es lo que ha provocado que esta presuma de ser una de las urbes mejor planificadas de África. Los cientos de camiones cisterna cargados de petróleo que recorren las amplias autopistas que la conectan con las principales ciudades del país atravesando inmensos suburbios superpoblados, nos recuerdan que estamos circulando por las venas de una de las mayores economías petroleras del mundo.

La mayor parte de los activistas que asisten a este congreso se han acercado a Abuja para participar en el encuentro regional africano de la coalición internacional PWYP (Publish

¹Según su página web (<https://eiti.org>), la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas es un “estándar global para promover la gestión transparente y responsable de los recursos naturales”, que “busca fortalecer los sistemas de gobierno y de la empresa, contribuir al debate público y aumentar la confianza. En cada país la aplicación es apoyada por una coalición de gobiernos, empresas y la sociedad civil, que trabajan juntos”. Esta iniciativa fue puesta en marcha en el año 2002 y fue adoptada por el gobierno nigeriano liderado por Olusegun Obasanjo en febrero de 2004.

What You Pay)², el rostro amable de la EITI, celebrado durante los tres días anteriores en un hotel de cuatro estrellas. Además de desde otros lugares de la propia Nigeria, han venido desde países africanos como Ghana, Costa de Marfil, Angola y República Democrática del Congo; y europeos, como España, Reino Unido, Suiza y Alemania, para intercambiar sus experiencias de trabajo en materia de incidencia política con el sector de las industrias extractivas. Algunos son delegados de los capítulos estatales de grandes ONGs (Organizaciones no Gubernamentales) transnacionales, mientras otros representan a pequeñas organizaciones locales, algunas sin ningún miembro más que ellos mismos. Un número importante de ellos ha viajado desde el Delta del río Níger, una vasta región de más de 70.000 km² en el sur del país que desde la década de 1990 es el núcleo de la estrategia de seguridad energética global puesta en práctica en el Golfo de Guinea (Soares de Oliveira, 2007).

Gracias, en gran medida, a una producción diaria media de en torno a los dos millones de barriles de crudo, Nigeria ha podido situarse en una posición económica privilegiada en la región de África occidental, al ser el principal productor y exportador de petróleo de todo el continente africano. Tres cuartas partes de las reservas nigerianas de petróleo y gas natural se encuentran *onshore*, es decir, en territorio continental, en la zona del Delta del Níger, lo que ha provocado una serie de dinámicas locales particulares. Esta relevancia geoestratégica ha tenido determinadas implicaciones en los órdenes sociales desplegados en la región, pues ha tenido repercusiones sobre las relaciones políticas y la distribución del poder, impactos socioeconómicos, medioambientales y humanitarios; que han originado a su vez unas respuestas sociales determinadas.

El Delta es hoy el centro de una serie de procesos transnacionales en los que el petróleo juega un papel nuclear; la explotación de este recurso natural ha dado lugar a que allí intervengan un conjunto de actores transnacionales que, conectados de diversos modos a los locales, han generado unas dinámicas y elaborado unos discursos distintivos. La asistencia al encuentro regional africano de la coalición PWYP nos ha permitido constatar cómo en torno a una de las áreas con mayor riqueza hidrocarburífera del mundo, frente a los impactos políticos, económicos, sociales, medioambientales y culturales provocados

² Según su página web (www.publishwhatyoupay.org), PWYP “ayuda a los ciudadanos de los países en vías de desarrollo ricos en recursos naturales a hacer a sus gobiernos responsables en la gestión de las rentas derivadas del petróleo, el gas y las industrias mineras”. El encuentro regional africano de dicha coalición tuvo lugar entre el 8 y el 10 de septiembre de 2008.

por las dinámicas transnacionales propias de la industria petrolera, se han articulado una serie de redes de activismo con un carácter también transnacional.

Mientras los miembros de algunas de estas redes debatían en Abuja nos llegaban noticias a través de los medios de comunicación de que el principal grupo armado del Delta, el MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) acababa de declarar una “guerra petrolera” contra el gobierno federal de Nigeria en respuesta a una serie de bombardeos aéreos contra sus bases operativas en los pantanos de la región. En un *email* enviado a medios como la BBC y Reuters, el grupo insurgente, activo desde finales del año 2005, afirmaba que seguiría llevando a cabo acciones armadas contra los intereses de la industria petrolera hasta que sus demandas de “justicia, respeto y diálogo” se viesan satisfechas. El MEND es considerada por el gobierno nigeriano, las empresas transnacionales presentes en el Delta, y otros actores con intereses en la región, la principal “milicia” que a través de sus acciones ha desafiado a la industria petrolera del Delta desde que se generalizó la insurgencia armada a partir del año 1999, cuando se instaló el multipartidismo en el gobierno federal de Nigeria tras tres décadas de regímenes militares.

En los principales estados productores de petróleo (Rivers, Bayelsa y Delta), junto a las oficinas operativas de las principales empresas petroleras transnacionales, confluyen ONGs locales y transnacionales de defensa de los derechos humanos y el medioambiente junto con diversos grupos insurgentes como el MEND. Desde que se inauguraron las actividades de exportación de petróleo a finales de la década de 1950, una multiplicidad de actores ha tratado de capturar el bienestar derivado del control sobre las rentas petroleras, lo que ha generado una serie de dinámicas complejas y aparentemente contradictorias. El Estado nigeriano, a través de su compañía petrolera estatal, las principales empresas transnacionales del sector, compañías privadas locales y otros actores sociales se disputan el acceso a los potenciales beneficios proporcionados por la explotación de los recursos petroleros. Todos estos actores han tejido complejas redes de alianzas y elaborado variados discursos en torno a la región, al petróleo, a sí mismos y al resto de los actores.

Las luchas asociadas al petróleo del Delta se dan entre diferentes facciones de la élite dominante con el objetivo de acceder al poder federal, que en este caso proporciona el

control de las rentas petroleras; entre la elite gobernante y la mayor parte de la sociedad nigeriana en la distribución de estas rentas y entre las poblaciones de la región productora y el tándem formado por el gobierno federal y las empresas transnacionales por el “control de los recursos”. A pesar de que el petróleo es propiedad del Estado nigeriano, este necesita la tecnología de la que disponen las empresas transnacionales para extraerlo, para lo que facilita las operaciones de estas tanto desde el punto de vista legal y fiscal como físico. La legislación y las políticas puestas en práctica por los sucesivos gobiernos federales han tendido a asegurar que los dos polos de esta relación se vean beneficiados. El Estado funciona, de este modo, como mediador a la hora de forzar el orden en lo local para asegurar el funcionamiento de una industria de carácter global, mientras las empresas transnacionales también tienen que asegurar el orden local necesario para realizar sus operaciones extractivas y al mismo tiempo proteger su imagen internacional de las críticas, lo que ha contribuido a transformar las vidas de los habitantes del Delta.

La asignación de las rentas petroleras es muy vertical en Nigeria, lo que provoca que estas aislen al Estado de la responsabilidad sobre los ciudadanos en general y sobre las poblaciones de la región productora en particular. A pesar de la omnipresencia de la industria petrolera en su territorio, el 85% de la población que trabaja en el Delta encuentra sus medios de supervivencia en pequeños negocios locales fuera de los cauces formales de la economía (UNDP, 2006). La mayor parte de la población se ve excluida de las ingentes ganancias derivadas de la extracción de petróleo en sus tierras; en el año 2006 según el PNUD, el 75% de la población del Delta vivía bajo el umbral de la pobreza (UNDP, 2006, p. 2). En ese sentido, Nigeria sería un ejemplo de que las inversiones en el sector petrolero “han estado concentradas en enclaves blindados, a menudo con un pequeño o ningún beneficio para la sociedad” (Ferguson, 2005, p. 378), en parte porque la producción de petróleo es intensiva en capital, pero no en mano de obra, no hacen falta demasiados trabajadores para el funcionamiento de la industria.

Las dinámicas transnacionales de la industria petrolera han impactado de diversas maneras en la vida de las poblaciones del Delta. Por un lado, han profundizado las desigualdades socioeconómicas en la región. La economía petrolera ha inducido un proceso de “proletarianización” entre sus habitantes, sobre todo entre el gremio de pescadores, como resultado de las disrupciones causadas por la industria y su incapacidad para absorber a una población mayoritariamente no cualificada (Okorobia, 2001). Ese

fenómeno ha provocado elevadísimas tasas de desempleo y subempleo, fundamentalmente entre los jóvenes, una situación que se agudiza en los tres principales estados productores de petróleo³. Además, una gran parte del personal de la industria petrolera es expatriado o procede de otras zonas del país, lo que contribuye a encender el malestar de la población local, que tras décadas de extracción petrolera ha visto cómo se han destruido sus fuentes económicas tradicionales, y no encuentran vías alternativas para asegurar su supervivencia.

Desde el punto de vista medioambiental, como han denunciado ONGs locales e internacionales, la polución de tierras y aguas ha provocado la destrucción de la vida animal, tanto acuática como terrestre. Y este fenómeno ha conducido a que los sectores productivos tradicionales, como la pesca y la agricultura, se hayan visto gravemente amenazados, lo que además de poner en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones del Delta tiene marcados efectos en las economías domésticas, al acabar con las bases de la supervivencia económica. Por otro lado, la contaminación sonora y las vibraciones de la tierra constantes impactan sobre las infraestructuras (edificios, puentes, carreteras) que no reciben la reparación adecuada, lo que genera más polución e inseguridad para las personas. Además, el 20% del gas bombeado en el mundo procede de Nigeria (CISLAC, 2007, p. 49), lo que en el Delta provoca daños a edificios, formación de lluvia ácida, y otros problemas ambientales.

En un informe de 2010, el Ecumenical Council for Corporate Responsibility (ECCR), una organización católica con base en Reino Unido y socios en el Delta, que trabaja por “la justicia económica, la gestión medioambiental y la responsabilidad corporativa y de los inversores”⁴ analiza los impactos sociales y medioambientales de las actividades de Shell Petroleum Development Company (SPDC) en la región. A partir de cinco casos de estudio elaborados por otras tantas organizaciones que trabajan con poblaciones locales, algunas de ellas entrevistadas para la presente investigación, como el Centre for Social and Corporate Responsibility (CSCR) y Stakeholder Democracy Network (SDN), el

³ Exceptuando los estados de Abia, Edo y Ondo la tasa de desempleo en la región es mucho más elevada que la media estatal, lo que unido a la alta tasa de fecundidad supone que un 72'5% de las unidades familiares del Delta tenga a su cargo cinco o más personas sin trabajo en situación de dependencia, algo que, evidentemente, tiene implicaciones directas sobre los ingresos. Si en el año 2000 en todo el territorio nigeriano la tasa de desempleo alcanzó el 4'7%, en estados como el de Rivers llegó a superar el 19% en la misma fecha, hasta llegar al 30% en Port Harcourt, la ciudad más importante de la región. Esto, sin tener en cuenta, obviamente, el empleo en el sector informal, que en el Delta supone entre el 75% y el 80% del total (UNDP, 2006).

⁴ Toda la información sobre esta organización está disponible en su página web: www.eccr.org.uk.

ECCR responsabiliza a la empresa Shell de los impactos generados por sus actividades y aunque hace corresponsable al Estado nigeriano de esta situación, afirma que las empresas “no operan en el vacío. Ninguna empresa multinacional puede presumir de ser ética si extrae recursos y genera la riqueza desde una sociedad sumida en la pobreza y los abusos de los derechos humanos, a menos que los beneficios de su presencia superen claramente las consecuencias negativas” (ECCR, 2010, p. 9). Una opinión que no comparte Shell, que criticó el informe por incompleto y parcial ya que según la empresa, “la primaria y primordial autoridad y responsabilidad” por lo que sucede en el Delta “recae en el Estado” (citado en ECCR, 2010, p. 8).

Distintas agencias de Naciones Unidas también han elaborado informes sobre los impactos medioambientales de la explotación de petróleo en el Delta. Según un informe solicitado por el gobierno nigeriano a UNEP (United Nations Environment Programme) sobre la polución en Ogoniland, a pesar de que las operaciones petroleras en el área finalizaron en 1993 gracias a las movilizaciones de la población local, la recuperación de la zona es posible “pero podría llevar desde 25 a 30 años” (UNEP, 2011, p. 12). En este informe, la UNEP ha reportado impactos de contaminación que superan los estándares nacionales. Según algunos estudios, las fugas de petróleo en la zona son constantes. Estas fugas, al no ser atendidas inmediatamente, tienen efectos devastadores al provocar incendios y la destrucción de la vegetación y la biodiversidad debido a la contaminación. Además, el petróleo altera las propiedades del suelo e incluso puede volverlo un contaminante en sí mismo (UNEP, 2011, pp. 37-39).

La extracción de hidrocarburos tiene, además, impactos directos sobre la salud. La contaminación del ecosistema, provocada por décadas de explotación petrolera, es directamente responsable del deterioro de la salud de las personas, que sufren de enfermedades infecciosas, respiratorias, dermatológicas... Además, las actividades de refinado artesanal de petróleo realizadas por la población, que se han convertido en una nueva oportunidad de negocio frente al empobrecimiento y el desempleo, también tienen impactos sobre la salud y la seguridad personal (UNEP, 2011, p. 102)⁵. Por otra parte, sólo el 27% de los habitantes del Delta tiene acceso a agua potable y únicamente un 30%

⁵ Por otra parte, en materia sanitaria, en la región el número de médicos es de 1 por cada 82.000 personas, llegando a las 132.000 personas especialmente en las zonas rurales, lo que es más de 3 veces la media estatal, de 40.000 (UNDP, 2006).

de los hogares cuenta con acceso a la electricidad (Ibeanu, 2006, p. 12). Estos y otros impactos, que analizaremos en la presente investigación, suponen serias amenazas a los derechos humanos de las poblaciones locales.

Huelgas promovidas por los sindicatos del sector, manifestaciones frente a las sedes de las empresas, demandas ante cortes internacionales, atentados contra oleoductos, secuestros de trabajadores de la industria, contrabando de petróleo... La suma de todos los impactos referidos ha generado una percepción de agravio entre distintas poblaciones del Delta, que han respondido de diversos modos para tratar de capturar una parte de los beneficios asociados a las actividades petroleras. Estas se han ido organizando en base a distintas lealtades para hacer frente a los impactos de las actividades extractivas y reclamar del gobierno federal, instituciones y empresas transnacionales una respuesta ante sus demandas. Aunque existe una gran diversidad en las dinámicas y los lenguajes desplegados por estas organizaciones y movimientos, desde el fin de la etapa militar en el año 1999, los grupos que optan por la resistencia armada como vía para alcanzar sus fines han ido ganando visibilidad, tanto local como internacional. Además, en los últimos años, la extracción de petróleo ha fomentado la consolidación de redes criminales con interés en aprovecharse de las dinámicas perversas de la propia industria, y estas redes criminales a menudo se confunden con los grupos insurgentes.

Las actividades de los grupos armados han planteado un desafío a los intereses de la industria petrolera, que han puesto en práctica distintas estrategias para hacerles frente. La importancia del petróleo nigeriano para la seguridad energética de los principales países consumidores ha llevado a la “securitización” del Delta del Níger⁶. Dados los

⁶ En un marco general de agotamiento de las reservas de petróleo en casi todos los países de la OPEP, con la inestabilidad política característica de Oriente Próximo y la puesta en marcha de políticas tendentes a asegurar la soberanía nacional sobre los recursos naturales en exportadores tradicionales como Venezuela o Bolivia, desde mediados de la década de 1990, África se presenta como un atractivo mercado a explorar por parte de las principales economías importadoras, dadas las oportunidades que ofrecen sus hidrocarburos. El interés internacional se concentra sobre todo en la costa occidental del continente negro, en el Golfo de Guinea, una de las áreas con mayores reservas hidrocarburíferas del mundo. Estados Unidos declaró esta zona a mediados de la década de 1990 como una de sus áreas de interés vital. Muchos países europeos (especialmente Francia y Gran Bretaña, precursores de dicha tendencia debido a sus trayectorias coloniales en el continente, y países como Holanda o España), y más recientemente, India, China y Brasil, son algunos de los principales consumidores que siguen la misma línea. Este interés ha derivado en que la proliferación de empresas transnacionales del sector en toda la región, y en el Delta del Níger en particular, sea creciente. Los intereses internacionales en el petróleo del Delta son múltiples. En el año 2014, el grueso de las exportaciones nigerianas de crudo se dirigieron a: India (18%), Brasil (10%), Holanda (10%), España (9%), Sudáfrica (7%), Indonesia (4%) y Estados Unidos (3%). El resto se repartió entre Europa (25%), Asia (6%), África (6%) y América (2%). Datos extraídos de: Nigerian oil crude exports by destination. www.cia.gov

intereses en juego, las “elites transnacionales” (Robinson, 2003) colaboran para proteger la industria petrolera de las amenazas a sus actividades. Los activistas con los que me reúno en Abuja me cuentan que en el Delta es común ver a soldados montando guardia en las calles y en los alrededores de las instalaciones petroleras. Todos los niveles de la fuerza pública están insertados en la protección de los intereses de la industria, y estas mismas fuerzas de seguridad se ven a menudo implicadas en actividades criminales. Además, desde 1999 el sector de la seguridad privada se ha disparado, y sus compañías, contratadas por las empresas transnacionales, trabajan de la mano de las fuerzas públicas. Dado que al personal de las compañías privadas de seguridad no se le permite llevar armas de fuego, estas subcontratan a personal de la Nigerian Police Force y la Mobile Police para acompañarlas en sus tareas. Además, las transnacionales cuentan también con los Spy Police, oficiales entrenados por la Nigerian Police Force para prestarles servicios de seguridad. Las fuerzas públicas de seguridad actúan, pues, como entes privados para salvaguardar los intereses de la industria y han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en el proceso (Frynas, 2000; Manby, 1999). Las ONGs solidarias con las minorías del Delta han venido reportando ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria y restricción de derechos de libertad de expresión, asociación y reunión por parte de estos actores.

Como trataremos de comprobar en esta investigación, el petróleo ha servido tanto para unir a las poblaciones locales cuando de lo que se trata es de articularse para realizar reclamaciones en torno a él, como para dividir las cuando lo que está en juego es la redistribución de sus beneficios entre ellas. El petróleo se ha convertido en un catalizador de la violencia en el Delta. Una violencia que no ha nacido espontáneamente, sino que se alimenta de los agravios colectivos percibidos por la población local, que ha visto desaparecer sus fuentes tradicionales de ingreso (pesca, agricultura y comercio) debido a las dinámicas de extracción del petróleo en la zona, responsables en gran medida de la degradación medioambiental de sus ecosistemas. Bebe, asimismo, de la memoria, asociada al petróleo, de los movimientos sociales del Delta, y de la represión institucional de la que han sido objeto históricamente. Y se reproduce, también, gracias al interés creciente entre la sociedad por aprovecharse de los beneficios reportados por los recursos naturales presentes en su territorio; lo que, en un movimiento de ida y vuelta, alimenta a

su vez las dinámicas perversas de la industria petrolera, dándoles un carácter estructural y una lógica circular.

Plan de la investigación

Esta investigación, enmarcada en el ámbito de los estudios africanos, se enfoca en el análisis de las organizaciones y movimientos sociales que se articulan en torno a los impactos generados por las actividades de la industria petrolera en la región del Delta de Níger. Parte del estudio preliminar “Seguridad energética local, seguridad humana local: respuestas sociales a los impactos de la industria petrolera en el Delta del Níger”, con el que obtuve el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en mayo de 2008. Durante el proceso de dicha investigación pude observar cómo la explotación de petróleo ha provocado determinadas respuestas sociales en el Delta, en particular, me centré en estudiar cómo ha derivado en la articulación de una parte de la sociedad en demanda de justicia redistributiva. Y aquí encontramos dos elementos interesantes que abren un campo de análisis que se pretende explorar en esta investigación.

Por un lado, por distintas variables que trataremos de analizar, las estrategias de las organizaciones del Delta han evolucionado desde los repertorios pacifistas de contestación desplegados entre las décadas de 1970, 1980 e inicios de 1990 hasta entrado el siglo XXI, en el que se ha fortalecido la estrategia armada por parte de algunos grupos. Por otro lado, las demandas que alimentan sus discursos han ido desde el asistencialismo, pasando por las reclamaciones sobre los derechos humanos y medioambientales hasta el “control sobre los recursos”, una exigencia que se plantea sobre la base de la soberanía y la autodeterminación.

En el presente estudio veremos también cómo las organizaciones y movimientos sociales locales del Delta no son los únicos actores que llevan a cabo acciones colectivas de contestación cuyo objetivo es la industria del petróleo. Por un lado, en Abuja distintos grupos de la llamada “sociedad civil” elaboran también sus propias estrategias y despliegan sus propios discursos en relación con la cuestión petrolera. Por otro lado, diversas organizaciones internacionales que forman parte de redes y coaliciones de incidencia política intervienen también en la región a través de sus alianzas con organizaciones y movimientos locales. Unas y otras están realizando la función de

traductoras de diversos discursos, como el de la defensa de los derechos humanos y medioambientales, la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno al plano local.

La idea de esta tesis es profundizar en la materia atendiendo a diversos enfoques, como los abordajes institucionalistas empleados por las Instituciones Financieras Internacionales y las Agencias de Desarrollo, y discursos, como el de los derechos humanos y medioambientales o el de la transparencia, utilizados tanto por estas como por ONGs de carácter local y transnacional. El objetivo de la presente investigación es desvelar las conexiones transnacionales de los actores que intervienen en lo que Michael Watts (2004) denomina el “complejo petrolero” nigeriano, formado por los distintos grupos de interés de la industria; en particular en el espacio del activismo. Con ese fin, centraremos nuestro análisis en las dinámicas y los lenguajes que se generan en el marco de las redes y coaliciones transnacionales de activismo. Este trabajo pretende, en definitiva, iluminar los diferentes discursos y lenguajes con los que se llevan a cabo las diversas reivindicaciones y los espacios de negociación y/o confrontación que estos lenguajes abren con otros actores del “complejo petrolero”. El fin último es poder dar respuesta a tres amplias cuestiones: ¿Cuáles son las conexiones entre los actores, locales, estatales y transnacionales que intervienen en el “complejo petrolero” nigeriano? ¿Cómo asumen el conflicto del Delta las ONGs locales, estatales y transnacionales? ¿Qué conflictos y contradicciones generan sus prácticas y sus discursos?

En el capítulo 1 llevaremos a cabo un repaso de los principales acercamientos teóricos a la región del Delta del Níger. Nos enfocaremos, en particular, en los análisis que se han hecho desde la perspectiva de los impactos que las actividades de explotación de petróleo tienen sobre la esfera local. Partiendo desde una visión más amplia que estudia estos impactos en el contexto general de África subsahariana, acabaremos acercando nuestro foco a nuestra área de estudio para descubrir cuáles son las visiones dominantes existentes en la literatura acerca del conflicto del Delta y cómo estas han influido en las políticas públicas estatales e internacionales y en la conducta de otros actores, desde las empresas petroleras hasta las ONGs locales e internacionales que intervienen en la región.

En el segundo capítulo exploraremos las trayectorias históricas de las conexiones transnacionales que han atravesado el Delta del Níger, en particular las que se han dado

en el marco del “complejo petrolero”. Comenzaremos esta exploración con una primera aproximación a la región, entendida esta como un espacio de procesos transnacionales, desde su inserción en el comercio triangular surgido en torno a la trata atlántica de esclavos en el siglo XVI, pasando por su papel como exportador de palma aceitera en el marco del gobierno colonial, hasta llegar al surgimiento de la economía petrolera en la década de 1960, una vez que Nigeria obtuvo la independencia del Reino Unido.

A continuación, llevaremos a cabo un análisis del papel que ha jugado el Delta en la construcción del Estado nigeriano y de los diversos impactos que este proceso ha tenido en la región. Este análisis en perspectiva histórica se centrará especialmente en la evolución de las políticas de redistribución de las rentas petroleras por parte de los sucesivos gobiernos federales y de las distintas controversias que se han generado en torno a ellas. Nos detendremos después en la exploración de la guerra de Biafra (1967-1970), lo que nos permitirá comprobar cómo esta impactó de un modo determinante en las políticas puestas en práctica en la región a partir de la década de 1970, especialmente en lo que se refiere a la nacionalización de los recursos petroleros, al proceso de centralización fiscal progresivo y a la creación de nuevas unidades estatales. Veremos también cómo la guerra tuvo efectos en la movilización de agravios en el Delta, dando lugar a la emergencia de las “minorías petroleras” (Obi, 2001a).

Para finalizar este capítulo 2 analizaremos el periodo comprendido entre finales de la década de 1970 y mediados de la década de 1980. Dibujaremos en particular los efectos que el *boom* petrolero derivado de un contexto internacional favorable a los países exportadores de esta materia prima estratégica tuvo sobre la economía nigeriana y las políticas federales puestas en práctica por el gobierno civil de Shu Shagari (1979-1983) y los regímenes militares de Muhammadu Buhari (1983-1985) e Ibrahim Babangida (1985-1993), cuando la implementación de los Planes de Ajuste Estructural (PAEs) impulsados por las IFIs (Instituciones Financieras Internacionales) en un marco de autoritarismo estatal provocó transformaciones de gran relevancia en las diversas dinámicas, alianzas y conflictos entre los distintos actores del “complejo petrolero”.

El capítulo 3 analizará algunas de las dinámicas y lenguajes de contestación articulados por organizaciones y movimientos sociales del Delta entre los años 1986 y 1999. Veremos cómo estas dinámicas y lenguajes se enmarcaron en un contexto más amplio, dado que

durante esta etapa tuvo lugar una ola de movilizaciones en toda Nigeria en contra de las políticas de austeridad puestas en marcha desde el mandato de Babangida y el autoritarismo de su régimen y el de su sucesor Sani Abacha (1993-1998). En primer lugar exploraremos la relación existente entre la explotación de petróleo, la aplicación del PAE y el despliegue del lenguaje de la etnicidad por parte de distintos colectivos en el Delta. Nos centraremos aquí, en particular, en el estudio de la evolución del movimiento más representativo de la región en este período, El MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People).

En segundo lugar, veremos cómo el autoritarismo creciente desplegado por los regímenes militares de Babangida y Abacha dio lugar a la emergencia de nuevos debates en torno a los derechos humanos en el marco del surgimiento del “movimiento prodemocracia” nigeriano. Comprobaremos cómo, mientras se organizaban diversas campañas a nivel federal en contra de la represión gubernamental, en el Delta estos debates se articulaban con los lenguajes transnacionales de la defensa de los pueblos indígenas y el medioambiente, gracias a la estrategia desplegada por el movimiento ogoni. Estudiaremos cómo esta estrategia llevó a la transnacionalización del conflicto del Delta provocando que muchas organizaciones, redes y coaliciones transnacionales de activismo comenzasen a interesarse por lo que sucedía en la región.

Para terminar este capítulo 3, exploraremos cómo la ejecución de 9 activistas del MOSOP, entre ellos su líder Ken Saro-Wiwa, contribuyó a debilitar el movimiento, al mismo tiempo que en el exterior se convertía en un icono de las luchas de las minorías en contra de las empresas transnacionales. Analizaremos también el legado de la organización, y cómo a partir de su desaparición emergieron dos tendencias en la contestación política desplegada en la región. Por un lado, muchas organizaciones locales trataron de emular a los ogoni llevando a cabo estrategias similares a las suyas, mientras otras, como las formadas por grupos de jóvenes ijaw, pusieron en marcha estrategias armadas contra los intereses de la industria petrolera, dos tendencias que se han fortalecido desde la etapa multipartidista inaugurada en 1999.

En el capítulo 4 exploraremos precisamente esa última de las dos tendencias, la emergencia de las “políticas de juventud” puestas en marcha por estos grupos, que encuentran su expresión en el lenguaje del “control de los recursos”. Empezaremos esta

exploración perfilando las nuevas trayectorias de conflicto que han surgido en el proceso de “democratización” impulsado durante la nueva etapa caracterizada por la implantación del multipartidismo en el gobierno federal nigeriano. A continuación, nos detendremos de manera especial en el análisis de los efectos que la *Declaración de Kaiama* de 1998 tuvo sobre la articulación de los movimientos sociales del Delta.

A partir de este momento nos centraremos en el análisis de las narrativas nacionalistas articuladas por los jóvenes ijaw para detenernos en la exploración de las alianzas, fracturas y rearticulaciones que se dieron en torno a la etnicidad en el marco de esta minoría. Realizaremos un análisis de las “políticas de juventud” desplegadas por los grupos armados de los jóvenes ijaw y las respuestas a sus acciones orquestadas por parte del gobierno federal liderado por Olusegun Obasanjo entre los años 1999 y 2007. Nos detendremos en particular en la exploración de la sofisticación de la lucha armada puesta en marcha por el MEND entre finales del año 2005 y el 2009 para entender los efectos de la conversión del Delta en uno de los focos a combatir en el marco de la llamada “Guerra Global contra el Terrorismo”.

Este capítulo cuatro finalizará con un análisis del *Programa de Amnistía del Delta del Níger* ideado por el presidente Yar’Adua (2007-2009) y puesto en marcha por su sucesor Goodluck Jonathan entre los años 2009 y 2015. Examinaremos las críticas que ha recibido esta estrategia encaminada a contener la violencia en la región tanto por parte de académicos como de organizaciones sociales locales y transnacionales, por considerar que no ha contribuido a resolver las principales problemáticas del Delta.

El capítulo 5 explorará otra de las tendencias surgidas gracias en parte al legado del MOSOP y facilitada en el marco del fin de los regímenes militares en Nigeria. Examinaremos las conexiones transnacionales que han surgido en el activismo en torno al Delta del Níger desde 1999. Examinaremos en primer lugar el fenómeno de las ONGs y cuáles son sus principales estrategias de denuncia y/o negociación con la industria petroleras. Las organizaciones que realizan una denuncia más frontal de los impactos de las actividades petroleras utilizan el lenguaje de los derechos humanos y medioambientales, mientras las que están dispuestas a negociar con las empresas transnacionales y el gobierno federal tienden a utilizar en mayor medida la retórica de la

RSC y la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno; aunque el uso de estos lenguajes no es exclusivo de unas y otras.

A continuación exploraremos cada una de estas tendencias. En primer lugar, analizaremos algunas de las prácticas y los lenguajes desplegados en torno a los derechos humanos y medioambientales para ver cómo estos generan fricciones en el marco de las redes de activismo transnacional. Estudiaremos en particular los discursos sobre los derechos de las minorías y las visiones sobre el medioambiente que se han desarrollado en la región. Para finalizar analizaremos las prácticas y los lenguajes que han surgido en torno a la industria petrolera, formada por el gobierno nigeriano y las empresas transnacionales. Prestaremos atención a las oportunidades que ofrece y las limitaciones que presenta el lenguaje de la RSC. Por otro lado, y para finalizar, exploraremos las ambivalencias y las contradicciones generadas en el marco de la retórica de la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

Para poner fin a esta investigación, esbozaremos algunas consideraciones finales derivadas de nuestro análisis sobre las conexiones transnacionales surgidas en el activismo desplegado en torno a los impactos de la industria petrolera en nuestra región de estudio.

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación me he basado en literatura secundaria, informes de empresas transnacionales, gobiernos, instituciones multilaterales, agencias de desarrollo y ONGs transnacionales y nigerianas. Además, se ha recurrido a información relevante publicada en medios de comunicación nigerianos e internacionales. Los principales son BBC News, una división de internet del servicio público de televisión y radio del Reino Unido e IRIN News, un servicio de noticias de la Organización de las Naciones Unidas. Ambas realizan un seguimiento continuado a lo que sucede en el Delta. Tanto BBC News como IRIN News, junto a la agencia francesa de noticias Reuters y a algunos medios nigerianos, como *Vanguard* y *Punch*, nos han servido especialmente para acceder a información relacionada con los grupos insurgentes del Delta, dadas las limitaciones para contar con fuentes primarias en este sentido.

Por otro lado, me he servido de fuentes primarias de información durante tres estancias de investigación. La primera de ellas me llevó a realizar un breve trabajo de campo en Abuja, capital de Nigeria, en septiembre de 2008. El motivo de esta visita fue la asistencia como observadora a la celebración del *Publish What You Pay Africa Regional Meeting*, lo que me permitió realizar entrevistas en profundidad a algunos miembros de organizaciones sociales locales. Se trata de la organización de carácter federal con sede en Abuja CISLAC (Civil Society Legislative Advocacy Centre) de y dos organizaciones del Delta con sede en Port Harcourt, la capital de la región: el CSCR (Centre for Social Corporate Responsibility) y el NDEBUMOG (Niger Delta Budget Monitoring Group).

Las siguientes dos estancias se realizaron en Londres. La primera estancia breve tuvo lugar durante 10 días del mes de junio de 2011. En esta ocasión, realicé entrevistas en profundidad al presidente de la organización de la diáspora del Delta, Ijaw Peoples Association of Great Britain and Ireland y a una portavoz de la organización británico-nigeriana SDN (Stakeholder Democracy Network).

La segunda estancia de investigación en Londres, realizada entre el 4 de noviembre de 2012 y el 24 de enero de 2013, tuvo como base la SOAS (School of Oriental and African Studies), lo que me permitió el acceso a una de las bibliotecas con mayor fondo documental relativo a mi tema de investigación y el encuentro con profesores especializados en algunas de las cuestiones transversales que lo atraviesan, esto es, los estudios de economía política de los recursos naturales y la literatura sobre la llamada sociedad civil en el continente africano, Nigeria y el Delta del Níger en particular. El acceso a esta literatura fue esencial para alimentar el sustento teórico de esta investigación, mientras que contar con el seguimiento de profesores del Departamento de Estudios de Desarrollo le abrió nuevas perspectivas.

Por otro lado, la estancia me permitió la realización de entrevistas en profundidad a miembros de algunas organizaciones que forman parte de redes y coaliciones transnacionales relacionadas con las organizaciones de Abuja y el Delta del Níger entrevistadas durante la estancia de investigación realizada en la capital nigeriana. Se trata de la coalición transnacional PWYP, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, la activista de la diáspora del Delta Alice Ukoko y el exactivista

de Platform London Ben Amunwa y, por segunda ocasión, la ONG Stakeholder Democracy Network.

Agradecimientos

Lo que aquí presento es el resultado de un largo proceso de investigación que comenzó cuando la profesora y directora de esta tesis, Alicia Campos Serrano, me sugirió acercarme al Delta del Níger hace ya unos cuantos años. A ella, por su seguimiento, sus lecturas críticas, su honestidad, su apoyo emocional y su aval intelectual le debo el primero de los reconocimientos. Sin Alicia este sinuoso recorrido no habría tenido fin.

Esta investigación tampoco habría sido posible sin el inestimable apoyo del GEA (Grupo de Estudios Africanos) de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid). En particular, la estancia en Abuja de septiembre de 2008 pude realizarla gracias al convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para el Desarrollo (MAECD) y el GEA de la UAM. Ese viaje, además de haber servido para nutrir empíricamente la tesis, me alimentó con una buena dosis de realidad, que falta me hacía. No puedo dejar de recordar en este punto el fin de semana que pasé con Cecilia Esemé, una activista de Sokoto que mataba mosquitos con palabras de amor, lo guardo en mi cajita de tesoros africanos.

Los profesores del Doctorado en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, la mayoría de ellos compañeros del grupo de investigación, han supuesto estímulos fundamentales en este proceso. Para todos, en conjunto, va también mi agradecimiento. Entre ellos, eso sí, tengo que destacar en particular a mi colega, y sobre todo amigo, Josele, quien con su eterno buen humor y sus piropos como flores ha sido un apoyo esencial en los momentos más oscuros.

Le doy las gracias también a los profesores del Departamento de Estudios de Desarrollo de SOAS (School of Oriental and African Studies), Christopher Cramer, Michael Jennings y Subir Sinha, por haberme recibido tan amablemente y haber sido tan generosos en sus recomendaciones para sustentar teóricamente mi investigación. La ayuda en todas las gestiones administrativas de Angelica Baschiera, directora del Centre of African

Studies, que me acogió en su casa, fue tan importante como su pasta con ragú en las frías noches del invierno de mi segunda estancia en Londres.

No puedo dejar aquí de hacer una mención especial a todos los activistas y trabajadores de organizaciones sociales que me dedicaron su tiempo tanto en Londres como en Abuja: Alice Ukoko, Ewa Cholewa, Joseph Croft, Carlo Merla, Ben Amunwa, Lucy Freeman, Makmid Kamara, Oluwatosin Popoola, Benaebi Benatari, George Hill Anthony, Auwal Ibrahim Musa (Rafsanjani) y Boniface Dumpe. Sin todos ellos, y en este caso esta afirmación es más que rotunda, esta tesis no existiría.

Para todos los amigos y familiares que me han soportado, en todas las acepciones del término, durante este eterno periplo, van mis gracias y mis disculpas. Esta tesis es también para mi abuela, que ha sufrido los desvelos de la última etapa de redacción animándome cada noche durante los últimos meses, con su hilo de voz, a “plantar” el trabajo, esto es, a descansar. Hoy, abuela, por fin he plantado, y que germine lo que tenga que germinar.

A mi padre y a Naro, por la confianza, por la honestidad, por el afecto, por el diálogo, muchísimas gracias. Mi madre, que me ha proporcionado el sustento material y el empuje necesarios para poder llevar a cabo esta investigación, ha sido un apoyo cardinal. Para ella va este enorme agradecimiento.

Termino esta muestra de gratitud con unas palabras para mi compañero Emiliano, que me ha sufrido los últimos cinco años y deseaba más que yo que este dilatado y tortuoso camino llegase a su fin. Gracias Emi, por creer en mi, por acompañarme, por estar incondicionalmente, por hacerme la vida más fácil y divertida... Y gracias sobre todo por lo que viene ahora. Que eso, Él, que me ha dado la energía y la motivación para que hoy esté aquí escribiendo estas líneas, sí que será un gran viaje.

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2015

CAPÍTULO 1

Las conexiones transnacionales en torno al Delta del Níger: industria petrolera, conflicto y movimientos sociales

Introducción. Recursos naturales y conflicto en África subsahariana

Las actividades extractivas de la industria petrolera en el Delta del Níger han generado una amplia literatura, una gran parte de la cual se ha enfocado en el análisis de los impactos políticos, económicos, sociales y medioambientales que estas tienen sobre la región. En particular, los estudios sobre los impactos políticos generados por las operaciones de la industria del petróleo se enmarcan en un análisis más amplio acerca de la explotación de recursos naturales en África. Estos estudios pueden ser agrupados en dos amplias perspectivas, cada una de las cuales enfatiza una dimensión del fenómeno. La primera de ellas se centra, por un lado, en la exploración de las instituciones estatales y pone el foco en el concepto de “gobernanza” y, por otro, atiende a las dinámicas “rentistas” características de estas instituciones a partir de enfoques basados en la idea de la “maldición de los recursos”. La segunda atiende de manera particular al rol jugado por los actores externos, como las empresas transnacionales, en el fomento de la articulación de agravios colectivos en los contextos locales afectados por la explotación de recursos naturales.

El primero de los enfoques tiende a asociar la riqueza en recursos naturales con el autoritarismo y considera que las reformas institucionales podrían hacer compatible la extracción de recursos naturales con el respeto a los valores democráticos y el mantenimiento de un buen nivel de vida en los Estados africanos. Este punto de vista se puede encontrar en los informes y declaraciones de organizaciones internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BM (Banco Mundial) o de los grupos relacionados con la industria del petróleo de algunos de los principales países consumidores. El punto de partida de esta perspectiva lo dio el BM con la publicación de su informe *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth* en 1989, un documento en el que reconocía la necesidad de lograr un equilibrio entre el mercado y el Estado, pero no cualquiera, sino un tipo concreto, “correcto”, de Estado.

El concepto de “gobernanza”⁷, entendida por estas instituciones como: “la manera en la que el poder es ejercido en la gestión de los recursos de desarrollo económicos y sociales de un país” (World Bank, 1992, 1), se convertiría desde entonces en un pilar fundamental en cualquier programa de reconstrucción económica, sustentado sobre tres elementos: la rendición de cuentas⁸ (que en general significa hacer a los individuos y organizaciones responsables de sus acciones), la apertura (el control gubernamental del flujo de bienes, ideas, información y participación económica, política y transparencia) y la predictibilidad. Como veremos más adelante, tal como han venido planteando teóricos de diversas disciplinas, esta perspectiva tiene una naturaleza profundamente estatista, al sobrestimar el papel del Estado y la economía nacional, considerándolos el marco privilegiado en el que se articula la realidad social en el continente africano.

Este enfoque bebe de las teorías de la modernización dominantes en la academia entre las décadas de 1950 y 1960, que popularizaron la idea de que modernización sería un proceso que reproduciría la experiencia occidental del desarrollo a partir de la consolidación de una economía capitalista en todo el mundo (Rostow, 1960). El desarrollo, a su vez, vendría generado por dos agentes modernizadores: los países capitalistas desarrollados, que facilitarían el proceso a través de la ayuda, la imposición de políticas y la inversión; y las elites locales que organizarían el proceso modernizador en cada país. Desde el fin de la Guerra Fría, con el paso del paradigma desarrollista al comunitario (una variante del individualismo clásico), uno de los actores centrales de este proceso pasaría a ser la llamada “sociedad civil”, cuyos actores principales serían las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), que se encargarían de promover el buen gobierno, la democracia y los derechos humanos. En el marco de esta nueva agenda del desarrollo se entiende que dado que el Estado ya no puede responder a los problemas de subdesarrollo, estos se solucionarán con habilidades técnicas aplicadas por las ONGs y recursos financieros proporcionados por las IFIs (Instituciones Financieras Internacionales).

⁷ Desde la ciencia política se entiende la rendición de cuentas como: “el uso de la autoridad legítima ejercida en la aplicación del poder gubernamental y la gestión de los asuntos públicos” (Healy & Robinson, 1992, p. 165-6).

⁸ Se distingue entre la rendición de cuentas política: “la efectividad con la que los gobernados pueden ejercer influencia sobre sus gobernantes” (Hyden, 1992, p. 14), y la pública o administrativa: “los métodos y prácticas mediante los cuáles los usuarios del gobierno y los servicios públicos, y aquellos que forman parte de las burocracias públicas, aseguran niveles adecuados de servicio público” (Brautigam, 1991, p. 12).

La segunda de las perspectivas dominantes en el análisis de los impactos políticos de la explotación de los recursos naturales en África pone el énfasis, por su parte, en la estructura económica internacional a partir de planteamientos como las teorías de la dependencia (Frank, 1981; Amin 1975), del sistema-mundo (Wallerstein, 1999) y otras críticas a las teorías de la modernización popularizadas entre las décadas de 1960 y 1980. Desde estas perspectivas se responsabiliza a las regiones desarrolladas y a sus elites de la situación de dependencia de regiones como África dado que el desarrollo de los países del centro sería producto de la extracción del excedente económico de las regiones periféricas por parte de los países occidentales avanzados. Las visiones críticas sobre el proceso de globalización, en boga desde inicios de la década de 2000, se alimentan de estos enfoques y los actualizan, al poner un énfasis especial en el papel que las empresas transnacionales juegan en la dominación de los países más empobrecidos (Klein, 2000; Arrigui, 2004). El problema con estas perspectivas, como veremos, es que sólo atienden a los factores externos sin tener en cuenta el papel de los Estados, y tienden a oscurecer de este modo las realidades locales.

Como acabamos de ver, las conexiones entre lo local y lo global se han analizado normalmente a partir de una idea de dualidad: la mayor parte de los análisis utilizan herramientas analíticas diferentes para analizar las fuerzas internas y las externas. Pero hay ejemplos empíricos que hacen difícil sostener esta dualidad, por eso, en los últimos años ha surgido una línea de análisis que explora la articulación de estas dimensiones y encuentra en sus interrelaciones la explicación a los diversos impactos que tiene la explotación de los recursos naturales en África. Esta corriente ha alimentado un gran número de las perspectivas africanistas que desde distintas disciplinas, como las Relaciones Internacionales y el estudio de los movimientos sociales, han explorado los conflictos relacionados con la explotación de petróleo en nuestra región de estudio.

En ese sentido, nos resultará útil acercarnos a las propuestas teóricas de Bayart (2000), quien observando la realidad africana a través de la lente de la *longue durée* (Braudel, 1958), trasciende las teorías de la dependencia, al considerar que estas han invisibilizado el papel de los actores locales en la Historia del continente. No niega el sociólogo francés que la inserción de África en el llamado “sistema internacional” se dé en unas condiciones de dependencia asimétrica, pero sugiere que para comprender mejor las realidades africanas es necesario introducir en el análisis otras variables. Existen suficientes

evidencias empíricas de que las limitaciones externas han sido instrumentalizadas por los que ostentan el poder y otros actores políticos en África. Así, la soberanía se ejercería allí “a través de la creación y la gestión de la dependencia” (Bayart, 2000, p. 228).

El concepto de “extraversión” le sirve a Bayart “para capturar las dinámicas de la dependencia en África” e iluminar el modo en el que los Estados postcoloniales han encontrado en su relación asimétrica de dependencia externa los recursos para mantener su hegemonía (2000, p. 234). Este concepto nos resulta útil porque elimina la distinción entre la dimensión interna de las sociedades africanas y su inserción en el sistema internacional y nos señala que la dependencia, más que una estructura, como la denominan los teóricos de la dependencia sugiriendo así el inmovilismo de la parte africana, es un proceso histórico. El paradigma de la extraversión “funciona como una matriz histórica de desigualdad, centralización política y luchas sociales” (Bayart, 2000, p. 222), una “matriz de acción” que no es producto de la modernidad, sino que extiende sus raíces en el encuentro colonial, como veremos en el caso que nos ocupa (Ihonbere & Shaw, 1998).

En cuanto a la literatura sobre la contestación política⁹ desplegada en el Delta, gran parte de ella analiza este fenómeno a través del paradigma liberal de la “sociedad civil”, un enfoque ampliamente aplicado a toda África por ser considerado útil en el análisis de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el continente, dado que “encierra un conjunto de valores y prácticas universales sobre la legitimación y los límites del poder estatal” (Bratton, 1994, 52)¹⁰. En esta línea, la “sociedad civil” ha sido considerado un actor fundamental en la historia política nigeriana. Para Edozie, por ejemplo: “Nigeria representa un importante caso de estudio para desentrañar y testar teorías sobre la sociedad civil. El caso nigeriano demuestra el creciente poder de la ideología democrática sobre las ideologías autoritarias en África durante la década de 1990” (Edozie, 2002, p. 9).

⁹ Por contestación política entendemos, la “interacción colectiva episódica, pública, entre los responsables de las reclamaciones y sus objetos cuando (a) al menos un gobierno es un reclamante, un objeto de las reclamaciones, o una parte de las reclamaciones y (b) las reclamaciones afectarían, si se realizan, a los intereses de al menos uno de los demandantes. En otras palabras, esta definición se refiere a la lucha política colectiva” (MacAdam et al., 2001, p. 5).

¹⁰ La llamada “sociedad civil”, un concepto central en las Ciencias Sociales desde la década de 1980, ha sido vista como un actor fundamental en los procesos de democratización, y estaría conformada por “cualquier organización que no está dirigida por el Estado y que no se ha establecido para generarle beneficios de mercado a sus propietarios o accionistas”, lo que no significa que no pueda estar financiada por el Estado o el sector privado o tener miembros de ambos (Jorgensen, 1996, p. 37).

No obstante, para analizar el papel de los actores que han llevado a cabo acciones colectivas de contestación en torno a nuestra región de estudio nos acercaremos a la literatura de movimientos sociales, que entiende a estos fenómenos fluidos y complejos como redes informales y laxas de colectivos e individuos relacionados en relaciones conflictuales. Los movimientos sociales tendrían unos valores y objetivos compartidos, mientras la “sociedad civil” simplemente encontraría su identidad común en el hecho de su autonomía con respecto al Estado, no en su oposición o contestación a él.

1.1. De la “maldición de los recursos”...

El enfoque dominante en la exploración del conflicto del Delta se ha centrado en el análisis de los efectos políticos que la extracción de petróleo tiene, concretamente, en el Estado nigeriano. Las perspectivas sobre la “maldición de los recursos” (Ross, 2001; Shaxson, 2007), un modelo econométrico a partir del cual se postula que existe una correlación natural entre la extracción de petróleo y el autoritarismo, ha sido aplicada al caso nigeriano y se ha convertido en una de las principales miradas hacia el Delta. Según esta perspectiva, el nigeriano sería un clásico ejemplo de “Estado rentista” (Rosser, 2006; Auty, 1993; Collier & Hoeffler, 2004), cuyos “custodios” hacen uso del petróleo para reforzar su posición de poder a través de diversos mecanismos, como la represión, el empobrecimiento de la población, la cooptación de organizaciones y movimientos sociales....

Desde estos enfoques, el Estado nigeriano es visto, como el resto de los Estados africanos, como un “Leviatán débil”, porque “se ha convertido en una propiedad privada encapsulada y legitimada en la esfera pública” (Kalu, 2008, p. 10); un “Estado en la sombra”, construido tras la máscara de un conjunto de instituciones gubernamentales y leyes que ocultan una autoridad “basada en los intereses y decisiones de un individuo o grupo que actúa en su beneficio y se alía con actores externos, privados o públicos, para reafirmar su poder” (Reno, 2001); y un Estado “clientelista y patrimonial” (Joseph, 1987; Chabal & Daloz, 1999; Reno, 1993), porque usa la “instrumentalización política del desorden para el beneficio personal de las elites políticas y sus ‘parientes y amigos, clientes, comunidades, regiones o incluso religiones” (Chabal & Daloz, 1999, p. 15). Dado que los principales asuntos políticos son contestados en función de líneas

regionales, étnicas y religiosas, hay autores que llegan a afirmar que Nigeria es uno de los Estados más “profundamente divididos” de África, un ente “frágil e inestable” (Osaghae, 2005, p. 5; Bach, 1989, p. 240) y un “sistema étnico centralizado” en el que no es posible la “cooperación interétnica” (Horowitz, 1985, p. 39)¹¹.

Según esta literatura, el petróleo se habría convertido en una maldición para la población del Delta del Níger al haber alentado tendencias autoritarias por parte de los que cuentan con el control político del Estado nigeriano (Shaxson, 2007). Este enfoque es el sustento de la teoría de la economía de la guerra, dominante en el análisis de los conflictos africanos tras la Guerra Fría, que sostiene que es la codicia por motivos económicos la que alienta el surgimiento de los grupos rebeldes. En el caso del Delta, desde inicios de la década de 2000 ha surgido toda una corriente de análisis que explora la relación entre la extracción de petróleo y la violencia presente la región, agudizada desde el surgimiento de las llamadas “milicias armadas” o “grupos vigilantes” (Ukeje et al., 2004; Osaghae et al., 2011). Según esta perspectiva, aunque los jóvenes insurgentes del Delta aleguen razones de corte social en justificación de sus acciones armadas contra la industria petrolera, su principal motivación es la codicia (Oyefusi, 2007; Collier & Hoeffler, 2003; Reno, 2011). Según Collier & Hoeffler (2003):

La violencia en el Delta nigeriano comenzó a mediados de 1990 de un modo modesto. Era esencialmente política, dirigida contra un gobierno militar. A pesar de la democratización, la violencia ha escalado de modo agudo, pero se ha transformado en algo más parecido a la lucha entre bandas americanas por el control del tráfico de drogas (p. 70).

Desde el punto de vista de estas tesis, que han sido promovidas por las IFIs, las rebeliones y la violencia son estrategias empleadas por los llamados “grupos rebeldes” en tiempos de crisis y una oportunidad para saquear recursos naturales (Allen, 1999, p. 372). Desde el enfoque de la “economía de la guerra”, que presume una correlación directa entre la riqueza en recursos naturales y la corrupción y el conflicto y llega a estudiar la guerra civil de manera estadística a través del análisis de sus causas sociales, políticas

¹¹ El caso nigeriano ha sido enmarcado en numerosas ocasiones dentro de la corriente de análisis que siguiendo las teorías de la modernización, relaciona el llamado “subdesarrollo” de los Estados africanos con la etnicidad como un fenómeno natural y que “trata los Estados multiétnicos, multiculturales, plurales o ‘divididos’ como una categoría especial de Estados con problemas complejos que amenazan al propio Estado” (Osaghae, 2006, p. 1). Esta perspectiva de análisis ha sido criticada por su reduccionismo al despreciar los nacionalismos no estatales y antiestatales y no contemplar las variables positivas de la etnicidad. Para conocer más sobre esto, ver Campbell (1997).

geográficas y económicas (Collier & Hoeffler, 2003), los movimientos rebeldes serían meros grupos criminales que se aprovechan de recursos como el petróleo para financiar sus rebeliones contra el Estado. Según esta literatura, los grupos armados de jóvenes del Delta han sabido capitalizar las frustraciones de la población local en la etapa postmilitar, pues “el apoyo popular al vigilantismo” se ha alimentado “del descontento con un supuesto Estado democrático, pero también de las críticas de las estructuras tradicionales de patronaje que fueron expresadas, parcialmente, en el lenguaje de los ideales democráticos” (Smith, 2007, p. 168).

Uno de los argumentos sobre los que se sostiene esta tesis es que en realidad las milicias armadas del Delta no han planteado una verdadera confrontación frente a las autoridades políticas nigerianas. En este sentido, William Reno, aunque apunta que “también es razonable considerar los ataques como actos políticos en la reapropiación de recursos locales” (Reno, 2011, p. 231), cree que estos grupos de jóvenes no han sabido aprovechar la oportunidad de presentarse como una verdadera alternativa al poder gubernamental y coordinar sus tácticas y sus lenguajes debido a que están más movidos por la competición para acceder a posiciones políticas en los niveles estatales y locales de gobierno.

Este modelo ha sido matizado recientemente. Lujala, por ejemplo (2010, pp. 15–16), ha examinado empíricamente la cuestión y ha subrayado que “el petróleo prolonga sustancialmente el conflicto cuando se localiza en una zona de conflicto”, dándole así importancia al contexto. En ese sentido, las perspectivas que beben de la idea de la “maldición de los recursos” se han incorporado recientemente al discurso sobre la seguridad global sugiriendo que esos Estados “débiles o fallidos” a causa de su riqueza petrolera suponen una amenaza de dimensiones globales (Duffield, 2004), lo que ha derivado en que la militancia armada en el Delta haya sido integrada desde mediados de la década de 2000 en uno de los fenómenos a combatir en el marco de la “Guerra Global contra el Terrorismo” impulsada desde el gobierno de los Estados Unidos (Boas, 2011).

Los enfoques basados en la “maldición de los recursos” han recibido muchas críticas por parte de diversos africanistas, por mostrarse insensible a las trayectorias históricas y espaciales particulares. La tesis propone una relación causa-efecto entre la riqueza en recursos y el conflicto, una relación que no es natural ni inevitable, más bien son las “luchas hegemónicas entre grupos superiores y subordinados y la naturaleza de la gestión

y apropiación de recursos las que generan conflictos” (Ikelegbe, 2005, p. 213). Los argumentos esgrimidos por tesis inspiradas en la “maldición de los recursos” obvian, además, las motivaciones de los grupos rebeldes, que parecen actuar sólo porque existen fuentes de financiación para activar sus rebeliones. Además, esta literatura tiene un punto de vista excesivamente estatalista de la vida social, que oculta la participación de actores transnacionales como las empresas petroleras y las IFIs en la creación del orden social en contextos locales como el Delta del Níger (Frynas, 2000; Watts, 2004; Obi, 2001a). No obstante, nos ha parecido pertinente traerla aquí, dado que además de ser dominante en el análisis que la academia ha hecho acerca de los conflictos asociados a la explotación de los recursos petroleros de la región, ha alimentado también los enfoques institucionales a estas problemáticas y la conducta de la propia industria frente a las protestas de las poblaciones locales.

1.2. ... a la movilización de agravios colectivos

Frente a estas visiones sustentadas en la idea de la “elección racional”, se despliega toda otra corriente que observa el conflicto del Delta desde la perspectiva de los agravios, que son un eje fundamental en el análisis de los orígenes y la pervivencia de los movimientos sociales, por lo que serán un elemento central en nuestro análisis de la contestación política en la región. Estos enfoques apuntan a que la contestación política responde a la movilización de los agravios colectivos generados por las actividades de la industria petrolera entre distintos actores locales, en particular los grupos armados de jóvenes, que ven las oportunidades de saquear como un incentivo para crear y perpetuar el conflicto (Ikelegbe, 2006; Ukeje, 2001; Ifeka, 2001; Fleshman, 2002; Kalu, 2008). En ese sentido, para Osaghae et al. (2011):

... las alegaciones y percepciones de discriminación, exclusión, opresión, injusticia, dominación y explotación que los del Delta del Níger proclaman que derivan de las negaciones y violaciones de sus derechos humanos se han probado como indispensables para la emergencia y sostenibilidad de sus diversas acciones colectivas de contestación desde la independencia (p. 8).

La movilización de los agravios relacionados con las actividades de la industria petrolera en el Delta ha dado lugar al surgimiento de diversos movimientos sociales, entendidos estos como “colectividades que actúan con cierto grado de organización y de continuidad, en parte fuera de los canales institucionales, con el propósito de desafiar los sistemas existentes de autoridad, o resistirse a los cambios en dichos sistemas, en la organización,

sociedad, cultura, o el sistema-mundo en el que están inmersos (Snow & Soule, 2010, pp. 6-7)¹². Dichos sistemas de autoridad, que desde esta perspectiva no serían sólo los Estados y otras entidades institucionales, sino también las empresas transnacionales¹³, comparten valores, principios, visiones y marcos interpretativos que racionalizan la distribución de su autoridad y elaboran discursos que facilitan la adherencia a ellos mismos o su confrontación por parte de otros actores. Los movimientos sociales estarían posicionados fuera de ese sistema de autoridad mientras los grupos de interés formarían parte del sistema político, que los legitima.

La literatura de movimientos sociales señala que para la constitución de un movimiento hace falta, en primer lugar, que se comparta la percepción de estar siendo fuertemente agraviados, lo que genera insatisfacción, resentimiento, miedo, indignación, etc, sobre las propias condiciones o las de otros (Snow & Soule, 2010). Hasta la década de 1990 los agravios habían sido analizados desde perspectivas demasiado simplistas. Durante la década de 1960, los enfoques sobre agravios surgidos del análisis del movimiento de contestación, veían a estos como constantes naturales en la vida social, más allá del contexto. Estas visiones consideraban a los agravios como un elemento ubicuo de la vida social y, por tanto, irrelevantes como variables explicativas en el surgimiento de los movimientos sociales. Los teóricos de la movilización de recursos consideran, en esa línea, que siempre hay agravios suficientes en cualquier realidad para que se genere un movimiento social. Lo que habría que estudiar entonces serían las oportunidades políticas y la movilización de recursos, pilares de los enfoques dominantes hasta la década de 1970 (MacCarthy & Zald, 1977). Esa perspectiva ha sido, como veremos, aplicada a nuestro caso de estudio a partir de tesis como la del "marketing de la rebelión" (Bob, 2005).

Los agravios han sido vistos también como una función de las condiciones materiales estructurales, los conflictos de grupo y/o desigualdad, es decir, los acuerdos sociales que colocan a una agregación de individuos como antagonistas frente a otro grupo. En este sentido los agravios provocarían el surgimiento de movimientos sociales que se organizan

¹² En esta investigación emplearemos la definición de movimiento social elaborada por Snow y Soule a partir de los planteamientos de Tarrow, MacAdam, Tilly, Turner y Killian.

¹³ Sedes reconocidas de decisiones, reglamentos, procedimientos y directrices que influyen en algún dominio o aspecto de la vida de alguna categoría de personas, conocidos diversamente como constituyentes o adherentes en relación con los partidos políticos y los movimientos sociales, como miembros en el caso de las asociaciones y organizaciones religiosas, como los empleados en relación con los lugares de trabajo, y como accionistas en el caso de las corporaciones (Snow & Soule, 2010, p. 8).

para luchar contra la desigualdad en la distribución de ingresos, estatus, poder y representatividad política y lograr así ampliar sus oportunidades. Se relacionan con las posiciones de los grupos específicos en un sistema social (clases, etnia, religión, raza). En esa línea, para algunos autores (Kalu, 2008; Bach 1989, Forrest, 1986; Ejobowah, 1999) la causa principal de los conflictos asociados al petróleo del Delta es que el Estado federal nigeriano genera desigualdad:

...por el simple hecho de que el grueso de las exportaciones de crudo y las reservas de petróleo están vinculadas a esta región más que a ningún otro lugar, el nivel creciente de subdesarrollo infraestructural y pobreza en el área expone una evidente desigualdad en los incentivos distributivos del sistema federal nigeriano (Kalu, 2008, p. 173).

Lo interesante de esta perspectiva de carácter socioeconómico es que pone en evidencia que muchos de los conflictos del Delta son anteriores a la explotación de petróleo; este solo ha generado nuevas dinámicas en un contexto de conflicto social preexistente caracterizado por la confluencia de distintos elementos: la búsqueda de oportunidades económicas y de compensación por daños medioambientales, el desarrollo de las infraestructuras y la lucha por la obtención de representación política y/o la autodeterminación. Del mismo modo, para Ahonsi (2011), las principales dimensiones interrelacionadas de la crisis del Delta se podrían resumir en lo siguiente:

...la lucha por el control y la propiedad de los recursos por parte de las comunidades productoras de petróleo y su crecientemente militante y violenta naturaleza, la abyecta falta de participación política y rendición de cuentas democrática, el subdesarrollo de las infraestructuras y una profunda y generalizada pobreza, especialmente el desempleo juvenil (p. 28).

La tercera de las visiones dominantes sobre los agravios apunta que estos son resultado de las transformaciones sociales que alteran los modelos de vida social existentes. Esta visión se enfoca desde distintas perspectivas. En esa línea, la *tesis de la desintegración* considera que en la base del surgimiento de los movimientos sociales estarían los cambios sociales disruptivos (guerras, crisis económicas, desastres naturales) que debilitan o destruyen las fuentes tradicionales de cohesión social, al limitar el orden sociopolítico. La *tesis de la disrupción cotidiana* completa la anterior al apuntar que los agravios no sólo se movilizan cuando hay alteraciones de la vida cotidiana y relacionar las condiciones sociales concretas con los agravios (Snow et al., 1998). Esta perspectiva plantea que existen eventos disruptivos que es más probable que deriven en agravios

movilizadores, como los accidentes y desastres que alteran la vida de una comunidad debido a errores humanos; las intrusiones o violaciones de áreas definidas culturalmente como privadas, como el espacio comunitario, de personas ajenas; las alteraciones dramáticas en las rutinas de subsistencia por cambios en el acceso a los recursos, o cambios dramáticos en la estructura de la organización social y control. El tercero de los enfoques sería la *tesis de la privación absoluta o del empobrecimiento*, que postula que las condiciones de vida miserables (falta de acceso a salud, de ingresos, de vivienda, epidemias, discriminación) son las causas movilizadoras de los agravios. Todas estas perspectivas alimentan algunas de las visiones dominantes acerca de la movilización de agravios en el Delta, como las desplegadas por distintas organizaciones transnacionales (AI, 2005a; HRW, 1999a) que intervienen en la región.

En otra línea de análisis, los agravios han sido vistos como una función de los factores psicosociales, derivados en ese sentido de unas condiciones o estados psicológicos determinados. Por ejemplo, la *tesis de la frustración-agresión* entiende que cuando se llega un cierto nivel de frustración se buscará algún tipo de liberación (Dollard et al, 1939). En relación con este enfoque, la *tesis de la privación relativa* postula que las frustraciones crecientes, que serían movilizadoras de agravios, se desarrollan en la brecha existente entre las expectativas o aspiraciones y los logros (Gurr, 1970). La existencia de esta brecha conduce a la frustración que, a su vez, deriva en una disposición violenta hacia el entorno y en particular al desarrollo de conductas agresivas hacia quien se considera responsable de la situación (Máire, 2004). De este modo, en el Delta la violencia se habría hecho instrumental, porque sirve para llamar la atención (Afinotan & Ojakorotu, 2009, p. 194, Osaghae & Ikelegbe, 2011). En esa línea de análisis, para Omotola (2010), “años de privación relativa y promesas incumplidas han generado una frustración con raíces profundas, conduciendo a la agresión y la violencia” (p. 39). Según este autor:

... mientras los factores políticos y económicos proporcionan un terreno fértil para la generación de conflictos al incitar un sentimiento de privación relativa vía marginalización, los factores medioambientales alteraron la estructura de oportunidad para la violencia a partir de la distribución del costo de la violencia, y los factores sociales proporcionaron las herramientas para la violencia. Es esta interacción entre esos factores la que ha conducido al conflicto (Omotola, 2010, p. 39).

Y estos factores serían el propio proceso de construcción federal con la consiguiente marginación de las minorías étnicas y sus reivindicaciones de autodeterminación (factores políticos), el contexto económico, marcado por la consolidación de un estado rentista (factores económicos) y la percepción de las comunidades de que el petróleo les pertenece (Tar, 2008; Osaghae & Ikelegbe, 2011). Esta visión es la que despliegan muchas de las organizaciones y movimientos sociales de la región, en particular aquellos movimientos articulados en base a líneas étnicas, como el MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People), y los grupos armados de jóvenes ijaw, en cuyas declaraciones y documentos se hacen eco de lenguajes inspirados en el concepto de “acumulación por desposesión”, entendido “como la manera en que los activos, riqueza e ingresos son transferidos de las masas de la población hacia las clases más altas o de los países más vulnerables a los más ricos” (Harvey, 2007, p. 34). Este enfoque es a menudo compartido por las organizaciones transnacionales que forman parte de la red de activismo que ha estado implicada en el Delta del Níger (AI, 2005, 2009, 2010; HRW, 1999a; FEI, 2002).

Aunque de todas estas tesis se desprenden ideas interesantes, estas se revelan incompletas en alguna medida para acercarnos a nuestro caso de estudio. En realidad, los agravios movilizadores que han dado lugar al surgimiento de los movimientos sociales en el Delta no han nacido necesariamente de unas condiciones materiales determinadas, de unas relaciones de grupo antagónicas, de la desintegración de las condiciones sociales, de la frustración intensa, la privación, etc., pues todas estas cuestiones están sometidas a interpretaciones. En ese sentido, nos será útil en nuestro estudio acercarnos a la teoría sobre el encuadre y la formación de agravios, que en los últimos 20 años ha supuesto un desafío para la literatura sobre los movimientos sociales.

Esta teoría ve a estas redes de actores “no sólo como portadores de ideas y significados sino también como agentes interpretativos implicados activamente en producir y mantener el significado para sus miembros, antagonistas y apoyos” (Snow & Soule, 2010, p. 51). Desde este punto de vista, los agravios no surgen de las condiciones materiales ni son sucesos naturales, sino que proceden de un trabajo interactivo de interpretación mediado por la cultura, dinámico e interactivo. De todos modos no hay que perder de vista el hecho de que los agravios no son sólo una construcción social o el resultado de

actividades de encuadre¹⁴, sino que dependen en parte de los hechos y condiciones que están siendo encuadradas y del contexto cultural (valores, creencias, ideologías...). En resumen, los agravios movilizados nos proporcionan el motivo primario que ha derivado en el surgimiento de distintos movimientos sociales en el Delta a partir de “la confluencia e interacción de determinadas condiciones materiales o estructurales, factores psicosociales y procesos interpretativos de encuadre” (Snow & Soule, 2010, p. 63).

En cuanto a las condiciones materiales o estructurales, estas contemplarían la estructura de la oportunidad política, la movilización de recursos, y la existencia de “espacios libres”. Lo que la literatura de movimientos sociales denominada estructura de la oportunidad política se relaciona con los cambios en el acceso al sistema político y sus instituciones y con las propias dimensiones de este sistema. La curva de la oportunidad política desarrollada por Michael Lipsky (1970) y adoptada por los teóricos de la oportunidad política, que mide la incidencia de las protestas en relación con el grado de apertura del sistema político, muestra que los sistemas de autoridad intermedios son los que más desafíos de movilización colectiva reciben. La variación en el acceso a un sistema y de ahí las perspectivas de desafío para los movimientos sociales, se ven afectadas por tres categorías de factores (Snow and Soule, 2010, p. 72):

-la relativa estabilidad del modelo de alineamientos políticos dentro de un sistema. Si las alianzas políticas son flexibles y llegan a transformarse, estas son más propicias a la movilización porque pueden originar cambios en el acceso al sistema (muerte de un líder político, cambios en el apoyo al partido en el poder, en definitiva, lo que pueda originar una crisis de legitimidad).

-el papel de aliados influyentes: la presencia o ausencia de aliados con conexiones con el poder político también afecta a la accesibilidad al sistema. Por ejemplo, la tesis de la mediación política de Edwin Amenta et al 1992 y 1994, (p. 74), señala que es necesaria la mediación política de actores influyentes para que se dé la movilización de los movimientos sociales.

¹⁴ El concepto de “encuadre” proviene de Erving Goffman, que entiende que los significados atribuidos a los objetos, los hechos o las experiencias están mediados por procesos interpretativos (Goffman, 1974).

-la capacidad represiva de las autoridades: esta puede no alentar, pero también puede estimular el surgimiento de movimientos sociales, algo que depende, entre otras cosas, del carácter de la represión: si es control directo (militarización) o indirecto... (MacAdam, 1982).

Lo que no hay que perder de vista es que siempre hay que tener en cuenta también cómo es leída la represión. Las percepciones acerca de la oportunidad política son esenciales en este sentido. Esta puede ser tenida en cuenta o ignorada, y también puede ser leída de diversas maneras. En definitiva, las oportunidades políticas pueden constreñir o ampliar el espacio para el surgimiento de agravios que se movilizan y derivan en la creación de movimientos sociales, pero esto es absolutamente condicional y depende del lugar y el espacio concreto y sus actores.

La segunda de las condiciones contextuales que se relacionan con la generación de agravios movilizados es la movilización de recursos, que ha sido abordada por distintos teóricos (MacCarthy & Zald, 1977) y muchos estudios empíricos que avalan su tesis de que las organizaciones de movimientos sociales dependen de manera directa de la existencia de recursos disponibles. No obstante, esta no debe ser vista como una relación causa-efecto porque, en primer lugar, es fundamental identificar el tipo de recursos: pueden ser recursos materiales (dinero, espacio físico, transporte, empleo, suministros), humanos (liderazgo, mano de obra general y especializada), organizativos (infraestructuras, redes sociales, organizaciones formales), morales (legitimidad, apoyo solidario, celebridad), culturales (repertorios, literatura, medios, películas...) personas y legitimidad social. El dinero es medible, el resto no y depende de la organización, que puede estar más interesada en un recurso u otro. No todos ni en todos los lugares y momentos pesan igual. En segundo término hay que analizar de donde procede la derivación de los recursos, si es externa, interna o ambas; ya que, por ejemplo, el hecho de que los recursos sean externos, puede afectar a la autonomía, provocando una moderación de los objetivos y las tácticas empleadas, haciéndolas menos radicales y más aceptables públicamente (Snow and Soule, 2010, p. 97).

La última de las condiciones materiales y estructurales serían los “factores ecológicos y los espacios libres”, esto es, los espacios físicos que quedan fuera de la “vigilancia y control de las autoridades institucionalizadas” (Snow and Soule, 2010, p. 101-102). La

confluencia entre todas estas condiciones contextuales está detrás del surgimiento y mantenimiento de los movimientos sociales, por lo que las tendremos en cuenta a la hora de explorar nuestro caso de estudio.

1.3. Enfoques críticos sobre la globalización y el poder corporativo

Algunos de los enfoques dominantes basados en la movilización de agravios aplicados al análisis del conflicto del Delta se han enfocado, al igual que las tesis basadas en la “maldición de los recursos”, desde una dimensión excesivamente estatalista, al considerar al Estado nigeriano como su unidad de análisis. Desde hace algunos años han surgido voces críticas con estos acercamientos teóricos que demandan la necesidad de una ruptura epistemológica, porque el paradigma estatalista no contempla las dinámicas transnacionales características de la actual fase de la globalización neoliberal. Por eso, a la hora de acercarnos al Delta debemos atender a la integración de la región en la globalización y a cómo los procesos transnacionales la han penetrado, tanto como a su historia particular y su respuesta única a los agentes de la globalización y sus repercusiones, dado que “las historias particulares moldean los términos en los que cada sociedad se integra en el nuevo orden global” (Robinson, 2003, p. 21).

En esa línea, y poniendo también un énfasis especial en los agravios, el conflicto del Delta ha sido analizado desde los enfoques críticos con base en la idea de la globalización, entendida esta como un proceso de creación de un mercado mundial transfronterizo que destruye las particularidades y la vida comunitaria, subordinando el papel regulador de los Estados a poderosos intereses económicos transnacionales. La importancia de esta literatura reside en que considera como actores esenciales tanto de los mercados mundiales como de las realidades locales a las empresas transnacionales. Desde este punto de vista, las empresas transnacionales deben ser vistas como instancias de poder en sí mismas, fundamentales para comprender el orden social (Arrigui, 2004; Klein, 2000). Estos enfoques tienen en cuenta que las actividades de carácter corporativo, que siempre tienen algún tipo de efecto en dinámicas de conflicto previas (Zanduliet, 2005), impactan tanto en el micronivel de relaciones locales como a nivel macro a través de los efectos políticos, económicos y medioambientales (Banfield et al., 2005); unos y otros necesariamente interconectados (Haufler, 2004).

Esta línea de análisis, que guía intelectualmente al llamado movimiento contra la globalización neoliberal (Echart, 2008), es una tendencia dominante en la literatura paraacadémica elaborada por ONGs acerca del conflicto del Delta (como AI, HRW, Greenpeace y Friends of the Earth International) y otros autores (Frynas, 2000; Rowell et al., 2005). La debilidad de estas perspectivas es que, al igual que las visiones estatistas, tienden a oscurecer las realidades locales y no resultan sensibles a las trayectorias históricas y los espacios específicos y, a diferencia de aquellas, no tienen en cuenta el papel del Estado como agente social. Subestiman, además, la capacidad de intervención de los actores locales de la región, que en muchos casos son presentados como víctimas de violaciones de derechos humanos.

Los teóricos de la globalización, tanto sus defensores como sus detractores, parten de la asunción de que los procesos de globalización contemporáneos suponen una ruptura entre un pasado caracterizado por la regulación de la vida social en el interior de estructuras cerradas y un presente, la “era global”, dominado por los flujos internacionales. El problema con este postulado es que se convierte en un marco conceptual cerrado que oscurece los procesos históricos particulares y se ha revelado como un marco inadecuado para analizar la Historia de África. La invalidez del paradigma de la globalización en el análisis de las realidades africanas es que el continente no está marginado de ese proceso ni ha estado “desconectada” del sistema global en los últimos cinco siglos (Cooper, 2001), como veremos en nuestro caso de estudio a partir de un análisis en perspectiva histórica de la región (Ihonvbere & Shaw, 1998).

A pesar de que sus planteamientos difieren, las perspectivas de la globalización incurren en los mismos errores que las teorías de la modernización clásicas, porque ambas tienen una visión teleológica al plantearse como una especie de profecía autocumplida. En ese sentido, nos hacemos eco de la postura del historiador africanista Frederick Cooper, quien apunta que en el acercamiento al continente africano debemos desechar las tendencias a “analizar los procesos sociales, económicos, políticos y culturales como si estos tuviesen lugar en recipientes nacionales o continentales”, al tiempo que advierte de que hay que alejarse también de aquellas perspectivas de análisis que adoptan “un lenguaje que implica que no hay ningún tipo de recipiente, excepto el planeta mismo” (Cooper, 2001, p. 190).

En este punto, es esencial señalar que las visiones críticas sobre la globalización que mencionamos han guiado las prácticas y alimentado los discursos de las ONGs que intervienen en el Delta y que serían las promotoras de la “nueva agenda del desarrollo” dominante desde inicios de la década de 1990 a nivel global. Estas ONGs serían los actores fundamentales de la llamada “sociedad civil”, entendida en el contexto africano como aquellos "procesos dinámicos de interacción entre el Estado y la sociedad, un movimiento constante entre lo oficial y no oficial, lo público y lo privado, lo rural y lo urbano" (Edozie, 2002, p. 10). Según este enfoque la “sociedad civil” ha sido una piedra angular para el avance de la democracia en el continente.

Frente a esta perspectiva romantizadora, se ha desarrollado toda una corriente crítica con el paradigma liberal sobre la sociedad civil (Robinson, 2003; Clayton, 1996), dado que esta “no es un actor homogéneo y unitario, opuesto a otro actor homogéneo y unitario, el Estado. Es el sitio de tanto grupos dominantes como subordinados” (Robinson, 2003, p. 222). Vista desde un enfoque gramsciano, la sociedad civil sería un lugar de contestación y conflicto entre fuerzas sociales y proyectos hegemónicos en competencia, pues las organizaciones de la llamada sociedad civil no están en una burbuja, interactúan entre sí, con el mercado y con el Estado, y compiten por fondos o soporte público, operando bajo los principios del mercado (Trivedy & Acharya, 1996, p. 56). De hecho, los actores de la sociedad civil pueden no ser progresistas, ni ser necesariamente un reflejo de toda la sociedad, además de que el poder organizativo en sí no es una condición suficiente para tener un impacto positivo en la democratización (Ndegwa, 1996).

En la nueva agenda del desarrollo las ONGs juegan un rol cada vez más político, dado que desde sus instituciones promotoras se ha desarrollado la tendencia a ligar la concesión de fondos al cumplimiento de determinadas condicionalidades políticas relacionadas con el buen gobierno, el respeto de los derechos humanos y los procesos de reforma política (Robinson, 1993). De ahí ha surgido toda una corriente crítica que ve a las ONGs como parte funcional de la agenda transnacional, pues “operan en un marco de prestación de servicios complementando las instrumentalidades del Estado” (Trivedy & Acharya 1996, p. 57). Las ONGs forman parte de la industria del desarrollo y se están acercando, en intereses, valores, métodos y prioridades a los Estados donantes del Norte y, en menor medida, a los gobiernos del Sur. A partir del análisis de las crecientes relaciones entre las ONGs y los donantes, Hulme & Edwards (1997) concluyen que las ONGs son las

encargadas de implementar las políticas de los donantes, amenazando así su capacidad para intervenir en el desarrollo.

En el marco de esta agenda del desarrollo existe una tendencia creciente a que los donantes transnacionales transfieran directamente fondos a ONGs del Sur, que se convierten en intermediarias de las organizaciones de base. El argumento que sustenta esta tendencia es que así se fortalecerá la sociedad del Sur y se fomentará el buen gobierno, porque estas ONGs son más confiables que los gobiernos del Sur y rinden más cuentas que las ONGs del Norte. El riesgo de esta tendencia es que se instrumentalicen las organizaciones locales, debilitándose de ese modo el rol del conjunto de la sociedad civil (Bebbington & Riddell, 1997, p. 107). Así: “los pobres y desfavorecidos se convierten en clientes más que en miembros; la participación se vuelve instrumental y las organizaciones de base se convierten en sucursales de las ONGs más que en organizaciones autónomas” (Hulme & Edwards, 1997, p. 280).

Otra de las tendencias que se dan al abrigo de la nueva agenda del desarrollo es la colaboración entre ONGs del Norte y del Sur. En general las alianzas entre ambas son interpretadas como “ventajas comparativas” por parte de las del Sur, puesto que proporcionan acceso a una red en base a valores comunes, información, fondos y una potencial influencia indirecta en gobiernos e instituciones del Norte. Mientras, para las del Norte, las relaciones con las del Sur permiten que su trabajo sea sostenible y les da la posibilidad de “reclamar una justificación moral para ‘interferir’ en otros países” (Jorgensen, 1996, p. 50). No obstante estas consideraciones, estas relaciones, como exploraremos en nuestro caso de estudio, son más complejas y problemáticas de lo que parece y pueden tener efectos políticos indeseados.

Al multiplicarse los espacios de encuentro y la articulación de discursos puede tener lugar la cooptación de esos discursos por parte de las agendas dominantes, o, como lo ve Álvarez, su “absorción” por parte de estas, lo que puede servir para permear políticas y dar lugar a la profesionalización y especialización de movimientos sociales de base que tienden a un proceso de “oenegización”, como sucedió con la resignificación del movimiento feminista a través de su transnacionalización por parte de las feministas latinoamericanas en la década de 1990 (Álvarez, 1998, p. 293). Además, la dependencia económica de muchas organizaciones con respecto a agentes extranjeros e incluso el

propio Estado, puede comprometer su autonomía y provocar que dichos agentes puedan fijar la agenda de esas organizaciones.

Por otro lado, en algunos estudios empíricos se han detectado debilidades organizativas que pueden llegar a derivar en prácticas no democráticas en el interior de las propias organizaciones (Ake, 1996). Algunas de ellas, como veremos en nuestro caso de estudio, están caracterizados por “la personalización de las políticas y la marginalización de las mujeres”, además de por una “incapacidad para articular nuevas agendas y programas políticos más allá de la necesidad de derrotar al presidente de turno” (Soyinka-Airewele, 2005, p. 134). En ese sentido, por ejemplo, en Nigeria muchas organizaciones están tan alienadas del Estado que difícilmente contribuyen a la construcción estatal o la democratización (Ikelegbe, 2001, p. 5), y representan intereses sectoriales, de clase y étnicos (Abutudu, 1995, p. 5) que dan lugar a conflictos violentos.

1.4. Cuestionando los discursos celebrativos sobre la sociedad civil global

La globalización neoliberal provoca el doble efecto de “introducir a la gente no solo en redes de relaciones de Mercado sino también en redes de resistencia” (Robinson, 2003, p. 320). En respuesta a la explosión de ONGs y movimientos sociales en todo el mundo y a la multiplicación de sus conexiones transnacionales facilitada por el uso de Internet, los analistas de la globalización, tanto sus defensores como sus críticos, han afirmado que existe una tendencia creciente a que las sociedades civiles locales se transnacionalicen a través de la integración en redes de ONGs y movimientos sociales (Bebbington, 2000, 2003; Keck & Sikkink, 1998). Las visiones liberales y pluralistas acerca de la sociedad civil están trasladando así su visión a la esfera transnacional y aseguran que la “sociedad civil global” abre una “nueva ‘democracia cosmopolita’ de ciudadanos del mundo que hará a los Estados responsables frente a las necesidades fundamentales” (Robinson, 2003, p. 223).

Esta tendencia se ha concretado en el desarrollo de una corriente de análisis dentro de los estudios sobre movimientos sociales que se centra en la emergencia de la llamada “sociedad civil global”, un ente que estaría compuesto de organizaciones formales e informales que de un modo u otro trascienden las fronteras estatales (Wapner, 1995; Falk,

1995). Las ONGs y las redes y coaliciones transnacionales de incidencia política, formadas por ONGs, fundaciones, activistas particulares, periodistas, etc, que “comparten valores, un discurso común y densos intercambios de información y servicios” (Keck & Sikkink, 1998)¹⁵ serían los principales actores de esa nueva “sociedad civil global”. La emergencia de este ente ha generado análisis muy optimistas en las ciencias sociales. Richard Falk (1995) considera, por su parte, que la proliferación de esos “actores éticos está creando una democracia cosmopolita de ‘gobernanza humana’ y solidaridad humana” y que esta nueva “democracia global” resulta especialmente útil para los movimientos sociales que combaten Estados represivos. Otros autores sostienen que estamos asistiendo a una “revolución global” (Salomon et al., 1999), a un proceso de “globalización desde abajo” (Giddens, 1999) o a una “revolución asociativa” (Bendell, 2004, p. 14).

Según estas perspectivas, las ONGs y las redes, coaliciones y movimientos sociales transnacionales son tan fuertes que están transformando las normas y prácticas globales (Risse-Kappen, 1995; Keck & Sikkink, 1998; Khagram et al., 2002; Florini, 2000). Algunos de esos análisis le otorgan una gran responsabilidad en la aparición de ese nuevo actor al desarrollo de las telecomunicaciones, que le permiten llegar a audiencias “globales”. Keck & Sikkink (1998, pp. 12–13) hablan, por ejemplo, del efecto *boomerang* generado por los movimientos que consiguen apoyo transnacional a través de las nuevas tecnologías¹⁶. Lo valioso de su tesis es que estas autoras analizan las acciones colectivas transnacionales poniendo a dialogar la literatura de movimientos sociales y la de Relaciones Internacionales, apuntando que la primera ha sido “miópicamente doméstica,” mientras la segunda se ha revelado como “miópicamente estatocéntrica” (Khagram et al., 2002). En la denominada “sociedad internacional” el sector no

¹⁵ Keck y Sikkink distinguen tres categorías de actores no estatales que llevan a cabo acciones colectivas de contestación de carácter transnacional: redes de incidencia política transnacional, coaliciones transnacionales y movimientos sociales transnacionales. Las redes de incidencia política transnacional son las más informales de las tres y son definidas como “conjuntos de actores relacionados más allá de fronteras estatales, unidas por unos valores compartidos, densos intercambios de información y servicios y discursos comunes” (Keck & Sikkink, 1998). Las coaliciones transnacionales, por su parte, requieren una mayor coordinación y son “conjuntos de actores relacionados más allá de fronteras estatales que coordinan estrategias comunes o conjuntos de tácticas (campañas transnacionales) para influir en algún tipo de cambio social públicamente”. Por último, los movimientos sociales transnacionales son “conjuntos de actores con propósitos y solidaridades comunes relacionados más allá de fronteras estatales que tienen la capacidad de generar movilización social coordinada y sostenida en más de un país para públicamente influir en algún tipo de cambio social”.

¹⁶ Gracias a este efecto, los actores no estatales que enfrentan represión en el plano doméstico buscan aliados en otros actores estatales o no estatales en la arena internacional y a veces consiguen que se presione a su gobierno desde fuera y se hagan cambios en el plano estatal (Keck & Sikkink, 1998).

gubernamental, una red informal y horizontal, es cada vez un actor más importante y su razón de ser es “la búsqueda de significado”. De ahí que no podamos entender:

... las redes o coaliciones transnacionales a menos que comprendamos que una cantidad significativa de su actividad está dirigida a cambiar las concepciones e interpretaciones de los actores o, en otras palabras, la creación, institucionalización y el seguimiento de las normas (Keck & Sikkink 1998, p. 12).

Estas autoras analizan también el concepto de “encuadre”, que encuentran similar al proceso conocido en RRII como “construcción social estratégica” (Klandermans, 1997). En el caso del Delta del Níger, como veremos, el MOSOP fue el pionero en llevar a cabo una estrategia de “encuadre global”, esto es, “el ensamblaje de disputas domésticas en el lenguaje de la globalización” (Tarrow & Dellaporta, 2005, p. 122) a través de la reapropiación de lenguajes legitimados transnacionalmente como la defensa de los pueblos indígenas y el medioambiente frente a las actividades de las empresas transnacionales, en boga a mediados de la década de 1990 (Niezen, 2003; Melucci, 1998; Escobar, 2006; Escobar et. Al., 2002; Mittelman, 1998; Murray 2004). El contexto internacional tras el fin de la Guerra Fría facilitó los apoyos internacionales a las minorías del Delta ya que instancias como la ONU, la UE y ONGs internacionales en Europa y Estados Unidos empezaban entonces a poner énfasis en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La estrategia de “cambio de escala” articulada por el MOSOP (MacAdam, 2001, p. 331)¹⁷ se convirtió en un modelo para otras organizaciones de la región (Bob, 2005; Obi, 2001b).

El problema de todos estos enfoques es que resultan demasiado celebrativos y tienden a poner el peso de la relación en las organizaciones del Norte. Existen, no obstante, perspectivas más críticas que dan cuenta de las ambigüedades inherentes a esa “sociedad civil global” y visibilizan a los actores locales, unos enfoques que consideramos más útiles para nuestro análisis de las alianzas transnacionales tejidas en torno al Delta del Níger, que explora los efectos contradictorios que se han dado en las organizaciones locales debido a los apoyos de organizaciones transnacionales, que algunos casos llegan con sus propias agendas y debilitan a los movimientos locales, al provocar luchas internas sobre la distribución de los fondos, las prioridades y los objetivos.

¹⁷ McAdam et al., (2001) entienden el “cambio de escala” como: “un cambio en el número y nivel de las acciones de contestación coordinadas que conduce a una mayor contestación que implica a un rango más amplio de actores y conecta sus reclamaciones e identidades” (p. 331).

Existe toda una corriente crítica con estas visiones celebrativas de la “sociedad civil global”, que pone en duda su potencial antihegemónico y cuestiona la “fetichización” que se ha hecho de ella (Mercer, et al., 2009, p. 145). En realidad, “la sociedad civil global reproduce las contradicciones y conflictos de las sociedades civiles nacionales de las que surge, al tiempo que genera nuevas contradicciones que reflejan las luchas y dinámicas de poder al nivel del sistema global” (Robinson, 2003, p. 224)¹⁸. Siguiendo a Gramsci, para Robinson la sociedad civil se convierte en un “campo de batallas transnacional” por la hegemonía, en el que las fuerzas transnacionales capitalistas buscan la dominación en la sociedad política (Estado) y la dominación ideológica en la sociedad civil para completar su proyecto (Robinson, 2003, p. 226).

Esta corriente de análisis critica el hecho de que las ONG y los movimientos sociales sean asimilados e interpretados como si fuesen lo mismo, dado que en realidad las ONGs contribuyen a despolitizar a los movimientos sociales al convertirse en “estructuras de control social sobre las bases”, mediadoras entre “las clases populares y los Estados en el nuevo orden transnacional” (Robinson, 2003, pp. 228-230). En el caso del Delta, la tendencia al “compromiso constructivo” (Davies, 2007) puesto en práctica por muchas ONGs locales las ha llevado a colaborar con las empresas transnacionales en su propia explotación y destrucción del medioambiente (Adunbi, 2015). La inserción de estas organizaciones en las redes de activismo que despliegan el lenguaje de los derechos humanos y medioambientales ha generado efectos complejos y contradictorios en la región.

Aunque en términos generales las alianzas entre los movimientos locales y las ONGs transnacionales sean interpretadas como beneficiosas para ambas partes dado que mientras a los primeros estas conexiones les proporcionan una visibilidad internacional que se puede traducir en el acceso a fuentes de financiación y apoyos diplomáticos; los últimos ganan legitimidad en el movimiento transnacional de los derechos humanos, estas conexiones son más complejas de lo planteado por la literatura de la “sociedad civil global” y están plagadas de contradicciones. En el Delta estas contradicciones surgen, en parte, del hecho de que las fuerzas locales no son homogéneas. Por un lado, están aquellas

¹⁸ Como por ejemplo se puede ver en la obra de Pasha & Blaney (1998).

que hacen una “oposición leal” a la industria petrolera a cambio de patronaje, otras que demandan compensación y rentas de las empresas transnacionales y aquellas que desafían la legitimidad del Estado y las corporaciones petroleras y buscan el “control de los recursos” a través de la autonomía étnica. Las estrategias y los discursos empleados por unos y otros también difieren, como veremos en nuestra investigación, y marcarán las conexiones transnacionales que establezcan estos grupos.

1.5. El Delta como espacio de procesos transnacionales complejos

Frente a todos los enfoques anteriores se despliega una línea de análisis que apunta que la articulación transnacional de los diferentes actores, estatales y no estatales, locales e internacionales, es la responsable de generar formas específicas de dominación en ámbitos espaciales concretos. Teniendo en cuenta que no es posible determinar un único sitio de poder, sea este las instituciones estatales, las empresas transnacionales o los mercados globales, el contexto social del Delta no puede ser explicado a través de un esquema metodológico estatalista, pero tampoco a través de un enfoque excesivamente “global” que victimice a las poblaciones locales. Como sostiene Obi (2001a):

... las fuerzas de extracción transterritorial que forjan vínculos con las estructuras de poder clientelar así como algunas ONGs locales e individuos, chocan con las fuerzas de la protesta local (que a su vez tienen el apoyo de sus aliados internacionales). Es este compromiso violento el que define los conflictos en curso en el Delta” (p. 180).

El Delta sería entendido así como un espacio de procesos transnacionales, en el que se estaría produciendo una reconfiguración de los lenguajes de contestación en torno a la industria petrolera. Según estos enfoques, las intersecciones entre lo global, lo estatal y lo local son esenciales en las luchas por el poder, la autoridad y los recursos en las que están inmersas las organizaciones y movimientos sociales del Delta y las redes transnacionales de incidencia política de las que estos forman parte (Watts, 2004, 2007; Obi, 2001a, 2005, 2011; Nwajiaku 2005, 2012). Según estas perspectivas, que plantean una crítica a los enfoques de la “maldición de los recursos”, el petróleo no sería la maldición, sino más bien “lo ‘maldito’ por la relevancia que le han otorgado los actores estratégicos más poderosos del mundo, para los cuáles representa un combustible de los más importantes del capital globalizado y el poder industrial” (Obi 2010a, p. 488). O, en todo caso, sería una maldición para algunos, alienados y amenazados por la economía

política de ese capital, mientras se convierte en una bendición para otros, los que gozan de una posición privilegiada en la industria petrolera global.

El “complejo petrolero” está insertado en Nigeria con otras dinámicas políticas, sociales y económicas definitorias de su devenir como Estado postcolonial (Watts, 2004). Integrarían este “complejo”: el propio Estado nigeriano, a través de la compañía petrolera estatal y sus fuerzas de seguridad; las empresas del sector, tanto estatales como transnacionales, y sus propias fuerzas privadas de seguridad; las agencias de desarrollo y crédito multilaterales como el FMI, el BM y el BIRD; las redes criminales transnacionales que operan en el Golfo de Guinea y las poblaciones situadas en los lugares de extracción, a través de ONGs y organizaciones y movimientos sociales locales conectados con otros de carácter transnacional.

Este “complejo petrolero” es responsable de reconfigurar diversos “espacios gobernables” en los que se producen distintos tipos de violencias: el espacio de la jefatura, el espacio de la indigenidad y el espacio del Estado-nación. Estos “espacios gobernables” son enclaves en los que el “petrocapitalismo” reconfigura formas preexistentes de gobierno (Watts, 2004, p. 61). La petroviolencia existente en el Delta, es decir, aquella “violencia que normalmente acompaña a la extracción de petróleo y necesariamente la devastación medioambiental, que es hecha por el ser humano” (Watts, 1999, p. 1), es pues multicausal y compleja, y se deriva de la confluencia entre la “gubernamentalidad autoritaria” y el “petrocapitalismo” (Watts, 2004, p. 61).

En esta línea de análisis resulta útil el concepto de “formaciones transfronterizas”, unas redes generadas por “la intersección de fuerzas nacionales y locales que producen, destruyen o transforman el orden local y la autoridad política, impactando significativamente en las vidas de la gente común” (Latham et al., 2001, p. 5). Este término nos permite huir de la dualidad global-local dominante en las Ciencias Sociales para conectar las fuerzas globales, regionales, estatales y locales que operan en el Delta a través de redes, discursos y estructuras y que tienen impactos tanto negativos como positivos en la realidad local y analizar cómo en los puntos de intersección de esas fuerzas surgen nuevas configuraciones de poder, o nuevas “construcciones translocales de

autoridad y orden” (Latham et al., 2001, p. ix)¹⁹. Esta idea se conecta con el paradigma de la extraversión propuesto por Bayart (2000). En el caso nigeriano, las trayectorias de extraversión han provocado un problema de representación política y legitimidad estatal (Bayart, 2000, p. 235), caracterizado por la duplicidad existente entre el “país legal, una estructura legal que es el foco de atención de los donantes multilaterales y los Estados occidentales”, y el “país real en el que el poder real es ejercido” (Bayart, 2000, p. 229-230). Como sugiere Bayart (2000):

La casi guerra de guerrillas en los estados del Delta de Nigeria, llevada a cabo por varios auto-proclamados ‘comités de resistencia’ o ‘comunidades’, formados sobre la base de los poblados o grupos étnicos, que exigen dinero por protección a las empresas extranjeras en forma de compensación o redistribución, es una forma del mismo proceso” (p. 228).

Las prácticas y los discursos que distintos grupos sociales del Delta han articulado en torno a sus riquezas petroleras “implican a un grupo identitario marginado en el Estado nigeriano” que trata de “hacer cumplir sus derechos fundamentales como ciudadanos de ese Estado” (Osaghae et al, 2011, p. 26). En ese sentido, el caso que nos ocupa “es ilustrativo de cómo el Estado todavía importa incluso cuando las redes transfronterizas, arenas y despliegues se intensifican” (Obi, 2001b, p. 192). Desde este punto de vista, el Estado nigeriano funciona como un “Estado guardián”, que sobrevive como intermediario entre los mercados mundiales o las instituciones internacionales y la población (Cooper, 2004).

Tanto el concepto de extraversión de Bayart como el de Estado guardián de Cooper se centran en cómo las relaciones con las grandes potencias y los donantes, las empresas transnacionales, los cárteles de la droga o las IFIs, han proporcionado a los actores gubernamentales importantes instrumentos para alcanzar el poder y mantenerse en él, además de ejercer el control sobre sus poblaciones. En relación con mi caso de estudio, “algunos vínculos, como las relaciones de las empresas petroleras transnacionales con el Estado en Nigeria” serían “prácticamente extractivas en una sola dirección y proporcionan retribuciones a las elites guardianas en la otra” (Cooper, 2001, p. 207).

¹⁹ Usamos el término orden para referirnos a “lo que se produce cuando los grupos y las instituciones intentan establecer límites reproducibles a lo que hacen en el mundo, con la participación de personas y lugares específicos, relaciones y prácticas sociales y mecanismos y métodos (violencia, ley, dominio, redistribución, etc.” (Latham et al. 2001, p. 9).

Reseñando a Bayart, Clapham (1996) sostiene que desde el punto de vista metodológico, los procesos de extraversión contribuyen a generar una “gubernamentalidad” de tipo racional, un conjunto de actitudes hacia la autoridad política que dificultan el desarrollo de instituciones eficientes y autónomas. En el caso que nos ocupa, el petróleo ha contribuido a reforzar la soberanía estatal, uno de los mecanismos a través de los cuales aquellos que controlan el Estado nigeriano han buscado mantener la jurisdicción sobre los intercambios económicos transfronterizos. Las elites han instrumentalizado la soberanía de formas diferentes en los contextos particulares, pero la dinámica general ha sido usarla para ejercer el control sobre el territorio y sus poblaciones con el aval internacional. El lenguaje de la soberanía ha sido usado por el Estado nigeriano como “una ideología de consolidación estatal interna” (Clapham, 2002, p. 526), para ejercer el control sobre sus asuntos internos y su población y ha buscado a los agentes externos para asegurar el mantenimiento de las estructuras estatales.

1.6. Los efectos de las conexiones transnacionales en el activismo

Visto todo lo expuesto, para entender el activismo transnacional desplegado en torno al Delta en relación con la extracción de petróleo debemos estudiar la conjunción entre las dialécticas del intervencionismo internacional y las formas de gobernabilidad local. En este sentido, seguiremos el enfoque de Obi, que considera que “el conflicto en el Delta del Níger proporciona un caso concreto de formaciones transfronterizas que emergen en puntos de conflicto y alianza” (Obi, 2001b, p. 173). Para acercarnos a las dinámicas y lenguajes de contestación desplegados en el Delta es esencial realizar un análisis “basado en una economía política radical” que tenga en cuenta tanto las relaciones de clase, como las contradicciones y conflictos relacionados con la subordinación de África a procesos transnacionales en el marco de las “relaciones capitalistas globalizadas” (Obi, 2010a, p. 1). En este modelo las conexiones transnacionales son esenciales ya que “el Estado nigeriano, la elite gobernante y sus aliados transnacionales usan la riqueza petrolera para reforzar su control sobre y continuar reproduciendo la acumulación transnacional basada en el petróleo en el Delta del Níger” (Obi, 2010b, p. 222).

Como veremos, las organizaciones y movimientos del Delta también han empleado “estrategias de extraversión”, y lo han hecho para tratar “de gestionar sus debilitadas situaciones socioeconómicas y reivindicar nuevas reclamaciones sobre los recursos,

reclamaciones sobre la autoridad y reclamaciones de representación” (Latham et al., 2001, p. 13), lo que ha tenido determinados efectos en sus dinámicas y sus lenguajes de contestación. Trataremos de dilucidar en esta investigación los efectos derivados del hecho de que las redes transnacionales de activismo en las que se han insertado las organizaciones y movimientos sociales estudiados hagan circular globalmente una retórica basada en la idea de los derechos universales.

Con ese fin, nos será útil la perspectiva de Anna L. Tsing (2005), que explora los procesos culturales en los que se articulan prácticas de negocio depredadoras y luchas de empoderamiento local, lo que le permite hacer una “etnografía de las conexiones globales”. Tsing nos ofrece un ejemplo de traducción dinámica en el espacio de la “fricción transnacional”, esto es, “las difíciles, desiguales, inestables y creativas cualidades de la interconexión a través de la diferencia” (Tsing, 2005, p. 4), centrado en el uso del término “indígena”, que ha estado en el centro de la agenda del medioambientalismo global desde la campaña para salvar la Amazonía, y que también fue alimentado por organizaciones como el MOSOP en el Delta (Osaghae, 1995b; Olukoshi, 1995; Saro-Wiwa, 1992, 1995; Ibeanu, 1997, 1999; Obi, 1997).

La autora pone como ejemplo el movimiento global liderado por Chico Mendes desde Brasil, asesinado en 1988, cuyo papel fue fundamental en lograr la colaboración transnacional, que abrió la puerta a una nueva política local/global, brasileira y transnacional, combinando las “poéticas y demandas de justicia social, medioambiente, y la supervivencia cultural indígena” (Tsing, 2005, p. 231). Algo que fue luego traducido en otros lugares, como las campañas para proteger los bosques de Malasia, que reformularon la historia de Mendes haciendo un nuevo “paquete viajero”, entendido como un “modulo alegórico” formado en un contexto político y cultural concreto que le da significado y que gracias a un proceso de reformulación y traducción puede hacer que una causa sea escuchada más allá de este contexto local. Estos “paquetes carismáticos” viajan y son “traducidos para convertirse en intervenciones en nuevas escenas en las que recogen significados locales y encuentran su lugar como intervenciones políticas distintivas” (Tsing, 2005, p. 238). La alegoría de Mendes, traducida a la esfera transnacional por los ecologistas de Europa y Norteamérica llegó a mediados de la década de 1990 al Delta a través del MOSOP y su líder Ken Saro Wiwa (Bob, 2005).

Pero estas interacciones transnacionales surgidas en el marco del activismo son fenómenos complejos, y se basan en la idea de la universalidad, que no es un hecho dado sino que es una aspiración tanto de los poderosos como de los desposeídos, y forma parte tanto de “los esquemas imperiales para controlar el mundo” como “de las movilizaciones liberadoras por la justicia y el empoderamiento”. La fricción, un concepto que da cuenta de esta dualidad y la pone en el centro de nuestro entendimiento de las interconexiones globales “modernas”, ha permitido que los universales se difundan como marcos para la práctica del poder (Tsing, 2005, pp. 9-10). En nuestra investigación comprobaremos los impredecibles efectos de las “formas culturales emergentes” surgidas de la “fricción” entre las organizaciones y movimientos locales y transnacionales.

Otra de las perspectivas que nos será útil para analizar la contestación política en el Delta será la tesis del “marketing de la rebelión” de Clifford Bob, quien, partiendo de un enfoque basado en la oportunidad política y la movilización de recursos, analiza las conexiones transnacionales surgidas en este marco en términos de oferta y demanda (Bob, 2005, p. 191). La tesis de Bob parte de la idea de que dada la importancia de las alianzas transnacionales, los llamados indistintamente por el autor “contendientes”, “insurgencias,” o “movimientos”, compiten por conectarse con ONGs transnacionales.

El establecimiento de estas relaciones transnacionales crea tensiones, dado que los objetivos, las visiones y las necesidades de los movimientos locales y las ONGs transnacionales difieren. Teniendo en cuenta este dualismo, las interacciones entre ambos actores deben ser analizadas como intercambios. Por un lado, los movimientos locales buscan financiación, material, información y legitimidad. Por otro, las ONGs internacionales se mueven por sus propias misiones pero están constreñidas por sus intereses. Para Bob, “esta mutualidad de intereses crea un mercado para el apoyo transnacional, pero uno con un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda”. En la parte de la demanda, “muchos contendientes, impulsados por la desesperación o movidos por la perspectiva de obtener recursos y oportunidades, rivalizan por la ayuda” (Bob, 2005, p. 15). En el otro lado de la transacción están las ONGs internacionales y los activistas, actuando en un mercado de competitividad por los recursos y la legitimidad.

Las grandes ONGs reciben multitud de demandas desde distintos lugares del mundo por diversas vías (*email*, teléfono, contactos personales en cumbres internacionales...) y

escogen a quién apoyarán en función de sus agendas e intereses. Desde el punto de vista ético hay una gran línea roja. Una ONG de incidencia política difícilmente apoyará una lucha armada, mientras los movimientos de la diáspora y los de solidaridad sí podrían hacerlo. Sin embargo los medios violentos atraen más atención de la prensa internacional, mientras lo contrario significa a veces quedarse aislado. Además hay que ajustarse desde el punto de vista organizativo, a las ONGs internacionales lo que más les preocupa es la veracidad acerca de los agravios del contendiente y su legitimidad entre sus miembros, por eso hacen trabajo de campo e investigación, sobre todo las de incidencia política, como veremos en el caso de Amnistía Internacional.

Todo lo apuntado genera una relación asimétrica que puede provocar que los grupos locales alteren sus características para lograr esos apoyos transnacionales a través de la presentación de “sus conflictos como luchas justas” y de “trabajar sus mensajes para que resuenen en el exterior” (Bob, 2005, p. 4), Los movimientos con más recursos, conocimientos y reconocimiento internacional previo, se enmarcarán a sí mismos en categorías de protesta que sean aceptables, como sucedió con el caso del MOSOP. Para poder llegar a públicos amplios, las organizaciones y movimientos locales tratarán de “simplificar y universalizar sus conflictos, señalar y demonizar a sus prominentes oponentes, abrazar retórica en boga y apelar al interés personal y a la simpatía de audiencias distantes” (Bob, 2005, p. 30). Así, hablarán de democracia y derechos humanos, diversidad cultural o de ecología y medioambiente o se autocalificarán como víctimas de violaciones de leyes internacionales o como pueblos indígenas, generando “arenas internacionales de discurso” (Latham et al., 2001).

Teniendo en cuenta estas “dinámicas de mercado”, los efectos de la asistencia son ambiguos. Para algunos académicos y periodistas, que idealizan el papel de la ONGs, el activismo transnacional es de por sí algo positivo. No obstante, hay que tener en cuenta que los apoyos transnacionales a las luchas locales tienen sus costes: el ajuste a las necesidades y agendas de audiencias distantes puede alienar el movimiento local y, por otro lado, las ONGs están sometidas a sus imperativos organizativos, por lo que raramente pueden hacer de las demandas de grupos insurgentes su principal preocupación. Al final, estas relaciones están marcadas por las asimetrías de poder.

La literatura de relaciones transnacionales considera que estas discrepancias proceden de los desequilibrios en los recursos materiales. Para Bob, no obstante, no se trata sólo de una cuestión de presupuesto ni de militantes. Una ONG encontrará valioso un movimiento insurgente si su apoyo a este movimiento puede contribuir a fortalecer su propia agenda, mientras que un grupo insurgente valorará positivamente recibir el apoyo de una ONG si de este modo puede conseguir recursos y conexiones que puedan potenciar sus campañas. Por otro lado, el grupo insurgente necesitará apoyo externo si los estatales no son suficientes, y la ONG necesitará apoyar al grupo insurgente si este apoyo puede reforzar sus propios objetivos. Tanto la necesidad como el valor son percepciones subjetivas y ambas juegan a favor de la ONG (Bob, 2005, p. 21). Estas asimetrías de poder derivan en que los grupos insurgentes deben amoldarse a las tácticas y requerimientos organizativos de las ONGs y generan competitividad entre los propios grupos insurgentes, como comprobaremos, a continuación, en nuestro caso de estudio.

CAPÍTULO 2

El “complejo petrolero” en el Delta del Níger: trayectorias históricas de las conexiones transnacionales (1958-1986)

Introducción. Aproximación geográfica al Delta del Níger

El Delta del río Níger, uno de los humedales más extensos del mundo, discurre en una superficie de aproximadamente 70.000 kilómetros cuadrados en la parte norte del Golfo de Guinea. En esta área constituida por lagos, pantanos y meandros viven alrededor de unos 30 millones de personas. La complejidad topográfica de la zona ha derivado en que los habitantes de esta amplia región del sudeste nigeriano, cuya densidad poblacional es una de las mayores del mundo, se organicen en grupos dispersos y compactos, en la mayor parte de los casos no superiores a las 5.000 personas (UNDP, 2006, p. 1).

Desde el punto de vista sociopolítico, el gobierno nigeriano, a través de su principal agencia de intervención en la región, la NDDC (Niger Delta Development Commission), identifica el Delta del Níger como el área geográfica comprendida en 9 de los 36 estados que conforman en la actualidad el territorio de la República Federal de Nigeria: Abia, Akwa-Ibom, Bayelsa, Cross-River, Delta, Edo, Imo, Ondo y Rivers. No obstante, debido fundamentalmente a las políticas de redistribución de las rentas derivadas de la explotación de los yacimientos petroleros de la región desde la década de 1960, esta definición del Delta es contestada por distintos actores locales (desde políticos hasta organizaciones y movimientos sociales), que parten de diversas razones geográficas e históricas para defender sus posturas al respecto. Estas discrepancias se han incrementado desde la celebración de la Conferencia Constitucional de 1994-1995, en la que Nigeria fue organizada en 6 zonas geopolíticas (Noreste, Nor-central, Noroeste, Sudoeste, Sudeste y Sur-Sur), ya que estas zonas se convertirían a partir de entonces en la base para la planeación y puesta en práctica de algunas políticas federales, especialmente en lo que se refiere a la redistribución de los recursos.

Estos debates oscilan entre quienes defienden una definición máxima del Delta del Níger, en la que incluyen a todos los estados productores de petróleo (que serían los 9 identificados por el gobierno) y los que abogan por una definición mínima y sostienen que la región se limita a los estados situados en la zona Sur-Sur (Akwa-Ibom, Bayelsa,

Cross-River, Delta, Edo y Rivers). Estos últimos afirman que el “corazón del Delta” serían los estados de Bayelsa, Delta y Rivers, mientras los tres restantes serían “la periferia del Delta”. Esta definición se relaciona especialmente con los territorios habitados por las autoconsideradas “minorías étnicas” que habitan en la cuenca del Delta (ijaw, urhobo, ikwerre, ishan, ibibio y e fik), mientras la definición máxima atiende exclusivamente a la existencia de recursos petroleros (Ibeanu, 2006, p. 16 -17). La producción de petróleo ha contribuido a redefinir, por tanto, las percepciones acerca de la geografía y la pertenencia (Adunbi, 2015).

Desde que se iniciaron las actividades petroleras en la región, esta se ha convertido en “uno de los terrenos de acumulación global más contestados” del mundo (Obi, 2001a, p. 60), ya que el oro negro se ha convertido en el elemento capital en torno al cual se activan las reclamaciones en relación con la ciudadanía (Watts, 2004). Distintos grupos sociales locales han demandado acceso a los potenciales beneficios generados por la industria petrolera en su territorio, pues “el discurso dominante sobre el petróleo como un recurso nacional que se usa para construir una nación viril ha sido asociado con la pauperización y desempoderamiento de las comunidades productoras de petróleo” (Ukiwo, 2011, p. 22). En ese sentido, la economía petrolera ha supuesto un freno para que el “Nigerian National Symbolic”, es decir, la “fantasía de carácter nacional” que “designa cómo la cultura nacional se vuelve local a través de imágenes, narrativas y movimientos que circulan en el inconsciente personal y colectivo” (Berlant, 1991, p. 61) se consolidase en la esfera local (Watts, 2004, p. 267).

El marco legal y fiscal nigeriano ha sido tradicionalmente beneficioso para el Estado y las empresas transnacionales, “que han sido capaces de continuar con su *business as usual* en ausencia de desafíos efectivos por parte del Estado” (Frynas et al., 2000, pp. 417-18). La industria petrolera nigeriana ha pasado por tres fases, una primera de concesiones a las compañías extranjeras, una segunda en la que el Estado inauguró su participación en ella y una tercera etapa caracterizada por el proceso de desregulación del sector. Inicialmente, la legislación nigeriana no establecía términos específicos para las operaciones en el sector petrolero. Eran las licencias concedidas a las compañías extranjeras las que regulaban estas actividades en cada caso particular.

Tras la guerra de Biafra (1967-1970) se inauguró la segunda fase de regulación del sector a partir del establecimiento de las llamadas “políticas de indigenización”, que llevaron al gobierno a participar en la industria a través de un proceso de nacionalización, aunque las compañías transnacionales seguirían controlando la tecnología. A partir del año 1971, el gobierno federal, a través de la Nigerian National Oil Corporation (NNPC), controlaría todo el crudo nigeriano gracias a su participación en acuerdos de *joint ventures* con todas las compañías extranjeras que operan en el país. Como veremos, a partir de mediados de la década de 1980, en el marco de la implementación de los PAEs (Planes de Ajuste Estructural) tuvo lugar la tercera fase de regulación de la industria, caracterizada por la tendencia a la “desindigenización” (Obi, 2010a, p. 448).

El propósito del presente capítulo es realizar un análisis de la explotación de petróleo en el Delta desde un enfoque que

El funcionamiento de la industria petrolera nigeriana

En la extracción del petróleo del Delta participan el Estado nigeriano a través de la compañía petrolera estatal en acuerdos de *joint venture* con las principales empresas transnacionales del sector. La Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), que lleva a cabo dichos acuerdos comerciales a favor del gobierno federal, es una de las compañías paraestatales que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Recursos Petroleros. La NNPC¹ tiene la responsabilidad exclusiva del desarrollo de actividades de *upstream* (producción de petróleo) y *downstream* (refino de petróleo y gas, transporte y comercialización de productos petroleros).

Las transnacionales operan en el Delta a través de un sistema concesionario, en el que la NNPC es el concesionario y las compañías los operadores. Los acuerdos de *joint venture* se concretan en dos modalidades, los Joint Operating Agreements (JOAs) o los Production Sharing Contracts (PSCs). En este tipo de acuerdo, las partes comparten los costes de las operaciones y la NNPC se reserva el derecho de ser el operador, el encargado de elaborar las propuestas de trabajo y el presupuesto anual, que debe ser compartido. Existen comités operativos en los que se discuten los temas técnicos y cada parte está representada en base a criterios de equidad. En los contratos se incluyen el nivel de participación de cada parte, los intereses y obligaciones y la propiedad de las instalaciones y activos.

tendrá en cuenta a los principales actores, tanto locales, como estatales y transnacionales, que de diversos modos se relacionan con las dinámicas de explotación de petróleo. Para empezar, realizaremos un análisis en perspectiva histórica de la evolución de las fórmulas de redistribución de las rentas en la federación y de las controversias que esta evolución ha suscitado, para entender cuál ha sido el papel del Delta en la construcción del Estado nigeriano. Para continuar, nos detendremos de manera particular en el análisis de un periodo crucial en este proceso, la guerra de Biafra, para finalizar comprobando cómo esta impactó de un modo determinante en las políticas (tanto federales como locales)

puestas en práctica en la región a partir de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980, cuando la implementación de los PAEs provocó transformaciones de gran relevancia en las diversas dinámicas, alianzas y conflictos entre los distintos actores del “complejo petrolero” nigeriano (Watts, 2004).

2.1. El Delta como espacio de procesos transnacionales

El territorio en el que se ubica el Delta del Níger se ha visto atravesado por diversas conexiones transnacionales a lo largo de la historia, lo que ha tenido efectos particulares en los órdenes económicos, sociales y políticos desplegados en la región. Al igual que en otros lugares del Golfo de Guinea, en el Delta las intersecciones que se han dado entre lo local y lo global han dado lugar al surgimiento de “formaciones transfronterizas”, constituidas por instituciones, redes de actores y discursos locales, estatales y transnacionales, que han favorecido la emergencia de “redes translocales de autoridad y orden” (Latham et al., 2001).

2.1.1. De la trata atlántica a la economía petrolera

A finales del siglo XV los exploradores europeos (británicos, portugueses, franceses y alemanes) comenzaron a visitar el litoral del reino de Benín con la intención de acceder al oro del Magreb sin tener que pasar por intermediarios árabes, además de explorar posibles rutas marinas hacia la India. La presencia europea en el territorio, que alteraría “las fortunas y el futuro socioeconómico y político de las formaciones sin explotar que hoy son llamadas colectivamente Nigeria” (Ihonbvere & Shaw, 1998, p. 8), se hizo más significativa a partir del siglo XVI, gracias a que el comercio triangular de esclavos se convertiría en el principal motor de las acciones imperiales europeas en la costa occidental del continente africano. Desde entonces y durante unos 300 años, el Delta se convirtió uno de los núcleos centrales de la trata atlántica, en la que intervinieron elites locales y comerciantes portugueses, franceses, suecos, holandeses y británicos. Hay fuentes que estiman que entre 1650 y 1800, el 24'1 % de los esclavos de África Occidental conducidos a América para trabajar en las plantaciones salieron de puertos como Biafra, Bonny y Calabar (Lovejoy, 2000, p. 81), aunque muchos de ellos provenían de zonas alejadas de la costa.

El comercio de esclavos no fue introducido por los compradores europeos, dado que ya existían dinámicas de ese tipo en la región previamente; no obstante, las conexiones transnacionales surgidas de la economía de la trata atlántica en el Delta alterarían los órdenes políticos y sociales en la zona al fomentar dinámicas extravertidas (Bayart, 2000) por parte de las instituciones locales. En respuesta a las necesidades comerciales derivadas de la trata, en el siglo XVIII se implantaron estructuras monárquicas en la región (Sellier, 2005, p. 105). En esta época se construyeron en la zona ciudades-Estado regidas por sistemas tanto monárquicos como republicanos y organizadas en “Casas”, aglutinadas en torno a un príncipe-mercader. El comercio triangular de esclavos provocó la emergencia de prósperas ciudades como Bonny, Elem Kalabari, Brass, Warri y Akassa y alentó el surgimiento de nuevas elites comerciales. Además de la merma en las capacidades productivas derivada de la migración forzada de millones de personas, tuvo lugar también una transformación de las alianzas entre los diversos grupos sociales del Delta y la emergencia de nuevos conflictos, debido a los distintos tipos de relaciones que estos grupos establecieron con los comerciantes europeos. Estos cambios deben verse, no obstante, en una línea de continuidad, ya que “lo que parece que supuso el comercio de esclavos es la aceleración de procesos ya en marcha” (Alagoa, 1986, p. 128).

En el año 1807 el imperio británico abolió formalmente la esclavitud, lo que tuvo implicaciones políticas y socioeconómicas de envergadura. El comercio esclavista no finalizó bruscamente una vez abolida formalmente la trata, pero fue quedando gradualmente relegado hasta que a mediados del siglo XIX la explotación y venta de la palma aceitera rica en esta área marcó la etapa del “comercio legítimo” en la región y el inicio de la incursión europea hacia el interior del territorio. Debido al interés en ejercer un control directo sobre este recurso, una materia prima estratégica en el contexto de la revolución industrial, a mediados del siglo XIX los británicos pusieron fin al llamado “imperio informal”, lo que marcó “el comienzo de la periferalización de Nigeria y su incorporación en el sistema capitalista mundial y la introducción concreta de relaciones capitalistas de producción e intercambio” (Ihonbvere & Shaw, 1998, p. 10).

En el año 1856 había alrededor de unas 200 compañías británicas con negocios en el Delta. El interés en el aceite extraído de la palma aceitera implicó la inauguración de la navegación a vapor por el Bajo Níger en la década de 1860 y el envío de cónsules a la región que sería bautizada como *Oil Rivers*. Los intereses británicos fueron asegurados a

través de la United African Company, la primera corporación de carácter transnacional que intervendría en el Delta y que desde 1870 sería la principal compañía de navegación en la zona. En 1885 los británicos impusieron un régimen de protectorado en *Oil Rivers*, región en la que la compañía (que a partir de su obtención de carta real en 1886 pasaría a llamarse Royal Níger Company) se encargaría de velar por los intereses británicos. Al imperio británico el mercado del Bajo Níger le reportó amplios beneficios: entre los años 1820 y 1884 el volumen de comercio de aceite de palma extraído de la región se dobló (Ihonbvere & Shaw, 1998, p. 11).

Tras cuatro siglos de relaciones comerciales, en junio de 1889 la Convención de París estableció fronteras definidas entre el África Occidental Francesa (AOF) y el territorio nombrado como Nigeria por los británicos un año antes y constituido por el Protectorado del Norte y el Protectorado del Sur, que incluía la región del Bajo Níger. En 1900 la Royal Niger Company vendió su territorio al imperio británico, que lograría imponer su soberanía en todo el Delta, donde instaló una Administración directa que no impidió la contratación de funcionarios autóctonos. En el Protectorado del Sur, debido en parte a la fragmentación de sociedades como los igbo (sudeste), o a unas estructuras políticas tradicionales muy débiles como en el caso de los yoruba (sudoeste), los británicos impusieron las denominadas “autoridades nativas”, conocidas como *warrant chiefs*.

A partir de 1910 y hasta el fin del periodo colonial, en esta región el gobierno se concentraría en la explotación de palma aceitera introduciendo diversas políticas agrícolas encaminadas a fomentar su producción para la exportación, políticas que “no tuvieron un impacto demasiado revolucionario en la economía de la región” (Aghalino, 2000, p. 29). Las “Casas africanas” del Delta se concentraron desde entonces en producir aceite de palma convirtiéndose en intermediarios entre los productores locales y los imperios europeos, unas relaciones comerciales que hicieron que emergiesen nuevas estructuras políticas de tipo mercantilista. Durante esta etapa, a través boicots, revueltas y protestas esporádicas, manifestaciones de trabajadores y luchas armadas prolongadas, diversas organizaciones locales trataron de “romper deliberadamente el monopolio de los negocios europeos”, convirtiendo al Delta del Níger en “uno de los nueve espacios principales de la resistencia africana a la colonización” (Ukeje, 2004, p. 72).

Al mismo tiempo se inauguraba en la región la primera fase de la industria petrolera nigeriana. La empresa alemana Nigerian Bitumen Corporation comenzó a explorar petróleo en el año 1908 en la zona de Araromi. Sus actividades se vieron interrumpidas tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, al tiempo que el gobierno colonial declaraba su derecho soberano sobre los recursos petroleros nigerianos a través de la *Mineral Act*, que habilitaba al gobernador general para conceder licencias de exploración a las compañías británicas. Había tres tipos de licencias: de exploración, de prospección y la *Oil Mining Lease* (OML), además de un cuarto tipo que regularía la construcción de oleoductos en base a la *Oil Pipelines Act* de 1956. La más importante de estas licencias era la OML, un acuerdo a largo plazo entre la compañía y el gobierno para producir petróleo. Esta licencia proporcionaba el privilegio exclusivo de producir petróleo en un área determinada durante un período de 30 años (en el caso de las actividades en tierra) y de 40 años (en el caso de las actividades desarrolladas en el Delta del Níger y la plataforma continental) (Frynas et al., 2000, p. 410).

Mientras, en el Norte de la actual Nigeria, dominado políticamente durante siglos por Kanem-Bornu, uno de los principales imperios de África Occidental y centro neurálgico del comercio transahariano de sal del Sahara y mijo y oro del África Occidental, las elites políticas de los Estados hausa de Kano, Biram, Daura, Gobir, Rano y Zaria adoptaban oficialmente el islam a partir de la segunda mitad del siglo XV (Sellier, 2005, p. 105). Un siglo más tarde el eje del comercio transahariano se desplazaría definitivamente al Este, posibilitando que las ciudades hausa se convirtiesen en las más prósperas de la sabana hasta el siglo XVIII. Estas ciudades amuralladas, construidas en la segunda mitad del primer milenio, se regían por un sistema monárquico de gobierno. La estructura socioeconómica se sustentaba en una intensa actividad comercial y cultural, potenciada por el uso de una lengua común. Durante siglos los hausa ocuparon un territorio con gran importancia estratégica, las llanuras del Norte más allá de la meseta de Jos, que ofrecían una conexión con Bornu y con los Estados de Mali y Songhai, en la región conocida como Sudán occidental. Esta posición les permitía controlar las rutas transaharianas hacia África del Norte y, hacia el Sur, las áreas boscosas de Borgu, Oyo y Benin.

A principios del siglo XIX un grupo de intelectuales musulmanes, liderados por el fulani Usman dan Fodio, emprendió una yihad con el ánimo de derrocar a los dirigentes de los Estados hausa, acusándolos de oprimir a sus súbditos. La guerra culminó con la creación

del califato de Sokoto, un territorio de unos 400.000 kilómetros cuadrados que con el discurrir del siglo se convertiría en un gran centro de cultura islámica y en el centro del Estado más poderoso de toda el África tropical, posición alcanzada fundamentalmente gracias al comercio de esclavos. En el año 1903 el imperio británico logró conquistar el califato de Sokoto, al que integró en el Protectorado del Norte, donde debido a la resistencia emprendida por los poderes locales, adoptaría la política del *Indirect Rule*, una forma de Administración indirecta que, en teoría, pretendía conservar las instituciones políticas preexistentes. No obstante, las autoridades británicas se colocaron por encima de las locales, los emires, a los que se les permitía seguir gobernando y cobrando sus impuestos de acuerdo con la ley islámica, bajo dos condiciones: abolir, jurídicamente al menos, la esclavitud, y dar al Gobierno colonial la mitad, como mínimo, de sus ingresos tributarios.

En 1914 tendría lugar la primera integración transregional del Delta, cuando el gobierno británico fundó la federación de Nigeria a partir de la unión de los protectorados del Norte y del Sur. Este hecho creó el escenario para la lucha por la independencia de la federación nigeriana, al permitirles “a muchos nigerianos y no nigerianos identificarse con esta nueva unidad nacional antes que con sus antiguas lealtades étnicas o comunitarias” (Ihonbvere & Shaw, 1998, p. 16). La colonización contribuyó a la formación de una nueva clase de nigerianos, profesionales liberales que acabarían por convertirse en los impulsores de la resistencia anticolonial. Así, en los años previos a la independencia ya existía en Nigeria un tejido asociativo importante; desde inicios de la década de 1920 el país contaría con una vida asociativa muy rica, constituida originariamente por organizaciones de tipo profesional, comercial y estudiantil. Para algunos autores, este “dinamismo temprano” será “una de las señales más claras del instinto democrático característico de su sociedad civil” (Edozie, 2002, p. 42).

Mientras en el Norte los movimientos nacionalistas no llegaron a germinar hasta la década de 1940, en el Sur, ya a principios del siglo XX “los movimientos nacionalistas, el sindicalismo y la prensa favorecieron tempranamente la propagación de la idea de democracia” (Sellier, 2005, p. 140). Sus primeras movilizaciones culminaron en la creación en el año 1920 del National Congress of British West Africa, el primer movimiento político con carácter panafricano de toda África Occidental, que nutrió la lucha por la independencia. El entonces gobernador colonial en Nigeria, Sir Clifford,

redactó la primera Constitución de la federación en 1922, que permitiría la creación de partidos políticos para participar en el Consejo Legislativo nigeriano. El Nigerian National Democratic Party (NNDP) fue el primer partido político nigeriano y sus actividades se reducían al área de Lagos, que controló hasta el surgimiento del Nigerian Youth Movement (NYM) en 1937, que contaba con una membresía de carácter nacional. No obstante, a finales de la década de 1930, momento en el que las autoridades coloniales desglosaban la región del Sur en dos, Este y Oeste, la mayoría de los fuertes movimientos anticoloniales organizados en Nigeria estaban articulados en base a líneas étnicas²⁰. En el Este y el Oeste surgieron multitud de movimientos políticos, como el movimiento yoruba Egbe Omo Oduduwa en el Oeste, y la Pan-Ibo Federal Union y el Ibibio State en la región del Delta.

En esta última región en particular, durante la segunda década del siglo XX las revueltas anticoloniales adquirieron mayor peso. Colectivos organizados de mujeres fueron especialmente activos entre las décadas de 1920 y 1940. En 1929, un grupo de mujeres del Delta del Níger y otras zonas del sudeste nigeriano se alzaron en protesta por un nuevo impuesto colonial sobre sus ingresos. Aunque lo que ha prevalecido en la literatura es que este episodio de protestas se relaciona únicamente con la cuestión impositiva, en realidad, tras esa demanda se ponía de manifiesto otra larga lista de agravios:

El descontento con la persecución, extorsión, corrupción y prácticas de los miembros de la Corte Nativa, la autocracia y despotismo de los *Warrant Chiefs*, las ilegales y opresivas tasas sanitarias, la continuidad y la aplicación del trabajo no remunerado en la construcción civil, las condenas a prisión injustas o excesivas, y los abismalmente bajos precios de productos agrícolas (sobre todo el aceite de palma y de nuez de palma), así como los precios exorbitantes de los productos importados (especialmente tabaco y bebidas alcohólicas) - los cuales amenazaban o erosionaban el poder adquisitivo de la mayoría de las familias (Ukeje, 2004, p. 73).

Más tarde, entre 1941 y 1947 las “matriarcas” de Egba llevaron a cabo acciones de desobediencia civil y otras manifestaciones contra la subida de precios y el cierre de mercados, que incluyeron el secuestro de funcionarios coloniales y sus agentes locales, además del destrono del gobernante tradicional. Nos parece relevante mencionar estos eventos ya que es posible ver una línea de continuidad en la articulación de los

²⁰ Entre la década de 1940 y 1950, el único movimiento político realmente nigeriano fue el Zikist Movement (ZM). El ZM, opuesto a las políticas de corte étnico, contaba con un programa político preparado para la Nigeria independiente que haría una especial incidencia “sobre la equidad, el control indígena y la participación pública” (Ihonbvere & Shaw, 1998, p. 21). Para saber más, ver: Olusanya (1966).

movimientos sociales en el Delta previa al establecimiento de la industria petrolera en la región. Las mujeres, en particular, han constituido uno de los grupos sociales más activos y creativos en la movilización de sus agravios frente esta (Olawaniyi, 2011), aunque estas luchas se han visto invisibilizadas en la literatura y los medios de comunicación. Las protestas de las que hablamos:

... se han convertido en hitos notables en las largas luchas de las comunidades petroleras en el Delta del Níger para el acceso a las oportunidades socioeconómicas subsidiadas, justicia medioambiental, igualdad política, así como el respeto de los derechos democráticos, humanos y de las minorías” (Ukeje, 2004, p. 74).

Poco antes de que se desarrollasen estas últimas protestas, en el año 1937 el consorcio anglo-holandés Shell-D’Arcy Exploration Parties (bautizado posteriormente como Shell-BP Petroleum Development Company of Nigeria), propiedad de Royal Dutch Shell y British Petroleum, comenzó sus exploraciones en el Delta. Un año más tarde, el consorcio recibió una Licencia de Exploración de Petróleo que inicialmente cubría toda la superficie de Nigeria y que sería reducida en 1957 hasta las 40.000 millas cuadradas, la mayoría en el área del Delta. Las actividades de exploración se vieron interrumpidas en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, hasta que en el año 1956 la compañía descubrió un importante yacimiento de crudo en Oilibiri, una pequeña población en el actual estado de Bayelsa. Dos años más tarde, poco antes de que Nigeria otuviese la independencia de Gran Bretaña, se inauguraban sus exportaciones de petróleo.

Muchos de los conflictos presentes en el Delta del Níger son, como acabamos de ver, previos a la aparición del petróleo, que ha contribuido a elevar lo que está en disputa “en el juego de suma cero que caracteriza la competición política en el país” (Obi, 2011, p. 89), lo que ha provocado, a su vez, una “sobrepolitización de la vida social” caracterizada por el hecho de que las luchas por capturar el poder político están impidiendo que se desarrolle un “*ethos* de desarrollo” (Obi, 2010a, p. 449). Pero las exportaciones de petróleo no sólo supusieron continuidades en lo que se refiere a los impactos de la integración de la región en la economía mundial. La relevancia geoestratégica del Delta para la industria transnacional del petróleo ha tenido diversos efectos en la región. En primer lugar, ha determinado de un modo particular el orden postcolonial, reforzando la soberanía del Estado nigeriano (Campos, 2011b), al tiempo que ha facilitado la intervención en lo local de nuevos actores transnacionales.

2.2. El Delta en la construcción del Estado nigeriano

Las aparentes contradicciones del federalismo nigeriano son, según diversos autores, las principales responsables de las tensiones que han caracterizado la historia postcolonial del Delta del Níger (Bach, 1989; Kalu, 2008; Forrest, 1986; Ejobowah, 1999). En ese sentido, para entender las dinámicas de conflicto que han surgido en el marco de la economía petrolera, se hace necesario revisar el papel que ha tenido la región en la construcción del Estado nigeriano y analizar, en un viaje de ida y vuelta, cómo este proceso ha impactado en la realidad local. Con este fin, realizaremos un análisis en perspectiva histórica de las principales variables que han definido este proceso, en el que entran en juego elementos que emanan específicamente de los intentos de acomodación de los distintos grupos étnicos al marco federal y la redistribución de las rentas derivadas de la explotación de petróleo entre estos grupos.

Debemos, para empezar, retroceder en el tiempo hasta finales del siglo XIX, cuando ya se había empezado a desarrollar en lo que hoy es Nigeria un Estado con dos claros ejes de poder; el norte y el sur. Las diversas políticas coloniales puestas en práctica en las dos regiones dieron lugar al surgimiento de un paradigma de desarrollo distinto en cada una de ellas, lo que favoreció que se formaran distintas identidades locales (Adunbi, 2015). Estas identidades se vieron fortalecidas entre los años 1946 y 1967, cuando en Nigeria estuvo vigente el uso de las regiones como unidades administrativas. El proceso de regionalización comenzó en 1946 cuando el entonces gobernador general, Arthur Richards, estableció una Constitución que dividió el territorio en tres regiones (Norte, Este y Oeste), que serían administradas por sus respectivos consejos regionales. Desde ese momento “la tensión entre esferas nacionales y subnacionales de ciudadanía, o entre la visión dominante liberal *versus* las visiones pluralistas de ciudadanía, ha caracterizado el discurso y la práctica política de Nigeria” (Ejobowah, 1999, p. 32).

Los negociadores nigerianos de la descolonización idearon una federación de tres estados coincidentes con esas regiones, constituidos por las 3 etnias mayoritarias (hausa-Norte, igbo-Este, yoruba-Oeste), en un sistema que debía tener en cuenta las diferencias existentes entre ellas. La Constitución de Richards, “fundamentada en las divisiones precoloniales, sentó las bases para una subsiguiente política étnica y regional, la opresión

de las minorías y el fortalecimiento de las regiones en detrimento del gobierno central” (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 18). La Constitución de Macpherson del año 1948 agudizó más las tensiones al establecer un sistema federal con un centro fuerte que seguía dejando poderes relativos a las regiones en función de su tamaño y población. La región del norte, cuya superficie y población era más del doble de las otras dos regiones juntas, obtendría así una mayor representación, al conservar el 50% de los escaños en la Cámara de representantes (porcentaje que se elevó al 52% en 1958).

La implementación de este esquema tuvo como resultado la regionalización de la propia política y condujo a la orientación étnica de los tres principales partidos del momento: el National Council of Nigeria and the Cameroon (NCNC), con base igbo, creado en 1944 en el Este; el Action Group (AC), surgido de la asociación étnica panyoruba Egbe Omo Oduduwa en 1950 en el Oeste; y el Northern Peoples Congress (NPC), de base hausa, nacido en 1951 de la organización Jam’iyyar Mutanen Arewa en la región del Norte. Las elecciones de 1951 supusieron un punto de inflexión en la evolución de la federación nigeriana, al consolidar el poder de los tres partidos mayoritarios en sus regiones respectivas, lo que consolidó un sistema político claramente determinado por la relación directa entre región, partido y etnicidad.

La autonomía de las tres regiones se extendió más cuando en el año 1954 la Constitución de Lyttlelton instituyó el federalismo; estableció la capital en Lagos, en el Territorio de la Capital Federal, y les otorgó carácter semisoberano a las regiones. Cada una de ellas, dominada políticamente por representantes de su respectiva etnia mayoritaria, contaría desde entonces con autonomía en el plano de la política interna y la administración, mientras al gobierno central se le otorgaba la responsabilidad sobre la política exterior y la interregional. Las elites de las tres etnias mayoritarias se vieron beneficiadas por tal acuerdo, mientras las minorías étnicas empezaron a sentir amenazada su representatividad en un futuro Estado independiente, por eso crearon sus propios partidos, “que representaron un papel doble: en el seno de cada región formaban una oposición al partido dominante a escala federal, militaban a favor de un gobierno central fuerte y pedían la creación de nuevos estados” (Sellier, 2005, p. 140).

La Constitución de 1954 sentó las bases de un modelo de gobierno para la Nigeria independiente. En ella, a través de ciertas manipulaciones de tipo legal y administrativo,

la administración colonial se aseguraba de que el capital foráneo gozase de una posición dominante en el futuro Estado nigeriano. Las elites locales emergentes se convertirían desde entonces en aliadas del capital multinacional, al haber “absorbido una visión del mundo y una orientación política y económica que favorece la dependencia del capital extranjero y del mundo occidental en general” (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 24). Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Nigeria servía como mercado exportador de productos agrícolas para la industria europea en reconstrucción y en los años previos a la independencia empezaría a configurarse como una economía de exportación. Los cimientos del futuro Estado nigeriano empezaron a construirse sobre tierras inestables, lo que marcó su inserción en la economía mundial en una posición periférica, como sostienen Ihonvbere & Shaw (1998):

La expansión de la agricultura campesina, el incremento de la proletarianización de los productores locales, el subdesarrollo de los empresarios indígenas, la urbanización acelerada, el desarrollo de las infraestructuras, la introducción de una economía moderna y el cuidado enriquecimiento de una elite cuya visión del mundo estaba dibujada en una cultura e ideales británicos, están entre los indicadores de esta incorporación, periferalización y subdesarrollo (p. 28).

En el año 1959, para concurrir a las segundas y últimas elecciones antes de la independencia, los grandes partidos del Este y el Oeste se aliaron con las pequeñas formaciones del Norte, mientras los pequeños partidos de áreas como el Delta (como el Niger Delta Congress), se asociaron con el NPC. Dado que ninguna formación alcanzó la mayoría, el NPC y el NCNC formaron un gobierno de coalición, con Tafawa Balewa (del NPC) como primer ministro postcolonial y Namdi Azikiwe (del NCNC) como presidente del Senado. El 1 de octubre de 1960 Nigeria se convertía en un Estado independiente con Azikiwe al mando del país bajo el cargo de gobernador general. En 1963 se inauguró la Primera República y Azikiwe se convirtió en su presidente.

Poco antes de la independencia, el gobierno promulgó la *Petroleum Profit Tax Ordinance*, que requería que las compañías extranjeras le pagasen al Estado el 50% de sus beneficios en forma de *royalties*, rentas e impuestos. Tras la obtención de la independencia en 1960, el nuevo gobierno federal abrió la industria petrolera a otras empresas internacionales, no obstante, el hecho de ser la compañía de la antigua metrópoli hizo que Shell contase con la mayoría de las licencias en aquel momento. A principios de la década de 1960, Shell-BP adquirió 46 OMLs que cubrían unos 38.850 km² durante 30 o 40 años en las áreas

teóricamente más propicias, lo que supone más de la mitad de la cuenca del Delta del Níger (Ashton-Jones et al., 1998, p. 151). Así las cosas, Shell-BP consiguió mantener su “ventaja del primer jugador” contando con un “monopolio virtual” durante las siguientes décadas, tal como explican Frynas et al. (2000):

...en el nivel más básico, este concepto sugiere que las empresas pioneras son capaces de obtener beneficios económicos positivos a consecuencia de una entrada temprana en el mercado, esto es, las ganancias superiores al costo del capital. Llegamos a la conclusión de que un análisis teórico desde la microeconomía, basado en la idea de la ventaja del primer jugador, que explora la posición de las personas jurídicas individuales dentro de un marco de economía política, ofrece una explicación superior del dominio de Shell en Nigeria, en comparación con los enfoques estructuralistas macro-teóricos (pp. 408-409).

Las compañías que llegarían a partir de entonces, Tenneco, hoy Texaco, en 1960; Mobil (actual ExxonMobil), Gulf (hoy ChevronTexaco) y American Overseas (o Amoseas) en 1961; Agip (actual EniAgip) y Safrap (que más tarde pasaría a ser ELF y luego Total), en 1962, y Phillips y Esso en 1965 (Frynas et al., 2000, p. 410), estarían más confinadas a nichos de mercado del área *offshore*, donde Shell tendría que competir con ellas en igualdad de condiciones. Gracias a un importante descubrimiento en 1964, Gulf se posicionó como el principal competidor en

En la actualidad existen 6 *joint ventures* entre la NNPC y empresas transnacionales. La Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) es una *joint venture* operada por Shell que cuenta con más del 40% de la producción total de Nigeria en unos 8 campos petrolíferos *onshore* del Delta con la siguiente distribución: NNPC (55%), Shell (30%), Elf (10%) y Agip (5%). Chevron Nigeria Limited (CNL) ha llegado a ser la segunda *joint venture* en producción. Esta opera en el Delta, tanto *onshore* como *offshore* y su distribución es la siguiente: NNPC (60%) y Chevron (40%). Mobil Producing Nigeria Unlimited (MPNU) es la *joint venture* entre la NNPC (60%) y Mobil (40%) y opera en el área *offshore* del sudeste del Delta. La propiedad de la Nigerian Agip Oil Company Limited (NAOC), operada por Agip, se reparte entre la NNPC (60%), Agip (20%) y Phillips Petroleum (20%) y opera en campos marginales *onshore*. Elf Petroleum Nigeria Limited (EPNL) se divide entre la NNPC (60%) y Elf (40%) y opera *onshore* y *offshore*. La Texaco Overseas Petroleum Company of Nigeria Unlimited (TOPCON) está operada por Texaco, propiedad de NNPC en un 60%, Texaco con un 20% y Chevron con un 20% y opera en 5 campos *offshore*. El 95% del petróleo producido en Nigeria depende de estas *joint ventures*¹, mientras el 5% restante le corresponde a unas 50 empresas nigerianas, que trabajan en asociación con las transnacionales en los llamados “campos marginales”.

actividades *offshore* y como la segunda compañía en importancia tras Shell (Frynas et al., 2000, p. 404). Mobil hizo su primer descubrimiento *offshore* en 1964 y comenzó a

producir en 1970 convirtiéndose en la tercera compañía más grande. Mientras, Agip/Phillips y Elf (ahora Total) se enfocaron en áreas *onshore* abandonadas por Shell²¹.

Como señalan algunos autores, “la dependencia en las rentas petroleras pagadas por las transnacionales que también controlan los procesos técnicos de producción petrolera hacen del Estado nigeriano un guardián y recolector de rentas petroleras que opera en asociación, y en deuda, con las empresas transnacionales de petróleo” (Obi & Rustad, 2011, p. 4). Según estos enfoques, los sucesivos gobiernos nigerianos, a través de sus estrategias de extraversion (Bayart, 2000), han favorecido ampliamente a las empresas transnacionales (Rowell, 2005, 71). Durante las últimas décadas, el sector ha estado dominado por cinco: la angloholandesa Shell, las estadounidenses ChevronTexaco y ExxonMobil, la italiana EniAgip y la francesa Total²². ExxonMobil, ChevronTexaco y EniAgip tienen cada una su propia terminal de exportación en el Delta, mientras Shell dispone de dos terminales.

2.2.1. Federalismo, recursos naturales y redistribución de rentas

Debido a los diversos procesos de colonización experimentados y a lo establecido en el proceso de negociación de la independencia en 1960, la región del norte contaría desde entonces con una mayor representación política, mientras el este y el oeste se encontrarían más desarrollados desde el punto de vista industrial y su población gozaría de un mayor nivel educativo. Los británicos “esperaban que la preeminencia geopolítica e institucional del norte establecería una garantía sistémica inherente para la estabilidad”. No obstante, el resultado de este desequilibrio fue precisamente el contrario. De hecho, “la contradicción entre la distribución constitucional del poder y su distribución real en la sociedad se convirtió en una fuente intrínseca de agitación y violencia” (Bach, 1989, p. 219).

²¹ Hasta 1993 todas las operaciones petroleras eran *onshore*, pero entonces el gobierno federal abrió concesiones a bloques en aguas profundas, un campo en el que necesariamente se requiere la tecnología y el capital proporcionado por las compañías extranjeras, lo que provocó que el número de empresas transnacionales en el Delta se multiplicase. En 1966, ocho compañías contaban con licencias en Nigeria, en 1976 ya eran 19 (Madujibeya, 1975, p. 2). En 1998 el número de licencias había alcanzado los 50, aunque hay que tener en cuenta que muchas de estas eran para la NNPC, sus subsidiarias y sus *joint venture*. Hoy hay un total de 108 OML (Oil Mining Lease) y 42 OPL concedidas principalmente a estas *joint ventures* por periodos de 5 y 20 años respectivamente. La mayoría de estas licencias son para operar en el área del Delta, tanto *onshore* como *offshore*.

²² En 1979 el gobierno de Obasanjo nacionalizó los activos de BP en la *joint venture* con Shell, lo que supuso que fuese solo Shell la que siguiese operando la *joint venture* a favor del gobierno ya que BP se encargaba del refinado y las operaciones de marketing, lo que a partir de entonces haría la NNPC, entonces llamada Nigerian National Oil Company (NNOC)

El elemento central del federalismo fiscal nigeriano es la redistribución de las rentas derivadas de la extracción de petróleo entre los tres distintos niveles de gobierno²³ con el objetivo de equilibrar el “desarrollo” en todo el territorio, gravando las actividades económicas de las regiones con mayor concentración de recursos y transfiriendo una parte de las rentas recaudadas a las zonas más pobres a través de un sistema fiscal para lograr que “las disparidades fiscales horizontales entre las distintas localidades y los desequilibrios verticales entre los niveles de gobierno se minimicen” (Akpan & Umodong, 2003, p. 338). Según un análisis de Bassey & Akpan (2012, p. 224), los Estados federales con economías industriales diversificadas tienden a la descentralización de los poderes fiscales y del control de los recursos, mientras los Estados federales con “economías monoculturales” como Nigeria tienden a la centralización de ambos. Esto significa que en Nigeria, “la autoridad y los recursos se han ido concentrando en el nivel ‘federal’, una tendencia que va unida a la atomización de las unidades geopolíticas del país debido a la naturaleza divisoria del federalismo nigeriano” (Bach, 1989, p. 220).

Como afirma Watts (2007, p. 642), la historia de la Nigeria postcolonial “es en un sentido la historia de la reconfiguración y contestación sobre la redistribución de las rentas” entre los distintos niveles de gobierno que constituyen la federación. En el actual Estado federal la redistribución de las rentas se realiza entre los niveles federal, estatal y local a través de cuatro mecanismos: el “principio de derivación” estatal, creado en 1946, que supone que cada estado de la federación tiene derecho a una proporción de las rentas generadas en su propio territorio; la *Joint States/LG Account*, constituida en 1968, que distribuye las rentas horizontalmente entre los estados y áreas de gobierno local en función de las necesidades, la población y otros criterios; la *Federation Account*, creada en 1979, encargada de gestionar las rentas federales verticalmente; y la *Special Grants Account*, establecida en 1968, que incluye las rentas derivadas de las operaciones petroleras dirigidas directamente al Delta del Níger a través de organismos como la OMPADEC (Oil Mineral Producing Areas Development Commission), operativa entre 1992 y 1999,

²³ Por “federalismo fiscal” se entiende “el ámbito y estructura de responsabilidades y funciones de los distintos niveles de gobierno así como la redistribución de recursos entre esos niveles” (Ikeji, 2011, p. 132). El concepto de “redistribución de rentas” se refiere a un método de reparto de las rentas entre los distintos niveles de gobierno (reparto vertical) y entre los componentes de cada uno de esos niveles (reparto horizontal) de una unidad político-administrativa dada. Los principios para la redistribución de las rentas federales difieren en cada caso particular y dependen de dos factores principales: el proceso por el cual el Estado se ha convertido en federal y la economía política de ese mismo Estado, en otras palabras, “la naturaleza y modelo del federalismo es congruente con la economía política del Estado” (Bassey & Akpan, 2012, p. 224).

o la NDDC (Niger Delta Development Commission), en funcionamiento desde el año 2000 (Watts, 2007, p. 642).

La mayor parte del petróleo producido y exportado por Nigeria procede de territorios habitados por “minorías étnicas” de la región del Delta del Níger, que demandan un mayor acceso a las rentas generadas por la industria petrolera, dado que progresivamente el “principio de derivación” ha ido descendiendo mientras aumentaba lo correspondiente a la *Joint States/LG Account*. A partir de 1960 ha tenido lugar “un proceso de centralismo fiscal radical en el que los estados productores de petróleo (compuestos mayoritariamente por minorías étnicas) han perdido y las mayorías étnicas no productoras han ganado – por medios justos o injustos (Watts, 2007, p. 642).

Mientras durante el periodo tardocolonial y los primeros años tras la independencia, las regiones que componían Nigeria gozaron de cierto grado de autonomía, a finales de la década de 1960 el país comenzó a transformarse en un Estado centralista desde el punto de vista fiscal y administrativo, lo que en gran medida se vio alentado por los beneficios proporcionados por la extracción de los recursos petroleros existentes en la región del Delta del Níger, sobre los que el gobierno central quiso ejercer el control. En paralelo a este proceso de centralización, los sucesivos gobiernos irían fragmentando el territorio en unidades estatales que, sobre el papel, trataban de dar respuesta a las demandas de las minorías, aunque estas nuevas unidades seguirían teniendo una alta dependencia financiera del centro. Los estados cuentan con cierto grado de autonomía, pero la progresiva centralización fiscal llevada a cabo por los sucesivos gobiernos ha derivado en una dependencia creciente de estos estados sobre la estructura federal. Sobre todo desde finales de la década de 1970, durante el *boom* petrolero, este hecho provocó que los estados demandasen cada vez más recursos al centro, a que se extendiese la “irresponsabilidad financiera” y se sentasen las bases para la demanda de nuevas unidades estatales (Forrest, 1986, p. 5), lo que multiplicó las estructuras burocráticas y sus costes en todos los niveles de gobierno.

Esta parcelación territorial ha tenido implicaciones de gran trascendencia en la historia política de Nigeria debido a su articulación con la evolución de las fórmulas de redistribución de las rentas derivadas de la explotación de los recursos naturales entre los distintos niveles de gobierno, que ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo del sector petrolero. El Political Bureau, una comisión formada por intelectuales y líderes

sociales, operativa durante el régimen militar de Babangida (1985-1993), realizaba el siguiente análisis:

...la asignación de los ingresos o la distribución legal de los ingresos de la *Federation Account* entre los diferentes niveles de gobierno ha sido uno de los temas más polémicos y controvertidos de la vida política de la nación. Tan contencioso ha sido el asunto, que ninguna de las fórmulas que se han ido desarrollando por parte de una comisión o por decreto bajo diferentes regímenes desde 1964 se ha ganado la aceptación general entre las unidades que componen el país. De hecho, el tema, como un decimal periódico, ha permanecido dolorosamente como el primer problema con el que casi todos los regímenes entrantes han tenido que lidiar desde la independencia. En el proceso, se han hecho hasta trece diferentes intentos para diseñar una fórmula de asignación de ingresos aceptable, cada uno de las cuales es más recordado por las polémicas que generó que por las cuestiones resueltas (Political Bureau, 1987, p. 169)

En palabras de Obi (1998, p. 262): “el asunto de la redistribución de rentas está en la misma base de la existencia de la federación nigeriana y las reglas de entrada y salida de la clase gobernante”. Una de las principales consecuencias del proceso centralizador llevado a cabo en paralelo a la fragmentación del territorio ha sido una enorme polarización social y competitividad entre las regiones, los estados federados, las áreas de gobierno local, comunidades e individuos particulares para acceder a los recursos federales, lo que ha alimentado dinámicas de carácter neopatrimonial (Chabal & Daloz, 1999). El acceso al poder se ve como la posibilidad de acceso a bienes materiales y estatus con los que proveer y brindar seguridad a la familia y el entorno comunitario. Durante el inicio del proceso de centralización, a medida que las instituciones nigerianas se consolidaban y se desarrollaba la economía nacional, las redes patrimoniales, que controlaban el acceso a empleo, contratos, créditos, fondos de partidos políticos, privatización de recursos estatales, etc, se iban extendiendo en todas las esferas económicas. En ese escenario, el petróleo se rebela fundamental, ya que la dependencia de las rentas asociadas a la industria del petróleo intensificaron el clientelismo. Teniendo en cuenta que el federalismo nigeriano tiene una “naturaleza etnodistributiva” (Osaghae, 2005, p. 21) no es de extrañar que “el acceso al Estado estuviese asegurado a través de modelos políticos clientelares con un apoyo a menudo movilizad o sobre bases de carácter étnico” (Forrest, 1986, p. 5).

Ikeji (2011) ha identificado las principales contradicciones y desafíos que se dan entre la práctica de la redistribución de rentas y las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno. Una de las principales contradicciones en la redistribución de rentas es la “no

correspondencia”, el hecho de que “la mayor parte de las fuentes de ingresos caen bajo la jurisdicción del gobierno federal, aunque se suponga que los niveles más bajos de gobierno tienen que generar ingresos internos” (Ikeji, 2011, p. 130). Existen grandes divergencias en torno a las funciones asignadas a los distintos niveles de gobierno y los poderes impositivos de los mismos. En relación con esto, la dependencia de los estados y gobiernos locales de la financiación federal genera rechazo entre la población del Delta.

Otra cuestión controvertida es la propiedad de los recursos petroleros. Como han analizado algunos autores, la preeminencia política de las tres etnias mayoritarias y su control del gobierno federal y, por tanto los recursos, mientras en la zona del Delta rica en petróleo habitan minorías étnicas, ha dado lugar a un debate sobre el “control” y la propiedad de los recursos. En relación con esto, se han generado controversias también en los estados ricos en petróleo entre los líderes tradicionales y locales y los gobernadores estatales, ya que las poblaciones que habitan en las tierras ricas en petróleo consideran que este debería ser propiedad de ellas.

Además, el establecimiento y la gestión de la *Federation Account* por parte del gobierno central también ha sido contestado. Desde 1977 hasta 1991 lo que le correspondía a la *Federation Account* del total de las rentas federales era del 96%, en 1991 este porcentaje descendió hasta el 75% y alcanzó el 35% en 1997, lo que ha provocado un desequilibrio entre los tres niveles de gobierno. La última de las controversias se relaciona con el proceso de reducción que ha ido sufriendo el “principio de derivación” y las demandas por su incremento planteadas por distintos colectivos (elites políticas y organizaciones y movimientos sociales) en el Delta.

2.2.2. Del “principio de derivación” a la *Distributive Pool Account*

El “principio de derivación” ha sido el pilar sobre el que se han sostenido las sucesivas fórmulas de redistribución de rentas en Nigeria. Durante el periodo previo a la independencia, la aplicación de este principio permitió visualizar las enormes disparidades productivas existentes entre las diferentes regiones. Esta constatación fomentó una ascendente competitividad entre ellas con el fin de conseguir mayores porcentajes de los ingresos asignados desde el centro.

Desde 1914 hasta 1946, la *Mineral Act* establecida por las autoridades coloniales británicas en territorio nigeriano, establecía que las rentas derivadas de la explotación de recursos naturales debían regresar al 100% a su región de origen. En 1946, la Phillipson Fiscal Commission, creada por el gobierno colonial en simultáneo a la Constitución de Richards, promulgó el llamado “principio de derivación” como base para apuntalar el federalismo fiscal. Esta fórmula, que a pesar de haber sufrido diversas modificaciones, ha estado vigente desde entonces hasta la actualidad, implica que las rentas nacionales deben ser distribuidas en base a una devolución proporcional al centro de las rentas generadas por la extracción de recursos naturales por parte de cada una de las unidades contribuyentes (regiones inicialmente, estados federados después). Su objetivo es “equilibrar las ganancias y las pérdidas derivadas de las externalidades provocadas por la extracción de recursos naturales”. En el caso de la extracción de petróleo se concretan en las pérdidas en recursos naturales, las externalidades derivadas de la producción de petróleo: “degradación medioambiental, alto coste de la vida, desempleo y pérdida de medios de subsistencia debido a la degradación medioambiental, etc.”, y los llamados “*costes sociales de producción*, como una ruptura en el sistema social de valores, el aumento de la criminalidad...” (Ikeji, 2011, p. 126).

Las posteriores comisiones en materia de redistribución de rentas (Hicks-Phillipson Commission de 1951 y C hicks Commission de 1953) seguirían basando sus recomendaciones en el principio de derivación, en consonancia con el proceso de autonomía progresivo que las Constituciones de 1946, 1948 y 1954 le otorgarían a las tres regiones. Pero durante la Conferencia Constitucional de 1957/58, el gobierno constituyó la Raisman Commission, que supuso un punto de inflexión en materia de redistribución de rentas. En este momento se inauguró el proceso de centralización fiscal, motivado por las perspectivas que proporcionaban las prospecciones realizadas hasta el momento en el Delta por el consorcio anglo-holandés Shell BP. La comisión recomendaba que el reparto de rentas se estableciese en función de cuatro criterios: continuidad, mínima responsabilidad, población y desarrollo equilibrado de la federación.

La principal recomendación de esta comisión fue la creación de la *Distributive Pool Account* (DPA), un nuevo fondo para la redistribución de las rentas a nivel federal y estatal. Según esta nueva fórmula (que se aplicó desde 1960 hasta 1966), los ingresos derivados de la exportación de ciertos recursos, incluido el petróleo, se repartirían en tres

partes: un 50% para el estado de derivación, un 20% para el gobierno federal y un 30% para la DPA, a dividir entre las regiones en base a la superficie y a la población (el 40% al Norte, el 31 al Este, el 24 al Oeste y el 5% al sur de Camerún). Este reparto provocaría que la región del Norte afianzase su posición ventajosa, lo que, según algunos autores, agravaría la percepción de agravio entre las comunidades del Delta. El petróleo fue el primer recurso natural cuyas rentas derivadas de la explotación se repartirían en todo el territorio nacional. Hasta entonces, el Norte, rico en estaño y bauxita; y el Oeste, rico en cacao, explotaban estos recursos para su propio beneficio, mientras el este no disponía de recursos naturales o agrícolas de relevancia, por lo que inicialmente el “principio de derivación” no le beneficiaba.

En 1963 el primer gobierno independiente de Azikiwe disgregó la región Oeste en dos, Oeste y Medio Oeste, con lo que Nigeria pasaría a tener cuatro regiones. El Delta del Níger, hasta entonces expandido entre el Oeste y el Este quedaría ahora comprendido entre esta última y la recién creada región de Medio Oeste. A cada una de estas regiones, según el principio de derivación revisado por la Raisman Commission, le correspondía el 50% de las rentas y *royalties* generados por la explotación de crudo. En 1964, la Binns Commission se estableció con el objetivo de reajustar los esquemas a la creación de la región Medio Oeste. Esta comisión mantuvo los mismos criterios pero estableció el reparto entre regiones en un 42% para el Norte, el 30 para el Este, el 20 para el Oeste y el 8 para el Medio Oeste, por lo que la región del Delta sufrió una reducción en su asignación.

El proceso de reducción del principio de derivación en beneficio de la DPA suscitó, por ello, controversias entre los representantes políticos de la región y el gobierno central. En el año 1970 el principio de derivación fue reducido al 45%, al 20% en 1975, nuevamente elevado al 25% en 1982, prácticamente eliminado entre 1984 (1,55%) y 1992 (3%), y finalmente establecido en un 13% desde el año 1999. Las transformaciones sufridas por este principio lo colocarían en el centro de todas las controversias, sobre todo en el Delta, donde se generaría la percepción colectiva de estar siendo gradualmente excluida de los beneficios generados por el petróleo existente en sus tierras.

2.3. La guerra de Biafra como punto de inflexión

En el marco de las políticas de sustitución de importaciones promovidas por las Instituciones Financieras Internacionales en toda África, el gobierno federal de Azikiwe lanzó el Primer Plan de Desarrollo Nacional (1962-1968), que fue prorrogado hasta 1970 debido al estallido de la guerra de Biafra. Los objetivos de este plan eran alcanzar una tasa de crecimiento de al menos un 4% anual, la realización de grandes inversiones y la facilitación del acceso a los servicios sociales básicos a toda la población. A pesar de que se operaron ciertos cambios debido al plan, en realidad este contribuyó a ahondar las desigualdades, en parte porque las regiones siguieron operando como si esta planificación de ámbito estatal no existiese.

El fracaso del plan debe achacarse a “la rivalidad existente entre las regiones y entre las regiones y el gobierno federal, al alto grado de intolerancia característico de la cultura política nigeriana, la mediocridad de las políticas, la corrupción, el gasto desorbitado y la politización de la etnicidad y la religión” (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 35). Descontenta con el gobierno de Azikiwe, una gran parte de la población acogió con entusiasmo el primer golpe de Estado que sufrió Nigeria, en enero del año 1966. Al mando del comandante en jefe del ejército Johnson Aguiyi Ironsi, la junta militar convenció a los nigerianos de que prestaría atención a sus demandas, no obstante, tras sus proclamas de corte populista, planteó un programa que pronto sería criticado por su carácter reformista.

Tras el golpe, en febrero de 1966, Ironsi, autoproclamado comandante en jefe de las fuerzas armadas, anunció la desaparición de las 4 regiones y la transformación de Nigeria en un Estado unitario. En mayo de ese mismo año, la Junta encabezada por Ironsi lanzó dos decretos que se convertirían en el catalizador de la guerra civil: los decretos 33 y 34 de Unificación de los Servicios Civiles de la Federación proponían el establecimiento de un nuevo plan económico, la eliminación del federalismo como forma de gobierno, la sustitución de las regiones por provincias, la prohibición de las asociaciones étnicas y de todos los partidos y la creación de un gobierno nacional militar. La medida de unificación del servicio militar y su sometimiento a una simple cuestión de méritos fue vista como un agravio por los norteños, que debido al proceso de colonización informal experimentado habían gozado de un menor acceso a la educación de corte occidental. Como consecuencia de la proclamación de estas medidas se desataron revueltas en el Norte, en

las que se calcula que fueron asesinados 100.000 igbos, la etnia de origen de Ironsi, mayoritaria en el Este.

En este marco, la Níger Delta Volunteers Force (NDVF), bajo el mando de Isaac Jasper Adaka Boro, un ex policía de la minoría ijaw, oriundo de Oilibiri, llevó a cabo la primera rebelión armada contra las compañías petroleras que operaban en su comunidad y el propio gobierno regional del Este. El 23 de febrero de 1966 Boro declaró la República de los Pueblos del Delta del Níger y anuló de forma simbólica todos los contratos petroleros vigentes, instando a las compañías a negociar directamente con su administración. El discurso de Boro apelaba a las injusticias sociales vividas históricamente por sus bases: “recuerda a tu abuela de 70 años que todavía cultiva para comer, recuerda también a tu gente afectada por la pobreza y recuerda también tu petróleo, que está siendo drenado todos los días de tus venas y, a continuación, lucha por tu libertad” (citado en Kalu, 2008). Doce días después de su alzamiento, Boro fue detenido, torturado y condenado a muerte junto a algunos de sus hombres.

En julio de 1966 Ironsi fue asesinado en un contragolpe, tras lo cual su sustituto en el cargo, el general Yakubu Gowon, declaró el estado de emergencia y prometió darle solución a la cuestión federal²⁴. En septiembre de 1967 Gowon propuso la realización de una conferencia nacional con el objetivo de redefinir el Estado. Su resultado permitió comprobar cómo las regiones cambiaban de posición, en una clara manifestación de la “naturaleza fluida de los intereses políticos en el seno de la burguesía nigeriana más allá de la región, la religión y las etnias” (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 62). Las minorías de cada una de las regiones, no obstante, tenían clara su preferencia: la creación de una federación compuesta por un mayor número de estados, que respondiesen a las realidades étnicas y socioeconómicas locales. En 1967 Gowon ordenó la sustitución de las cuatro regiones creadas por Ironsi por 12 estados, tres en el Este, dos en el Oeste, uno en el

²⁴ Desde el golpe de 1966 los militares contaron con una gran legitimidad social en Nigeria; más incluso que los gobiernos civiles, que eran vistos casi como una “aberración” (Edozie, 2002, p. 23). Esta legitimidad descansaba sobre la asunción por parte de la población de que los regímenes militares serían cortos y tendrían un carácter correctivo y curativo en momentos de crisis política. En definitiva, “los militares eran vistos como una fuerza que prevendría la corrupción civil y la etnicidad corrosiva” (Edozie 2002, p. 23). La guerra de Biafra (1967-1970) consolidó esa legitimidad y condujo a la politización de la institución militar. Entre los años 1966 y 1990 se desarrolló una alianza triangular entre los militares (con rol de liderazgo y el apoyo de las clases medias); la llamada “sociedad civil” y las elites. Como veremos más adelante, la anulación de las elecciones de junio de 1993 hizo surgir la ideología antimilitarista y acabó con esta alianza, al entrar en competencia directa los militares y una amplia parte de la “sociedad civil”, opuesta a su gestión.

Medio Oeste y seis de ellos en el Norte, en una clara maniobra para otorgarle más fuerza a esta última región, debilitar a las demás e impedir cualquier intento secesionista en el Este y Medio Oeste, ya que estas regiones contaban con la enorme riqueza proporcionada por las rentas petroleras. La región rica en petróleo quedaría así dividida entre los estados de Delta, Medio Oeste, Rivers y Sudeste.

El estado de Rivers se convertiría en el hogar de gran parte de los izons, el subgrupo étnico de Boro; uno de los motivos por los que este, que había sido amnistiado por Gowon, decidió unirse al bando federal durante la guerra de Biafra, al igual que otras minorías étnicas, contrarias a la que consideraban una dominación por parte de la mayoría igbo. En el marco de la guerra, en abril del año 1968 Boro fue asesinado. Mientras, no sólo las minorías del Delta planteaban un desafío al gobierno central en este período. Desde las revueltas desatadas en el Norte por las medidas establecidas por la junta militar de Ironsi en febrero de 1966, un antiguo aliado del militar, Chukwuemeka Odumegwu-Ojukwu, alentado por el aumento de la población procedente del Norte en su región, que huía de los ataques, se había hecho gradualmente con el control de todas las instancias federales en el Este. El 30 mayo de 1967 el gobierno de la región, encabezado por Ojukwu, se declaró como Estado libre y soberano bajo el nombre de República de Biafra, lo que condujo al estallido de la guerra en julio de ese mismo año.

La guerra de Biafra se presentó internacionalmente como la resistencia de los igbo cristianos del Sudeste a los musulmanes del Norte, lo que le valió la simpatía de algunos gobiernos extranjeros. Mientras, por intereses geoestratégicos de distinta índole, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido proporcionaron armas a la federación, Francia (a través de sus colonias en África), Israel y Portugal mostraron su apoyo armamentístico a la rebelión biafreña. En el caso de los gobiernos africanos, Biafra fue tan sólo reconocida oficialmente por Zambia, Gabón, Sudáfrica, Costa de Marfil y Tanzania. En cuanto a alianzas interiores, la mayor parte del país se volcó a favor del gobierno central.

El petróleo jugó un papel fundamental en la marcha del conflicto. De hecho, la riqueza petrolera fue el principal catalizador de las demandas secesionistas en la región, convirtiéndose en un aliciente para la creación de un nuevo estado. La primera década de extracción petrolera había arrojado resultados modestos, pero la guerra colocó de ahí en

adelante a este recurso estratégico en el centro de la arena política y marcó un punto de inflexión en la implicación estatal en la industria petrolera. La perspectiva de perder la región rica en petróleo fomentó un cambio de tendencia en las políticas petroleras de los sucesivos gobiernos federales a partir de entonces, y en la red de alianzas formadas en el marco del “complejo petrolero”. De algún modo, el Estado se convirtió en una bisagra entre las elites locales y transnacionales asociadas al petróleo.

Durante la guerra, la propia industria se convirtió en un blanco militar: los sabotajes a las instalaciones petroleras realizados por las fuerzas biafreñas durante el conflicto provocaron que la producción se viese enormemente afectada. Las fuerzas secesionistas obligaron a las compañías petroleras presentes en el país desde 1961 a pagar rentas, *royalties* e impuestos a la declarada República de Biafra, lo que hizo caer las ganancias estatales desde los 22’5 millones de nairas (de 1966 a 1967) hasta los 20’9 millones (entre 1967 y 1968) y los 14’8 millones (en el período 1968-69) (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 68). En la década de 1960, dado que los beneficios obtenidos todavía eran modestos, lo que regresaba en forma de rentas a las dos regiones productoras no suponía demasiado (los beneficios de la exportación petrolera pasaron de los 2 millones de nairas entre 1953 y 1959 a los 16 millones entre 1964 y 1965), pero desde el estallido de la guerra civil el petróleo comenzó a ser un importante bien a disputar. Los sabotajes de las fuerzas biafreñas a los intereses petroleros occidentales tuvieron un impacto de gran trascendencia en la producción, que debilitó en gran medida la economía nacional, dando cuenta de que la “petrodependencia” empezaba a instalarse en el Estado nigeriano. Una economía pobre, tradicionalmente agrícola, se convertía en una rica y eminentemente basada en el petróleo.

Entre 1966 y 1967, el gobierno federal llevó a cabo dos grandes cambios en sus relaciones con la industria petrolera. Los nuevos términos establecidos por la OPEP para las empresas transnacionales entre 1967 y 1968, que fueron adoptados en Nigeria a pesar de que aún no formaría parte de la organización hasta 1971, dieron el pistoletazo de salida al proceso de nacionalización del petróleo. Estos nuevos términos determinaban, en primer lugar, que las compañías debían ponerse de acuerdo en fijar un precio “justo”, para el petróleo exportado, a partir del cual se calcularían los impuestos y los *royalties* petroleros. El segundo compromiso se refería a la obligación de tratar los *royalties* como gastos, por lo que desde entonces a la tasa de beneficio del 50% que se llevaba el gobierno

de las compañías, se les sumaron nuevos *royalties* que las empresas tendrían que pagarle. Además, siguiendo las directrices de la OPEP, el gobierno federal lanzó en 1968, la *Companies Act*, que establecería que las empresas extranjeras que operasen en el territorio tendrían que convertirse en nigerianas²⁵.

En simultáneo, el Estado comenzó una estrategia de mayor intervencionismo en la economía, que se concretó en una mayor centralización. Uno de los pilares de este proceso fueron las transformaciones en el sistema fiscal establecidas en la DINA Commission de 1968, que otorgaron al gobierno central el dominio en el acceso a los recursos, frente a los poderes estatales. En 1968 se estableció la *Oil in Navigable Waters Act* con el fin de implementar los términos establecidos en *la International Convention for the prevention of pollution of the Sea by Oil 1954 to 1962* y adaptarla a la realidad de Nigeria. Un mes antes de la rendición de Biafra, en noviembre de 1969, Gowon promulgó el *Petroleum Act/Decree No. 51*, que actualizó la *Mineral Act*, que anulaba todas las concesiones de las compañías petroleras y se aseguraba la potestad de dejar abiertas todas las licencias de exploración y producción.

El acta colocaba “la entera propiedad y control de todo el petróleo en, bajo o sobre cualquier tierra” del territorio nigeriano en el Estado central y otorgaba al ministro de petróleo el derecho de garantizar las OMLs a las compañías petroleras (Obi, 2001a, p. 26). El decreto dejaría así bajo el control y propiedad por parte del Estado Federal de todo el petróleo existente en sus tierras, en sus aguas territoriales y en su plataforma continental. La nacionalización del petróleo tendría un impacto decisivo sobre la población: a partir de entonces las poblaciones del Delta y los gobiernos locales y estatales vieron restringidos sus derechos a los recursos petroleros existentes en esas tierras. Desde entonces, el decreto ha sido contestado por organizaciones de la región, críticas que se han reflejado en la literatura sobre el conflicto. Para algunos autores, el *Petroleum Decree*:

... expropió el petróleo del Delta del Níger, para disgusto de las minorías étnicas de la región, que esperaban que los estados de las minorías étnicas obtendrían la propiedad sobre el petróleo existente en sus tierras. También significó un cambio estructural en el federalismo nigeriano bajo los regímenes militares: la transferencia del poder desde las

²⁵La OPEP adoptó entonces la “Declaración sobre Política Petrolera en los Países Miembros”, que ponía el acento en “el derecho inalienable de todos los países para ejercer una soberanía permanente sobre sus recursos naturales en el interés de su propio desarrollo nacional”. Para saber más, consultar su página web: www.opec.org.

regiones/estados hacia el gobierno federal, ilustrada en la centralización del poder sobre el petróleo (Obi & Rustad, 2011, pp. 6-7).

El 15 de enero de 1970, finalmente, Biafra capituló y Ojukwu huyó a Costa de Marfil. La guerra de Biafra dejó entre uno y dos millones de muertos y tuvo un impacto profundo en todos los órdenes. El intento secesionista por parte de la mayoría étnica de la región del Delta provocó un cambio de estrategia por parte de los custodios del Estado nigeriano.

2.3.1. La creación de estados

Uno de los principales impactos del intento secesionista de Biafra en la construcción del Estado nigeriano fue el inicio de un proceso de parcelación territorial en nuevas unidades estatales. Desde 1967 hasta 1996, la creación de nuevos estados y áreas de gobierno local fue justificada por los sucesivos gobiernos centrales como la solución para una mejor distribución de la “tarta nacional”, una medida encaminada a tratar de acercar el gobierno a la población. En ese sentido, “la creación de estados debería haberse convertido en el equivalente a un programa de desarrollo diseñado para beneficiar a la masa de la población nigeriana” (Bach, 1989, p. 230). En principio, la creación estatal respondería al intento de acomodación de los grupos étnicos lo más adecuadamente posible y al interés en reasignar los recursos materiales más equitativamente a todo el territorio. No obstante, esta fragmentación del territorio parece haber ido dirigida más bien a otorgarle mayor poder al gobierno central, ya que “los regímenes militares que gobernaron tras la guerra mantuvieron una fachada federal pero implementaron políticas que promovieron la transformación de Nigeria en un Estado unitario” (Ejobowah, 1999, p. 8).

En 1975 Gowon lanzó el Tercer Plan de Desarrollo Nacional (1975-1980), con una filosofía similar al anterior. El plan no pudo llevarse a término porque como consecuencia de la falta de capacidad de Gowon para controlar la economía y a la vista de su incumplimiento de la promesa de transición a un régimen civil, un grupo de militares del Norte precipitó la caída de su régimen. En julio de 1975 Gowon fue depuesto por un nuevo golpe militar, que alzó al poder al brigadier Murtala Muhammed (1975-1976). Tras la primera fragmentación hecha por el régimen de Gowon en 1967, el gobierno militar de Muhammed ordenó la creación de 7 nuevos estados en 1976. Con esta nueva fragmentación del territorio, la federación nigeriana contaría a partir de entonces con 19

entidades estatales. El Delta quedaría repartido entre cinco de ellas: Cross-River (un simple renombre del Sudeste), Imo (una de las dos escisiones del estado de East Central), Rivers, Bendel (nuevo nombre que se le daría a Medio Oeste) y Ondo (una de las tres escisiones del Oeste).

En la práctica, la división de un estado incrementa los recursos de las nuevas elites, mejora su posición social y les garantiza una representatividad en el nivel federal. Y lo mismo sucede en el caso de los gobiernos locales, el caldo de cultivo para que se alimenten las redes neopatrimoniales. Además, la creación de estados ha llevado aparejada la construcción de infraestructuras (aeropuertos, ciudades, industrias, carreteras, universidades, medios de comunicación, etc), lo que se ha convertido en un incentivo en sí mismo. La creación de estados se ha llevado a cabo sin tener en cuenta su viabilidad económica, su capacidad de generar empleo e ingresos propios que les den cierto grado de autonomía. Las rentas petroleras han hecho compatible la creación de estos estados con su dependencia financiera del gobierno federal, pero también han sometido esa viabilidad estatal a los vaivenes de la industria petrolera.

La creación de estados en Nigeria ha sido analizada desde la “perspectiva de la elite” (Sklar, 1967), que sostiene que las demandas de creación estatal en el país han respondido a los intentos de las elites locales de acceder a los beneficios del centro, particularmente las rentas generadas por la extracción de petróleo (Ogbeide, 2011; Kraxberger, 2004; Raufu, 1986; Ekeh, 1989). Esta teoría, al igual que las perspectivas marxistas de clase, ve a la etnicidad como un fenómeno político más que cultural, una ideología empleada por las elites para defender sus intereses. Según esta perspectiva, en el caso nigeriano las elites han tratado de convencer a la opinión pública de que la creación de más estados acercaría al gobierno al pueblo y generaría desarrollo. Las elites consiguieron movilizar a sus respectivas bases asegurándoles que la creación de estados para sus grupos étnicos les haría salir de la pobreza. Dado que los recursos federales son redistribuidos en función de los estados existentes, la elite nigeriana (funcionarios, militares retirados, jefes tradicionales, médicos, abogados, gente de negocios, etc) creó la necesidad de más estados a través de la redefinición de las fronteras étnicas (Ogbeide, 2011, p. 522).

Los líderes estatales, tanto a nivel federal como regional, se dedicaron a adscribir los proyectos de desarrollo (sobre todo alimentados por el *boom* petrolero en la década de

1970) a sus lugares de origen en base a líneas étnicas, por lo que las elites locales que requerían de esos proyectos se movilizaron en base a esas mismas líneas. Según esta tesis, las elites son las responsables de haber transformado “el grupo étnico en sí mismo en el grupo étnico para sí mismo” (Osaghae, 2006, p. 8). A través de mecanismos como la creación de estados, la clase dominante en Nigeria se ha valido de la manipulación de “las identidades culturales, símbolos y sentimientos, así como de los agravios y lealtades locales y subnacionales para asegurar sus propios intereses de clase” (Ogbeide, 2011, p. 523). Además, dentro de estas nuevas entidades emergieron nuevas mayorías y minorías, y estas últimas también propondrían nuevas fragmentaciones.

Esta perspectiva de la etnicidad como un instrumento de las elites debe ser tomada en cuenta, pero con matices, ya que oscurece el hecho de que la etnicidad se alimenta también de las desigualdades, injusticias y percepciones de deprivación relativa. El verla como un mero instrumento de las elites niega “la agencia a las masas y oscurece los factores estructurales que provocan agravios étnicos y movilizaciones genuinas” (Osaghae, 2006, p. 11). Raufu destaca, por ejemplo, los impactos positivos de la creación de estados cuando señala que esta ha servido como contrapeso a los desequilibrios estructurales al tiempo que respondía a las legítimas demandas de algunas “minorías nacionales” (Raufu, 1986, p. 88). Además, los grupos étnicos no son categorías sociales homogéneas e internamente cohesionadas, sino que se encuentran divididas por otras líneas como la edad, la clase, la educación, etc. En Nigeria, los movimientos étnicos “han desenmascarado el inherente conflicto de clase en el seno de las elites políticas, económicas y sociales” (Ogbeide, 2011, p. 523), porque no son sólo las elites las que utilizan la etnicidad como un instrumento en la competición por los recursos, sino que, como apunta Osaghae (1991), aquellos que no forman parte de las elites también ejercen una “eticidad de desafío a las elites” (p. 43).

2.3.2. El proceso de centralización fiscal

El segundo de los efectos del intento secesionista de Biafra en la construcción del Estado nigeriano fue el refuerzo y aceleración del proceso de centralización fiscal. Cuando estalló la guerra, el gobierno central instituyó el federalismo fiscal: con la justificación de responder a una emergencia nacional, sucesivos decretos lanzados en 1967, 1971 y 1975 reforzarían el control del gobierno federal sobre la redistribución de las rentas federales.

Desde el fin de la guerra civil, el petróleo empezó a proporcionar enormes beneficios gracias al buen momento que experimentaba entonces el sector en la esfera internacional: en el año 1970 la producción diaria en Nigeria alcanzaba ya los 2'1 millones de barriles. Desde entonces esta cifra se mantuvo prácticamente constante, excepto durante el pico de superabundancia mundial de agosto de 1981, cuando descendió a los 0'64 millones (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 68). En 1965 las exportaciones de crudo suponían el 5% del ingreso nacional total, en 1970 esta cifra ascendió hasta el 26,6%, llegó al 43,6% en 1971 y en el 1980 hasta el 80% (Ejobowah, 1999, p. 8). Una nueva medida del Gobierno de Gowon, el Decreto 13 del año 1970, redujo del 50 al 45% la proporción de petróleo que regresaba en forma de ingresos a cada uno de los estados de derivación e incrementó la parte correspondiente a la DPA hasta el 55%. El Decreto Constitucional 6 de 1975 elevó al 80% los ingresos destinados a la DPA y redujo al 20% lo que llegaba al estado de derivación (Ejobowah, 1999, p. 8).

El proceso de centralización fiscal comenzó tras la creación de los 12 estados en 1967. En el año 1968 se estableció la DINA Commission, que renombró la DPA como *States Joint Account*, creó una *Special Grants Account* y abogó por la creación de una Comisión Fiscal y de Planeación Permanente, argumentando que “una redistribución de rentas apropiada debería resultar en una distribución más equitativa de las rentas entre los estados para alcanzar un desarrollo equilibrado de la federación” (Ikeji, 2011, p. 122). Los criterios que recomendaba eran: estándares nacionales mínimos, desarrollo equilibrado en la redistribución de la *States Joint Account* y necesidades básicas. Las regiones más divididas (es decir, con un mayor número de estados) se vieron beneficiadas en la redistribución de rentas, que se repartían en base a los criterios de población y equidad de estados (50% repartido equitativamente entre los estados y 50 % proporcionalmente a su población). Para el Oeste, esto supuso una bajada del 18 al 7,3% en la DPA, mientras en las otras dos regiones, gracias a la creación de estados, esto no sucedió.

Más tarde, uno de los pilares del proceso de centralización fiscal fue el establecimiento de la *Federation Account* en 1977 con el fin de regular el reparto vertical de las rentas en la federación. No obstante, el Abovade Technical Committee on Revenue Allocation (también conocido como Abovade Commission), fue la primera comisión que tuvo en cuenta a los gobiernos locales en la redistribución de las rentas. Su principal

recomendación establecía que todas las rentas se pagasen a la *Federation Account* y fuesen redistribuidas verticalmente en la siguiente proporción: un 57% para el gobierno federal, un 30% para los gobiernos estatales, un 10% para los locales y el 3% restante para la *Special Grants Account*, reservada a beneficio de las áreas productoras de minerales y áreas con necesidad de rehabilitación tras desastres naturales y emergencias (Ikeji, 2011, p. 127). Además, criticaba los criterios empleados para el reparto horizontal hasta entonces y establecía cinco nuevos principios: igualdad de acceso a oportunidades de desarrollo (25%), estándares nacionales mínimos para la integración (22%), capacidad de absorción (29%), ingresos independientes y esfuerzo fiscal (18%) y eficiencia fiscal (15%). Sus recomendaciones fueron muy criticadas por sus intenciones centralistas, y rechazadas por la Asamblea Constituyente de 1979, aunque la *Federation Account* estaría operativa desde entonces.

2.3.3. La nacionalización del petróleo

Otro los impactos del intento secesionista de Biafra en las dinámicas estatales fue el proceso de nacionalización del petróleo. Tras la guerra, Gowon lanzó un programa de reconstrucción encaminado a preparar el camino para el establecimiento de un nuevo gobierno civil a partir de octubre de 1976. El Segundo Plan de Desarrollo Nacional (1970-1974), que se basaba en una “ideología liberal-democrática”, se planteaba cinco retos principales: la unidad de la nación, el dinamismo de la economía, la equidad y la justicia social, el acceso igualitario a las oportunidades y la democratización. A pesar del Plan, en estos primeros años de la década, el dinamismo de la economía se vio frenado por la atención prestada a la industria petrolera frente a otros sectores productivos.

En ese contexto, el régimen de Gowon llevó a cabo la segunda ola de expansión de la economía pública: el *boom* petrolero provocó la puesta en marcha de multitud de proyectos, sobre todo en infraestructuras y comunicaciones, a menudo carentes de planificación. La euforia petrolera derivó en un gasto sin control, tanto por parte del gobierno, como en las economías domésticas, que incrementaron exponencialmente su nivel de consumo. En este momento se concretó definitivamente la inmersión del gobierno federal en el sector, pues en el año 1971 Nigeria entró a formar parte de la OPEP y creó la Nigerian National Oil Corporation (NNOC), la empresa petrolera estatal, con el objetivo de realizar prospecciones, producir y comercializar petróleo y realizar otras

actividades relacionadas con el sector, para, posteriormente, ejercer el control de toda la industria petrolera del país.

En 1972 Gowon lanzó el “Decreto de Indigenización de la Economía”, que otorgaba la propiedad al Estado del petróleo, las finanzas y los sectores comercial y manufacturero. El decreto reservaba cuotas de participación en ciertos sectores para capital nigeriano. Aunque su objetivo era el fortalecimiento de la economía nacional, algunos autores consideran que las políticas de indigenización, lanzadas bajo una retórica nacionalista, sirvieron más bien para asegurar todavía más el capital extranjero, ya que no se dirigieron a grandes inversiones sino más bien a pequeñas compañías que ahora pasarían a manos nigerianas. La indigenización supuso que un gran porcentaje de las ganancias gubernamentales por exportación de petróleo fuesen empleadas para la financiación de empresas de capital foráneo (Beckman, 1982, p. 40).

Beckman considera que tras el discurso nacionalista se escondía el interés en fortalecer a la “burguesía nacional”, que estaba demandando un mayor acceso a los recursos, controlados hasta entonces por el capital extranjero. A principios de la década de 1980, este autor afirmaba que había “muchas evidencias para demostrar que el Estado nigeriano opera como un órgano de la burguesía doméstica en alza” (Beckman, 1982, p. 44). Eso no significa que este quisiese hacer frente al capital extranjero, sino que sus custodios quisieron convertirlo en una bisagra entre ambos, burguesía nacional y capital foráneo. Para el régimen de Gowon se hacía esencial regular la competencia entre ellos y los decretos de indigenización sirvieron para alentar las alianzas entre los dos grupos.

En el sector petrolero, el decreto de indigenización significaría que a través de la NNOC, el Gobierno federal tendría una participación directa en toda la producción petrolera a través del establecimiento de *joint ventures* con las compañías extranjeras. La crisis internacional del petróleo de 1973 derivada de un embargo impuesto por parte de la OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries), junto a Egipto y Siria, benefició en gran medida a la industria nigeriana y fortaleció sus conexiones transnacionales. En 1973, el gobierno y las compañías suscribieron el Primer Acuerdo de Participación, lo que le aseguró a la primera una participación del 35% en las segundas. En 1977 la NNOC se integró con el Ministerio de Recursos Petroleros y pasó a llamarse Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), para un año más tarde elevar su

participación en la mayoría de los campos a un 60%. De este modo, el gobierno se aseguraría el control federal de los derechos de exploración y de concesión a través de las *joint ventures*, lo que convertiría al Estado nigeriano en dueño, productor y comercializador de petróleo.

En el año 1978, el régimen militar de Olusegun Obasanjo (1976-1979), establecido tras el asesinato de Murtala Muhammed, estableció la *Exclusive Economic Zone Act*, que delimita el territorio de las aguas territoriales de Nigeria en 200 millas náuticas. El Acta le otorga el derecho al gobierno federal a explorar y explotar los recursos animales y minerales que se encuentren en esta zona. Al mismo tiempo lanzó la *Land Use Act* (LUA), que establecería que “todos los minerales en el subsuelo, incluido el petróleo, se consideran propiedad de todos los nigerianos, no sólo de aquellos del área de origen”. Esto quiere decir que la LUA otorgaba la propiedad legal de todos los minerales e hidrocarburos al gobierno federal. Sus términos serían incluidos en las Constituciones de 1979, 1989 y 1999, lo que también ha encontrado oposición entre la población de la región rica en petróleo del Delta. Para Obi (2010, p. 223), toda esta legislación “alienó a la gente de la riqueza petrolera al colocar el control del petróleo en el gobierno federal”.

Poco después, en julio de 1979 el gobierno decidió nacionalizar los activos de BP: todos sus oleoductos, los intereses de 8 campos petroleros productivos, un 20% de la *joint venture* entre Shell y BP y el 60% en BP-Nigeria Marketing Company. La nacionalización supuso que el gobierno nigeriano se quedase con el 80% de la Shell-BP, mientras Shell se quedaba con el 20% restante y seguía dedicándose a operar la *joint venture* a favor del gobierno en exploración y producción, ahora sin la participación de BP, cuya tarea, de refinado y marketing, pasaría a la NNOC (Frynas et al., 2000, p. 416). Algunos autores consideran que el interés de Obasanjo era ejercer presión sobre la política exterior británica hacia Rhodesia, ya que apoyaba la causa del gobierno de la mayoría negra en este estado (Frynas et al., 2000, p. 416). Las razones detrás de esta medida han sido relacionadas pues con intereses de política exterior, pero no se deben descartar los motivos económicos. Durante el régimen de Obasanjo el clientelismo y la violencia se instalaron definitivamente en una realidad socioeconómica marcada por la agudización del estancamiento del sector agrícola y la generalización del desempleo.

2.3.4. La emergencia de las “minorías petroleras”

La guerra de Biafra tendría también impactos relevantes en la articulación en torno a los agravios generados por la industria petrolera de muchas de las organizaciones y movimientos sociales del Delta. Entre los años 1960 y 1967, mientras una parte de las elites nigerianas creó grupos para presionar por el acceso a la participación política localmente, otra buscó el acceso al poder en el plano regional o federal²⁶. Durante la inmediata independencia, estas tensiones se dieron a través de una competencia no violenta entre elites o clases, lo que se vio facilitado porque entonces las minorías étnicas representaban un potencial socio en la balanza entre la centralización estatal y las tendencias separatistas. Dadas las expectativas puestas en el petróleo, las minorías del Delta se convirtieron en “aliados estratégicos” para el acceso a los beneficios petroleros, una ‘Cenicienta’ de las políticas de identidad étnica” (Obi, 2001a, p. 22). La creación de la NDDDB (Niger Delta Development Board) para atender los problemas específicos de desarrollo en la región, creada por el gobierno de Azikiwe en 1961, se planteó en este marco. No obstante, durante los 7 años que estuvo operativa, esta institución no consiguió resultados palpables; además, tras la guerra de Biafra, los fondos de la NNDB se dirigirían fundamentalmente a rehabilitación y reconstrucción postbélica.

El intento secesionista de Biafra abrió un juego de poderes más equilibrados, al aumentar el número de actores y al reducir sus diferencias. Durante la guerra, las elites de las minorías del Delta contrarias al proyecto político defendido por el movimiento secesionista de la mayoría igbo, ganaron cierto acceso al Estado. La creación de los estados de Rivers y Sudeste, una concesión por parte del gobierno de Gowon, fue inicialmente aplaudida por estas elites y sus bases, ya que les dio un rol en la federación. No obstante, las políticas articuladas por el gobierno federal tras la guerra civil demostraron, en primer lugar, que ese rol nunca iba a ser tan relevante como el de las elites de carácter estatal y, en segundo lugar, que tampoco se iba a traducir en una mejora

²⁶ En la Nigeria precolonial, las tensiones de carácter étnico se habían dado tradicionalmente entre las 3 etnias mayoritarias, sin embargo, desde la creación de la Federación en 1914 los conflictos se dieron sobre todo entre las etnias minoritarias y el Gobierno central. Las minorías étnicas vieron en la progresiva regionalización de la política nigeriana una amenaza a sus propios derechos de membresía a la Federación y a su control sobre los recursos naturales existentes en sus tierras. Entre las décadas de 1940 y 1960, las políticas identitarias de carácter étnico articuladas en la región fueron guiadas por las elites locales a través de la conformación de partidos políticos, movimientos a favor de la creación de estados y clubes sociales, que usaban las estructuras políticas existentes para avanzar su agenda de autodeterminación y autonomía (Obi, 2001a, p. 68). Las movilizaciones de las minorías condujeron al establecimiento de la *Minorities Commission* de 1957, cuyo mandato fue examinar sus reclamaciones de secesión (Ejobowah, 1999).

de las condiciones de vida de la población local, ya que “los beneficios que cayeron en manos de la elite de las minorías petroleras alimentaron la reproducción de relaciones hegemónicas de clase”, legitimando así “el homogeneizador proyecto de unidad nacional en el Delta, un proyecto indisolublemente ligado a las actividades de las multinacionales como “agentes de desarrollo gracias a la confianza generada por el *boom* petrolero de los 70” (Obi, 2001a, p. 29).

El proceso de centralización del poder en el gobierno federal en detrimento de los estados puesto en marcha tras la guerra provocó que sus relaciones se hiciesen desiguales, a medida que la bonanza petrolera engrosaba las arcas del gobierno federal (Bach, 1989, p. 221). Surgiría entonces el concepto de “minorías petroleras” para referirse a “aquellos grupos étnicos minoritarios que viven en el Delta del Níger, acogen a (o son acogidos por) las multinacionales petroleras e involucran al Estado por restitución, el control del poder petrolero y el derecho a determinar su propio destino como pueblo” (Obi, 2001a, p. 11). A lo largo de la década de 1970, la utilización del concepto de “minoría petrolera” por parte de las minorías étnicas del Delta empezaría a convertirse en “una metáfora colectiva para sus reclamaciones sobre la propiedad del petróleo, sus quejas por haber sido tratados injustamente y discriminados por su pequeño tamaño, y la injusticia y marginalización del poder a pesar del hecho de que “poseen” (producen) la savia del Estado nigeriano” (Obi, 2001a, p. 7).

Durante el fin de la década de 1970 se concretó definitivamente la total dependencia económica del país en el sector petrolero; gracias, en parte, a un contexto marcado por la crisis internacional de los precios, que colocó a los países productores en una posición internacional ventajosa y les alentó a concentrarse en desarrollar el sector.

2.4. De la euforia petrolera a los Planes de Ajuste Estructural

Las contradicciones surgidas durante la guerra, el proceso de reconstrucción postbélica y la bonanza económica emanada del *boom* petrolero “contribuyeron, de modo paradójico, tanto a fortalecer la economía como a debilitarla” (Ihonbvere & Shaw, 1998, p. 75). A pesar de que desde inicios de la década de 1970 los sucesivos gobiernos llevaron a cabo ciertas políticas de corte nacionalista, el Estado siguió sustentando su legitimidad en dinámicas extravertidas (Bayart, 2000).

Las políticas económicas puestas en práctica durante la década de 1970 dejaron al Estado en un alto grado de debilidad, el índice de pobreza aumentó considerablemente en todo el país y la inflación se disparó. El sector agrícola se vio completamente marginado por parte del gobierno, que concentró el gasto público en grandes proyectos de infraestructuras, muy costosas, y en muchos casos innecesarias o inapropiadas para la realidad local. El sector manufacturero tampoco recibió ningún tipo de atención gubernamental, por lo que no llegó a ser competitivo. Además, debido a la bajada de los precios internacionales del petróleo en 1978, las rentas petroleras sufrieron un descenso y el gobierno se vio en la necesidad de pedir un préstamo para equilibrar su balanza de pagos. Este hecho “marcó el inicio de un sustancial préstamo público de bancos internacionales basados en la seguridad de las reservas de petróleo de propiedad pública” (Forrest, 1986, p. 8).

El temor a que las empresas transnacionales abandonasen el territorio en la década de 1970 tras la guerra derivó en que, a pesar de las “políticas de indigenización” implementadas, se les otorgasen ciertos incentivos fiscales. En 1986, en el marco de la implementación de los Planes de Ajuste Estructural, se introdujo la figura de Memorandum of Understanding (MOU), un acuerdo financiero entre el gobierno y las compañías, que además de elevar el margen de beneficios para las transnacionales, introducía una serie de cambios: nuevos métodos para el cálculo de tasas, reducción de los impuestos sobre los beneficios petroleros, seguridad de la tenencia e inversiones, vacaciones fiscales generosas, los ingresos de exportación garantizados, incluyendo el permiso para operar cuentas en custodia en alta mar y las reservas de bonos de adición (Adepetun, 1996). Estas medidas atrajeron a muchas nuevas compañías, como Statoil-BP Alliance, Exxon y Du Pont (Khan, 1994, pp. 90-91).

2.4.1. Shagari y la “economía mixta”

En 1979, tres años después de lo prometido por el régimen de Gowon, Obasanjo anunció un proceso de elecciones democráticas que se celebró el 11 de agosto y al que concurren 5 partidos: el Great Nigerian People’s Party (GNPP), el Nigeria People’s Party (NPP); el National Party of Nigeria (NPN), el People’s Redemption Party (PRP) y el Unity Party of Nigeria (UPN). Todos ellos seguían teniendo bases de carácter étnico,

adscritas a las tres regiones. Los tres mayoritarios eran simples metamorfosis de los 3 partidos dominantes en la etapa anterior: el NPP, con origen en el NCNC, controlaba el Este; el NPN, nacido del NPC, el Norte; y el UPN, surgido del AG, el Oeste. El NPN, que ya había ganado las elecciones parlamentarias en julio de ese año, resultó vencedor, lo que le aseguraría el control del gobierno federal y de la mayoría de los estados.

El 1 de octubre de 1979 Alhaji Shehu Shagari se convirtió en presidente de la Segunda República (1979-1983) y lanzó inmediatamente una Constitución que, entre otras cuestiones, ampliaba los poderes legislativos del gobierno federal en detrimento de las autoridades estatales, establecía una “Economía Mixta” y fortalecía la propiedad estatal de los recursos hidrocarburíferos. A finales de la década de 1970 los principales impactos de la gestión de la riqueza petrolera ya se hacían visibles. La llegada de las rentas petroleras obligó a incrementar el gasto público, pero esto no fue acompañado de medidas de control, lo que tuvo “consecuencias en la expansión de la economía pública, el uso y rendición de cuentas de fondos públicos y las actitudes frente al Estado” (Forrest, 1986, p. 6).

En segundo término, la subida de los precios internacionales de petróleo en 1979 tuvo un impacto directo en la economía nacional: la inflación debida a la subida de los precios de los alimentos, unida a la apreciación de la naira, hizo menos competitivas las exportaciones frente a las importaciones, por lo que la producción doméstica (sobre todo en el sector manufacturero y alimentario) se vio amenazada. Además, la falta de medidas para controlar los efectos de la volatilidad de los precios del petróleo convirtió a este recurso en una fuente de inestabilidad económica, como se comprobó en un mayor grado durante la recesión mundial de mediados de 1981. Por último, la integración de Nigeria en la economía mundial a través de las exportaciones de petróleo tuvo, también, consecuencias sobre la posición geopolítica de Nigeria y su lugar en la división internacional del trabajo (Forrest, 1986, p. 6).

La Segunda República heredó “un sistema social contradictorio en el que Nigeria se convirtió en *socialista en la estructura pero capitalista en su contenido*” (Ogbeide, 2011, p. 526). Es decir, a pesar de que el Estado era dueño de los principales medios de producción, carecía de la capacidad regulatoria para prevenir la acumulación de capital público en manos de individuos particulares con acceso a las instituciones estatales, que

se valieron de “la ideología capitalista de la propiedad público-privada”, propia de la llamada “economía mixta”, para defender sus intereses de acumulación (Ogbeide, 2011, p. 526)²⁷. La figura de Shagari encarnó a la perfección a toda una clase política obnubilada por el *boom* petrolero. La Constitución revisó la DPA (a la que renombró como *Federation Account*), declaró la propiedad del Gobierno federal de todos los recursos minerales, tanto *onshore* como *offshore*, y redujo el principio de derivación hasta el 5%. El clientelismo se hizo rampante durante este periodo de gobierno civil. Así, “la anárquica economía política en la cual la posición política se puede transformar rápidamente en acumulación personal debido al crecimiento de los impresionantes recursos de la petrolera y una cultura política permisiva” (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 94), en seguida volvió a instalar la desilusión entre la ciudadanía.

Además, en la Constitución de 1979, con el objetivo de responder a “la complejidad de la formación política nigeriana y el carácter federal (i.e. la heterogeneidad de la nación), se incluía el principio de “carácter federal”. Este principio, incluido también en la Constitución de 1999, trata de dar respuesta a la naturaleza plural de la sociedad nigeriana intentando equilibrar la asignación de puestos políticos entre la población. El principio del “carácter federal” se refiere “al deseo distintivo de los pueblos de Nigeria de promover la unidad nacional, fomentar la lealtad nacional y dar a cada ciudadano de Nigeria un sentido de pertenencia a la nación”; y establece que tanto la “composición del gobierno de la federación o cualquiera de sus agencias”, como “cualquiera de los asuntos que le competan” deben reflejar este principio, de tal manera que “se asegure que no habrá predominancia de personas de algún estado, alguna minoría étnica u otros grupos en ese gobierno o sus agencias”²⁸.

A pesar de estas provisiones constitucionales, que tratan de asegurar la igualdad entre los ciudadanos nigerianos, la Constitución de 1979 (y su heredera de 1999) introducía también el llamado principio de “indigenidad”, que concede el derecho a ostentar puestos políticos en función del origen, lo que atenta contra los derechos constitucionalmente protegidos de la población no indígena en el interior de los diversos estados. La “indigenidad” se establece en sistema federal nigeriano, a diferencia de otros modelos

²⁷ Para ampliar el análisis sobre este periodo, consultar: Diamond, L. (1982).

²⁸ Consultar en: www.nigeria-law.org

como el canadiense, en base al origen de los padres y abuelos y no en base al lugar de residencia, es decir, tiene un carácter genealógico, no residencial. La “indigenidad” se identifica con la “nacionalidad”, de ahí que la reducción en el tamaño de los estados haya provocado políticas discriminatorias hacia los considerados no “indígenas” dentro de esas nuevas unidades, como se puede apreciar en el Delta.

El interregno de mandato civil durante la era militar fue el momento cumbre de las movilizaciones para la creación de nuevos estados: entre 1979 y 1983 se llegó a proponer la creación de 57 (Bach, 1989, p. 228). Ogbeide apunta que la legislatura de Shagari se caracterizó por la propagación del “síndrome de las minorías” (Ogbeide, 2011, p. 522). A mediados de 1982 había más de 50 movimientos registrados en la Asamblea Nacional como “Movimientos Estatales”. La Constitución de 1979 sirvió de marco para esas demandas, ya que “implícitamente respaldaba la idea de que la creación de más estados étnicos en la federación promovería la armonía étnica y la estabilidad política al tiempo que equilibraría y aceleraría el desarrollo, aunque sus provisiones en este sentido eran como mínimo contradictorias” (Ogbeide, 2011, p. 526), de ahí que la mayoría de los movimientos étnicos aludiesen a sus derechos constitucionales en sus demandas de autonomía.

Durante esta época se agravaron las fracturas entre las elites y las bases de los movimientos de carácter étnico, de manera particular en el Delta. Durante toda la década de 1970 habían florecido clubes sociales y grupos de presión conformados por “movimientos de microminorías” que realizaron protestas aisladas contra las empresas transnacionales (Nwajiaku, 2005). La movilización de microidentidades se vio alimentada por las políticas guiadas por el Estado nigeriano a través de la creación de áreas de gobierno local. El principio de indigenidad introducido por primera vez en la Constitución de 1979 fomentó estas nuevas identidades, al conceder los derechos a los servicios públicos en función del lugar de nacimiento de los padres o abuelos. Esta movilización de las identidades de carácter étnico también se vio favorecida por la conducta de la industria petrolera, que ofreció “compensaciones a quienes fuesen capaces de demostrar su distintividad” (Nwajiaku, 2005, p. 466).

Shagari fue duramente criticado por malgastar la renta petrolera, destrozar la base productiva de la economía, doblar la deuda externa y acentuar las tensiones sociales. A

inicios de la década de 1980, “Nigeria se había convertido en un clásico estado rentista” (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 101), caracterizado por la concentración de la riqueza en pocas manos, la dependencia exclusiva en las rentas petroleras, la negligencia del sector agrario, el descuido en la generación de empleo y la extraversion de la economía. Todo esto contribuyó al debilitamiento de la economía y de las propias capacidades administrativas del Estado. Además, la situación económica derivó también en el surgimiento de toda una red de contrabando de productos refinados de petróleo, alimentos y otros bienes, beneficiada por la falta de capacidad administrativa del Estado para controlar los flujos en las fronteras. Esto tuvo un impacto muy negativo en la producción local, las rentas del gobierno y las ganancias por exportaciones.

En cuanto a las fórmulas de redistribución de rentas, en 1980 Shagari constituyó la Okigbo Commission, cuya recomendación principal fue que el reparto vertical de las rentas se estableciese del siguiente modo: 55% para el gobierno federal, 30% para los gobiernos estatales, 8% para los locales y el 7% restante para fondos especiales: un 2.5% para el desarrollo de la capital federal, un 2% para resolver problemas especiales de áreas productoras de minerales (particularmente el Delta del Níger), un 1% para atender a problemas ecológicos y el 1.5% restante iría para un fondo de ecualización de ingresos. En el reparto horizontal recomendaba que los criterios fuesen: población (40%), estándar mínimo nacional para la integración nacional (40%), factor de desarrollo social (15%), y esfuerzo de ingresos internos (5%). Siguiendo estas recomendaciones, el gobierno promulgó la *Revenue Allocation Act* N° 1 de 1981, en la que se establece que la *Federation Account* debe ser repartida verticalmente entre los distintos niveles de gobierno del siguiente modo: un 58’5% para el gobierno federal, un 31’5% para los gobiernos estatales y un 10% para los gobiernos locales.

De lo correspondiente a los gobiernos estatales, el 26’5% se repartiría entre todos los estados, mientras el 5% restante se repartiría en base al principio de derivación: dos quintos de ese 5% iría a los estados en proporción directa al valor de los minerales extraídos de su área, y los otros tres quintos irían a un fondo especial administrado por el gobierno federal con el objetivo del desarrollo de las áreas productoras de minerales. El otro 26’5% se repartiría entre los estados siguiendo los criterios de equidad (50%), población (40%) y territorio (10%). En cuanto a lo correspondiente al gobierno federal,

el 55% se dirigiría a las “responsabilidades y deberes del gobierno federal”, el 2’5% al “desarrollo del territorio de la capital federal” y el 1% a “problemas ecológicos”.

Este acta recibió muchas críticas por beneficiar en gran medida al gobierno federal frente a los estatales y locales: “el resultado fue que el gobierno federal podría permitirse gastar valiosos recursos para financiar improductivos proyectos de elefantes blancos mientras los estados y gobiernos locales estarían hambrientos de fondos” (Ikeji, 2011, p. 128). El Acta tampoco fue aceptada y fue declarada nula por la Corte Suprema de Nigeria en 1981 y reemplazada por la *Allocation of Revenue (Federation Account) Act* N° 1 de 1982, que incrementó del 31’5 al 35% el porcentaje asignado a los estados. Eso sí, incluía al Territorio de la Capital Federal como estado y transfería la responsabilidad de reservar el 1% para problemas ecológicos del gobierno federal a los estatales. Además, se redujo el fondo para áreas productoras de minerales del 3% al 1’5, lo que afectó especialmente al Delta. En realidad, el gobierno federal no sufrió ningún perjuicio. En cuanto a la redistribución horizontal entre los estados establecía 4 criterios: mínimas responsabilidades del gobierno (40%), población (40%), factor de desarrollo social/matriculación en escuela primaria (15%) y esfuerzo de ingresos internos (5%).

En este contexto, Shagari lanzó el Cuarto Plan de Desarrollo Nacional (1981-1985), que a pesar de que planteaba medidas de carácter nacionalista, vino a consolidar el escenario de crisis, al revelar la frágil naturaleza de la economía nigeriana. La caída de los precios del petróleo en 1980 de los 40 a los 9 dólares por barril provocó que en 1982 Shagari lanzase la *Economic Stabilization Act*, que aceptaba la necesidad de implementar planes de austeridad, que incluían un recorte en el gasto público de un 40%, y el incremento de los impuestos especiales, las tasas de interés y los precios del petróleo. En 1982 el gobierno de Shagari pidió un préstamo a tres años de 2’3 billones de dólares al FMI para atajar la crisis económica. Dadas las condiciones impuestas, estas negociaciones se alargarían más allá de su mandato, por desacuerdos fundamentales en materia de liberalización comercial, eliminación del subsidio petrolero y devaluación de la naira.

Durante este periodo muchas organizaciones nigerianas empezaron a percibir que la idea de democracia a la que aspiraban precisaba tener en cuenta las condiciones sociales y económicas de la población (Edozie, 2002). Las organizaciones de carácter estatal más activas en esta etapa, el Nigerian Labour Congress (NLC), la organización sindical

paraguas; la National Association of Nigerian Students (NANS) y la Academic Staff Union of Universities (ASUU), trabajaron durante esos primeros años de la década por sus demandas sectoriales en materia laboral y educativa, respectivamente, pero gradualmente ampliaron sus requerimientos a la mejora de las condiciones de vida de la población en general. La *NLC's Workers's Charter of Demands* (1980) y la *NANS's Charter of Demands* (1982), promulgadas por dos de estas organizaciones, contribuyeron a difundir entre la sociedad la idea de que las demandas económicas y sociales sólo se podrían lograr si las fronteras de la democracia se ampliaban.

2.4.2. Buhari y la “guerra contra la indisciplina”

El 6 de agosto de 1983 se celebraron elecciones presidenciales en Nigeria, a las que concurrieron 6 partidos, el Great Nigeria People's Party (GNPP), el Nigerian People's Party (NPP), el National Party of Nigeria (NPN), el People's Redemption Party (PRP), el Unity Party of Nigeria (UPN) y el Nigeria Advance Party. Los resultados dieron la victoria al régimen de Shagari, que obtuvo el 47'5% de los votos, entre denuncias por fraude electoral. Poco después de su promulgación, un nuevo golpe de Estado en diciembre de 1983 alzaba al poder a Muhammadu Buhari, que tendría como mano derecha a Tunde Idiagbon. Durante el mandato de Buhari-Idiagbon (1983-1985) las principales políticas del gobierno se dirigieron, sobre el papel, a terminar con las prácticas neopatrimoniales, relanzar el sector agrícola, colapsado durante el *boom* petrolero, y restablecer la confianza internacional en la economía nigeriana, para lo que su régimen priorizó el pago de los préstamos internacionales a corto plazo.

Durante los primeros meses de su gobierno, Buhari emprendió una serie de medidas de austeridad que lo hicieron impopular entre la sociedad: reducción del gasto público, eliminación de subsidios en salud y educación, la creación de tasas escolares y sanitarias y la congelación de salarios, entre otras. Todas estas medidas se llevaron a cabo en el marco de las negociaciones con el FMI, que continuaron en un punto muerto debido a que Buhari se negaba a devaluar la naira a un nivel aceptable para la institución. Aún así, el militar continuó con las medidas de austeridad impuestas por Shagari y amplió las medidas liberalizadoras al someter a licencias todas las importaciones, con la convicción de que un control de las importaciones junto con un contundente abastecimiento local de materias primas, sería la condición necesaria para relanzar el sector manufacturero en el

país. El régimen se concentró en lograr la estabilidad fiscal a corto plazo, pero las condiciones económicas y financieras seguían empeorando, por lo que, bajo una filosofía nacionalista, Buhari emprendió una “guerra contra la indisciplina”, cuyo objetivo era restaurar la confianza internacional en la economía nigeriana.

Sus medidas tuvieron algunos efectos positivos a inicios de 1985: la inflación se redujo, la balanza de pagos se estabilizó y aumentó el PIB. No obstante, fueron logros puntuales que no contribuyeron a lograr un crecimiento económico sostenido. Para tratar de paliar los impactos negativos de estas medidas, el régimen aumentó el empleo en el sector público, lo que tuvo resultados inesperados, al aumentar la migración a las ciudades. El resultado de este éxodo en búsqueda de nuevas oportunidades fue una concentración de desempleados en las zonas urbanas. En materia de redistribución de rentas, Buhari promulgó la *Allocation of Revenue (Federation Account) Amendment Decree* N° 36 de 1984. Esta nueva acta no introducía modificaciones sustantivas: 55% de la *Federation Account* para el gobierno federal, 10% para los locales. Mantenía el 1’5% para el desarrollo de áreas productoras de minerales y bajaba lo correspondiente a los estados al 32’5%, un 2% de lo cual iría directamente a los estados productores de petróleo en proporción directa al valor de los minerales extraídos ahí y mantenía la base para el reparto horizontal entre los estados. En el Delta, la reducción del principio de derivación al 1’5% generaría una gran oposición entre las “minorías petroleras”, ya que esto fue interpretado como una traición al apoyo que habían brindado al bando federal durante la guerra:

Dado que la mayor parte del petróleo es una contribución de los estados de las minorías étnicas del Medio Oeste y Sudeste, el abandono de la derivación fue interpretado como una maniobra traicionera para negar a esos estados el beneficio completo de su contribución al erario federal. En realidad, se trata más de una lucha intra-clase sobre qué facción de la burguesía regionalista (ahora rota a lo largo de las fronteras estatales) maximizaría los beneficios de la renta petrolera (Obi, 2001a, p. 30).

En el plano federal, las políticas económicas de Buhari recibieron una fuerte oposición por parte de amplios sectores de la población. Tras el golpe, organizaciones como el NLC, NANS y ASUU, se articularon para dar respuesta al programa “Guerra contra la indisciplina” por su fuerte componente de tipo moral, ya que el objetivo último de la estrategia era conseguir que al final los nigerianos “hubiesen desarrollado un sentido de ética del trabajo, patriotismo, nacionalismo, anticorrupción, paciencia...” (Falola &

Heaton, 2008, p. 214). Las movilizaciones a favor de la apertura de espacios políticos se sucedieron y encontraron una respuesta represiva por parte del régimen; de hecho: “la guerra contra la indisciplina se convirtió en una guerra en contra de la fuerza de trabajo organizada y otros segmentos de la sociedad como los estudiantes, pequeños comerciantes, indigentes urbanos y *okupas*” (Olukoshi & Abdulraheem, 1985, pp. 97 - 98). Durante esta etapa muchas organizaciones profesionales y laborales fueron prohibidas, sus líderes detenidos, la prensa censurada y las protestas duramente reprimidas. Aún así, existió cierto espacio para el activismo: la NANS, por ejemplo, fue muy activa en sus protestas contra la reducción de los subsidios a los estudiantes y el NLC organizó numerosas huelgas en protesta por la situación laboral.

2.4.3. Babangida y el Plan de Ajuste Estructural

En este contexto de crisis económica e institucional, el 27 de agosto del año 1985 se produjo una revolución de palacio y el general Ibrahim Babangida subió al poder anunciando que su régimen guiaría una transición política a la democracia lenta y compleja. Al inicio de su mandato, el autoproclamado presidente Babangida emprendió algunas medidas anticorrupción y una serie de políticas tendentes a contrarrestar los efectos del descenso de las rentas petroleras debido a la superabundancia internacional de los años previos. Además, tratando de recuperar la confianza de los nigerianos en el estamento militar a través de una estrategia que pretendía denotar apertura y respeto a los derechos humanos, legalizó muchas organizaciones prohibidas por Buhari.

Sin embargo, al finalizar el año, el Estado militar nigeriano, caracterizado históricamente por una cierta apertura, se cerró. Las dos principales políticas de Babangida, el Programa de Transición a la Democracia y el Plan de Ajuste Estructural, pronto empezaron a desgastar su imagen. En 1986 la economía nigeriana experimentó una grave crisis. Las altas tasas de desempleo, unidas a la sobrevaluación de la naira, la crisis en la balanza de pagos, una creciente deuda externa y el colapso de los precios internacionales del petróleo por un pico de superabundancia mundial, llevaron a Babangida a adoptar el PAE que se venía negociando con el BM y el FMI desde el mandato de Shagari. El plan estaba encaminado, en principio, a reducir la dependencia de la economía en el petróleo y en las importaciones de otros productos, para alcanzar un objetivo último: la estabilidad en la balanza de pagos.

En julio de 1986 Nigeria adoptó un PAE integral que descansaba en el aliento al sector privado y posicionaba a las fuerzas del mercado como las salvadoras de la economía nacional. Los objetivos del plan eran, en primer lugar, la reestructuración y diversificación de la base productiva de la economía, para reducir la dependencia en el sector petrolero y las importaciones; asegurar la viabilidad de la balanza fiscal y de pagos; promover el crecimiento económico no inflacionario y mejorar la eficiencia del sector público y aprovechar el potencial del sector privado, que se convertiría en el motor para el crecimiento de la economía a través de la privatización y comercialización de empresas estatales.

Siguiendo estas recomendaciones, en materia de liberalización comercial Babangida empezó a retirar paulatinamente las licencias de importación, lo que provocó una gran inquietud en el sector manufacturero, que temía que se produjese un *dumping* de productos extranjeros en el mercado nigeriano. Babangida fue, además, un defensor tanto de la privatización como de la comercialización de empresas. El 5 de julio de 1987 se promulgó el Decreto 25 sobre Privatización y Comercialización, una medida que supuso que a partir de 1989, el cien por cien de las compañías manufactureras podían ser de capital extranjero, frente al 40% establecido anteriormente. Además, amplió la posibilidad de invertir en áreas antes exclusivas del capital local, como el comercio, los servicios y las manufacturas a pequeña escala.

La eliminación del llamado “subsidio a los combustibles” fue una de las medidas más controvertidas. Babangida consideraba que su eliminación contribuiría a equilibrar el presupuesto. Además, defendía que así se fomentaría un uso eficiente de los recursos y se acabaría con el contrabando de petróleo. El presidente prometió que emplearía los fondos que se obtuviesen gracias a la medida en el desarrollo de un sistema de transporte de masas, la creación de empleo y la mejora de la balanza fiscal. Este argumento no convenció a la gran mayoría de la población nigeriana y generó una fuerte oposición²⁹.

²⁹ En realidad, como apunta Obi, “mientras está claro que el Estado nigeriano no está subsidiando los productos petroleros, lo que se llama erróneamente subsidio es el coste de oportunidad de no exportar todo el petróleo producido en Nigeria. De este modo, el llamado *appropriate pricing* no es más que la tasa de consumo impuesta sobre los productos petroleros” (2011, p. 44). Desde entonces se han eliminado todos los llamados “subsidios” al precio del petróleo para reducir la brecha existente entre los precios internacionales y domésticos de los productos refinados de petróleo, lo que ha supuesto un aumento de los precios, no sólo del petróleo sino de los productos y servicios locales (Obi, 2010a, p. 449).

En su discurso presupuestario de 1986, Babangida aseguró que la devaluación de la naira había abaratado los precios del petróleo, lo que había derivado en un aumento del contrabando hacia otros países de África Occidental, por lo que advirtió sobre la necesidad de incrementar el precio de los productos petroleros en un 80%. En noviembre y diciembre el gobierno lanzó una campaña para promover esta subida, lo que desató la indignación popular. Hacia el final de 1987, el régimen manifestó su intención de elevar el precio interno del petróleo sobre la base de que el 80% de eliminación de los subsidios llevado a cabo en el año 1986 había sido erosionado por la fuerte devaluación de la naira en el mercado de divisas. La NNPC alegaba que los subsidios eran insostenibles y que su eliminación serviría para financiar proyectos de desarrollo y contrarrestar así los efectos del ajuste.

Las reformas políticas y económicas emprendidas durante el régimen militar de Babangida, unidas al hecho de que las organizaciones sociales nigerianas empezaron a recibir apoyo internacional siguiendo una tendencia generalizada en la Posguerra Fría, se convirtieron en “oportunidades políticas contingentes que facilitaron un periodo de discordias entre el Estado y la sociedad que dio lugar a uno de los movimientos de oposición más fuertes de la Nigeria postcolonial” (Edozie, 2002, p. 30). En el Delta en particular, las políticas de Babangida también generaron una gran contestación, como veremos en el próximo capítulo.

Conclusiones

En este capítulo nos hemos acercado al Delta del Níger atendiendo a las trayectorias históricas de la región a través de un análisis del proceso de construcción del Estado nigeriano desde una visión que ha tenido en cuenta particularmente la dimensión transnacional de este proceso. Como hemos visto, en el Delta se han dado distintas conexiones transnacionales desde mediados del siglo XV, unas conexiones que han tenido efectos en los distintos órdenes desplegados en la región. Primero, la integración de esta en el comercio triangular de esclavos puesto en práctica en el marco de la trata atlántica contribuyó a alterar las relaciones sociales locales. Abolida la esclavitud por parte de los imperios europeos, el comercio de la palma aceitera extraída en el Bajo Níger por el imperio británico supuso también diversos impactos sociales, políticos y económicos y

culturales de trascendencia. La propia integración del Delta en la federación nigeriana desde 1914 bajo mandato colonial tuvo también efectos de envergadura.

La inauguración de las exportaciones de petróleo dos años antes de la obtención de la independencia de Nigeria supuso del mismo modo algunas rupturas y continuidades. Tras el descubrimiento de la riqueza petrolera existente en la región, las complejas relaciones entre lo local y lo global sufrieron transformaciones notables. Las “formaciones transfronterizas” surgidas en torno al petróleo alteraron los ordenes sociales, políticos y económicos, como hemos visto, aunque las diversas reivindicaciones sociales surgidas al calor de los cambios sufridos por la integración de la región en los procesos económicos transnacionales generados por las actividades de la industria petrolera deben situarse, en una línea de continuidad. Desde la década de 1960 las poblaciones locales del Delta se han articulado con las dinámicas de la industria petrolera nigeriana. Desde el nacimiento del “complejo petrolero”, una multiplicidad de actores compite por hacerse con una parte de las rentas derivadas de la explotación de los recursos petroleros, lo que ha generado dinámicas de conflicto en la región entre las elites políticas de carácter federal y local, las empresas transnacionales, la sociedad nigeriana en general y las poblaciones de la región productora en particular.

Hemos explorado en este capítulo las distintas fases por las que ha pasado la industria petrolera nigeriana y hemos visto cómo el marco legal y fiscal ha sido tradicionalmente beneficioso tanto para el Estado central como para las empresas transnacionales. Como hemos comprobado, para entender el conflicto del Delta es fundamental comprender el papel que ha jugado la región en el proceso de construcción del Estado nigeriano, en particular en lo que se refiere a los procesos de acomodación de los distintos grupos étnicos al marco federal y la redistribución de las rentas derivadas de la extracción de petróleo entre estos. Como hemos visto, durante los últimos años del periodo colonial y los primeros años tras la independencia, las regiones que componían Nigeria gozaron de cierto grado de autonomía.

En el momento de alcanzar la independencia, a pesar de que tanto en Nigeria como en el extranjero se manifestaban altas esperanzas de que el país iba a ser posiblemente el bastión de la democracia de corte capitalista en África, el Estado nigeriano emergió de la descolonización como un ente carente de hegemonía e incapaz de asegurar la cobertura

de las necesidades básicas de la mayor parte de la población. La Primera República heredó las contradicciones existentes entre las dinámicas precoloniales y las impuestas por el modelo occidental y consolidó un marco político y socioeconómico que contribuyó a ahondarlas.

Tras la obtención de la independencia se operó en el país un gran cambio socioeconómico articulado en torno a estructuras políticas, instituciones y configuraciones de clase y poder heredadas de la colonización. La economía nigeriana se veía caracterizada por el rol dominante del capital extranjero: las subvenciones al capital foráneo eran innumerables, mientras el capital privado nigeriano carecía de apoyo estatal, lo que supuso el comienzo de la “periferialización” de Nigeria en el capitalismo mundial, un fenómeno que debe ser enmarcado en el contexto de las políticas de sustitución de importaciones introducidas en la agenda internacional del desarrollo en África por las Instituciones Financieras Internacionales bajo el modelo aplicado anteriormente en Latinoamérica.

Entre la década de 1960 y 1970 el proceso industrializador fue estimulado en Nigeria a través de este modelo, que entendía que el crecimiento económico vendría de la mano de la inversión de capital extranjero, con el objetivo de convertir un sector predominantemente primario en un sector de exportación diversificado. En el marco de estas políticas, el gobierno de Azikiwe lanzó el Primer Plan de Desarrollo Nacional (1962-1968), que fue prorrogado hasta 1970 debido al estallido de la guerra de Biafra. A pesar de que se operaron ciertos cambios debido al plan, en realidad este contribuyó a ahondar las desigualdades, en parte porque las regiones siguieron operando como si esta planificación de ámbito nacional no existiese. Además, en los primeros años tras la independencia, los nigerianos vieron enriquecerse a la clase política mientras se disparaba el desempleo, el sector agrícola se estancaba y se extendían los conflictos intercomunitarios, en un marco institucional ineficiente. Se extendió así la idea de que la política ofrecía el acceso a nuevas posiciones sociales y oportunidades económicas, lo que derivó en la configuración de una amplia estructura de redes clientelares.

Así las cosas, además del desastre humanitario que supuso, la guerra de Biafra impactó de un modo determinante en las políticas estatales a partir de la década de 1970, cuando debido a los beneficios generados por la industria petrolera, el gobierno central llevó a cabo diversas políticas fiscales y administrativas para transformar el Estado en un ente

centralista. En paralelo a este proceso de centralización fiscal y la nacionalización progresiva de los recursos petroleros, los sucesivos gobiernos irían fragmentando el territorio en unidades estatales que, no obstante, seguirían teniendo una alta dependencia financiera del centro. Esta fragmentación del territorio, unida a la evolución de las fórmulas de redistribución de las rentas petroleras, ha tenido diversos impactos en las dinámicas estatales desde la década de 1970, indisociables de otras dinámicas de carácter transnacional. En el Delta en particular, se agravaron las fracturas en el seno de los movimientos de carácter étnico, lo que dio lugar a la emergencia de las “minorías petroleras”, un fenómeno alimentado tanto por las políticas estatales a través de la creación de áreas de gobierno local y disposiciones constitucionales como el “principio de indigenidad”, como por la conducta de las empresas transnacionales.

Desde el gobierno civil de Shehu Shagari, la economía nigeriana comenzó a experimentar una fuerte crisis, que tuvo efectos particulares en el Delta. El régimen militar de Buhari, a pesar de sus políticas anticorrupción, no logró mejorar la situación de la economía y dadas sus políticas represivas en contra de la población, contribuyó al germinar de nuevos lenguajes en oposición al autoritarismo estatal. Ya durante el régimen militar de Ibrahim Babangida, la puesta en marcha del Plan de Ajuste Estructural en 1986 provocó transformaciones de gran relevancia en las relaciones entre los distintos actores del “complejo petrolero” nigeriano. Como comprobaremos en el próximo capítulo, las políticas de ajuste contribuyeron también a la emergencia de nuevos repertorios de contestación en toda Nigeria, y el Delta en particular.

CAPÍTULO 3

Dinámicas y lenguajes de contestación en torno al petróleo. El caso del MOSOP (1986-1999)

Introducción. Petróleo y contestación en el Delta del Níger

La crisis económica que sufrió Nigeria a inicios de la década de 1980 debido a la caída mundial de los precios del petróleo tuvo efectos en los órdenes sociales desplegados en el Delta. Durante la segunda etapa de la era militar proliferaron multitud de grupos locales articulados en torno al concepto de “minorías petroleras”, como avanzamos en el capítulo precedente. A partir de 1986, los repertorios de contestación dirigidos contra la industria petrolera se vieron enmarcados en un contexto más amplio de movilizaciones contra la aplicación del PAE y contra el autoritarismo ejercido por los sucesivos regímenes militares en el plano federal. Las contradicciones generadas por el ajuste y el autoritarismo se convirtieron en oportunidades políticas contingentes para la emergencia de las políticas identitarias de carácter étnico, que se vieron facilitadas también por los cambios normativos sufridos en la esfera internacional.

Una vez finalizada la Guerra Fría, el nacionalismo encontraría legitimidad a nivel global gracias al apoyo institucional que recibirían los movimientos secesionistas de las antiguas esferas del bloque soviético, lo que facilitó que se legitimasen los derechos de las minorías y el derecho de autodeterminación. En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que el Estado nigeriano funciona como mediador entre la industria petrolera transnacional y las poblaciones del Delta, “la minoría petrolera como identidad se convertiría así en un contra-reclamo frente a aquellos de los grupos hegemónicos que dominan el Estado” (Obi, 2001a, p. 11). Tras el fin de la Guerra Fría el régimen internacional de seguridad también sufriría transformaciones para incluir cuestiones de derechos humanos y medioambiente (Miller, 1995, pp. 1–13). En distintos lugares de Europa y Norteamérica comenzaron a surgir organizaciones y movimientos sociales que demandaban la promoción de la agenda de los derechos en distintos lugares de Asia, América Latina y África, que se convirtieron en aliados de las minorías del Delta. Esto originó un efecto multiplicador, al movilizar a la opinión pública a su favor, lo que les dio seguridad a los movimientos locales. El discurso de la etnicidad se articularía así con otra serie de lenguajes de carácter transnacional.

Mientras se daban estas conexiones, esos lenguajes estaban siendo traducidos a la esfera estatal por una serie de actores e instituciones. La coyuntura política durante la segunda mitad de la década de 1970 había facilitado la emergencia de distintos grupos sociales, no sólo en el Delta sino en toda Nigeria, que demandaban de algún modo su incorporación al proyecto de construcción estatal. La bonanza petrolera durante el régimen militar de Obasanjo había permitido que se ampliaran las oportunidades educativas para la población, lo que derivó en el florecimiento de múltiples organizaciones sociales de carácter profesional muy ligadas a lo local. Así las cosas, la década de 1980 supuso la inauguración de la etapa dorada del activismo en Nigeria, algo favorecido por la crisis económica que siguió a aquella bonanza. La sociedad reaccionó de diversas maneras ante los impactos sociales generados por la situación económica tras la crisis mundial del mercado de petróleo de 1981. El papel de los sindicatos fue fundamental a la hora de plantar cara a los impactos de un modelo económico sometido a los vaivenes de la industria petrolera. En concreto “... los trabajadores del sector petrolero y sus grupos marcaron el camino para forzar a los diseñadores de políticas a canalizar algunas (aunque minúsculas) de las rentas petroleras a los ciudadanos y áreas más pobres de Nigeria, como la región del Delta” (Bradley, 2005, p. 62).

Más tarde, la represión emprendida por el régimen de Buhari contra la población facilitó que organizaciones y movimientos sociales articularan sus demandas en un lenguaje que estaba ganando legitimidad internacional desde mediados de la década de 1970 alentado por el papel de algunas ONGs internacionales, y que se tradujo en la creación de distintos instrumentos normativos al respecto. El concepto de derechos humanos, reservado históricamente al vocabulario de juristas, abogados y académicos, comenzaba a popularizarse en toda Nigeria. El régimen de Babangida, consciente de que la creciente preocupación internacional en torno a esta cuestión ganaba adeptos entre distintos colectivos locales adoptó “la postura de derechos humanos”, bajo la cual derogó decretos, liberó a periodistas y políticos, permitió las actividades de organizaciones profesionales y de estudiantes proscritas por Buhari y promovió la realización de debates abiertos a la participación popular para mejorar la economía y la política.

Babangida también se tomó el título de “presidente”, frente al de jefe de Estado empleado en los anteriores regímenes, valiéndose de la retórica de la democracia para ganar

legitimidad (Falola & Heaton, 2008, p. 216) y prometió que llevaría a cabo la 3ª transición a la democracia en el país, que daría nacimiento a la Tercera República. Para tal fin, creó un Political Bureau compuesto por miembros de la “sociedad civil”, del que aceptó inicialmente el 90% de las recomendaciones. En el año 1989 lanzó una nueva Constitución e instauró el bipartidismo. No obstante, el programa de transición sufrió ocho modificaciones y terminó calamitosamente; las medidas económicas, políticas y policiales que emprendió entre 1991 y 1993 demostraron que no tenía ninguna intención de acometerlo.

En 1991 Babangida había perdido credibilidad entre la población, tanto que su programa sería conocido desde entonces como la “transición sin fin” (Diamond et al., 1997). No obstante, la retórica de la democracia y el respeto de los derechos humanos ya estaba difundida entre distintas organizaciones sociales, lo que facilitó que entre los años 1986 y 1993 se articulasen diversos movimientos que se alzaron por dos grandes demandas. Desde mediados de la década de 1980 estos movimientos se centraron; por un lado, en la necesidad de la realización de una reforma económica autocentrada con participación de las distintas fuerzas sociales y por otro, en la democratización del Estado, un proceso que comprendería el fin de la represión, el respeto a la libertad de expresión, de asociación y de cátedra; el derecho a la participación política, la rendición de cuentas por parte de las instituciones, el imperio de la ley y el fin del gobierno arbitrario (Edozie, 2002). Ya a inicios de la década de 1990, las contradicciones surgidas de un contexto internacional marcado por la consolidación del lenguaje de la democracia y un contexto estatal marcado por la represión ejercida por el régimen militar de Babangida y su sucesor Sani Abacha (1994-1998), llevaron a los movimientos sociales nigerianos a incidir sobre la necesidad de proteger los derechos civiles y humanos de la población.

Abacha y Babangida fomentaron el interés en la creación de nuevos estados “como parte de un programa más amplio de supervivencia del régimen” (Kraxberger, 2004, p. 429). Con la justificación de dar respuesta a las demandas de las minorías, en el año 1987 Babangida creó 2 estados más en el Delta (surgidos de la escisión de Cross River: Akwa Ibon y Cross River) y otros dos en el Norte y en 1991 creó 9 estados más, cuatro de ellos en el Delta: Abia e Imo, Delta y Edo. De este modo, la federación contaría a partir de entonces con 30 estados. En el año 1996, Abacha llevó a cabo la última parcelación del territorio federal hasta la fecha. Creó 6 nuevos estados, tres de ellos en el Delta, dos

surgidos de la escisión de Rivers (Bayelsa y Rivers) y otro de la escisión de Ondo en dos. La justificación de esta medida por parte de ambos gobiernos fue la necesidad de dar respuesta a las reclamaciones de las minorías, pero la verdadera motivación era el apaciguamiento de las mismas y el uso de tácticas de divide y vencerás entre los nuevos estados (Kraxberger, 2004). De hecho, las organizaciones de las minorías petroleras se resistieron al ver cómo Bendel (1991) y Rivers (1996) eran divididas en dos, lo que generó nuevas minorías étnicas y nuevos conflictos comunales.

Como sostienen Falola & Heaton (2008), el crecimiento del activismo en esta época tuvo dos efectos. Por un lado contribuyó a que se desatase una estrategia represiva muy fuerte de las autoridades al tiempo que forzaba a los militares a realizar algunas concesiones. Por otro lado, exacerbó las tensiones sociales y derivó en violencia, tanto en el Norte, donde desde entonces se multiplicaron los conflictos con componente religioso alentados por los impactos de la crisis económica (Falola & Heaton, 2008); como en el Sur, específicamente en la región del Delta, donde al calor de los agravios generados por las actividades de la industria petrolera comenzaron a proliferar los grupos articulados en torno al discurso de la etnicidad.

3.1. Petróleo, ajuste estructural y el lenguaje de la etnicidad

Entre 1986 y 1993, el de Nigeria supuso un caso paradigmático del “proceso dialéctico en el que fuerzas sociales, políticas y económicas en disputa definieron la implementación del PAE” (Olufunke, 1999, p. 1). En los debates públicos promovidos por Babangida al inicio de su mandato se proponían tres opciones: continuar con las medidas de austeridad que se venían aplicando desde el gobierno de Shagari, pero sin aplicar un plan de ajuste estructural; seguir fielmente las directrices del FMI en la aplicación de estas políticas y aceptar un nuevo préstamo de la institución, o bien rechazar la intervención del Fondo y llevar a cabo un plan de ajuste propio. A pesar de los debates iniciales, como hemos visto, en julio de 1986 Babangida adoptó un plan integral de ajuste estructural que seguía en gran medida las directrices de las IFIs, lo que provocó que en los centros urbanos se desarrollasen protestas masivas.

Como apuntamos en el capítulo 2, la eliminación del llamado “subsidio” a los combustibles fue una de las medidas que recibió mayor contestación social y fue el

principal campo de tensión entre las IFIs, el gobierno y colectivos sociales como el NLC y el movimiento estudiantil entre 1986 y 1989, e l más activo en su oposición al PAE. Aunque inicialmente sus demandas eran fundamentalmente sectoriales y encaminadas a revertir las medidas implementadas desde el gobierno de Shagari en materia educativa (cierre de muchas escuelas de primaria y secundaria, despidos masivos, reducción de subvenciones, introducción de nuevas tasas escolares...), la NANS llegó a plantear cuestiones más amplias al solicitar la nacionalización de las compañías extranjeras. A pesar de las protestas, el BM y el FMI, que no estaban nada satisfechos con la implementación del plan, siguieron presionando al gobierno para que respetase los esquemas iniciales. Tan fuertes fueron las presiones de las IFIs que en agosto de 1993 el PAE había sido puesto en marcha con éxito en Nigeria.

En el plano federal, a partir de 1989 las consecuencias de las reformas sobre el nivel de vida de las clases medias y trabajadoras eran importantes. Babangida emprendió algunas medidas para paliar los efectos negativos de estas políticas sobre la vida de los nigerianos, respondiendo así a los nuevos paradigmas planteados desde algunas agencias de Naciones Unidas que desde mediados de la década de 1980 apelaban a la aplicación de políticas de “ajuste con un rostro humano” (UNICEF, 1987). No obstante, el PAE agravó el desempleo y la inflación, que pasó del 5’4% en 1986 al 40’9% en 1989 (Anyanwu, 1992, p. 7). Esta inflación crónica tuvo un marcado efecto en la redistribución de los ingresos, al favorecer a empresarios y accionistas en detrimento de los funcionarios y los pensionistas. Los resultados de la devaluación de la naira fueron inesperados e impactaron muy negativamente en el nivel de vida de la mayoría: se disparó el desempleo y los salarios cayeron estrepitosamente, lo que derivó en el crecimiento del sector informal. Además, no se logró el deseado incremento de la IED (Inversión Extranjera Directa) ni una tasa de cambio estable. Por otro lado, la especulación de capitales se generalizó, muchas pequeñas industrias se declararon en bancarrota y tuvieron que cerrar. Incluso el sector financiero, que debía haber sido el principal beneficiario del PAE, vio reducidos sus beneficios. Obviamente, la inflación tuvo efectos sobre la balanza de pagos, al estimular las importaciones frente a las exportaciones.

Además, las políticas de ajuste aplicadas entre 1986 y 1993 reforzaron la asociación entre el capital estatal y transnacional, algo que se concretó de manera particular en el sector petrolero, ya que el Estado siguió teniendo un rol eminentemente “distributivo y

securitario”, mientras el control del petróleo se aseguraba en manos del capital foráneo (Obi, 2001a, p. 45). Lo que quedó claro tras su puesta en marcha es que “el PAE nigeriano está(ba) encaminado a desalentar a los acumuladores primitivos y a motivar a los acumuladores capitalistas en la economía” (Anyanwu, 1992, p. 6) . Esta constatación derivó en un debate interno en el seno de la burguesía: por un lado, la burguesía aliada del capital extranjero y por otro, la nacionalista, cuya intención era construir una base social propia, competitiva con el capital foráneo. Uno de los efectos *boomerang* de su puesta en marcha es que el PAE contribuyó a que se reconfigurasen los alineamientos tradicionales entre los militares y la mayor parte de la sociedad. El ajuste provocó un empobrecimiento de la clase media, que se empezó a sentir especialmente “decepcionada por el Estado” (Edozie, 2002, p. 33), un Estado que en su papel de mediador, durante la aplicación de los PAEs:

...siguió siendo partidario, favoreciendo a individuos y facciones particulares de las elites localizadas en ciertas regiones en términos de distribución del poder, recursos y generosidad. En vista de la reducción de las rentas petroleras, no solo la mediación se volvió más parcial y represiva, sino que condujo a la marginalización de los miembros más débiles de la coalición étnica y la exclusión y explotación intensificada de los más débiles (Obi, 2001a, p. 48).

Las reformas económicas de corte neoliberal generaron nuevas desigualdades entre individuos, grupos y regiones y agudizaron las luchas por el acceso a los recursos al marcar una línea clara entre los perdedores y los ganadores en este contexto de ajuste. Eso provocó que diversos actores políticos y sociales tuviesen que buscar nuevas bases materiales para su reproducción (Obi, 2001a, p. 46), ya que la ciudadanía comenzó a ser relacionada con la individual integración en el mercado (Álvarez et al., 1998). Muchas personas reaccionaron a los efectos del PAE uniéndose a organizaciones religiosas, lo que fomentó los conflictos entre cristianos y musulmanes, particularmente en el norte de Nigeria, donde se hicieron frecuentes los disturbios entre minorías musulmanas y cristianas (Falola & Heaton, 2008, p. 222). Mientras, en el Delta las políticas de identidad étnica cobraban una nueva dimensión frente a las contradicciones emanadas de la aplicación del PAE. El ajuste estructural tuvo impactos específicos sobre el medioambiente local, ya que la aplicación de medidas de austeridad provocó que se hiciese más énfasis en la exportación de recursos naturales para atender a las deudas contraídas con las IFIs (Mittelman, 1998, p. 851). Además, según Nwajiaku (2005), “con la retirada del Estado nigeriano de su papel en la provisión de bienestar social en la raíz

de la crisis económica y la introducción del PAE, las empresas petroleras han reemplazado y superado el papel del Estado en muchas comunidades de acogida” (p. 492).

El ajuste también agravó las diferencias de clase en la región, lo que provocó nuevas fracturas entre las “minorías petroleras” y sus elites, así como el desarrollo de nuevas alianzas, elásticas y cambiantes, en función del petróleo, ya que estos movimientos no eran homogéneos ni estáticos. Estas fracturas provocaron que se articulasen nuevos lenguajes y se construyeron nuevas identidades no necesariamente de etnicidades en competencia por el acceso al poder. Así, “los movimientos de identidad étnica comenzaron a reflejar la ampliación de las escisiones inter e intra étnicas, la redefinición de un ‘yo’ colectivo a través de la lucha por el espacio político y los recursos” (Obi, 2001a, p. 6). El petróleo fragmentó y debilitó las identidades de tipo comunitario (clan, etnia, pueblo) en los lugares donde la explotación no coincidía con esas identidades, lo que dio lugar al florecimiento de nuevas microidentidades (Nwajiaku, 2005, p. 489). Como resume Obi (2001a):

... la crisis económica, las luchas democráticas en contra del autoritarismo militar, así como los cambios relacionados con la globalización, proporcionaron un terreno fértil para que las minorías petroleras contestasen el control que las facciones de la elite de los grupos étnicos mayoritarios (dominantes) tenían sobre el poder y el acceso a los rápidamente disminuidos recursos (p. 7).

En cuanto a la redistribución de los recursos, en 1988 Babangida estableció un Comité Permanente, la National Revenue Mobilization and Fiscal Commission (NRMAFC) que revisaba la fórmula de reparto vertical del siguiente modo: un 47% para el gobierno federal, un 30% para los estados, un 15% para los gobiernos locales y el 8% para fondos especiales. El gobierno aprobó esta medida, pero añadió un 10% para masa de tierra y terreno. En cuanto al reparto horizontal, la NRMAFC establecía los siguientes criterios: igualdad de estados (40%), población (30%), esfuerzo de ingresos internos (20%) y factor de desarrollo social (10%), que el gobierno modificó así: 50% federal, 30% estados, 15% gobiernos locales y 5% para fondos especiales. A través del Decreto N° 49 de 1989, que sigue vigente en la Constitución de 1999, estas disposiciones se consolidaron, pero los porcentajes siguieron siendo contestados y renegociados.

Por otro lado, las implicaciones políticas de la austeridad fueron marcadas, teniendo en cuenta que estas requieren de la existencia de un “Estado burocrático-autoritario”

(Sheahan, 1980), la inseguridad, miseria, tensiones y conflictos emanados de la aplicación del ajuste sumergieron al Estado nigeriano en una crisis de legitimidad, lo que derivó en que desarrollase una estrategia de autoritarismo que se ce bó especialmente con los movimientos de las minorías del Delta. En 1987, el régimen lanzó el *Civil Disturbances (Special Tribunal) Decree*, que le daba el poder de constituir tribunales especiales para juzgar casos de disturbios en los que la última palabra la tenía la junta militar. La prohibición de todos los movimientos de carácter regional y micronacionalista sirvió además, para “deslegitimar y despolitizar los movimientos nacionalistas de los productores de petróleo” (Obi, 2001a, p. 61). No obstante, como sostiene Lubeck (1990): “irónicamente, el cambio hacia un autoritarismo militar durante la década de 1990, tan necesario para implementar el programa de ajuste estructural (PAE) neoliberal diseñado por el Banco Mundial, movilizó y fortaleció a las fuerzas democráticas en la sociedad civil nigeriana hasta un grado antes inimaginable” (p. 4). En este contexto surgió un movimiento que se convertiría en un icono de la contestación contra la explotación transnacional de los recursos naturales.

3.1.1. El MOSOP y la cuestión ogoni

El MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People) ha sido objeto de numerosos análisis por su capacidad para trascender las fronteras nigerianas y generar una amplia red de solidaridad de carácter transnacional (Osaghae, 1995b; Olukoshi, 1995; Rowell, 1996; Saro-Wiwa, 1992, 1993, 1995; Ibeanu, 1997, 1999; Obi, 1997). Este movimiento social paraguas compuesto de varias organizaciones de base ogoni³⁰, fue creado en 1990 para combatir los impactos de la industria petrolera en su territorio. Bajo el liderazgo del periodista y escritor Ken Saro Wiwa, el MOSOP, que dice representar a una “comunidad” compuesta por unas 500.000 personas de la etnia ogoni, emprendió a inicios de la década una campaña de denuncia contra la devastación medioambiental y las violaciones de los derechos humanos producidas en el marco de la extracción de petróleo por parte de la compañía Shell en sus tierras, localizadas en el estado de Rivers. En su repertorio de contestación el MOSOP hizo uso de múltiples tácticas para difundir su causa: uso de

³⁰ Las principales son: Federation of Women’s Associations (FOWA), National Youth Council of Ogoni People (NYCOP), Council of Ogoni Churches (COC), Council of Ogoni Professionals (COP), Council of Ogoni Traditional Rulers Association (COTRA), National Union of Ogoni Students (NUOS), Ogoni Students’ Union (OSU), Ogoni Teachers Union (OTU) y Ogoni Central Union (OCU).

internet, publicación de documentos, elaboración de documentales, redacción de cartas y actividades de *lobby* con grupos de presión, políticos locales y gobiernos extranjeros.

A nivel estatal, la causa ogoni provocó una gran movilización en toda Nigeria y forzó un debate sobre la cuestión nacional. Desde el punto de vista internacional, gracias a su estrategia de “cambio de escala” (McAdam et al., 2001, p. 331), el MOSOP logró generar una fuerte red transnacional de apoyo a su causa al introducir al Delta del Níger en la agenda de algunas de las principales ONGs internacionales, que empezaron a destapar el velo e interesarse por lo que sucedía en la región. Un análisis de la evolución de sus prácticas y sus discursos nos da cuenta de que lo transnacional no caracteriza únicamente las dinámicas de la industria sino las del resto de los actores del complejo petrolero que se alían para responder a los impactos de esas dinámicas.

Inicialmente, el discurso articulado por el MOSOP seguía la línea marcada por los movimientos históricos de las elites de las minorías del Delta a través de una estrategia denominada ERECTISM (Ethnic Autonomy, Resource and Environment control). Su origen está en los movimientos de base ogoni que ya en la década de 1950 plantearon sus demandas de autodeterminación en el contexto de la negociación de la independencia del Estado nigeriano. Cuando Saro-Wiwa tomó las riendas del MOSOP rescató esas demandas y las articuló con las relacionadas con la explotación petrolera. En el año 1990 proclamó la autonomía del territorio ogoni en nombre del movimiento y declaró la *Ogoni Bill of Rights*, compuesta por 20 demandas y subdemandas que deberían confluir en un fin último, la autonomía política para el pueblo ogoni. Entre esas demandas se contaban el control de los asuntos políticos de los ogoni en manos de sus propios representantes, el derecho al control y el uso de sus recursos económicos, una adecuada y directa representación en todas las instituciones nigerianas, el uso y desarrollo de sus lenguas, el desarrollo pleno de su cultura, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a proteger su entorno y medioambiente de una mayor degradación y la creación de un estado ogoni administrado en 13 áreas de gobierno (MOSOP, 1991).

La respuesta de la junta de Babangida a la *Ogoni Bill of Rights* tuvo un carácter represivo y se concretó en el arresto de líderes del movimiento, la intimidación de la población, la creación de divisiones en las comunidades y la realización de actividades de

contrapropaganda³¹, dado que las acciones del MOSOP estaban afectando la producción de petróleo y convirtiéndose en “uno de los ejemplos más peligrosos para otras comunidades productoras en el Delta, y otras nacionalidades étnicas agraviadas en la federación” (Obi, 2001a, p. 64). En el seno del MOSOP se vio la necesidad de hacerle frente a esta estrategia de represión denunciando su situación más allá de las fronteras nigerianas, pues “sin la intervención de la comunidad internacional, el gobierno de la República federal de Nigeria y la mayoría étnica continuarían (su) detestable política hasta que los ogoni fuesen borrados de la faz de la tierra” (Ihonbvere & Shaw, 1998, p. 230).

En aquel momento, gracias a sus conexiones previas en Europa y Estados Unidos, donde era conocido en círculos literarios, Saro-Wiwa era consciente de los debates y las transformaciones normativas emanadas del nuevo régimen internacional de los derechos humanos surgido tras el fin de la Guerra Fría. En el prefacio de *Genocide in Nigeria*, donde compiló sus artículos aparecidos en la prensa nigeriana entre las décadas de 1970 y 1980, el activista apunta que la causa ogoni podría verse impulsada gracias a tres grandes cambios globales en curso: “el fin de la Guerra Fría, la creciente atención prestada al medioambiente global, y la insistencia de la Comunidad Europea de que los derechos de las minorías deben ser respetados” (Saro-Wiwa, 1992, p. 7). Esas expectativas llevaron a que el MOSOP publicase el *Addendum a la Ogoni Bill of Rights* en agosto de 1991. La “Ogoni Appeal to the International Community” reforzaba sus demandas políticas e introducía por primera vez la idea de que el 50% de sus recursos económicos tenían que ser controlados por los ogoni. A pesar de los esfuerzos de Saro-Wiwa, la mayoría de las ONGs internacionales a las que se dirigió rechazaron aliarse con la organización inicialmente, porque “la causa ogoni tal como la enmarcó el MOSOP al principio de su campaña, no encajaba con sus misiones centrales” (Bob, 2005, p. 71). En 1991 Saro-Wiwa manifestó su decepción frente a esta falta de respuesta:

Llamé por teléfono a Greenpeace. “No trabajamos en África”, fue la sorprendente respuesta que obtuve. Y cuando llamé a Amnesty me preguntaron, “¿ha muerto alguien?” “¿Hay alguien en la cárcel?” Y cuando contesté que no, me dijeron que no se podía hacer nada (citado en Obi, 2001b).

³¹ Organizaciones como la Association for Better Nigeria (ABN) y Third Eye funcionaron como correa de transmisión del proyecto de Babangida.

Entre otras razones, el MOSOP no tenía pruebas para darle sustancia a sus demandas, algo exigido por las organizaciones a las que acudió en 1991 y 1992, como Greenpeace International, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), Friends of the Earth International (FEI) y Survival. En cuanto a Greenpeace, aunque una de las cuatro campañas desplegadas en aquel momento era sobre petróleo y sus impactos medioambientales, con un señalamiento especial a las empresas transnacionales del sector, tras un debate interno la organización ecologista decidió no implicarse en la causa ogoni, entre otros motivos porque no trabajaba en África Occidental y no tenía socios en Nigeria.

Ante la falta de respuesta inicial de las principales ONGs de derechos humanos y medioambiente de Europa y Norteamérica, Wiwa realizó una gira que sirvió para que el MOSOP lograra darse a conocer fuera de Nigeria, algo que fue posible porque en aquel momento Babangida no estaba demasiado interesado en las actividades de las minorías del Delta en el extranjero dado que no creía que pudiesen ser dañinas para el *statu quo*, y de hecho promovió incluso sus giras. Estos viajes le permitieron a Wiwa entrar en contacto con otras experiencias de otras latitudes y con los discursos que comenzaban a desplegarse. Los contactos transnacionales del MOSOP contribuyeron a que este reformulase su manera de pensar sobre el petróleo, el Estado nigeriano y la cuestión de la ciudadanía. El lenguaje de la etnicidad comenzaría a ser articulado así con otra serie de discursos de carácter transnacional en torno a los derechos de las minorías, el medioambiente y la conducta de las empresas transnacionales.

3.1.2. Pueblos indígenas, medioambiente y empresas transnacionales

En 1972 se había celebrado en Suecia la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que alentó la emergencia de nuevos debates en torno al medioambiente. Entre las décadas de 1970 y 1980 el Chipko Movement, un movimiento de mujeres articulado en defensa de los bosques del Himalaya, fue el primer movimiento medioambientalista que conseguía visibilidad en Occidente y sentó un precedente para que otros grupos sociales comenzasen a relacionar sus reclamaciones de derechos con el medioambiente. Este, entendido como “una serie de interacciones entre el mundo físico y el humano; un espacio de resistencia y una construcción social que es contestada” (Mittelman, 1998, p. 849) se convertía, así, en un nuevo espacio político. Gracias al camino marcado por el

movimiento indio, el discurso sobre la defensa del medioambiente, que aún muchas reclamaciones: “lucha contra la discriminación en la economía, reclamaciones políticas para la autonomía territorial y la apelación simbólica que aboga por el lenguaje y culturas tradicionales” (Melucci, 1998, p. 427) , comenzó a popularizarse entre movimientos sociales que veían amenazadas, no sólo sus economías y ecologías locales, sino sus propias culturas (Escobar, 2006).

Finalizada la Guerra Fría, el medioambiente se situaba en el centro de la agenda de diversos actores e instituciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992 supuso un hito histórico, al reconocer que la relación entre desarrollo y medioambiente no era sólo de carácter técnico, sino que tenía implicaciones de carácter social, político y económico. La conocida popularmente como “Cumbre de la Tierra” lanzó la *Agenda 21*, un plan de acción internacional para las Naciones Unidas, instituciones internacionales y gobiernos para poner en marcha una estrategia global de “desarrollo sostenible”.

La “Declaración de Río” hacía, además, una mención especial a los “pueblos indígenas” por su “rol vital en la gestión del medioambiente y el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales” y exigía a los Estados el reconocimiento de sus culturas, identidades e intereses para asegurar su participación en lograr ese desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1992). La categoría de “indígena” se había colocado también en el centro de la agenda del medioambientalismo global desde la campaña internacional articulada para salvar la Amazonía a finales de la década de 1980 (Sachs, 1995), que dio lugar a nuevos instrumentos, instituciones y lenguajes en torno a los derechos de las minorías. En junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó la *Convención n° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales*, el primer tratado internacional que definió específicamente los derechos de las citadas minorías a través del reconocimiento de toda una serie de derechos, tanto individuales como colectivos, que no habían sido contemplados durante el régimen internacional de soberanía que rigió las relaciones internacionales durante la contienda bipolar.

Estos nuevos debates alimentaron al MOSOP, no obstante, la incipiente normatividad internacional en torno a los derechos de las minorías no era tan clara con respecto a los

derechos políticos de las minorías étnicas como Saro-Wiwa creía. El Convenio 169 de la OIT no hablaba de minorías étnicas sino de “pueblos tribales”, a los que definía como aquellos que viven “en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros segmentos de la comunidad nacional, y cuyo estatus está regulado entera o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones o por leyes especiales o regulaciones” (OIT, 1989). En cuanto a los indígenas, los definía como:

Los pueblos en países independientes que son vistos como indígenas de acuerdo con su descendencia de poblaciones que habitaban el país o una región geográfica que pertenece a ese país, en el momento de la conquista o colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, independientemente de su estatus legal, conservan algunas o todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (OIT 1989).

Aunque el Convenio reconocía algunos derechos para las minorías étnicas, no reconocía a estas como un grupo con el derecho colectivo a la tierra y los recursos naturales, a la consulta previa o a sus propios mecanismos de resolución de conflictos, sistemas de gobierno y jurisdicción. En el contexto internacional de la inmediata Posguerra Fría sólo los “pueblos indígenas” o “tribales” podían reclamar que su cultura, identidad y existencia estaban atadas de manera contundente al espacio que ellos ocupaban (Cohen, 1993).

El término “indígena”, nacido, como vemos, de instancias institucionales internacionales, no sólo es “una categoría legal sino también una expresión de identidad”, frente a la categoría de “grupo étnico” y “etnicidad”, que son más bien “conceptos analíticos, no términos de identidad” (Niezen, 2003, p. 3). El concepto puede interpretarse como los sujetos de los tratados coloniales, como las comunidades aisladas, pero también como los sujetos de las campañas de los activistas: las minorías rurales que han sufrido de la explotación de recursos por parte de las empresas transnacionales y el Estado (Tsing, 2005, p. 225). El indigenismo actúa de un modo parecido al etnicismo (en el sentido de que destaca una identidad particular y unos objetivos políticos definidos) pero, a diferencia de este, no plantea una identidad particularizada sino una de carácter global; es decir, conecta lo local-primordial con una categoría de carácter universal (Niezen, 2003).

Teniendo en cuenta estos nuevos debates, traducidos en diversos mecanismos, instituciones y marcos normativos, y que los ogoni aseguran que ocupan las mismas tierras desde hace más de 500 años, las conexiones del pueblo ogoni con su tierra ancestral

deberían constituir la base para establecer sus derechos políticos (Bob, 2005, 84). En julio de 1992 el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas acogió una intervención de Saro-Wiwa, quien:

... pintó un cuadro del pueblo ogoni como un pueblo indígena discriminado, expropiado y que enfrentaba un genocidio inminente, derivado de la destrucción sin sentido de la base medioambiental de su existencia por las actividades de la industria petrolera y las actividades extractivas y represivas del militarizado Estado nigeriano (Obi, 2001a, p. 90).

De esta manera, el MOSOP llevó a cabo un trabajo político y cultural de articulación a través del cual la identidad indígena se hizo explícita, accesible y comprensible para una audiencia de carácter transnacional. La difusión de las demandas del MOSOP a la arena internacional forzó a Babangida a dar alguna respuesta de tipo institucional a la problemática del Delta. Tras realizar la primera visita a la zona, en julio del año 1992 estableció la OMPADEC (Oil Mineral Producing Areas Development Commission), con el objetivo de atender los problemas de desarrollo de la región relacionados con la devastación medioambiental provocada por las actividades extractivas. La agencia elevó al 3% lo destinado al desarrollo del Delta y llevó a cabo numerosos proyectos, pero muchos quedaron sin finalizar, y se acumularon grandes deudas. Las poblaciones situadas en los lugares de extracción petrolera no sólo no se beneficiaron de sus actividades, sino que fueron excluidas del proceso de toma de decisiones. Además: “la falta de transparencia y las tácticas de divide y vencerás de sus operaciones pronto marcaron a OMPADEC como parte de la infraestructura de la hegemonía federal en el Delta” (NNDC, 2006, p. 102). La agencia agravó las divisiones preexistentes en el seno de las “minorías petroleras”, que darían lugar a nuevos y “complejos conflictos en los niveles personal, intraelite y nacional” (Obi, 2001a, p. 58).

Otra de las respuestas del régimen a las minorías del Delta, en particular al MOSOP, fue la represión de sus actividades a través del uso de la violencia institucional (HRW, 1995, p. 12). En diciembre de 1992, en respuesta a la visibilidad internacional que estaba adquiriendo el movimiento, Babangida lanzó una fuerte estrategia represiva hacia los ogoni. En reacción a esta conducta, el MOSOP empezó a poner el foco en las empresas transnacionales y a enviar cartas a Shell, Chevron y la NNPC, demandando una compensación de 10 billones de dólares por daños y exigiéndoles el fin de la violencia hacia los ogoni. El MOSOP comenzó a señalar particularmente a la empresa Shell, la que

tenía mayor presencia en su territorio. La empresa “también intervenía a través de las tácticas de divide y vencerás en la gobernanza local como: benefactor, extractor y atormentador”, por eso, se hizo obvio que “cualquier agenda para la liberación del Delta tenía que empezar con el desafío al reinado del conquistador global de petróleo, Shell” (Obi, 2001a, p. 88).

El MOSOP trató de perfilar a la transnacional como responsable de muertes y heridos en protestas en sus instalaciones y a demonizarla con un discurso centrado en la defensa del medioambiente. En Ogoniland se habían perdido unos 30 millones de barriles de petróleo en fugas en el año 1970 (Earth Action, 1994); mientras la organización ogoni acusaba a Shell por estas fugas, la empresa apuntaba al sabotaje del ejército biafreño tras la guerra (Shell, 1995, p. 8)³². El discurso de la responsabilidad de las empresas transnacionales en el deterioro del medioambiente local encajó en las misiones de las principales ONGs ecologistas internacionales a las que el Delta se les hizo, así, más comprensible y relevante. El señalamiento a Shell conectó al MOSOP con grupos con base en Europa y Norteamérica, que realizaron protestas en sus países y Greenpeace incluso visitó Ogoniland.

El 4 de enero de 1993 el MOSOP realizó una gran movilización para hacer coincidir el Día Ogoni con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Además, le dio ultimátum a las compañías para que proporcionasen compensaciones a los daños y se estableció como persona *non grata* a Shell en territorio ogoni. Las luchas asociadas al petróleo del Delta empezaron a ser vistas entonces como “conflictos por la distribución ecológica”, es decir, por el acceso y el control de los recursos naturales como una fuente de subsistencia que tienen impactos ecológicos, un ejemplo de lo que más tarde sería conocido como “ecologismo de los pobres” (Martínez-Alier, 2005).

Enmarcar la causa ogoni en el discurso del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas, algo novedoso en el continente africano, sirvió para universalizarla (Obi, 2011, p. 103). Ogoniland se volvió, así, un “espacio gobernable” en el que “el territorio y el

³² Entre 1985 y 1993, Shell declaró una pérdida de 5.352 barriles, causada en 87 incidentes, un 70% de ellos debidos a actividades de sabotaje; mientras otras fuentes independientes señalan que solo entre 1986 y 1991 tuvieron lugar unas 2.500 fugas. La polución derivada de estas fugas de petróleo ha terminado con la vida acuática, lo que ha paralizado la actividad pesquera en la región, además de dejar las tierras incultivables. El bombeo de gas que llevan a cabo las transnacionales que operan en la región provoca una lluvia ácida y libera dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Sólo en noviembre de 1983, Shell bombeó unos 483 millones de metros cúbicos de gas en la región.

petróleo eran los bloques constructores sobre los cuales la diferencia étnica y los derechos indígenas fueron construidos” (Watts, 2004). Al mismo tiempo, el MOSOP comenzó a documentar mejor sus agravios (con fotos, vídeos e informes exhaustivos) lo que le hizo ganar legitimidad y visibilidad internacional.

En enero de 1993 el movimiento se integró en la UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization), una pequeña ONG con oficinas en La Haya, Washington y Ginebra fundada poco después de la constitución del MOSOP en 1991, con unos 50 miembros, entre naciones y pueblos que no se sentían representados en las relaciones internacionales³³. La alianza con la organización transnacional fue en aquel momento muy equilibrada porque las dos organizaciones eran jóvenes y de sconocidas, con necesidades similares. Para la UNPO la cuestión de la autonomía encajaba con su mandato, mientras que el apoyo de esta fue crucial para el MOSOP, ya que se convirtió en su enlace con el exterior. La organización transnacional sirvió de “punto de distribución de información sobre Ogoniland para la comunidad internacional” (UNPO Yearbook, 1995, p. 496). Además, el propio Saro Wiwa fue vicedirector de la asamblea general de la UNPO en 1993.

Entre los años 1993 y 1999 la UNPO fue muy activa en su relación con el MOSOP, al que asistió en reuniones en Naciones Unidas y conferencias internacionales, le facilitó la realización de entrevistas en medios internacionales y trasladó información sobre el conflicto entre el pueblo ogoni, el gobierno nigeriano y la empresa Shell a instituciones internacionales. Además, mantuvo el diálogo con Shell International y trató de que la compañía dialogase con el MOSOP. En mayo de 1993, ambas, la petrolera y el movimiento ogoni, solicitaron el envío de una misión a la UNPO que no pudo llevarse a cabo debido a que el gobierno de Babangida denegó el visado a los representantes de la organización, tras lo cual, Shell rechazó el diálogo.

Siguiendo la estela de la UNPO, a mediados de 1993 las principales ONGs internacionales de derechos humanos y medioambiente que antes habían rechazado las

³³ El principal objetivo de la UNPO (www.unpo.org) es hacer escuchar las voces de los “pueblos no representados” en la esfera internacional a través de su participación en conferencias internacionales, las actividades de promoción y defensa de sus derechos y otras encaminadas a promover la independencia de sus Estados a través de la formación en materias legales, diplomáticas y mediáticas.

demandas del MOSOP se unieron fervientemente a la causa pues “para ellas, las cuestiones medioambientales y de las multinacionales eran más pertinentes a sus militantes y audiencias clave que los asuntos ‘políticos’ que el MOSOP había destacado antes” (Bob, 2005, p. 88). Entonces había pruebas de que Shell, Chevron y otras compañías facilitaron violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad. Y las ONGs internacionales empezaban en aquel momento a interesarse por estas cuestiones (Sachs, 1995).

Desde inicios de la década de 1990 se comenzó a experimentar una mayor preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos y medioambiente como AI, HRW, FEI y Oxfam en torno a las implicaciones de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos. Estos comenzaron a servir desde entonces “para objetivos tan diversos como *evaluar* los efectos, *denunciar* los daños, *reclamar* responsabilidades o *proponer* nuevas formas de control de las actividades empresariales” (Campos, 2011a, p. 42). Gracias a esta tendencia, la causa ogoni se convirtió también para organizaciones más pequeñas en un símbolo de los conflictos con las empresas transnacionales, como veremos más adelante.

3.2. Petróleo y autoritarismo: debates en torno a los derechos humanos

Mientras esto sucedía, en el contexto estatal se acercaba el fin del proceso de transición a la democracia, que generó nuevas contradicciones en el Delta, ya que “excluyó a las clases populares y a todos aquellos opuestos al ajuste, a través del estrechamiento del espacio para la participación política” (Obi, 2001a, p. 6). En los debates sobre la transición a la democracia, distintos grupos sociales articulados en torno al concepto de minorías étnicas reclamaban una Convención Nacional para repensar la federación nigeriana, mientras otros grupos, englobados en el “movimiento prodemocracia” de carácter estatal, demandaban una Convención Constitucional para hablar de derechos políticos y civiles.

Los derechos humanos se habían convertido ya en un concepto fundamental en la vida política nigeriana desde los años 80, y muchas organizaciones preexistentes (sindicatos, organizaciones comunitarias, profesionales y movimientos de carácter étnico y religioso) habían comenzado a adoptar una agenda prodemocracia basada en la defensa de los

derechos humanos. En la esfera estatal, la Civil Liberties Organization (CLO)³⁴, fundada en Lagos en 1987 por un grupo de abogados que comenzaron a hablar de democracia como un derecho humano básico, tenía el objetivo de monitorear “las masivas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno nigeriano” (Edozie, 2002, p. 57).

El Committee for the Defense of Human Rights (CDHR), se encargó de llevar las demandas del movimiento prodemocracia al plano legal desde su fundación en Lagos en 1989. Aunque su objetivo inicial era la creación de una campaña para conseguir la liberación del sindicalista Femi Aborishade, detenido ese mismo año por la junta de Babangida, sus integrantes se vieron en la necesidad de ampliar el marco de sus demandas a la defensa “de los derechos humanos fundamentales de todos los nigerianos de modo permanente”³⁵. Por su parte, el Constitutional Rights Project (CRP) sirvió desde 1990 para hacer visible la situación de los derechos humanos en el país a través de campañas de sensibilización y la elaboración de publicaciones.

En 1991, la Campaign for Democracy (CD) se convertiría en la madre del movimiento prodemocracia al aglutinar a las tres anteriores, y a otras organizaciones fundadas en las décadas de 1960, 1970 y 1980, para hacer frente al autoritarismo ejercido de manera creciente por el régimen de Babangida. La CD fue el primer movimiento nigeriano en conseguir llevar a la opinión pública la necesidad de reclamar libertades y derechos civiles para la población. Antes de esa fecha, muchos activistas de izquierdas consideraban las libertades civiles como esencialmente elitistas. Pero ya en 1986, algunos de sus fundadores habían alertado sobre la “agenda oculta” de Babangida en su programa de transición. Por eso, “la CD vino a ejemplificar el nuevo rol que la izquierda vendría a jugar en la política nigeriana, un papel que tenía la propuesta explícita de defender los derechos de los nigerianos y extender las fronteras de las libertades civiles” (Edozie, 2002, p. 62).

La CD fue responsable de organizar movilizaciones masivas, huelgas y manifestaciones con el objetivo de realizar una Conferencia Soberana Nacional con el objetivo de discutir y ofrecer soluciones a la crisis económica y a las violaciones de derechos humanos. La coalición supo aprovechar las oportunidades políticas abiertas en el momento, en la que

³⁴ La CLO ha sido considerada como la primera ONG de defensa de los derechos humanos de África subsahariana.

³⁵ Para más información, consultar la página web de la organización: <http://cdhrnigeria.org>

se sucedían las protestas sindicales y profesionales contra la situación económica y las movilizaciones contra el autoritarismo militar, además de las presiones internacionales. Este movimiento de carácter eminentemente urbano contó con muchos apoyos internacionales, tanto que sus fondos fueron gradualmente proporcionados por gobiernos municipales de Francia y Alemania y ONGs de Estados Unidos. La CD tuvo una clara dimensión transnacional:

... requirió internacionalmente el aislamiento diplomático de la junta y solicitó un embargo a la importación de armas por parte del ejército nigeriano, que las recaudaciones del petróleo nigeriano se pusiesen en una cuenta en depósito de plica y la congelación de las cuentas extranjeras de los militares y sus aliados civiles (Edozie, 2002, p. 70).

A partir de junio de 1993, el movimiento articuló protestas masivas a nivel federal, replicadas internacionalmente, que fueron duramente reprimidas, en respuesta a la anulación de los resultados electorales por parte del régimen. El 12 de junio de 1993, en un proceso electoral calificado como libre y justo por distintos observadores internacionales, el líder del Social Democratic Party (SDP), Moshood Abiola, venció con un amplísimo margen en las elecciones presidenciales. El 23 de junio el gobierno anunció la anulación de los resultados. Tras la anulación, la CD supo capitalizar el descontento popular, y lanzó la campaña “Babangida-Must-Go”, que pretendía acabar con el gobierno de Babangida criticando el programa de transición, exigiendo el establecimiento de un gobierno nacional interino y solicitando el reemplazo de la Administración. Esta campaña tuvo una gran presencia en los medios, a través del envío de notas de prensa, y en la calle, a través del reparto masivo de panfletos. Además, se organizaron concentraciones de desobediencia civil entre julio y septiembre, sobre todo en centros urbanos, y sus participantes fueron mayoritariamente estudiantes, trabajadores y jóvenes en general (Edozie, 2002).

A pesar de sus logros, una de las principales debilidades del movimiento prodemocracia se relaciona con la denominada “paradoja de la democracia”, que limitó la emergencia de “una coalición más fuerte entre sectores diversos de la sociedad civil y agentes prodemocracia, que deberían haber sido capaces de generar un régimen de transición más democrático y popular” (Edozie, 2002, p. 132). La relación paradójica entre las organizaciones de movimientos sociales y los militares en Nigeria ha supuesto que estos puedan ser vigilados por ellas pero también que se politicen, logrando así dificultar más

el proceso de democratización. Esta paradoja se coló en su propia organización interna, que acabó por caracterizarse por la puesta en práctica de políticas elitistas, entre ellas algunas de corte étnico, que se tradujeron en la fractura y la división del movimiento en grupos más pequeños. Edozie (2002) sugiere que:

Como resultado del civil-militarismo, las políticas elitistas, y la competitividad étnica – aspectos de la paradoja del movimiento prodemocracia- [estos movimientos] fueron susceptibles de la infiltración por parte de los militares y la cooptación de sus miembros por intereses militares. Esto condujo al debilitamiento de la credibilidad del movimiento como agente prodemocracia afectando el objetivo final de generar un régimen democrático que diese cuerpo a la conciencia democrática (p. 132).

La propuesta del movimiento prodemocracia no tuvo la misma acogida entre las minorías petroleras del Delta. El MOSOP no se integró inicialmente en el movimiento dada la tibia reacción de la CD a la *Ogoni Bill of Rights* (Edozie, 2002). Esas diferencias se agravaron cuando el movimiento ogoni decidió boicotear las elecciones de junio dada la falta de legitimidad con la que, según su visión, contaba la federación nigeriana, poniendo por delante sus reivindicaciones políticas de autodeterminación. Mientras el lenguaje de los derechos humanos ganaba eco en la vida política y social de toda Nigeria, en el Delta en particular, el concepto se adaptaba al lenguaje local. Durante todo el régimen de Babangida, los movimientos de las minorías petroleras fueron adoptando gradualmente un discurso de tipo nacionalista:

...el contranacionalismo o micronacionalismo no sólo proporcionó un refugio o plataforma para la solidaridad de los oprimidos y excluidos, dio una identidad política y una reclamación histórica a las fuerzas sociales en busca de liberación al definir sus metas en términos nacionales (étnicos). Así, la etnicidad politizada se convirtió en un refugio para las minorías petroleras que clamaban por la ‘descolonización’ de las nacionalidades étnicas ricas en petróleo (Obi, 2001a, p. 62).

El contexto internacional favoreció la articulación de estos lenguajes, gracias al lanzamiento por parte de Naciones Unidas de la *Declaración y el Plan de Acción de Viena* en 1993, el primer instrumento normativo internacional específico sobre las minorías étnicas que legitimó los movimientos nacionalistas internacionalmente. En mayo de 1993, a pesar de la creciente militarización del Delta, los ogoni lograron expulsar a Shell de su territorio (9 campos petroleros y 96 pozos de producción), lo que ha sido considerado como una “victoria moral para los ogoni y les demostró que podían enfrentarse a una de las multinacionales más ricas y poderosas, y ganar” (Obi, 2001a, p. 62). Inmediatamente

después, Babangida anunció el *Treason and Treasonable Offences Decree*, “que entendía como una ofensa capital conspirar con grupos fuera o dentro del país que profesen ideas que minimicen la soberanía de Nigeria” (Bob, 2005, p. 79), lo que iba claramente dirigido a desalentar al MOSOP y al resto de las minorías petroleras del Delta (Obi, 2001a).

En el contexto de la fase final del programa de transición a la democracia, el MOSOP empezó a adoptar también el lenguaje de los derechos humanos, lo que vino facilitado por el recrudecimiento de la represión en el Delta en respuesta a los éxitos del movimiento en la esfera internacional; ya que mientras se daban estas tensiones en la esfera local, en el exterior, la causa ogoni era convertida en un símbolo de la lucha prodemocracia. En 1993, el Nigerian Democratic Movement, con sede en Washington, emitió un comunicado solicitando apoyo para el movimiento prodemocracia y destacando en particular la represión a los ogoni, por ejemplo.

Las movilizaciones condujeron a que finalmente el 27 de junio Babangida dejase el poder en manos un gobierno interino (agosto-noviembre de 1993) con Ernest Shonekan a la cabeza. De todos modos, durante los meses de julio y agosto se sucedieron más protestas, ya que el CD vio la salida de Babangida y el establecimiento del nuevo gobierno como una “simple acción de suplencia” (Edozie, 2002, p. 67). Mientras este proponía como fecha para las próximas elecciones febrero de 1994, el 17 de noviembre de 1993, el entonces ministro de Defensa Sani Abacha aprovechó la crisis política abierta en Nigeria para llevar a cabo un nuevo golpe de Estado, abortando así el programa de transición e inaugurando uno de los períodos más convulsos de la historia política nigeriana y, en particular, del Delta.

Bajo el régimen de Abacha (1993-1998), “la gobernanza asumió una dimensión macabra de gobierno personalizado, en el que la nación se balanceó precariamente en el filo de un precipicio afilado por la realidad de una unidad forzada y las perspectivas de una desintegración” (Obi, 2001a, p. 58). Aunque inicialmente suspendió las medidas del PAE, Abacha le dio continuidad a través de un programa denominado “desregulación guiada”, que reforzó las alianzas entre el capital local y transnacional. Se dice que el militar y su familia malversaron alrededor de 3 billones de dólares, que fueron depositados en bancos en el extranjero (Falola & Heaton, 2008, p. 234). La explotación de hidrocarburos tuvo mucho que ver con este enriquecimiento personal: durante su mandato Abacha puso en

marcha un proyecto de Gas Natural Licuado en el que se esperaba la participación de todas las petroleras extranjeras. Desde entonces, en el país “hay una especie de fijación patológica en el Gas Natural Licuado (GNL) que envuelve a las principales compañías petroleras como si este fuese a resolver los problemas económicos del país” (Ihonvbere & Shaw, 1998, p. 206).

En el plano estatal, la represión del régimen de Abacha provocó la expansión del movimiento prodemocracia a las clases medias y la arena internacional. La National Democratic Coalition (NADECO), fundada en Lagos en mayo de 1994, tomó el relevo de una CD debilitada (y casi limitada a elaborar publicaciones críticas con el régimen), y se convirtió en la principal organización prodemocracia tras la anulación de la 3ª República por parte de Abacha. En la *Declaración de Lagos*, esta coalición constituida por políticos, organizaciones prodemocracia, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y otros activistas daba un ultimátum de dos semanas a los militares para que abandonasen el poder, requería la instauración de Abiola como presidente de un nuevo gobierno de unidad nacional y el establecimiento de una Conferencia Soberana Nacional con el objetivo de redefinir la federación nigeriana. Las movilizaciones se hicieron más importantes cuando pasaron a integrarse al movimiento los principales sindicatos del país, NLC, PENGASSAN (Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria) y NUPENG (National Union of Petroleum and Natural Gas Workers), cuyas huelgas “llevaron al país a una parálisis virtual” (Edozie, 2002, p. 74). Estas actividades amenazaron seriamente al régimen, ya que tuvieron efecto en las ganancias por exportación de petróleo y los suministros a nivel doméstico.

A diferencia de la CD, NADECO no tenía demasiada capacidad movilizadora, excepto en el oeste yoruba, donde supo articular el resentimiento por los acontecimientos del 12 de junio; pero dado que la mayoría de sus miembros eran políticos, sí tuvo acceso a la negociación y el diálogo con los militares y civiles del régimen de Abacha, lo que le permitió ganar “acceso a cruciales esferas de la toma de decisiones en la unidad ejecutiva del régimen militar, el Consejo de Gobierno Provisional” (Edozie, 2002, p. 78). Además, también encontró un espacio en medios de masas ideológicamente afines, que dieron una amplia cobertura a sus actividades. Dos razones facilitaron la expansión de NADECO, en primer lugar, la implementación de una controvertida Conferencia Constitucional Nacional que establecería el programa de transición a la democracia y el regreso de

Abiola de su gira por Estados Unidos y Reino Unido, donde lanzó una campaña internacional contra el régimen.

NADECO supo capitalizar la frustración de la población, para quien en aquel momento los militares habían perdido toda credibilidad. La anulación de las elecciones recibió una condena generalizada en toda Nigeria, pero las protestas se articularon sobre todo en el oeste yoruba. El gobierno lanzó una contraofensiva tratando de cooptar a la sociedad civil para que participase en la Conferencia Constitucional y etnitizando la cuestión del 12 de junio (Othman & Williams, 1999). NADECO llamó a boicotear la Conferencia, y aunque el boicot fue seguido en muchos lugares, las organizaciones no yorubas no tuvieron capacidad para boicotearlo en sus regiones. Uno de los temas más debatidos y controvertidos en la Conferencia fue la redistribución de las rentas. Los delegados de los estados del Delta propusieron que el principio de derivación regresase a los niveles de 1957, cuando suponía un 65%, pero el acuerdo al que se llegó finalmente fue a su establecimiento en un 13%, lo que, no obstante, no sería efectivo hasta que finalizase la era militar.

Debido a la represión y a sus divisiones internas, en 1995 NADECO empezaría a perder fuerza por lo que, al igual que había sucedido con la CD, una vez desmovilizado, el movimiento se desplazó a la arena internacional. Las actividades de los movimientos sociales provocaron un aumento de los abusos de los derechos humanos por parte de los militares y la prohibición y el castigo de las acciones prodemocracia. Según Olukotun: el periodo de mandato de Abacha es “una peculiar ilustración del fenómeno del Estado criminalizado (Bayart et al., 1999, p. 25)”, que está marcado por “el uso para propósitos privados de los órganos legítimos de la violencia estatal por aquellos en la autoridad y la función de esa violencia como un instrumento en el servicio de sus estrategias de acumulación o riqueza” (Olukotun, 2002a, p. 318).

Como veremos a continuación, el aumento de los abusos de derechos humanos por parte del régimen hizo tomar conciencia de la situación a las ONGs internacionales, que empezaron a interesarse particularmente por la situación de los ogoni.

3.2.1. La transnacionalización de la cuestión del Delta

Algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, empezaron a denominar a los líderes del MOSOP como “presos de conciencia” y a hacer *lobby* en sus gobiernos para presionar al nigeriano. Además, Saro-Wiwa tuvo reuniones de alto nivel en Europa, lo que permitió que numerosas organizaciones (FIAN International, Article 19, Inter Rights, the Body Shop, Project Underground, Trocaire, World Council of Churches, Book Aid International y Netherlands Committee of the International Union for the Conservation of Nature) brindasen su apoyo al MOSOP y viajasen al Delta para investigar y documentar las acusaciones contra Shell y el Estado nigeriano (Boele, 1995; Crow, 1995; HRW, 1999a). Las sucesivas detenciones de Wiwa y otros líderes del MOSOP catapultaron aún más la causa ogoni, durante 1993 y 1994 los apoyos fueron creciendo.

Entre 1993 y 1994 Amnistía Internacional lanzó varias Acciones Urgentes sobre el Delta. En julio de 1993 la organización lanzó un llamamiento por el estado de salud de Ken Saro Wiwa y otros dos activistas de la organización ogoni detenidos en aquel momento, N.G. Dube y Kobari Nwile. El 10 de agosto del mismo año lanzó otro comunicado condenando las ejecuciones extrajudiciales de al menos 35 ogoni en el estado de Rivers. En noviembre de 1994 publicó un informe de catorce páginas acerca de las violaciones de derechos humanos ejercidas por parte del gobierno de Abacha contra la oposición, centrado de manera particular en la represión sufrida por el MOSOP (AI, 1994). Entre el 8 y el 19 de diciembre de ese mismo año llevó a cabo una misión de alto nivel a Nigeria, aunque no le fue permitida la entrada en el estado de Rivers para investigar la situación de los ogoni. Desde inicios de mayo de 1995 la organización manifestó su preocupación por la condena a los 9 ogoni, y especialmente por la situación en prisión del denominado “preso de conciencia” Saro Wiwa durante los siguientes meses, hasta que en septiembre de 1995 publicó un informe de 15 páginas al respecto (AI, 1995). En octubre del mismo año, seguía mencionando la situación de los detenidos ogoni en un nuevo informe sobre Nigeria (AI, 1995b).

En cuanto a Human Rights Watch, su informe de octubre de 1994 sobre los abusos de los derechos humanos por parte del régimen de Abacha hacía una mención especial a la “brutalización de una de las minorías de las áreas productoras de petróleo, el grupo étnico ogoni (...) por parte de las empresas petroleras en conjunción con fuerzas

gubernamentales” (HRW, 1994, p. 15). En febrero de 1995 HRW envió una misión al Delta, cuyos resultados se hicieron públicos en un informe dedicado a la “crisis ogoni” y publicado en julio de ese mismo año (HRW, 1995). A mediados de 1994, el Sierra Club y Rainforest Action Network también hicieron campaña a favor de los ogoni.

En 1995, Greenpeace publicó un informe de 30 páginas sobre Shell y los ogoni (Rowell, 1994) que resultó productivo para ambos, gracias a su alianza Greenpeace obtenía información de primera mano sobre Shell en Nigeria y el MOSOP conseguía difundir su causa internacionalmente. En cuanto a la UNPO, a pesar de no haber recibido el beneplácito gubernamental en 1993 para llevar a cabo una misión en el Delta, en febrero de 1995 la organización decidió enviar a un representante para realizar una misión no oficial tras la condena a muerte de los 9 activistas del MOSOP. Los objetivos de esta misión eran obtener información de primera mano sobre la situación en Ogoniland, elaborar un informe para los gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, la prensa, Shell y otros actores relevantes en un esfuerzo de proporcionar un más certero dibujo de la situación y aspiraciones de los ogoni, y por último, realizar recomendaciones a todas las partes implicadas y la comunidad internacional con respecto a la situación.

Durante esta misión el representante visitó las ciudades de Lagos y Port Harcourt. En Lagos se reunió con representantes del pueblo ogoni, Ogoni Welfare Association, MOSOP y National Council for Ogoni Youth (NYCOP), las organizaciones nigerianas de defensa de los derechos humanos CRP y CLO y organizaciones internacionales como la Cruz Roja. En Port Harcourt tuvo encuentros con distintos miembros del pueblo ogoni: refugiados, jefes tradicionales, representantes de la Federation of Ogoni Women Associations (FOWA), el MOSOP y el NYCOP. El informe de esta misión se publicó en mayo de 1995 (Boele, 1995).

Mientras tanto, la represión contra el MOSOP agudizaba las divisiones históricas del movimiento, que acabó fragmentado en tres fracciones: los conservadores/elites/moderados, los jóvenes/campesinos/mujeres radicalizados, y los “vigilantes” (Obi, 2001b, p. 183). Las estrategias de “divide y vencerás” empleadas por el régimen para enemistar a los ogoni con sus vecinos y entre sí, dieron sus frutos. En mayo de 1994, tras el asesinato de 4 líderes moderados de la comunidad opuestos al MOSOP por parte de una multitud, la junta de Abacha ordenó la detención de casi todos

los líderes del movimiento, entre ellos Saro Wiwa, al que, junto a otros 8 líderes, acusaron de haber incitado al crimen. En septiembre de 1994 Abacha recrudenció el *Civil Disturbances (Special Tribunal) Decree* de 1987 a través de un edicto que permitía la constitución de tribunales especiales para juzgar enfrentamientos de carácter étnico y penarlos incluso con la pena de muerte. En febrero de 1995, ocho meses después de su detención sin cargos, el gobierno militar estableció un tribunal especial para juzgar a los 9 ogoni.

El 28 de mayo de 1995, un año después de su detención, Ken Saro-Wiwa remitió una carta desde el hospital militar de Port Harcourt al *The Guardian Weekly*. En ella, el activista calificaba de “charada trágica” el proceso al que había sido sometido junto con los otros 8 activistas ogoni. Saro-Wiwa responsabilizaba directamente al gobierno británico por su apoyo armamentístico y financiero a las dictaduras militares nigerianas:

Es el gobierno británico el que hace ruido sobre la democracia en Nigeria y África pero apoya a los dictadores militares hasta el final. Es el gobierno británico el que apoya el expolio y devastación del medioambiente por parte de una organización como Shell. Dejo mis esfuerzos, la destrucción de los ogoni y otros pueblos del Delta del Níger, en la puerta del gobierno británico. En última instancia, la decisión de parar este gran engaño, este doble estandar, que ha alargado la pesadilla africana y denigra la humanidad recae en el pueblo británico, el electorado (Sara-Wiwa & Saro-Wiwa, 1995, p. 245).

Una vez que fueron detenidos los 9 ogoni, el Delta se convirtió en un foco de atención mediática, lo que encajó en la agenda de las principales ONGs internacionales, lo que generó un efecto multiplicador, al animar a las más pequeñas a confiar en el MOSOP. Ya “en el verano de 1995 los aspectos de ‘David y Goliat’ de un pueblo indígena y su valiente líder confrontando a una gran corporación y a un gobierno paria atrajeron a los medios” (Bob, 2005, p. 93). El 29 de junio la International Round Table on Nigeria, una coalición de organizaciones de derechos humanos y grupos prodemocracia de Washington se movilizó frente a las sedes de Shell y Chevron, consiguiendo poner el foco internacional en la lucha de los ogoni y pidiendo a estas compañías luchar por un embargo del petróleo nigeriano.

Para responder a las demandas internacionales, en octubre de 1995, al mismo tiempo que el tribunal condenaba a los 9 ogoni a la pena de muerte, Abacha anunció un programa de transición a 3 años. El 10 de noviembre la Junta ejecutó, a pesar de las presiones

internacionales por parte de gobiernos extranjeros, instituciones internacionales y las organizaciones y movimientos solidarios con la causa ogoni, a los 9 miembros del MOSOP. Tras la ejecución de los que serían conocidos como los “9 ogoni”, se inició una campaña internacional contra los abusos de los derechos humanos en el Delta. También desarrollaron acciones algunos gobiernos del G7, gobiernos municipales de Europa y el Congreso de Estados Unidos. La Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) suspendió al país de su organización, en una situación sin precedentes, y dio dos años a la junta de Abacha para llevar a cabo sus requerimientos.

El Commonwealth Ministerial Action Group recomendó ciertas sanciones: restricciones de visados, un embargo a la exportación de armas y medidas económicas como la congelación de las cuentas y activos en el exterior de los miembros de la Junta. La lista más completa de sanciones que se emitió fue la Payne Bill “Nigerian Democracy Act” (HR 1786) por parte de algunos senadores de Estados Unidos. Naciones Unidas, por su parte, jugó un papel más limitado y tibio. La Asamblea General adoptó una resolución el 22 de diciembre de 1995 en la que condenaba las ejecuciones de los 9 ogoni, felicitaba a la Commonwealth por su acción y animaba a otros entes a que actuaran para presionar por el fin del régimen militar. El 22 de abril de 1996 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó otra resolución en la que pedía la independencia de jueces y abogados y el fin de las ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias.

Tanto el propio movimiento ogoni como sus aliados transnacionales destacaron especialmente la implicación de la empresa Shell en la represión al MOSOP, y en particular, en el asesinato de los 9 activistas. Organizaciones como Friends of the Earth International subrayan que “Shell tenía una influencia significativa sobre la dictadura militar nigeriana”, dados sus intereses económicos en la *joint venture* SPDC (FEI, 2004, p. 4). La compañía reconoció ante HRW (1995), el haber solicitado el apoyo del gobierno nigeriano en materia de seguridad y dado apoyo logístico y financiero a la policía para confrontar las protestas de los ogoni ya desde el mandato de Babangida. El abogado de la empresa asistió incluso al juicio contra los 9 ogoni, algo que por ley en Nigeria solo se le permite a las partes implicadas. Sólo un mes después de la ejecución de los “9 ogoni”, la angloholandesa firmó un acuerdo de inversión por 4 billones de dólares en el proyecto de GNL. Además:

Documentos filtrados de la empresa y el gobierno nigeriano revelaron posteriormente que Shell había monitoreado de cerca los viajes al extranjero de Saro-Wiwa e instigado a los regímenes de Babangida y Abacha a aplastar las estructuras de MOSOP (Fleshman, 2002, p. 157).

En 1996, las organizaciones estadounidenses Center for Constitutional Rights (CCR) y EarthRights International (ERI) y otros abogados especializados en la defensa de los derechos humanos llevaron a juicio en Estados Unidos a Royal Dutch Shell, Shell Nigeria y al cabeza de sus operaciones en el país, Brian Anderson, por violación de derechos humanos (ejecución sumaria, crímenes contra la humanidad, trato inhumano y arresto y detención arbitrarios) contra los ogoni. Tras 13 años de litigios, el caso finalizó con la empresa abonando 15 millones y medio de dólares a los demandantes (las familias de los ejecutados) en marzo de 2009.

3.2.2. El MOSOP después de Saro-Wiwa

Tras la ejecución de los “9 ogoni”, el MOSOP quedó descabezado y las movilizaciones en la región se redujeron. Así las cosas, la capacidad del movimiento para fijar su propia agenda quedó supeditada a la urgencia de responder a la agudizada conducta represiva de los militares. En 1996 ya casi no quedaban líderes ogoni y las bases se desmovilizaron mucho debido a la militarización, excepto en el Día Ogoni o en el aniversario de la ejecución de los 9 activistas. A nivel internacional el MOSOP siguió activo, a través de conferencias, protestas y publicaciones por parte de líderes en el exilio que crearon nuevas ramas del movimiento (MOSOP-UK, MOSOP-USA y MOSOP-Canadá). Además, las ONGs extranjeras ya tenían en la suya la causa ogoni como una prioridad. UNPO siguió implicada en ella, y otras organizaciones, como International PEN, Great Britain’s Parliamentary Human Rights Group y el World Council of Churches, también ofrecieron su colaboración al MOSOP, que obtuvo algunos recursos económicos gracias a haberle sido concedido el Right Livelihood Award (el Nobel alternativo de estilo de vida) por su lucha no violenta; lo que sumado a la concesión en 1995 a Saro-Wiwa del premio Goldman como “héroe medioambiental”, supuso una inyección de recursos económicos y publicidad a la causa. La ejecución de los ogoni fue convertida, así, en un “paquete carismático”:

Un módulo alegórico que habla de las posibilidades de hacer que una causa sea escuchada. Estos paquetes cuentan con imágenes, canciones, moral, planes organizativos o historias.

Nos introducen a los héroes y villanos; nos muestran cómo un grupo sin representación puede convertirse en una fuerza política (Tsing, 2005, pp. 225-226).

Este “paquete activista” viajó desde lo local hasta lo transnacional pasando por lo estatal. Desde la ejecución de los ogoni, organizaciones nigerianas de derechos humanos de carácter urbano comenzaron a interesarse también por lo que sucedía en el Delta. En su agenda, el CLO comenzó a contemplar la defensa de los derechos de las minorías étnicas de la región, proporcionándoles asistencia legal, representación, canalizando información a la comunidad internacional y emprendiendo acciones legales para forzar la legislación medioambiental. El CDHR llegó a implicarse también a través de la organización de conferencias y la elaboración de publicaciones. Por su parte, el CRP estuvo muy implicado con la causa ogoni, realizando denuncias acerca de la represión al MOSOP a partir de 1995.

Mientras, en la esfera transnacional “el martirio de Saro-Wiwa” se convirtió en “un potente símbolo de la bestialidad de Abacha y el movimiento prodemocracia transnacional lo usó de este modo” (Bob, 2005, p. 100). Esto se vio facilitado por las organizaciones de la diáspora nigeriana que tras el agudizamiento de la represión estatal a finales de 1995 se vieron en la necesidad de crear una única plataforma prodemocracia en el exterior con una agenda común. Así, el 31 de marzo de 1996 se produjo la fundación del UFDN (United Front for a Democratic Nigeria), que llegó a contar con unas 100 organizaciones nigerianas con sede en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países de Europa. Se dedicó fundamentalmente a hacer *lobby* en las instituciones internacionales y los gobiernos, de manera particular en relación con el Delta del Níger. La UFDN se valió de la base social de las organizaciones afiliadas, que se integraron en ella con diversos grados de autonomía. Por ejemplo, el Nigerian Forum for Democracy, del Estado de Michigan (EEUU) se centró en cuestiones medioambientales y actuó de vanguardia en el boicot a las actividades de Shell en el Delta.

Otras organizaciones importantes fueron la Nigerian Democratic Awareness Committee (NADC), el Nigerian Democratic Movement de Washington, el National Liberation Council (NALICON), en Londres, el World Congress of Free Nigerians, la Nigerian Democratic Movement (NDM) y la Organization of Nigerians Abroad (ONA), que influenciaron los parlamentos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá junto con

organizaciones internacionales como International Roundtable on Nigeria (IRN), Washington Office on Africa (WOA) y Congressional Black Caucus. La UDFN trazó además, alianzas con ONGs internacionales como HRW, AI, el Sierra Club (en este caso en una campaña de apoyo al MOSOP) y las integradas colectivamente en Friends of Nigeria (FON), como el *lobby* Randall Echols, relacionado con Abiola, que alcanzó apoyos del Black Caucus. El movimiento consiguió una destacada presencia en medios masivos, como *The New York Times* y *The Washington Post*.

En cuanto a HRW, la organización de defensa de los derechos humanos siguió elaborando informes sobre la situación en el Delta, y en particular entre la minoría ogoni. En septiembre de 1996 publicó un informe extenso acerca de las violaciones de derechos humanos en Nigeria, centrado de manera especial en la situación de los ogoni tras la ejecución de los 9 activistas del MOSOP (HRW, 1996). Durante el proceso de transición al multipartidismo, la organización hizo público un nuevo informe en el que seguía denunciando la situación de represión sufrida por los ogoni en el Delta (HRW, 1997).

Mientras se daban estas dinámicas fuera del Delta, el MOSOP enfrentaba sus propias contradicciones internas. Para Bob (2005), “el caso ogoni ilustra las dificultades que enfrentan los movimientos y las estrategias que tienen que usar para posicionarse en el mercado a sí mismas internacionalmente” (p. 110). Vistas desde un enfoque de oportunidad política, las motivaciones de las alianzas transnacionales que tejió el MOSOP respondieron, por un lado, a las propias necesidades de los ogoni, y por otro, a los imperativos de las ONGs internacionales con las que estableció conexiones. Como argumentan Jordan & Maloney (1997), Greenpeace, FEI y AI son, “como muchos otros, grupos de interés público de gran escala”, en el sentido de que:

... operan en torno a líneas corporativas. Amnistía y Friends of the Earth adoptan una estrategia de negocio para asegurar un uso eficiente de los recursos, maximizar la efectividad y, probablemente por encima de todo, asegurar su supervivencia organizativa en un mercado altamente competitivo (p. 19).

En el otro polo de la relación, según esta perspectiva, el MOSOP logró el apoyo transnacional a su causa cuando se ajustó a las agendas de las principales ONGs (Bob, 2005) a través de su estrategia de “encuadre global” (Tarrow & Dellaporta, 2005, p. 122). En esa línea, “mucho de su visibilidad e identificación se relaciona con la invención y

reinención de la tradición y el conocimiento local, con un ojo puesto en la Constitución nigeriana y las políticas internacionales” (Watts, 2004). El MOSOP puso en marcha dinámicas de extraversion, a través de las cuáles la indigenidad se convirtió en un vehículo para hacer reclamaciones de carácter político porque esta estrategia “se basaba no sólo en la cooptación del discurso global de los derechos sobre la universalización de los derechos humanos y la libertad, sino también, en un proyecto sólido de empoderamiento local popular y movilización de masas, bajo un liderazgo consciente” (Obi, 2005a). Como sostiene Murray (2004):

Las luchas por recursos naturales, que son simultáneamente luchas sobre el significado, tienden a invocar simplificados símbolos puestos de moda a través de procesos de oposición y diálogo, que estrechan la mirada a ciertos significantes y rasgos bien establecidos. En contextos que oponen a poblaciones marginadas contra el Estado puede darse el caso de que sólo se pueda presentar una historia. Cualquiera que sea esta historia, su audibilidad se incrementa desde el momento en que cae en un modelo familiar preestablecido (p. 316).

El encuadre de los derechos de los pueblos indígenas le sirvió al MOSOP para activar otra serie de reclamaciones y rearticular los significados de cuestiones como la ciudadanía, el desarrollo y la democracia (Murray, 2004). La estrategia desplegada por el movimiento ogoni “sirvió de base para la creación de redes con la ONG internacionales y activistas basados en Occidente, que ‘adoptaron’ la lucha de los ogoni, completando el circuito de la conexión de lo local a lo global (Obi, 2001b, p. 185). En ese sentido, los ogoni pusieron en marcha “políticas del lugar”, esto es, “luchas sobre las condiciones naturales y sociales de la existencia, sobre el lugar como una instancia integradora de esas condiciones” (Escobar et al., 2002, p. 28) con una dimensión transnacional, o formas de “globalismo localizado” (Osterweil, 2005).

Las nuevas conexiones establecidas en este contexto entre el MOSOP y otros movimientos y redes transnacionales dieron lugar a muestras de “fricción” (Tsing, 2005). Las demandas del MOSOP se articularon en lenguajes distintos en la esfera local y en la global. La transnacionalización de la causa ogoni provocó que el foco sobre el poder político y las rentas petroleras quedase difuminado en el exterior, donde el conflicto ogoni tenía un carácter medioambiental y de derechos humanos. Uno de los efectos de la estrategia de “cambio de escala” articulado por MOSOP (McAdam et al., 2001), es decir,

del paso de lo local a lo transnacional, es que “perdidas en la retórica anti Shell y anti Abacha, no obstante, estaban las demandas políticas centrales” (Bob, 2005, p. 100).

Esto no hizo más que agravar las divisiones del propio movimiento, que ya se encontraba históricamente dividido en función de líneas de clase, género, generación y clan. El “espacio de la indigenidad” en particular, se convirtió en “un espacio y una forma de articulación compleja y contradictoria, porque no había una sola forma de sujeto político, a pesar de que se quiso presentar como homogéneo” (Watts, 2004). Eso no quiere decir que el MOSOP utilizase su estrategia de encuadre de la identidad en términos de mercado, pues:

...la autoidentificación de un grupo como tribal o indígena no es natural o inevitable, pero tampoco es simplemente algo inventado, adoptado, o impuesto. Es, más bien, un *posicionamiento* que se basa en prácticas, paisajes, y repertorios de significado históricamente sedimentados y emerge a través de patrones particulares de compromiso y lucha. Las coyunturas en la que algunas personas se identifican como indígena, realineando de las formas en que se conectan a la nación, el gobierno y su propio lugar tribal, único, son los productos contingentes de la agencia y el trabajo cultural y político de *articulación* (Murray, 2004, p. 309).

Las articulaciones están sujetas a la rearticulación, son contestables y encuentran sus límites en lo que Hall llama “lugares de reconocimiento”, que son proporcionados por otros. Las identidades culturales “vienen de algún lugar, tienen historias. Pero lejos de estar eternamente fijadas en un un pasado esencializado están sujetas al continuo ‘juego’ de la historia, cultura y poder (Hall, 1990, p. 225). En el Delta, el hecho de que los ogoni se autoidentificasen como indígenas deriva de que la agenda local y la transnacional coincidieron en su propósito y fueron presentadas en un mismo marco discursivo.

Tras la muerte de Abacha en junio de 1998 y su sustitución en el cargo por el General Abdulsalami Abubakar, que preparó la transición a un nuevo gobierno civil, el apoyo internacional al MOSOP, incluso del UNPO, disminuyó y empezó a ser canalizado por pequeñas organizaciones especializadas, como el Project Underground, de Berkeley, Estados Unidos, que se implicaron con poblaciones locales para articular demandas en el marco de la explotación minera; el Essential Action de Washington, que siguió difundiendo la causa ogoni y el Stakeholder Democracy Network, una ONG con sede en Londres que en alianza con organizaciones del sur, realiza incidencia política con los *stakeholders*. La ausencia de Saro-Wiwa, su carisma y su capacidad de estrechar lazos

marcó la disminución de los apoyos. Las divisiones internas del MOSOP también hicieron mella en el activismo internacional, mientras para las ONGs más grandes las divisiones del MOSOP no eran relevantes, para las pequeñas organizaciones y movimientos de solidaridad sí pesaban.

3.3. El legado del MOSOP: “minorías petroleras” y conexiones transnacionales

Entre los años 1993 y 1995 el MOSOP se apropió de idiomas globales para avanzar su agenda local. Gracias a la transnacionalización de su causa, el pueblo ogoni adquirió “un estatus icónico en los debates internacionales acerca del medioambiente y el poder y las responsabilidades corporativas de las multinacionales petroleras” (Ibeanu, 2006, p. 3). Las acciones de MOSOP generaron un efecto multiplicador más allá de las fronteras nigerianas al alentar el nacimiento de movimientos indígenas en el seno de comunidades petroleras, que desde finales de la década de 1990 comenzarían a encontrar un mayor espacio de representatividad gracias a que la indigenidad como categoría política ganaría fuerza (Watts, 2004).

Las actividades del MOSOP tuvieron, por ello, algunos efectos en la política nigeriana y en la conducta de la compañía Shell, que se vio forzada a responder a la visibilidad que adquirieron sus operaciones en el Delta. La empresa tomó algunas medidas e incorporó algunos compromisos de derechos humanos y medioambiente en sus principios mundiales de negocio, además de emprender “proyectos de acción social” en el Delta, aunque las minorías étnicas locales interpretaron estos pasos como meras “acciones cosméticas” (Bob, 2005, p. 114). En el plano estatal, gracias al trabajo del MOSOP, surgió un debate sobre el control de los recursos articulado en torno a las reclamaciones indígenas. En diciembre de 1998 la CD organizó en Lagos una conferencia de nacionalidades, algo inédito desde el *Minorities Forum* de 1954. En su declaración establece que las “nacionalidades étnicas deben ser los bloques constructores de la federación” y que deben contar con el derecho a la autodeterminación. Solicita que se regrese a lo establecido en la Constitución de 1963, que daba poderes similares a los entes regionales y que se recupere la fórmula de derivación del 100%. En el documento se desarrolla también un punto específico sobre el Delta, que crea el Niger Delta Peace Project Committee para establecer un diálogo entre las partes de un conflicto que

considera creado por factores externos y agravado por una brecha comunicativa entre las distintas nacionalidades del área.

En el plano local, gracias a los éxitos derivados de su estrategia transnacional, el MOSOP se convirtió en “una fuente alternativa de poder y autoridad” (Obi, 2001b, p. 182). Desde el asesinato de los “9 ogoni” comenzaron a emerger dos nuevas tendencias en el campo de la contestación social. Por un lado, un sector de las organizaciones y movimientos sociales comenzó a insertarse en el escenario de la cooperación para el desarrollo a través de sus conexiones con redes transnacionales de activismo. La apertura de espacios políticos para la creación de organizaciones se vio facilitada por “el papel de aliados influyentes” que presionaron por el fin de la dictadura en el marco de la legitimación internacional de las retóricas acerca de la democracia y los derechos humanos de la Posguerra Fría (Ukiwo, 2003, p. 16), lo que tuvo efectos particulares sobre los repertorios y lenguajes de contestación desplegados en el Delta. Una serie de variables se convirtieron en un elemento facilitador de la conexión de muchas de esas nuevas organizaciones y movimientos sociales con redes transnacionales de activismo. Desde mediados de la década de 1990, frente a la lógica transnacional de extracción y polución que hemos explorado en el capítulo 2, en el Delta es posible encontrar la lógica del activismo transnacional, fortalecida desde el fin de los regímenes militares.

La mayoría de las organizaciones y movimientos del Delta tienen base local, pero muchas se encuentran conectadas con organizaciones y redes de activismo transnacional. Uno de los efectos de estas conexiones es que las organizaciones y movimientos sociales del Delta han tendido a un proceso de “oenegización” (Álvarez, 1998). Debido a que el paradigma de la “sociedad civil” adquirió un papel rector en las relaciones internacionales en la Posguerra Fría, muchas de las organizaciones del Delta comenzaron a autodenominarse como ONGs y a adoptar lenguajes y repertorios de contestación que pudiesen ser aceptables en la agenda transnacional del desarrollo, lo que ha tenido determinadas consecuencias.

Por otro lado, la contestación comenzó a tomar un curso violento por las limitaciones políticas y las respuestas represivas impuestas por el Estado a las movilizaciones: “la frustración que generaron esas limitaciones transformó el elemento de la rebelión inherente a toda acción colectiva de contestación en odio y violencia” (Osaghae et al.,

2011, pp. 26-27). Otra de las principales tendencias que emergió tras la represión al MOSOP, y que se consolidaría tras el paso a un sistema multipartidista, es la del florecimiento de los llamados grupos vigilantes o milicias de jóvenes, colectivos insurgentes “implicados en actos de violencia como respuesta a la alienación con respecto al Estado, el declive económico, el desempleo y la militarización de la sociedad debido a décadas de gobierno militar” (Osaghae et al., 2011, p. 27). No obstante la diferencia entre una y otra tendencia no es tan clara. Como veremos, “las categorías de activista y militante interactúan y se cruzan” (Adunbi 2015, loc. 3629). A continuación ofreceremos un breve esbozo de la exploración sobre estas dos tendencias referidas, que serán desarrolladas más ampliamente en los próximos dos capítulos.

3.3.1. El encuadre global: indigenidad y “conexión vertical”

Entre los años 1993 y 1995, otras minorías étnicas del Delta (urhobo, ogbia, ikwerre, ijaw...) que enfrentaban similares problemas a los ogoni emularon las estrategias del MOSOP, constituyendo organizaciones con nombres, estructuras y metas parecidas a las de la organización; como el MOSIEN (Movement for the Survival of Ijaw Ethnic Nationality). Lanzaron manifiestos similares a la *Ogoni Bill of Rights* e incluso pidieron consejo a Soro-Wiwa sobre cómo organizarse. Estas organizaciones llevaron a cabo distintas estrategias: algunas se centraron en realizar movilizaciones frente a la industria y otras presionaron a través de mecanismos institucionales. No obstante, “incluso entre los que hicieron *lobby* en el extranjero, la falta de reputación, contactos y recursos limitó sus esfuerzos promocionales”; en apenas dos años el MOSOP consiguió hacerles sombra a todas ellas en la escena internacional, “a menudo eclipsando incluso al movimiento prodemocracia nigeriano, de carácter nacional” (Bob, 2005, p. 55).

Pero una vez que el MOSOP empezó a perder fuerza, el espacio de la indigenidad fue gradualmente ocupado por otros actores en el Delta y “liberó las enormes energías políticas de las minorías étnicas, que recapitulan en algún sentido la historia postcolonial de las políticas clientelistas en Nigeria” (Watts, 2004, p. 265). Gracias al trabajo del MOSOP, las “minorías petroleras” se dieron cuenta de la conexión que existía entre el Estado, las elites locales y las empresas transnacionales; por eso “para que la lucha fuese más eficaz, tenía que trascender el terreno localizado apelando a y conectar con las fuerzas globales simpáticas con la causa” (Obi, 2001a, p. 87). La estrategia de

transnacionalización desplegada por el MOSOP se convirtió en un modelo para el resto de las organizaciones del Delta, que descubrieron que lograr apoyos internacionales podía marcar la diferencia en su lucha.

Cuando a partir de 1996 el caso ogoni desapareció del foco mediático, el Delta siguió siendo relevante para las redes de activismo transnacional. Otros movimientos locales heredaron el legado del MOSOP y comenzaron a articular sus demandas históricas en el lenguaje de los derechos humanos y la indigenidad. Siguiendo la estela de la organización ogoni, algunas organizaciones del Delta que han trascendido las fronteras del Estado nigeriano y generado redes de apoyo internacional son el capítulo nigeriano de Friends of the Earth, Environmental Rights Action (ERA), una organización nigeriana ecologista, que ha conseguido fondos de fundaciones europeas; el Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization (ND-HERO); el Chikoko Movement (CM) y el Ijaw Youth Council (IYC)³⁶.

Estas organizaciones, además de trabajar en la concienciación de la población local y trabajar con las poblaciones locales para lograr su empoderamiento, una mejor gestión de los recursos y tratar de obtener compensaciones, han tratado de mantener la atención internacional sobre el Delta siguiendo la estela del MOSOP, realizando campañas contra la violación de derechos humanos a través de la “conexión vertical” (Schmitz, 2001, p. 150). Sus aliados transnacionales han llevado a cabo campañas contra Shell en sus países de origen, incluidos boicots a sus productos. Aunque algunas hayan desaparecido, como resultado del “Green Backlash” (Rowell, 1996) o su desplazamiento a “algunos de los puntos calientes globales más excitantes”. Internet ha sido una vía importante: en la red se puede encontrar mucha información sobre el MOSOP, pero también sobre el IYC e incluso otras minorías petroleras.

³⁶ Otras son: Ijaw Council for Human Rights (ICHR); Council for Ikwerre Nationality; Ethnic Minority Rights Organisation of Africa (EMIROAF); Southern Minorities Movement (SMM); Movement for the Payments of Reparations to Ogbia (MORETO) Federated Niger Delta Ijaw Community, Ijaw Peace Movement (IPM); Ijaw Youth Council (IYC), Ijaw Elders Forum (IEF) Itsekiri Nationality Patriots, Chikoko; Egbesu Boys of Africa (EBA); Niger Delta Women for Justice (NDWJ); Bayelsa Forum Movement for the Survival of the Ijaw Ethnic Nationality in the Niger Delta; (MOSIEND); Isoko Development Union; Isoko National Youth Movement (INYM); Egi Women’s Movement (EWM), Egi National Congress (ENC), Ogba Solidarity; Traditional Rulers of Oil Mineral Producing Areas of Nigeria (TROMPCON), Urhobo Progressive Union; Urhobo Study Group, Rivers Coalition...

3.3.2. Petroviolencia y control de los recursos: la emergencia de la minoría ijaw

Durante los últimos años de la era militar, las comunidades ijaw retomaron la lucha de Isaac Boro y protagonizaron una fuerte oposición a las operaciones de la industria petrolera en su territorio, comprendido en el estado de Bayelsa, por lo que sufrieron un hostigamiento constante por parte de los militares. Durante la segunda mitad de la década de 1990 grupos de jóvenes ijaw:

... exasperados por el desempleo, el empobrecimiento y la miseria creciente, los inconsistentes y pobres programas de transición, la situación de los derechos humanos, las pobres políticas de reforma económica y la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales, comenzaron a traducir su frustración, enfado y hostilidad en acciones contra el Estado nigeriano, las empresas transnacionales, sus elites y ancianos (Osaghae et al., 2011, p. 13).

En agosto de 1997 unos 1.000 jóvenes del Delta se manifestaron en Aleibiri, Estado de Bayelsa, para demandar el fin de las actividades de Shell en la región. Declararon estar hartos de los desmanes de la empresa en su territorio, de sufrir la contaminación provocada por las fugas de petróleo que la empresa nunca limpiaba, y de no recibir a cambio compensación por ello. Nació así el Chikoko Movement, conocido también como el Pan-Niger Delta Resistance Movement, que bajo el liderazgo del abogado Oronto Douglas, trataba de crear una plataforma de carácter panétnico. El movimiento se describía entonces a sí mismo como “una organización de masas representativa por la defensa de los derechos de las nacionalidades de las minorías étnicas en la rica área del Delta del Níger”. Demandaba que el derecho a la autodeterminación de esas nacionalidades estuviese contemplado en la futura Constitución y exigía a sus “opresores”, el Estado, “sus colaboradores las corporaciones petroleras transnacionales” y las “elites gobernantes, con o sin uniforme”, el fin de las actividades dañinas con el medioambiente y la derogación de las leyes que alienaban a los habitantes del Delta de sus tierras y sus recursos, con el fin de lograr un “desarrollo sostenible” (citado en HRW, 1999a, p. 118).

A inicios de 1998, tras la detención irregular de un miembro de la comunidad ijaw acusado de sedición sin pruebas, un grupo de jóvenes tomó las armas e inició la primera Egbesu War (enero-diciembre 1998), en la que consiguieron liberar a su líder y desarmar a los soldados del gobierno estatal. Poco después, en marzo de 1998, Abacha organizó la

“Marcha de los dos millones de hombres” en Abuja. Desde entonces, el hecho de que el Delta proporcione la mayor parte de las riquezas al gobierno nigeriano ha generado un gran resentimiento en el Delta al haber agravado la percepción de “colonialismo interno” (Obi, 2011, p. 93). En ese sentido:

Para los jóvenes del Delta del Níger que formaron parte de esta extravaganza, el cambio de la capital de Nigeria fue una revelación. Se les salieron los ojos de las órbitas al ver las carreteras lisas, los hoteles relucientes y las espléndidas casas que el dinero del petróleo había comprado para sus gobernantes. Notaron que mientras el Delta tiene miles de ríos pero casi no hay puentes, Abuja tiene cientos de puentes pero no ríos. Se dieron cuenta por primera vez de qué manera tan terrible se les había robado, y desde entonces han alimentado un sentido de agravio implacable (Guest, 2000).

Esta frustración se traduciría en la fundación del Ijaw Youth Council (IYC), que en diciembre de 1998 lanzó la *Declaración de Kaiama*, en la que “jóvenes ijaw de unos 40 clanes de unas 500 comunidades que constituyen la nación ijaw” denunciaban al Gobierno federal y a las empresas transnacionales que operaban en la zona, y declaraban que “todas las tierras y recursos naturales (incluidos los recursos minerales) en el territorio ijaw pertenecen a las comunidades ijaw y son la base de nuestra supervivencia” (IYC, 1998). Además, se declaraban en rebeldía frente a la legislación vigente y solicitaban la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente. Con respecto a la industria, daban un ultimátum para que las empresas transnacionales se fuesen de Ijawland. Al no ver cumplidas sus demandas y recibir en cambio una mayor represión por parte del Gobierno de transición de Abubakar, entre diciembre de 1998 y enero de 1999 se embarcaron en la segunda Egbesu War, a la que llamaron “Operación Cambio Climático”, que finalizó con un gran número de muertos y desplazados en las comunidades ijaw de Yenagoa y Kaiama y un impacto profundo en la economía de la zona.

Una vez constituido, el régimen de Abubakar se abrió a la creación de partidos, que en las elecciones de febrero de 1999 confluyeron en tres grandes: Alliance for Democracy (AD), surgido de NADECO y dominante en el sudoeste, el All People’s Party (APP), que aglutinaba a miembros del régimen de Abacha, y el People Democratic Party (PDP). Olusegun Obasanjo, candidato del PDP, que había gobernado Nigeria bajo un régimen militar entre 1976 y 1979, se convirtió en presidente del país tras unas elecciones consideradas fraudulentas por distintos observadores internacionales.

Conclusiones

En este capítulo hemos trazado las trayectorias históricas que caracterizaron la evolución de las organizaciones y movimientos sociales articulados en torno a los agravios percibidos por las poblaciones del Delta con respecto a las dinámicas de la industria petrolera a partir de mediados de la década de 1980. Este análisis nos ha permitido explorar cómo a partir de entonces, los repertorios de contestación dirigidos contra el sector se vieron enmarcados en un contexto más amplio de movilizaciones contra la aplicación del Plan de Ajuste Estructural promovido por el FMI y contra el autoritarismo ejercido por los regímenes militares de Babangida y Abacha. En el Delta en particular, las contradicciones emanadas del ajuste y la represión estatal se convirtieron en oportunidades políticas contingentes para la articulación de políticas identitarias de carácter étnico.

Su emergencia se relaciona, además, con la apertura de otras dinámicas de carácter transnacional que estos movimientos aprovecharon al articular sus agravios como “minorías petroleras” en el marco federal con cuestiones de carácter “universal”, como la democracia, los derechos humanos y la defensa del medio ambiente, de modo que lograron conectar sus reclamaciones desde lo local hasta lo global, pasando por lo estatal. Durante la década de 1980, las “resistencias”³⁷ en el Delta, articuladas a nivel de clan y comunidad, tenían unos objetivos tímidos, se limitaban a reclamar proyectos de desarrollo para las poblaciones afectadas por la extracción petrolera, al Estado nigeriano y las empresas transnacionales.

A inicios de la década de 1990, las contradicciones surgidas por la consolidación de la retórica de la democracia y los derechos humanos en la esfera transnacional y un contexto estatal marcado por la represión ejercida por los sucesivos regímenes militares, llevaron a los movimientos sociales nigerianos a incidir sobre la necesidad de proteger los derechos civiles y humanos de la población. En el Delta en particular, las políticas de

³⁷ Obi entiende la resistencia en el Delta como “una acción colectiva dirigida al bloqueo de una mayor alienación, expropiación y degradación medioambiental. Representa un proyecto de masas de restitución y autodeterminación frente a la explotación del petróleo de la región por parte de las empresas transnacionales apoyadas por el Estado nigeriano” (Obi, 2005a, p. 318).

ajuste agravaron las diferencias de clase y provocaron nuevas brechas entre las “minorías petroleras” y sus elites, unas fracturas que contribuyeron al surgimiento de nuevas microidentidades que desplegaron nuevos lenguajes en torno a sí mismas y al petróleo.

A partir de mediados de la década de 1990, gracias al trabajo de “encuadre global” puesto en práctica por el MOSOP, las minorías del Delta se dieron cuenta de que la lucha se podía llevar al mismo tiempo en el nivel local y en el global, lo que cambió las dialécticas de las políticas identitarias en la región. La cultura y los mitos se pusieron al servicio de la construcción de identidades étnicas para luchar contra la opresión y por la justicia social. En el Delta se empezó a hablar entonces de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y protección del medioambiente y se empezó a cuestionar la licencia social para operar de las empresas transnacionales. Gracias a esta estrategia el MOSOP consiguió universalizar la lucha del pueblo ogoni, lo que le hizo ganar visibilidad internacional.

A mediados de 1993 las principales ONGs internacionales de defensa de los derechos humanos y medioambiente comenzaron a interesarse por lo que sucedía en el Delta y a prestar su apoyo al movimiento. La red de activismo transnacional dedicada a la causa ogoni era en 1995 muy extensa, y estaba formada por ONGs de incidencia política, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones, universidades y medios de comunicación de Europa y América del Norte. Estas conexiones transnacionales fueron facilitadas fundamentalmente por la presencia de líderes ogoni expatriados, aunque algunas organizaciones enviaron representantes a Nigeria. UNPO fue el más antiguo y potente colaborador y le sirvió de enlace con instituciones europeas y de fuente de información primaria sobre el conflicto. Greenpeace, Friends of the Earth, Amnesty International y Human Rights Watch/Africa elaboraron informes, acudieron a gobiernos de Europa y Norteamérica y llevaron a cabo campañas mediáticas. Las organizaciones medioambientales tuvieron como objetivo a la empresa Shell y promovieron un boicot a sus productos en el contexto europeo. Estas organizaciones sirvieron como avales del MOSOP frente a otras organizaciones de Europa y Estados Unidos que no tenían contactos directos en el Delta.

La represión sufrida por el MOSOP y, en particular, la ejecución por parte de la junta militar de Abacha de los “9 ogoni”, tuvo implicaciones de gran trascendencia en los

órdenes sociales en el Delta y contribuyó a la transnacionalización del conflicto. No obstante, el asesinato de Saro-Wiwa y otros líderes ogoni supuso un debilitamiento de la organización, afectada ya por distintas divisiones relacionadas con los efectos de su estrategia de “cambio de escala” en el plano interno. A pesar de este hecho, dado que las conexiones ya estaban establecidas, muchas organizaciones que habían emulado la estrategia del MOSOP comenzaron a conectarse transnacionalmente, una tendencia que se vio favorecida una vez inaugurada la etapa multipartidista en 1999.

Por otro lado, comenzaron a surgir distintos colectivos en el Delta que, tras haber visto los fracasos en la estrategia pacífica del movimiento ogoni comenzaron a plantear nuevos repertorios de contestación que incluían el uso de medios armados. En particular, tras la *Declaración de Kaiama* de diciembre de 1998, los jóvenes de la minoría ijaw comenzarían a plantear un nuevo desafío al Estado nigeriano y las empresas transnacionales. Como hemos demostrado, lo que quedó claro durante esta segunda etapa de la era militar es que las políticas de contestación puestas en práctica por las poblaciones del Delta son fluidas y complejas, y están constantemente redefiniéndose en relación con la industria del petróleo, como veremos en los siguientes dos capítulos.

CAPÍTULO 4

Políticas de juventud y petroviolencia: la lucha por el control de los recursos en el Delta del siglo XXI

Introducción. “Democratización” y nuevas trayectorias de conflicto

El primer mandato de Obasanjo se inició en mayo de 1999 con la proclamación de la puesta en marcha de una gran reforma económica y una estrategia para la consolidación de la democracia (Ilfife, 2011). El que ya había dirigido el gobierno federal bajo un régimen militar durante la década de 1970 inauguró la nueva etapa política presentándose como el líder capaz de reparar las relaciones del Estado nigeriano con sus aliados internacionales históricos, afectadas tras la represión contra el MOSOP por parte del régimen de Abacha. Los actores internacionales con intereses económicos en el país acogieron con optimismo su victoria (Falola and Heaton, 2008). En la esfera doméstica, Obasanjo también despertó grandes expectativas por su declarado compromiso con el desarrollo, el combate contra la corrupción y la pacificación del Delta del Níger (Ilfife, 2011, p. 238). La emergencia de su administración “estuvo marcada por la nostalgia de un estado de bienestar que pudiese proporcionar las necesidades básicas, a menudo etiquetado eufemísticamente como los *dividendos de la democracia*” (Adejumobi, 2011, p. 9).

Gracias a las políticas macroeconómicas puestas en marcha durante su gobierno, la tasa de inflación bajó, lo que sumado a la subida de los precios internacionales de petróleo en 1999 le proporcionó nuevos beneficios a las arcas estatales. Las reformas neoliberales impactaron positivamente en el crecimiento económico y Nigeria se encontró incluso en condiciones de renegociar su deuda con el Club de París en el año 2005³⁸. Sin embargo, la gran mayoría de la población no se benefició con estas medidas, por lo que las críticas a su gestión de la economía se multiplicaron a partir del primer año en prácticamente todo el territorio estatal, mientras la represión de las actividades de los movimientos sociales ponía de manifiesto que la “democracia” se había convertido en algo “instrumental” en su gobierno (Ilfife, 2011, p. 246).

³⁸ El país saldó su deuda con el grupo de 19 acreedores (entre ellos los gobiernos de Reino Unido, Rusia y Alemania) gracias a que se acordó una quita de 18.000 millones de US \$ (el 60% de la deuda) a cambio de que Nigeria recomprase la deuda remanente tras la cancelación.

En cuanto a la redistribución de las rentas, inicialmente Obasanjo, a pesar de la provisión alcanzada durante la Conferencia Constitucional de 1994-1995 acerca del incremento del principio de derivación, rechazó implementarla e intentó que no implicase a las áreas *offshore* productoras de petróleo. La Constitución de 1999 lo elevó al 13% pero la medida no se hizo efectiva hasta mediados del año 2000 y ha permanecido estable hasta el año 2015. La decisión de llevar a cabo este aumento tuvo que ver con la necesidad de responder a las campañas internacionales que se habían hecho eco de las protestas locales en el Delta durante la década de 1990 y tratar de recuperar así la legitimidad internacional perdida. Pero además, esta medida fue también un intento de desmovilizar a las minorías, a través de la cooptación de los líderes de los movimientos y elites locales con el objetivo de silenciar las protestas para que las actividades de la industria petrolera pudiesen proseguir (Obi, 2011, p. 98) . No obstante, aunque el incremento del principio de derivación impactó en el Delta al elevarse exponencialmente la proporción de rentas petroleras que recibían los principales estados productores, estas ganancias acabaron en manos de las elites locales y no llegaron a una gran parte de la población. Más bien “se reconfiguró el mapa del patronaje” al abrirse el acceso a él “a civiles anteriormente excluidos” gracias al incremento gradual de los precios del petróleo (Nwajiaku, 2012, p. 298).

Otra de las medidas puestas en marcha por Obasanjo para el apaciguamiento de las protestas en el Delta fue la creación en el año 2000 de la NNDC (Niger Delta Development Commission), una agencia federal que combina medidas de desarrollo y otras de carácter militar y que sigue operativa en la actualidad. Su misión es “facilitar el desarrollo rápido, equitativo y sostenible del Delta del Níger”, para convertir la zona en “una región económicamente próspera, socialmente estable, ecológicamente regenerativa y políticamente pacífica”³⁹. La NNDC, que recibe sus fondos del gobierno federal y las empresas petroleras, ha recibido numerosas críticas por su falta de efectividad y transparencia (AI, 2010, p. 55) y la ausencia de participación de la “sociedad civil” en su gestión (ANEJ, 2004, pp. 23-27).

El año 1999 marcó un punto de inflexión en el Delta: tras el fin de la etapa militar los órdenes sociales se vieron afectados por distintas variables tanto locales como

³⁹ Para más información sobre la NNDC consultar su página web: www.nddc.gov.ng

transnacionales. No obstante, aunque el establecimiento de un régimen político multipartidista supuso algunas rupturas con respecto al pasado, no debemos perder de vista las trayectorias históricas ni las continuidades que han venido sucediéndose sobre todo desde la década de 1970 en el complejo panorama social de la región petrolera. En particular, las transformaciones producidas a raíz del cambio en el régimen político en el plano federal a partir de la inauguración del gobierno de Obasanjo deben verse en conexión con los impactos que las contradicciones generadas por la aplicación del PAE en un marco de autoritarismo estatal tuvieron sobre la articulación de los movimientos sociales locales en el periodo inmediatamente anterior. Estos cambios, cuyos efectos se hicieron más visibles durante la transición al multipartidismo, guardan a su vez una relación estrecha con el legado del MOSOP. Uno de los principales impactos de la experiencia del movimiento ogoni en las dinámicas de los movimientos sociales de la etapa postmilitar es que debido a la represión ejercida contra el movimiento ogoni, desde finales de los años 1990 distintos grupos sociales del Delta comenzaron a utilizar estrategias armadas en contra de la industria petrolera ante la constatación de que las estrategias pacíficas no conducían a los resultados esperados.

El establecimiento de un régimen político multipartidista en 1999 provocó una reconfiguración de las relaciones sociales en todo el Delta. La apertura de espacios políticos contribuyó a agudizar la violencia y generar nuevas trayectorias de conflicto interconectadas en la región. Durante la primera década de 2000, estos conflictos alcanzaron “proporciones insurgentes” ya que la falta de legitimidad de las instituciones se unió al surgimiento de complejas fuerzas sociales y políticas que comenzaron a ocupar el espacio político y a ejercer distintos tipos de violencia (Obi, 2011, p. 104). Debido al legado del militarismo, además de agravarse los conflictos preexistentes entre la población local y las fuerzas armadas, surgieron nuevos conflictos de carácter político relacionados con las luchas por el acceso al poder y los recursos.

Históricamente, todos los procesos de transición a la democracia puestos en marcha en Nigeria habían estado guiados por la cúpula militar, de ahí que “hayan proporcionado legitimidad a la elite política para monopolizar el poder estatal, ganarse la credibilidad internacional y controlar el acceso a los providenciales vastos recursos petroleros” (Obi, 2007, p. 379). Desde 1999, los sucesivos procesos electorales (2003, 2007, 2011 y 2015) han estado teñidos de violencia en el Delta (Omotola, 2010), donde se han denunciado

abusos como el uso de grupos armados de jóvenes para intimidar a los oponentes políticos y a los votantes y asegurar así la victoria del PDP (Obi, 2007). Este partido, que estuvo al frente del gobierno federal desde 1999 hasta 2015, ha usado “estrategias coercitivas o militares, como la suspensión, expulsión, intimidación, denegación de privilegios y el ejercicio de la violencia contra los enemigos políticos” (Osumah and Ikelegbe, 2009, p. 193).

Además, una de las expectativas que tenía la población del Delta con la inauguración de la etapa multipartidista era la desmilitarización de la región, algo que no sucedió. La Constitución de 1999 ha sido ampliamente criticada por “mantener el legado de su predecesora en lo que se refiere al entrometimiento militar y la falta de consulta pública, su naturaleza altamente centralizada y la consiguiente disminución del poder local y de los estados” (ICG, 2006a, p. 3). En el Delta se encuentran desplegados distintos elementos de las fuerzas públicas de seguridad. Además, las políticas económicas de corte neoliberal aplicadas desde finales de la década de 1980 facilitaron que se disparase la privatización de la violencia en manos de nuevos actores informales encargados de prestar servicios de protección (milicias, bandas criminales, grupos vigilantes y empresas de seguridad) (Nwajiaku, 2012), lo que generó una mayor inseguridad (Meagher, 2007).

Las compañías privadas de seguridad⁴⁰, contratadas por las transnacionales petroleras, trabajan de la mano de las fuerzas públicas. Dado que al personal de las compañías privadas de seguridad no se les permite llevar armas de fuego, estas propias compañías subcontratan a personal de la Nigerian Police Force y la Mobile Police (Mopol), una especie de fuerza paramilitar llamada popularmente "Kill and Go", muy temida entre la población del Delta, para acompañarlas en sus tareas (Abrahamsem and Williams, 2005, p. 12). Además, desde finales de la década de 1980, miembros de la policía han sido asignados a las compañías petroleras como policías “supernumerarios”, conocidos localmente como “spy police”, oficiales entrenados por la Nigerian Police Force para prestarles servicios de seguridad. Shell cuenta con 1.200 de estos oficiales, incluida una unidad de inteligencia, ExxonMobil con 700 y ChevronTexaco con 250. Shell, además,

⁴⁰ El sector de la seguridad privada en toda Nigeria tiene una enorme fortaleza y se ha convertido en una parte fundamental de la economía nacional: se calcula que existen entre 1.500 y 2.000 compañías privadas de seguridad en el país (Abrahamsem and Williams, 2005, p. 12).

recibe la protección de un equipo de 700 Mopol y 700 oficiales de la Armada y la Marina (Abrahamsem and Williams, 2005, p. 13).

Por otro lado, han surgido nuevos conflictos sociales por reclamaciones sobre tierras en las que hay recursos petroleros. Se han dado nuevas fragmentaciones y alianzas entre la población local y han emergido nuevas identidades en competencia por el acceso a los recursos (Nwajiaku, 2012). En este nuevo contexto, la “mezcla de militarismo, poder estatal, petróleo y formación de clases es una combinación tan combustible que sofoca cualquier perspectiva de una democratización real de las relaciones sociales” (Obi, 2007, p. 380).

A pesar de las medidas establecidas por el gobierno de Obasanjo para apaciguar el conflicto, los movimientos sociales críticos con la industria petrolera no sólo no desaparecieron, sino que se multiplicaron, ampliaron sus demandas y radicalizaron sus repertorios de contestación. De hecho, la propia “naturaleza de las políticas del programa de transición y la renuencia del régimen postmilitar a abordar la cuestión nacional” condujeron “al resurgimiento de grupos sociales que realizan demandas para su incorporación y empoderamiento” (Ukiwo, 2003, p. 116). La apertura de espacios políticos creó nuevas oportunidades para la participación de grupos anteriormente reprimidos por sus actividades de contestación frente a los regímenes militares. El nuevo marco institucional facilitó la apertura de un proceso de redefinición del concepto de ciudadanía y el surgimiento de nuevos debates en torno al federalismo y la redistribución de las rentas derivadas de la explotación de petróleo. Desde la inauguración de esta nueva fase, distintos grupos sociales:

... han cambiado el tempo y la dirección de la lucha del Delta del Níger. Han calibrado el nivel de movilización y participación y, haciéndolo, han transformado la escala y la volatilidad de los cambios civiles y transformado a la región en un *melting pot* de protestas y acciones de masas. También han ampliado y redireccionado los asuntos en contestación, pasando desde las diversas demandas de carácter desarrollista a un programa político que comprende reformas estatales, autodeterminación y control de los recursos (Obi, 2005a, p. 249).

Como ya se ha subrayado, las fuerzas de resistencia local a la industria petrolera presentes en el Delta no son algo homogéneo, se encuentran fragmentadas en base a líneas étnicas, de género, edad y otras afiliaciones (Obi, 2011). Esta diversidad no es algo novedoso,

está en la historia de la contestación política en la región. Durante la era militar los recortes en derechos civiles habían cercenado el activismo, pero al mismo tiempo se convirtieron en el principal agravio movilizador para las organizaciones de movimientos sociales en toda Nigeria. Dado que acabar con el régimen militar era el objetivo común de muchos de estos grupos, hubo momentos en los que se generaron redes y coaliciones que consiguieron implementar una agenda común, como la Campaign for Democracy. De hecho, el propio Delta se convirtió en un elemento articulador, ya que la represión estatal contra el movimiento ogoni fue la responsable de que se generasen redes de solidaridad en el nivel internacional, estatal y local.

Así las cosas, la “guerra de maniobra” emprendida por las organizaciones de movimientos sociales para terminar con la dictadura obtuvo algunos resultados, porque era fácil identificar en qué redes de actores se concentraba el poder. Desde comienzos del siglo XXI, la desaparición de ese frente común a combatir explica en parte la diversificación, dispersión y conflictividad que se ha dado en el campo de la contestación en el Delta, donde se ha iniciado una “larga marcha a través de la sociedad civil” (Robinson, 2003, p. 320)⁴¹.

La miríada de nuevas organizaciones surgida desde la transición al multipartidismo ha desarrollado nuevas dinámicas y repertorios de contestación y estas han creado nuevas narrativas sobre sí mismas en relación con la explotación de los recursos petroleros de la región. A pesar de la diversidad que caracteriza a las organizaciones de movimientos sociales del Delta, desde finales del siglo XX, la mayoría de las demandas es común a casi todas ellas: una mayor proporción de las rentas petroleras, más empleos para la población local, un mayor desarrollo y la limpieza del medioambiente. Algunas van más allá y exigen el control de los recursos y solicitan una conferencia soberana nacional para renegociar las bases de la federación nigeriana, como es el caso de los grupos nacionalistas de los jóvenes ijaw inspirados en la *Declaración de Kaiama* (Obi, 2011). Todas estas demandas están articuladas en diversos lenguajes y no son exclusivas de unos grupos u otros; de hecho, el mapa de las organizaciones y movimientos sociales en el

⁴¹Como recoge Robinson (2003), Gramsci realiza una distinción metodológica entre guerra de maniobra (ataque frontal) o guerra de posición (guerra de trincheras, o de desgaste). En realidad cualquier lucha social implica a las dos. La de maniobra, que se identifica con las nociones tradicionales de revolución, puede tener éxito si localiza sitios identificables de ejercicio de poder (militares, policía), pero el capitalismo ha creado nuevos espacios, el poder se ha dispersado y se ha hecho multidimensional.

Delta se caracteriza por su permeabilidad y elasticidad, lo que permite que en función del interlocutor se hablen unos lenguajes u otros.

4.1. De la *Declaración de Kaiama* a la agudización de la petroviolencia (1998-2000)

Durante los últimos estertores de la etapa militar tuvo lugar otro acontecimiento que influiría también en la evolución de los movimientos sociales de la región a partir de 1999. La *Declaración de Kaiama* de diciembre de 1998 tuvo diversos efectos sobre los repertorios y lenguajes de contestación desplegados en el Delta y también sobre las relaciones entre los distintos grupos sociales articulados en torno a los agravios percibidos por las poblaciones afectadas por las actividades de la industria petrolera. La *Declaración*, y los eventos en los que esta se enmarcó, supuso un punto de inflexión al desatar una movilización masiva en distintos lugares de la región gracias a que “articuló un claro conjunto de demandas políticas que encajaban bien con las narrativas populares sobre la explotación gubernamental y otras felonías” (Reno, 2011, p. 232).

A pesar de que las demandas contenidas en los 10 puntos de este documento se referían específicamente al “pueblo ijaw”, el mismo contenía apelaciones al resto de las minorías étnicas del Delta. En él se acusaba a las empresas transnacionales y al gobierno federal de dividir a las “comunidades” de la región para distraerlas de su lucha común (IYC, 1998). Para combatir este fenómeno, en la *Declaración* los jóvenes ijaw prometían que vivirían en paz con sus vecinos (itsekiri, ilaje, urhobo, isoko, edo, ibibio, ogoni, ekpeye, ikwerre, etc), a quienes ofrecían una mano de “camaradería y amistad” y con quienes se libraría conjuntamente la lucha por “la autodeterminación de todas las nacionalidades étnicas” (IYC, 1998).

A lo largo del año 1999 e inicios de la década de 2000, esta declaración de intenciones se fue concretando progresivamente en diversas alianzas entre organizaciones de distintas bases étnicas, además de en la consolidación de un número creciente de organizaciones de carácter transétnico. Las demandas contenidas en la *Declaración* también lograron encajar con discursos legitimados transnacionalmente a finales de la década de 1990: el uso de ideas como que la región sufría un proceso de “balcanización” (IYC, 1998) da cuenta del guiño que se le pretendía hacer a posibles aliados transnacionales, tanto

gubernamentales como no gubernamentales, sensibilizados con los derechos de las minorías tras el conflicto de los Balcanes.

La respuesta represiva a la *Declaración de Kaiama* del gobierno de transición de Abubakar, que envió a unos 15.000 soldados al estado de Bayelsa para frenar las protestas, terminó con las vidas de más de 200 personas y un número indeterminado de personas torturadas y mujeres violadas (Ekine, 2001, p. 25). Esta respuesta contribuyó a alterar aún más el contenido y la forma de las movilizaciones, sobre todo entre la minoría ijaw, una vez finalizado el proceso de transición e inaugurado el gobierno de Obasanjo (Nwajiaku, 2012). De hecho, entre las diversas variables que influyeron en la evolución de los movimientos sociales articulados frente a la industria petrolera en el Delta a partir de entonces, una de las de mayor peso fue la propia conducta de esta ante sus demandas.

Las respuestas a las movilizaciones sociales por parte de los sucesivos gobiernos desde 1999 y las empresas transnacionales, desde las concesiones en forma de proyectos de desarrollo y los métodos de relaciones públicas hasta la represión (Frynas, 2001, p. 28), contribuyeron a agravar la violencia en la región, en parte porque fueron esencialmente encaminadas a asegurar el suministro de petróleo. La llamada “licencia social para operar”, que legitima las operaciones de la industria frente a las poblaciones situadas en los lugares de extracción y que debe darse en consenso entre todos los actores implicados, tanto “en el centro de sus operaciones globales, en la zona del control político, como en las zonas de extracción” (Rowell et al., 2005, p. 118), había sido cuestionada en ambos espacios desde la represión al MOSOP. Esta se vio todavía más erosionada debido a la respuesta del gobierno federal y las empresas del sector petrolero a las movilizaciones de los ijaw.

Los eventos que rodearon la *Declaración de Kaiama* evidenciaron, además, las fracturas intergeneracionales que se estaban desarrollando desde la década de 1970 entre los movimientos nacionalistas ijaw, que dicen representar al grupo étnico más grande del Delta (se extiende por 6 estados de la región) y cuarto de Nigeria. Estas fracturas se agravaron debido a las consecuencias del ajuste estructural y el autoritarismo estatal aplicados desde mediados de 1980, lo que contribuyó a que tuviese lugar un cambio generacional en la esfera política. La agudización de los índices de desempleo juvenil entre los universitarios y los altos niveles de pobreza entre los jóvenes del Delta tras la

aplicación del PAE dieron lugar a que muchos de los estudiantes que habían estado implicados en las movilizaciones urbanas contra el ajuste estructural desde agrupaciones como el NANS se organizaran en asociaciones de carácter étnico una vez retornados a sus pueblos de origen, junto con otros jóvenes desempleados de la región. Desde la *Declaración de Kaiama*, estas nuevas agrupaciones se convertirían en “agentes capaces de transformar lo que previamente habían sido protestas aisladas contra la falta de responsabilidad de una compañía petrolera” en “un desafío sistemáticamente organizado frente al Estado nigeriano y las multinacionales” (Nwajiaku, 2005, p. 469).

Desde entonces una parte de los jóvenes del Delta ha tendido a la conformación de milicias armadas, grupos vigilantes, bandas, sectas y sociedades secretas (Ukeje et al., 2004), todos ellos considerados como grupos armados civiles implicados “en algunas funciones paramilitares, de seguridad, crimen y control del crimen en la proyección o defensa de causas comunitarias, étnicas, religiosas o políticas” (Osaghae et al., 2011, p. 20). Las más comúnmente conocidas como “milicias armadas” actualmente en los estados de Delta, Rivers y Bayelsa se dicen inspiradas tanto en la rebelión liderada por Isaac Boro en 1966 como en el MOSOP. Las más representativas, como los Egbesu Boys of Africa, la Niger Delta Peoples Volunteer Force (NDPVF), la Federated Niger Delta Ijaw Communities (FNDIC), la Niger Delta Vigilante (NDV) y el Movement For The Emancipation of The Niger-Delta (MEND) se articulan en torno a la identidad ijaw⁴².

Junto a estas “milicias”, lo que se conoce localmente como “cultos” nacieron con el objetivo de protestar frente a las injusticias sociales y “son grupos de individuos dedicados a proveerse seguridad y oportunidades económicas entre sí y sus respectivas comunidades, suscribiéndose a un juramento de lealtad y secretismo y valiéndose sobre todo de medios violentos para conseguir sus fines” (Osaghae et al., 2011, p. 21). Mientras algunos de estos movimientos se alinean con el Estado y/o el gobierno de turno, otros son claramente antiestatales o antigubernamentales, y existen también aquellos sin objetivos políticos claros. Algunos de ellos nacieron ya a inicios de 1990 como fraternidades universitarias, como es el caso de Icelanders, Greenlanders, KKK, Mafia Lords y Vultures.

⁴² Osaghae et al. (2011) distinguen también un tipo de milicia armada de base comunitaria o Warlord, como los Ijaw Freedom Fighters, Mobutu Boys, Niger-delta Freedom Fighters, Atangbata Youths, One More River to Cross Youths, Olabrakon-Opre Youths, Oweiesan-Ogbo, Adaka Marine, Ogbokore Youths, Alagbada Youth of Kombo o Tomgbolo Boys.

Las milicias y los cultos contemporáneos son movimientos muy próximos, de hecho la mayoría de las milicias son redes extensas y laxas de cultos. Las llamadas “políticas de juventud” desplegadas por estos grupos han surgido por la frustración de toda una generación que busca desafiar las formas tradicionales de poder (Watts, 2007). El surgimiento de estos colectivos responde a la incapacidad del Estado nigeriano para mediar en el proceso de transición de jóvenes a adultos. Una vez perdidas las tradicionales y la confianza en sus elites y mayores, los jóvenes buscan, cada vez más, “nuevas avenidas para la socialización” (Osaghae et al., 2011, p. 3). En el Delta ha surgido toda una generación que se identifica como “militante” (Ikelegbe, 2006)⁴³. Estos grupos apuntan a sus agravios generacionales (pobreza, falta de empleo y de oportunidades educativas) como las razones que incitan sus acciones colectivas de contestación.

Estos colectivos emplean distintas tácticas, desde cortes de carreteras y el envío de delegaciones representativas a encuentros con miembros del gobierno o la industria hasta métodos violentos que incluyen los ataques contra las infraestructuras y secuestros de personal de las empresas transnacionales, para conseguir generar caos y la alteración total del sistema; lo que provoca que las compañías pierdan producción y el gobierno legitimidad (Osaghae & Ikelegbe, 2007). Pero además, estos grupos se dedican a recolectar “impuestos” entre la población, que usan para construir escuelas y otorgar microcréditos a mujeres, de modo que legitiman su poder allí donde el Estado está ausente. Muchas personas prefieren pagarles impuestos a ellos que a los que gobiernan desde la distancia y no son visibles en las áreas rurales del Delta.

Existe una línea de investigación que aprecia una diferencia clara entre los grupos armados de jóvenes ijaw y los llamados “movimientos de elite”, ya que los primeros se construirían como “movimientos antisistémicos”, pues requieren un cambio en el sistema para conseguir sus demandas de “cambio estructural” (Osaghae et al., 2011, p. 20). Para Osaghae et al. (2011), dadas sus actividades de sabotaje contra la industria petrolera, estos colectivos han conseguido captar la atención internacional, oscureciendo el trabajo de los llamados “movimientos sistémicos” (p. 20). No obstante, a pesar de la brecha

⁴³ Un término que se refiere a “hombres armados que realizan demandas políticas, incluida la liberación de los líderes encarcelados, reparaciones económicas para las comunidades, el cambio de los candidatos electorales y un gran porcentaje de las rentas petroleras, entre otras cuestiones” (Osaghae et al., 2011, p. 19).

intergeneracional, en realidad la línea que separa a los “movimientos sistémicos” de los “antisistémicos” es difusa. En ese sentido resulta útil la distinción realizada por Latham et al., (2001) entre las “instituciones no estatales jurídicas” y las “no jurídicas”. Las jurídicas serían las categorizadas como “sociedad civil” tanto local como “global” (ONGs internacionales, redes de incidencia política). Pero estas pueden estar conectadas con otras no jurídicas, como las redes étnicas, sistemas de patronaje o “movimientos no civiles” (p. 17), lo que se hace visible en el panorama social del Delta.

De hecho, la membresía en los grupos insurgentes y en las organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos y medioambientales que analizaremos en el próximo capítulo es fluida. Muchos de los insurgentes, que se han autoerigido como liberadores de las comunidades oprimidas de la región, se mueven también en redes de activismo local y transnacional gracias a que fueron activistas prodemocracia en las décadas de 1980 y 1990, un periodo en el que adquirieron un capital social que han usado luego para desplegar la retórica de los derechos humanos y medioambientales (Adunbi, 2015).

Además, al mismo tiempo estos se insertan en el complejo petrolero a través del contrabando de crudo, el “lubricante” necesario para activar todo un “conjunto precedente de agravios” (Watts, 2007, p. 640). Las milicias armadas se benefician del comercio de petróleo y forman parte de una compleja red criminal transnacional. Al contrabando de petróleo se le conoce con el nombre de *bunkering*: un término propio de la industria petrolera usado, en general, para referirse al abastecimiento de petróleo a un barco para su propio uso, y en el Delta en particular, para atender a la obtención “ilegal” de petróleo (UNEP, 2011, p. 101)⁴⁴. Ese hecho ha provocado que la literatura dominante (Collier & Hoeffler, 2003) obvie la existencia de agravios y afirme que lo único que mueve a estos grupos es la codicia⁴⁵.

⁴⁴ Teniendo en cuenta que la violencia criminal puede ser un instrumento deliberado para la lucha insurgente, un exceso por parte de las resistencias, pero también una simple excusa para el saqueo (Ikelegbe, 2011), ha llegado un momento en el que es difícil marcar la línea entre la criminalidad y la resistencia legítima. Hay autores que han tratado de establecer esos límites; en ese sentido, Ikelegbe identifica tres tipos de milicias (2008). Las “milicias insurgentes” tendrían como razón de ser la lucha contra la industria petrolera a través de la movilización de las minorías étnicas (la Niger Delta Ijaw Communities (FNDIC), el Movement for the Survival of Ijaw Ethnic Minorities in the Niger Delta (MOSIEND), la Niger Delta Peoples Volunteer Force (NDPVF) y el MEND, todas ellas parte del proyecto pan-ijaw, serían las más representativas). En segundo lugar, las “milicias insurgentes desviadas” estarían dirigidas por señores de la guerra locales y tendrían estrechas relaciones con la elite gobernante, que las usan para el robo de petróleo, como es el caso de: Dee Gbam, De Well, Bush Boys, Icelanders y la Niger Delta Vigilante (NDV). Por último, los “grupos criminales armados” entrarían en la categoría propuesta por los teóricos de la “economía de la guerra” (Collier & Hoeffler, 2003; Oyefusi, 2007; Allen, 1999; Reno, 2003).

Pero pensar, como sostiene la tesis de la economía de la guerra, “que la codicia es opuesta a los agravios, que la que protesta pacífica está en oposición a la rebelión, que el gobierno se opone a la rebelión y que la rebelión equivale al crimen organizado” son errores de partida (Watts, 2007, p. 650). En realidad, la separación entre el gobierno nigeriano, las empresas transnacionales y las milicias armadas no es tan clara como se plantea desde estas perspectivas, de hecho esta línea se caracteriza por su porosidad, ya que “el Estado nigeriano en sus variadas expresiones y los rebeldes son ambos opositores y orgánicamente autosuficientes” (Watts, 2007, p. 651). Según Omolubi Nuwuwumi, miembro del Waterways Security Committee, una entidad dependiente de un área de gobierno local dedicada a investigar los secuestros llevados a cabo por grupos militantes: “los soldados están muy involucrados. No hay ninguna actividad de *bunkering* en el Delta en la que no estén implicados los militares”. Frente a esta acusación, el portavoz del ejército, Abubakar, apunta que “hay huevos buenos y malos en el ejército” pero sostiene que esta no es una situación generalizada (“Under-development continues to fuel oil theft”, 2008).

Para estos grupos, el control del territorio es crucial, ya que así controlan las rutas del contrabando de petróleo, que funcionan como los grandes cárteles de la droga. Este interés ha generado alianzas entre ellos y la industria petrolera, los partidos políticos e incluso entre miembros del gobierno, que les proporcionan armas o les dan contactos para comprarlas (Osaghae et al., 2011). Estas relaciones entre las elites políticas y los grupos armados de jóvenes son claramente perceptibles durante los periodos electorales. En las elecciones de 1999, 2003 y 2007 los políticos locales armaron a estos colectivos para que amedrentasen a sus oponentes y conseguir así votos en las elecciones a cambio de empleo, educación y dinero, pero luego los traicionaron y se desvincularon públicamente de ellos; lo que derivó en nuevas fragmentaciones sociales y conflictos. Como nos señala Ewa Cholewa, de la ONG británico-nigeriana Stakeholders Democracy Network (SDN), este hecho ha generado “una espiral de violencia” (Cholewa, 2011)⁴⁶. Los observadores internacionales reportaron cientos de incidentes de violencia electoral con un resultado de al menos 105 muertes en 2003 y más de 300 en 2007 (ICG, 2011, p. 4).

⁴⁶ Ewa Cholewa, investigadora de Stakeholders Democracy Network (SDN), entrevista personal, Londres (16/06/2011).

La consecuencia de las relaciones ambivalentes entre las elites políticas y los grupos armados de jóvenes es que “habiendo ya adquirido los instrumentos de violencia estos grupos no son fácilmente sometibles a una posición de patronaje obediente” (Boas, 2011, p. 121). Gradualmente, los grupos insurgentes comenzaron a desarrollar nuevos repertorios de contestación, como los secuestros de personal de la industria y los ataques con bomba hacia intereses petroleros. La violencia no sólo les proporcionó un sentido de identidad e integración, les dio también el acceso al empleo y se convirtió en una potencial vía de acumulación (Allen, 1999, p. 372). Podríamos ver esta evolución como un “matrimonio de conveniencia” mal resuelto, dado que las elites fallaron en controlar el “monstruo” que habían creado, que acabaría desarrollando su propia agenda (Boas, 2011, p. 121).

De todos modos, en realidad estas actividades no son tan novedosas como sostienen estas perspectivas, sino que son una prolongación de las “*economías paralelas* que se desarrollaron en torno a la producción, venta y marketing de petróleo desde el *boom* petrolero de inicios de la década de 1970” (Nwajiaku, 2012, p. 297). La economía de la rebelión y la oficial son “caras de la misma moneda” que desvelan la existencia de una “unión cómplice” entre actores estatales y no estatales (Nwajiaku, 2012, p. 296), porque el petróleo tiene la especificidad de ser un recurso natural que siempre acaba vendiéndose en mercados legales. En ese sentido, hay una economía petrolera oficial y otra no oficial (Meagher, 2010) y la propia insurgencia es responsable de crear un “entorno propicio” gracias al cual se benefician tanto el estado nigeriano, como la industria petrolera y los líderes militantes (Nwajiaku, 2012, p. 296).

Las empresas transnacionales usan también a los jóvenes de la región, a los que ofrecen “contratos de vigilancia” para que les sirvan de fuerzas privadas de seguridad para ser empleadas en contra de aquellos que protesten frente a sus actividades. Otra de las tácticas es atender a sus demandas económicas para evitar los secuestros y los ataques contra las instalaciones petroleras. Les pagan a algunos los jóvenes para disuadirlos de llevar a cabo acciones de sabotaje contra sus instalaciones que interrumpen sus operaciones, lo que los hace sentirse como los verdaderos propietarios del petróleo (Adunbi, 2015, loc. 3102). A las compañías les resulta más barato realizar estos pagos que arreglar los estragos, lo hacen a través de terceros contratistas, porque no pueden hacer pagos legalmente que excedan “razones de negocio legítimas” (Shell, 2004). El director de la Nigerian National

Petroleum Corporation llegó a admitir que su institución había pagado a militantes para que le permitiesen reparar un oleoducto, aunque posteriormente se desdijo de esta afirmación.

Lo complicado ahora es ver cuál es la lógica que domina ya que los roles se superponen. Los mismos que realizan ataques contra la industria guiados por motivaciones políticas funcionan al mismo tiempo como bandidos que trabajan para las elites contra las que se están rebelando y llevan a cabo actos criminales sin contenido político alguno. A pesar de todo lo anterior, lo que no ha y que perder de vista es que aunque existan estas relaciones contradictorias, eso no hace que los agravios de las poblaciones del Delta afectadas por la extracción de petróleo sean menos reales. Por otro lado, aunque estos grupos armados concentren todo el interés de la academia y la prensa internacional, existen multitud de colectivos en el Delta que realizan sus demandas frente al gobierno y la industria petrolera a través de estrategias pacíficas, como es el caso de muchas organizaciones de mujeres.

4.1.1. Nuevos lenguajes, viejas demandas: reclamaciones en torno al petróleo

Tras sesenta años de explotación, el petróleo ha contribuido a la reconfiguración de las formas de gobernanza en el Delta y se ha convertido en la base sobre la que se pueden activar distintos tipos de reclamaciones (Watts, 2004, p. 71). La región es un ejemplo claro de que la “acumulación por desposesión” puede ser la responsable del surgimiento de “resistencias” (Obi, 2010a, p. 445). Al analizar los discursos de distintos movimientos representativos del Delta desde el fin de la etapa militar se puede apreciar que parten de la asunción de que la extracción de petróleo es sinónimo de injusticia, marginalización y desposesión, y esta retórica se encuentra tanto en la *Ogoni Bill of Rights* del MOSOP y la *Declaración de Kaiama* del IYC, como en las declaraciones del MEND, la cara visible de la insurgencia pan-Ijaw desde 2006 (Obi, 2008, pp. 423–428; Ukiwo, 2007).

En el Delta existe la percepción colectiva de que “la riqueza petrolera es controlada por las elites dirigentes de las mayorías étnicas de otras zonas del país, no productoras de petróleo, que dominan el gobierno federal, mientras las minorías étnicas de la región que produce el petróleo, la ‘gallina de los huevos de oro’, sufre de abandono, polución y subdesarrollo”, que se asocian directamente al ‘principio de derivación’ (Obi, 2010b, p.

223). Debido a las operaciones de la industria petrolera, el Delta es una de las regiones del mundo más devastadas desde el punto de vista medioambiental; la extracción de petróleo ha tenido múltiples impactos sobre los ecosistemas locales, lo que ha derivado en la pérdida de medios de subsistencia para la población y ha provocado nuevos patrones migratorios campo-ciudad. Muchos de los nuevos migrantes urbanos no encuentran empleo y pasan a engrosar las bolsas de pobreza, lo que alienta el surgimiento de “nuevas patologías sociales (violencia intrafamiliar, surgimiento de sectas, de redes de tráfico sexual...)” (Ahonsi, 2011, p. 30). Todo esto, unido a la falta de perspectivas laborales en la región ha generado según diversos autores, una percepción de “deprivación” relativa (Ahonsi, 2011; Tar, 2008; Osaghae & Ikelegbe, 2011).

Este enfoque es el más generalizado entre las organizaciones y movimientos del Delta y es el que recoge en gran medida la literatura paracadémica de las ONGs internacionales solidarias con sus causas (AI, 2005, 2009, 2010; HRW, 1999a; FEI, 2002). En un informe de Amnistía Internacional (2005), por ejemplo, Eghare W.O Ojhogar, jefe de la “comunidad” urhobo, uno de cuyos miembros murió debido a la represión de las fuerzas de seguridad durante una protesta en la terminal petrolera de Chevron Escravos en febrero de 2005, declara que la situación en el Delta:

... es como el paraíso y el infierno. Ellos tienen todo. Nosotros no tenemos nada. Tiran nuestras demandas a la basura. Ellos son la causa de todos nuestros problemas. Si protestamos mandan soldados. Firman acuerdos con nosotros y luego nos ignoran. Tenemos graduados hambrientos, sin trabajo. Y ellos traen a gente de Lagos a trabajar aquí (p. 1).

En la misma línea, Boniface Dumpe, director del Centre for Corporate Social Responsibility (CSCR), una pequeña ONG con sede en Port Harcourt, entrevistado para esta investigación, aduce que “las comunidades han sido marginadas desde los inicios de la exploración de petróleo y eso es por lo que han estado agitando por una mejora y abogando por la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales, que den desarrollo y respeten el medioambiente” (Dumpe 2008)⁴⁷. Sostiene que esas protestas han sido reprimidas ya desde la etapa militar y se han llevado a cabo “violaciones de derechos humanos”. Dumpe nos pone como ejemplo lo sucedido en Umuechem, en Rivers State, en octubre del año 1990, donde:

⁴⁷ Boniface Dumpe, director del Center for Social and Corporate Responsibility (CSCR), entrevista personal en Abuja, Nigeria, durante la celebración del *Publish What You Pay Africa Regional Meeting* (10/09/2008).

Las protestas pacíficas de los jóvenes de la comunidad llevaron a Shell a pedir la intervención de la MOPOL. Tras esta intervención, 80 personas fueron asesinadas y cientos de casas y cultivos destrozados. Hata el momento, a pesar de que el gobierno ha admitido que aquel fue un caso de terrible, y la compañía también admitió que fue un error que tratarían de evitar en el futuro, no se ha dado ningún tipo de compensación o reparación. Nosotros hemos presentado este caso en nuestros encuentros con la compañía, dijeron que harían algo pero aunque hayan dado algunos pasos, esto no ha supuesto ningún tipo de mejora para la comunidad (Dumpe, 2008).

Este activista señala que la “frustración” de las “comunidades” por los impactos de la industria petrolera está detrás del surgimiento de los grupos armados de jóvenes. Apunta a la inacción de las compañías como detonante de la violencia y marca un punto de inflexión en la ejecución de los 9 miembros del MOSOP, “cuando la agitación resultó en abusos de derechos humanos y envió una señal al resto de la gente del Delta”. Esta señal dejó claro que “la agitación pacífica no traería los resultados deseados” (Dumpe, 2008). La visión de Dumpe encontraría su reflejo en la academia en la tesis de la frustración-agresión (Dollard et al., 1939). Según esta perspectiva, el hecho de que esta frustración derive en violencia se debe a una reacción a la represión ejercida por el ejército y por los políticos que han instrumentalizado los agravios de la población para sus intereses, e incluso los han alimentado (Osaghae & Ikelegbe, 2011).

No obstante, aunque esta retórica se ha convertido en “oficial” e incuestionable en el Delta, no hay que perder de vista que “los procesos de producción y exploración de petróleo en sí mismos han provocado altos niveles de diferenciación social, enriqueciendo a algunos mientras empobrecen a otros tanto material como políticamente” (Nwajiaku, 2005, p. 477). Ya desde la década de 1970, como vimos en el capítulo 2, algunas élites del Delta ganaron acceso al Estado a través de sus posiciones en los gobiernos locales de la región, alimentados en gran medida por las rentas petroleras. Pero además, las empresas transnacionales empezaron entonces a relacionarse con los “líderes tradicionales” del área, a los que otorgaban ciertos beneficios materiales con el objetivo de que estos contribuyesen a pacificar a las poblaciones que pudiesen estar molestas con sus actividades. Las compañías adoptaron inicialmente un enfoque de *pay as you go* en su relación con las poblaciones locales. A través de regalos trataban de “mantenerlas fuera de su alcance y asegurar el derecho de paso local” (Frynas, 2001).

Tras la experiencia de Shell con el MOSOP, a partir de mediados de la década de 1990, las compañías comenzaron a ver erosionada su licencia social para operar y se dieron cuenta de que para poder seguir extrayendo petróleo debían innovar en sus propuestas de RSC. De este modo adoptaron estrategias de “asistencia comunitaria” o “desarrollo comunitario” y comenzaron a dirigir muchos más fondos a esta materia y a elaborar proyectos más grandes, como la construcción de infraestructuras y hospitales. Con el fin de la etapa militar, el acercamiento de las empresas transnacionales a las poblaciones locales del Delta fortaleció esa línea, como exploraremos en el capítulo 5.

En este nuevo marco de asociacionismo, la firma de MOUs entre poblaciones del Delta y compañías se ha popularizado; pero los críticos con este nuevo acercamiento sustentan sus argumentos en que este sigue sin atender a los agravios políticos de las poblaciones (sus reclamaciones acerca del “verdadero federalismo” y el “control de los recursos”). Las poblaciones afectadas por la extracción petrolera se quejan, además, de la falta de compromiso de la industria, incluso con respecto a lo establecido en los MOU que han firmado con ellas. Todas estas estrategias han recibido críticas por parte de los propios afectados y sus aliados transnacionales, críticas que han sido reflejadas por la academia, al considerar que este sistema es “inherentemente imperfecto” por no tener en cuenta las realidades locales (Frynas, 2001, p. 41). Las estrategias de desarrollo y los planes de compensación llevados a cabo por las compañías petroleras han generado nuevas fragmentaciones sociales y violencia inter e intraétnica. Los activistas y personal de ONGs sostienen que las empresas hacen promesas no realistas para mantener apaciguados a los afectados pero una vez que han asegurado la producción de petróleo y suavizado las protestas van retrasando los proyectos.

Además, desde la década de 1990, los Community Development Committees (CDCs), instituciones creadas por el gobierno federal en 1978 para encargarse de gestionar los proyectos de desarrollo, han sustituido a los “líderes tradicionales” y se han convertido en los interlocutores principales de las empresas transnacionales: “los puestos en las CDC se han convertido así en importantes sitios de acumulación y son muy disputados, determinando el acceso a oportunidades de empleo así como una parte de las compensaciones a las comunidades por temas relacionados con el petróleo” (Nwajiaku, 2005, p. 480). Al facilitar el acceso al “desarrollo” a unos y no a otros se han generado

sentimientos de competitividad y animadversión entre los grupos locales y sus vecinos, como veremos más adelante en el caso de los ijaw, itsekiri y urhobo.

Estas tensiones se han agravado porque las empresas han establecido sus propias categorías sociales en la región. Usan el concepto de “comunidad de acogida” para referirse a la responsabilidad que tienen con respecto a la población local más cercana a sus instalaciones (Frynas, 2009, p. 130). Dentro de estas “comunidades” existe también la categoría de “familia de acogida”, que sería aquella más directamente afectada por sus operaciones dado que estas se desarrollan en sus tierras. Por último existe la categoría de “comunidades impactadas”, que sin ser ricas en petróleo, se ven afectadas por el paso de algún oleoducto.

Todos ellos son términos muy contestados en el Delta, donde formar parte de una de estas “comunidades” podría dar acceso a los recursos petroleros y a los beneficios que proporciona la empresa tras la firma de un MOU con ellas. En el caso de las “comunidades de acogida” estos beneficios van desde la construcción de baños públicos, escuelas y ayuntamientos hasta el ofrecimiento de contratos a determinados individuos para construirlos; mientras en el caso de las “familias de acogida” a estas se les proporcionan contratos especiales de seguridad y limpieza de las instalaciones petroleras. De este modo, las empresas transnacionales han empezado a crear nuevos espacios de gobernanza dando lugar a que se desarrollen luchas entre las poblaciones para entrar a formar parte de esas categorías y ganarse así la “ciudadanía petrolera” (Adunbi, 2015, loc. 2866). De este modo, la capacidad de las transnacionales “para distribuir el patrocinio de la misma manera en la que lo ha hecho el Estado ha puesto en marcha procesos similares de imaginación étnica y la proliferación de micro-identidades nuevas y útiles capaces de asegurar el acceso al petróleo mientras le niegan el acceso a otros (Nwajiaku, 2005, p. 492).

Estas prácticas por parte de las empresas petroleras han generado tres niveles de conflicto: en el seno de las propias “familias de acogida”, en las propias “comunidades de acogida” y entre “comunidades de acogida” y “comunidades impactadas” (Adunbi, 2015). Además, algunos grupos sociales se han dado cuenta de que el uso de la violencia puede hacerles ganar acceso a los beneficios derivados del petróleo, como es el caso de algunos de los grupos armados articulados en torno a la identidad ijaw. Una violencia que se ha

visto facilitada porque en el Delta existe un muy fácil acceso a armas ligeras compradas en las redes de contrabando que operan en Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón y Nigeria, con origen la mayor parte de las veces en Europa del este y Asia. Uno de los principales líderes militantes declaró en 2005 que para los grupos insurgentes “es muy sencillo conseguir armas” (AK-47, pistolas, granadas...) desde barcos que navegan por el Golfo de Guinea (“Widespread availability of small arms a major security issue”, 2006).

4.2. El nacionalismo ijaw: alianzas, fracturas y rearticulaciones en torno a la etnicidad (2000-2005)

Los orígenes del nacionalismo étnico basado en la idea de la autodeterminación se remontan a los inicios de la construcción federal, cuando las minorías comenzaron a sentirse excluidas, pero su expresión se ha recrudecido desde la década de 1990. Desde entonces, los movimientos etnonacionalistas en el Delta son tan relevantes que han conseguido “fortalecer su legitimidad y se han asegurado de que la resolución de la cuestión étnica – o la Cuestión Nacional, como se le llama en muchos países- sea un elemento clave en la agenda de democratización” (Osaghae, 2006, p. 13)⁴⁸. Desde 1999, el lenguaje de la etnicidad, que en el plano local había guiado la estrategia de movimientos como el MOSOP, ha vuelto a tomar fuerza como vehículo para las acciones de contestación en el Delta, sobre todo en el caso de los ijaw. En este sentido, Ben Amunwa, un activista originario de la región afincado en Londres, afirma, por ejemplo, que:

El MOSOP hizo esfuerzos por crear la identidad ogoni, Ogoniland, cuando en realidad los contactos entre los ogoni y los igbo, sus vecinos, son muy fuertes, las formas culturales son muy complejas y las comparten. Hoy la etnicidad es un vehículo para la redefinición de la nacionalidad panijaw, como lo fue la *Declaración de Kaiama*. Hay gente en ijawland que ni siquiera habla la lengua, pero suscribe esas declaraciones a esas nociones más amplias porque es conveniente para la acción política. Sienten que así van a ser escuchados por los políticos locales. En la Nigeria post militar parece algo efectivo. Llegan a las comunidades y les dicen: vamos a ir juntos contra las compañías, y así se forma (Amunwa 2013)⁴⁹.

Las narrativas empleadas por los nacionalistas ijaw contemporáneos apelan a la existencia del pueblo ijaw desde mucho tiempo antes del descubrimiento de petróleo en sus tierras,

⁴⁸ La idea de la autodeterminación en el Delta está estrechamente vinculada a “la privación étnica, la exclusión, la explotación, discriminación y desventajas, particularmente en relación con la contribución y distribución de recursos, la representación política y la atención en materia de desarrollo” (Osaghae et al., 2011, p. 9).

⁴⁹ Ben Amunwa, ex activista de la organización británica Platform London y abogado, entrevista personal, Londres (20/01/2013).

que se extenderían desde el estado de Ondo, en el sudoeste nigeriano, hasta Akwa Ibon, en el sudeste. Estas narrativas se basan en la idea de que la “minoría ijaw” ha sido marginada políticamente desde el descubrimiento de los yacimientos petroleros a finales de la década de 1950 y afectada por los problemas ecológicos derivados de su explotación. Sin embargo, si bien es cierto que han proliferado movimientos panétnicos en el Delta, como el ijaw, también lo es que “la cuestión de la pertenencia étnica es algo más complejo, ampliamente contestado y no establecido, en el cual los intereses de diferentes generaciones y clases sociales colisiona” (Nwajiaku, 2005, pp. 460-461). De hecho, las políticas petroleras han contribuido también a fragmentar esta identidad ijaw, como veremos.

En general, desde inicios del siglo XXI las movilizaciones frente a la industria petrolera de los grupos nacionalistas ijaw se articulan en torno a dos marcos conceptuales: la idea de la autodeterminación y el concepto del control de los recursos. Si estas demandas se viesen satisfechas, estos colectivos cuentan con que tendrían garantizada la autonomía soberana (política y económica) para manejar los recursos petroleros. En definitiva, “buscan la seguridad política que un Estado nigeriano fuerte puede ofrecer; pero la autonomía política para decidir la naturaleza y las fronteras en las que este tiene que operar” (Kalu, 2008, p. 184). Las luchas por la autodeterminación entre estos grupos han tomado dos formas. Una de ellas es el “nacionalismo de acomodación” (Osaghae, 2001), un enfoque de incidencia política de carácter pacifista que demanda una mayor autonomía con respecto al Estado central a través de la creación de más estados y gobiernos locales como solución al empobrecimiento de la población local. Este es el que ejercen en gran medida los movimientos de elite, como INC (Ijaw National Council).

La segunda y más generalizada actualmente es el “nacionalismo de autodeterminación” o “nacionalismo de control de los recursos”, que es el que llevan a cabo los jóvenes ijaw inspirados en movimientos como el Ijaw Youth Council (IYC) (Osaghae, 2001). La principal reivindicación de estos grupos de jóvenes es una reestructuración del Estado nigeriano en consonancia con un “verdadero federalismo” (Ejobowah, 1999), por lo que solicitan una nueva Constitución que le dé mayor autonomía política a la región, la creación de nuevas unidades de gobierno y la derogación de los decretos federales que perjudican a la población del Delta (*Petroleum Decree, Minerals Decree, Land Use Decree*).

Este imaginario responde a un proyecto de carácter emancipador, que además de incluir demandas materiales relacionadas con la justicia social, apunta directamente a la reconstrucción radical de la federación en base al respeto a la democracia y a los derechos de las “nacionalidades étnicas minoritarias”, cuyo pilar sería el derecho de autodeterminación (Obi, 2001b, p. 189). En este sentido, Alhaji Muhajid Dokubu-Asari, líder de la NDPVF, una de las milicias armadas más representativas del estado de Rivers, apunta que la organización a la que representa exige la realización de una “conferencia soberana nacional para que así podamos decidir si queremos seguir siendo parte de Nigeria” (“Self-styled rebel seeks independence for oil-producing Niger delta”, 2004).

Grupos como la NDPVF y la Niger Delta Vigilante (NDV) exigen también al Estado su compromiso en el combate contra la pobreza, la construcción de servicios básicos e infraestructuras y la lucha contra el desempleo, sobre todo entre los jóvenes (Kalu, 2008). En palabras de Ateke Tom, líder de NDV, una milicia que realiza sus actividades en torno a la ciudad de Port Harcourt, donde rivaliza con la NDPVF: “nosotros, el pueblo ijaw, estamos sufriendo mucho y le hemos dicho al presidente que debería tratar de encontrar trabajo para nuestros chicos. Si no puede encontrar empleos, esta paz no durará” (Olojede, 2004). Además, estos colectivos apuntan a la necesidad de generar un desarrollo sostenible en la región a través del control de los recursos en manos de la población local, que empezaría por la eliminación del principio de derivación, que ya fue el centro de las demandas del MOSOP a inicios de la década de 1990 y que fueron argumentadas en la *Ogoni Bill of Rights*; y de las reclamaciones hechas por el IYC en la *Declaración de Kaiama* de 1998.

El concepto de “control de los recursos”, popularizado desde inicios del siglo XXI por los grupos de jóvenes ijaw, define las tensiones entre dos fuerzas sociales: las poblaciones propietarias de la tierra rica en petróleo que no se benefician de su explotación y aquellos que controlan el Estado y el poder y son beneficiarios de esa riqueza petrolera⁵⁰. De los debates sobre cómo conseguir que ese petróleo beneficie a esas poblaciones locales ha surgido el concepto. Las políticas de control de los recursos desplegadas en el Delta se

⁵⁰ La idea del control de los recursos tiene tres componentes: el poder y derecho de una “comunidad” para obtener fondos a través de la imposición de impuestos en su territorio, el derecho ejecutivo sobre la propiedad de los recursos y el derecho de aduana en los bienes importados y exportados de su territorio.

articulan en torno a la retórica de los derechos (Ibeanu, 2006, p. 8), una retórica empleada de diversas maneras por todos los actores con intereses en el territorio. Los políticos y elites locales solicitan que la derivación regrese al menos al 50% utilizando la retórica del derecho al desarrollo. Mientras, el gobierno federal y las elites de carácter estatal, amparadas en la retórica de la paz y la seguridad, justifican su mantenimiento en el 13% con el hecho de que la violencia y la corrupción presentes en el Delta son incompatibles con su propia idea de desarrollo (Ibeanu, 2006).

En cuanto a los movimientos de jóvenes ijaw, estos solicitan el incremento del principio de derivación al 25% y consideran que una vez que se rediseñe la cuestión del control sobre los recursos, el principio debe desaparecer definitivamente (Ibeanu, 2006). Dado que ese control se relaciona con la autodeterminación y se considera esencial para la supervivencia de los pueblos de la región, para estos colectivos este “no es negociable” (Osaghae et al., 2011, p. 10). Asari sostiene, por ejemplo, que “el petróleo nos pertenece, no lo estamos robando. Es el Estado nigeriano el que nos lo está robando a nosotros” (“Self-styled rebel”, 2004). En ese mismo sentido, al ser preguntado sobre los efectos que tiene el *bunkering* sobre la producción de la industria petrolera, George Hill Anthony, portavoz de la organización de base ijaw Niger Delta Budget Monitoring Group (NDEBUMOG), entrevistado para esta investigación, responde vehemente:

¿A quién le pertenece el petróleo? Cuando alguien roba lo que te pertenece, ¿eres tú el ladrón? ¡La gente está muriendo! ¿No tiene la gente el derecho a controlar sus recursos? La confianza se ha perdido. La gente está sufriendo por culpa de esta gente en Abuja. Necesitamos el control de los recursos (Hill, 2008)⁵¹

En esta declaración está contenido el núcleo de las demandas políticas que alimentan las acciones colectivas de contestación de los jóvenes ijaw en el Delta. La desconexión percibida entre las poblaciones de la región con respecto al estado federal queda clara con la expresión “esta gente en Abuja”. Esta idea también encuentra su reflejo en los discursos de organizaciones de la diáspora ijaw, cuando el presidente de la Ijaws People Association de Londres, Benaebi Benatari, declara que “la gente del Delta no tiene por qué mantener a todo el mundo”, dando cuenta de un sentimiento de identidad que genera una división entre “la gente del Delta” y “el resto del mundo” (Benatari, 2011)⁵². Y esta visión no sólo

⁵¹ George Hill Anthony, director ejecutivo de NDEBUMOG, entrevista personal en Abuja, Nigeria, durante la celebración del *Publish What You Pay Africa Regional Meeting* (11/08/2008).

⁵² Benaebi Benatari, secretario general de Ijaw Peoples Association of Great Britain and Ireland, entrevista personal, Londres, (17/06/2011).

se da entre organizaciones de base ijaw. Dumpe apunta a que el surgimiento de la militancia armada se ha visto alimentado a causa de la militarización del Delta, cuya función es “asegurar que el petróleo siga fluyendo y los negocios en Abuja puedan ser mantenidos” (Dumpe, 2008).

Como se puede apreciar, los portavoces de estas organizaciones mencionan de manera regular a la capital de la República, que se ha convertido en una herramienta de movilización usada tanto por activistas como por insurgentes del Delta. Todos ellos viajan a menudo a Abuja para asistir a talleres y conferencias organizados por ONGs transnacionales. A través de los relatos que unos y otros comparten con la población del Delta a su regreso se fortalece la “conciencia petrolera”⁵³ debido al contraste que observan entre la situación de miseria y polución en el Delta con la riqueza de Abuja (Adunbi, 2015, loc. 3625). En palabras de un activista-militante del Delta: “Abuja es una ciudad de pecado. Cada vez que alguno de nosotros visita esta ciudad, volvemos al Delta del Níger con rabia, angustia y más energía para defender los intereses de nuestra gente” (citado en Adunbi 2015, loc. 3715).

4.2.1. Trayectorias históricas: políticas de juventud y petroviolencia

Las fricciones que se daban entre las elites y los jóvenes ijaw desde la aplicación del PAE se agravaron cuando las primeras llegaron al poder local en el nuevo régimen democrático y se apropiaron de la “agenda del control de los recursos” para negociar con el estado central mientras “el nacionalismo ijaw se convertía en una especie de ideología oficial al tiempo que era vaciada de su anterior contenido radical” (Nwajiaku, 2012, p. 303). Kaiama había dado lugar al surgimiento del IYC a partir de movimientos de base ijaw creados en la década de 1990, como el Chikoko Movement y el Movement for the Survival of Ijaw Ethnic Nationalities in the Niger Delta (MOSIEND). Desde inicios de 1999, El IYC se convertiría, junto con el INC fundado en 1991, en el segundo movimiento paraguas del etnonacionalismo ijaw, lo que pondría de manifiesto la brecha intergeneracional que mencionábamos.

⁵³ Entendemos la “conciencia petrolera” como “el proceso a través del cual las comunidades, dándose cuenta de que el petróleo les puede dar riqueza material, sostienen reclamaciones que dicen que este les ha sido por sus ancestros para reclamar propiedad sobre ellos (Adunbi, 2015, loc. 627).

Líderes del IYC como Oronto Douglas habían trabajado con el MOSOP y pretendían que la organización de los jóvenes ijaw sirviese de elemento aglutinador en este grupo, emulando al movimiento ogoni pero llevando a cabo una estrategia propia, que comprendía el uso de tácticas de acción directa (no violenta) hacia las compañías (Nwajiaku, 2005, p. 458). En cuanto a los lenguajes desplegados, al igual que en el caso del MOSOP, en el plano local la retórica de la etnicidad asumió un rol importante, sobre la base de la autodeterminación y el control de los recursos; mientras los derechos humanos y medioambientales se convirtieron en un eje tanto a nivel doméstico como internacional, a través de su organización filial, el Ijaw Council for Human Rights (ICHR), asociada con organizaciones nigerianas como la CLO y el Ecumenical Council for Social Responsibility (ECSR), e internacionales, como HRW y FEI (Adekson, 2004, p. 64).

Desde inicios del siglo XXI tuvieron lugar también una serie de fracturas dentro de los movimientos juveniles ijaw. Algunas de las nuevas elites cooptaron a grupos de jóvenes para lograr acceso al poder y las rentas petroleras, lo que provocó divisiones entre los propios movimientos juveniles que fueron aprovechadas por el gobierno federal y los estatales y locales. Entre los años 1999 y 2003, primera legislatura de Obasanjo, “milicias armadas” de jóvenes ijaw, como la Federated Niger Delta Ijaw Communities (FNDIC) y los Egbesu Boys of Africa llevaron a cabo distintas acciones en contra de empresas transnacionales como Chevron y Shell, que incluyeron el secuestro de trabajadores de la industria. Aunque durante este primer mandato, el gobierno de Obasanjo no quiso intervenir demasiado militarmente en el resto de Nigeria para favorecer la recuperación de la imagen proyectada internacionalmente, en el caso de los conflictos que “amenazasen la federación”, como los relacionados con el petróleo, sucedió justo lo contrario (Iiffe, 2011, p. 186).

Unos meses después de su investidura como presidente, la respuesta represiva de las fuerzas armadas al asesinato de unos policías por parte de un grupo de jóvenes ijaw en Odi, estado de Bayelsa, acabó con la vida de 2.483 personas de 109 familias y el pueblo quedó arrasado (ERA/FEI; 2002, HRW, 1999c; Obi 2010a). La invasión militar de Odi de noviembre de 1999, que fue condenada en Nigeria e internacionalmente como un “acto de terrorismo de Estado” (Luqman, 2011, p. 38) y “un acto de genocidio contra los ijaw”

(Ebelo, 1999), agravó aún más el conflicto entre esta minoría y el gobierno federal encarnado en sus fuerzas armadas.

Por otro lado, algunos políticos locales también contribuyeron a la complejización de los conflictos internos en esta minoría. En 2001 las fracturas entre los jóvenes ijaw se hacían claramente visibles cuando el entonces gobernador del estado de Rivers, Peter Odili, financió las campañas a la presidencia del IYC a dos de sus líderes, Felix Tuodolor y Asari. La victoria de este último provocó la ruptura de la organización en dos y un cambio en el uso de tácticas violentas, ya que Asari planteaba una agenda más radical, que no descartaba el uso de medios violentos contra las empresas transnacionales. A inicios del año 2002, había dos claras facciones en el IYC: “la proestatal, que aceptaba donaciones del Estado y estaba deseosa de una mayor relación con él y un bloque radical que no estaba interesado en el diálogo con el gobierno nigeriano” (Adekson, 2004, p. 71).

Mientras, seguían sucediéndose conflictos entre distintas minorías de la región, como los originados por migraciones internas entre los considerados “indígenas” y los “colonos” (Ibeanu & Luckham, 2006), unas categorías sociales avaladas por la Constitución, que mantiene el principio de “carácter federal” y el de “indigenidad”, lo que ha derivado en prácticas discriminatorias hacia la población “no indígena” en el interior de los diversos estados. En algunos casos, estas disposiciones constitucionales han servido para agravar conflictos históricos, como los que se dan entre los itsekiri y los ijaw en el estado de Delta. Estos últimos acusan a sus vecinos de haber sido favorecidos por los europeos desde la etapa de la trata esclavista. En 1997 estas rivalidades se agravaron cuando el régimen de Abacha concedió un Área de Gobierno Local al pueblo itsekiri, que anteriormente estaba situado en un territorio reclamado por los ijaw (“IRIN Background report on Niger Delta crisis”, 1999).

Aunque en 1999 el nuevo gobierno local volvió a situar las oficinas del Área de Gobierno Local en tierras ijaw, las disputas entre ambos grupos se agudizaron cuando empezaron a acusarse mutuamente de ser tratados de manera distinta por las empresas que operan en el área, Shell, ChevronTexaco y TotalFinaElf. En septiembre de 2002, la milicia ijaw FNDIC atacaba diversas instalaciones de ChevronTexaco cerca de la ciudad de Warri. El grupo armado alegó entonces que los itsekiri habían sido beneficiados en la asignación de barrios y centros de registro en esa área a pesar de tener una población menor (147

unidades de registro para los itsekiri y 40 para los ijaw). Según Dan Ekpebiga, portavoz del grupo militante, esa situación supondría también un menor acceso a servicios sociales para su base social: “nos quejamos al gobierno y otras autoridades competentes, y como no ha habido respuesta decidimos actuar para recordar que de nuestra área se están llevando muchos recursos” (“Ijaw militants seize oil facilities”, 2002).

A lo largo del mes de marzo de 2003 las percepciones de favoritismo hacia los itsekiri por parte del gobierno en la ubicación de los barrios electorales de cara a las elecciones de abril/mayo dieron lugar a una muestra de violencia entre los ijaw (a los que se unieron los urhobo), los itsekiri y las fuerzas de seguridad nigerianas, que provocaron cientos de muertos y miles de desplazados en el estado de Delta (ICG, 2006c, p. 14). Las empresas transnacionales que operaban en el área cerraron sus instalaciones durante algunas semanas, lo que supuso una pérdida de 800.000 barriles de petróleo al día, un 40% de la producción diaria nigeriana en aquellas fechas. A finales de mes, tras haber recibido la promesa del gobernador del estado de Delta de que sus demandas políticas serían atendidas, el FNDIC dejó las armas (“Ijaw militants say halting fighting”, 2003), pero volvería a realizar acciones armadas y los conflictos entre este grupo ijaw y el Itsekiri National Youth Council (INYC) se prolongarían durante todo el año 2003 y parte de 2004, hasta que gracias a la mediación del gobernador del estado las milicias firmaron un acuerdo de paz.

Entretanto, entre el 12 de abril y el 3 de mayo de 2003 tuvieron lugar las segundas elecciones (federales, estatales y legislativas) tras el fin de la etapa militar, en las que Obasanjo volvió a vencer frente a Muhammadu Buhari, su principal rival entre otros 18 candidatos y líder del partido All Nigeria People’s Party (ANPP). Las denuncias de fraude, en particular en algunos estados del Delta, por parte de los partidos opositores y distintos observadores, tanto locales (como el Transition Monitoring Group y Justice Peace and Development Commission-JPDC), como internacionales (el estadounidense National Democratic Institute o el 118-Strong Monitoring Team de la UE), no impidieron que la Independent National Electoral Commission (INEC) declarase la victoria del líder del PDP (“Obasanjo declared winner in vote marred by fraud”, 2003).

Durante el proceso electoral, la violencia se replicó nuevamente en distintos lugares de la región. Entonces, Asari volvió a apoyar al gobernador del estado de Rivers, pero luego se

alejó de su patrón por creer que el político tenía el plan oculto de asesinarlo. Asari fundó entonces la Niger Delta People's Voluntary Force (NDPVF) a imagen de la NDPF de Isaac Boro, justificando esta decisión en el fraude electoral cometido por el PDP. "Estamos luchando contra un gobierno que robó las elecciones, que no cuenta con el mandato del pueblo. La gente oprimida de Nigeria se levantará un día, esto es sólo el comienzo", afirmaba entonces, mientras acusaba a su principal grupo rival, la NDV, de estar trabajando para el partido gobernante ("Self-styled rebel", 2004). Desde entonces, se declaró una guerra abierta entre estos dos grupos por el acceso a las rentas petroleras (Nwajiaku, 2012; Ibeanu & Luckham, 2006).

Desde finales de 2003 los conflictos en el Delta se recrudecieron, lo que se vio agravado por el papel jugado por las fuerzas armadas. Nada más iniciar su segunda legislatura, Obasanjo creó la Joint Task Force (JTF), una fuerza combinada de policía, militares y marines, que opera en los estados de Bayelsa, Delta y Rivers con el objetivo de combatir la militancia armada bajo el sobrenombre de "Operación Restaurar la Esperanza". La JTF ha sido objeto de numerosas denuncias por el uso indiscriminado de la fuerza, que ha incluido bombardeos sobre poblaciones a las que se considera aliadas de los grupos armados (Luqman, 2011, p. 38). La JTF es vista entre los grupos militantes del Delta como "una fuerza ocupante, inspirada por acercamientos coloniales a la *pacificación*" (Ukeje, 2011) y a las campañas de "imposición de la paz" en África Occidental bajo el auspicio del ECOMOG (Nwajiaku, 2012, p. 303).

El 27 de septiembre de 2004 la NDPVF declaraba una "guerra total" contra el gobierno federal y las empresas transnacionales. Además, Asari acusaba a las subsidiarias de Shell y AGIP de estar "coludidas con el Estado nigeriano para cometer actos de genocidio contra nuestro pueblo" ("Militia group vows to attack oil workers if firms stay in Delta", 2004). El IYC se distanció de esta declaración de guerra, ya que, como señalaba unos meses antes Oronto Douglas: "hay un gran debate ahora en el Delta del Níger sobre cuál es la mejor manera de acabar con el yugo de la opresión sobre nuestra gente, y la posición mayoritaria es la de que se prefiere la lucha no violenta" ("Self-styled rebel", 2004). No obstante, Douglas apuntaba también que esa violencia estaba siendo alimentada por el gobierno central a través de una "violenta estrategia de supresión que enfurece a gente como Asari, que ve la estrategia de negociación fallar de modo estrepitoso y está deseando la lucha armada" ("Self-styled rebel", 2004).

Tras la declaración de guerra por parte de los dos principales grupos insurgentes del momento, los precios internacionales del petróleo superaron los 50 dólares el barril por primera vez en la historia de la industria petrolera nigeriana, lo que provocó una reacción inmediata por parte del presidente. En octubre de 2004 Obasanjo mantuvo conversaciones con el líder del NDPVF y con su homólogo en la NDV. El objetivo de este encuentro era llegar a un acuerdo para que estos grupos militantes detuviesen sus operaciones contra las compañías petroleras activas en el Delta. Las demandas del NDPVF se concretaban en la petición de un mayor control local sobre los recursos petroleros y el gas y la exigencia de la celebración de una conferencia nacional para renegociar la Constitución y devolver poderes a las comunidades y los gobiernos locales y estatales (Ibeanu & Luckham, 2006).

Debido a presiones políticas por parte del gobierno de Estados Unidos, la respuesta de Obasanjo fue ofrecerles la amnistía a los militantes a cambio de que estos entregasen sus armas, pero: “más que frenar a los militantes, la desmovilización les proporcionó los medios para rearmarse. Armas baratas eran compradas y revendidas al gobierno federal a un precio sustancialmente mayor que el de coste” (Nwajiaku, 2012, p. 304). Asari y Tom aceptaron la propuesta de entrega de armas a cambio de dinero, con la esperanza de que sus demandas políticas se cumplirían posteriormente (“Niger Delta militia surrendering weapons for cash Niger Delta militia surrendering weapons for cash”, 2004).

A partir de febrero de 2005 la violencia se desplazó al estado de Bayelsa. El 19 de febrero en Odioma tuvo lugar una invasión militar por parte de la JTF que pretendía detener a unos criminales acusados de haber asesinado a 11 personas de un lugar vecino. Todo el pueblo fue destruido, numerosas personas fueron asesinadas y muchas desaparecidas (Luqman, 2011, p. 38). La masacre de Odioma generó más violencia por parte de algunos grupos ijaw hacia las empresas transnacionales. Las actividades de los grupos armados provocaron un descenso tal de la producción de las empresas que entonces estas se plantearon realizar un cambio en su acercamiento a las poblaciones, que supuso la invención en 2005 de un nuevo tipo de acuerdo denominado Global Memorandum of Understanding (GMOU), un acuerdo de carácter global firmado con conjuntos de “comunidades”, a diferencia de los MOUs, que se firmaban de manera individual con una sola.

Los acuerdos individuales comenzaron a considerarse problemáticos porque fomentaban que los fondos de desarrollo adscritos a las poblaciones acabasen enriqueciendo solo a sus líderes, la falta de transparencia que caracterizaba la gestión de estos acuerdos provocaba rivalidades y conflictos intercomunales, se generaba mucha desconfianza por parte de las poblaciones porque se componían de promesas que a veces se interpretaban mal y en otras ocasiones no se cumplían. Además, desde una perspectiva de negocio, los MOUs no estaban reduciendo las perturbaciones a sus operaciones (Hoben et al., 2012, p. 3). Por otro lado, las negociaciones se hacían interminables dado que Chevron, por ejemplo había firmado unos 400 MOUs distintos.

4.3. Del surgimiento del MEND al proceso de “amnistía” (2005-2009)

La violencia también provocó nuevas respuestas por parte del gobierno federal. El 21 de febrero de 2005, Obasanjo, sometido a presiones públicas, constituyó la National Political Reform Conference (NPRC), formada por 400 miembros, cuya encomienda sería establecer recomendaciones para la realización de una revisión constitucional. Esta Conferencia comenzó el 11 de junio de 2005, recibió 750 memoranda enviados por colectivos formados en base a líneas étnicas y otros grupos de interés y produjo 185 recomendaciones. En el proceso emergieron controversias alrededor de dos cuestiones fundamentales: la reasignación de ingresos en la *Federation Account* y las posesiones del presidente y los gobernadores estatales. Con respecto a la primera cuestión, los delegados del Delta del Níger solicitaron el incremento del principio de derivación a un 25%, y abandonaron las negociaciones cuando otros grupos rechazaron conceder más del 17%.

En lo que se refiere a la segunda cuestión, la desconfianza en el desarrollo del propio proceso y en los propios miembros de la Comisión, supuso que esta no avanzase una solución para la Cuestión del Delta, en teoría, una de las principales preocupaciones del presidente (ICG, 2006a; Adejumobi, 2011). En ese contexto, la detención de Asari el 20 de septiembre de 2005 por cargos de traición, alimentó los agravios de sus seguidores. Dos días después, la NDPVF ocupó dos estaciones de bombeo de petróleo de ChevronTexaco y Shell, pero el 27 de septiembre, tras abandonar estas instalaciones y a petición del abogado de su líder, el grupo declaró:

A raíz de los acontecimientos que hemos ido estudiando cuidadosamente y otras razones que no podemos definir plenamente en este momento y por este medio, la Niger Delta People's Volunteer Force declara que hemos abandonado todas las hostilidades con el gobierno del Estado nigeriano (“Oil facilities open again as militiamen withdraw threat of attacks”, 2005).

A pesar de esta declaración, la detención de Asari contribuyó al surgimiento de nuevos grupos con nuevas dinámicas, lenguajes y repertorios de contestación. Entre septiembre y enero hubo varios ataques a instalaciones petroleras y secuestros de trabajadores extranjeros, que no fueron reivindicados por ningún grupo, hasta que en enero de 2006 el MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta), un grupo armado formado mayoritariamente por jóvenes ijaw, surgido de la confluencia entre militantes de NDPVF, NDVM y Outlaws, asumió su responsabilidad por estas acciones. El 11 de enero de 2006 el MEND lanzaba su primer gran ataque contra un oleoducto de Shell en el estado de Rivers y secuestraba a 4 trabajadores de la compañía. El 16 del mismo mes volvía a atacar una de las instalaciones de la empresa, tras lo cual morían 17 personas, entre miembros del ejército, personal de Shell y militantes (Howden, 2006).

4.3.1. La sofisticación de la lucha armada

El surgimiento de milicias como el MEND “representa el casi inevitable punto y final de un proceso de marginalización, alienación y movilización política que alcanzó su punto de inflexión con la *Declaración de Kaiama*” (Watts, 2007, p. 653). Según Obi (2011, p. 105), la aparición del MEND alteró las políticas petroleras en el Delta “accediendo a los idiomas locales, símbolos y agravios para insertarse en la conciencia de la gente”. El movimiento se caracteriza por la sofisticación, tanto desde el punto de vista de los discursos como de los repertorios de contestación:

Una rebelión en la que la pistola es más poderosa que la pluma, pero esta última no es del todo disfuncional teniendo en cuenta que el MEND también presta mucha atención a su comunicación verbal con el mundo. Típico en esta visión fue el lenguaje de mofa que usó para denunciar la oferta de amnistía en la primavera de 2009 (Ikelegbe, 2011, p. 123)⁵⁴

Uno de sus principales objetivos es globalizar la lucha de las poblaciones del Delta contra la industria petrolera. Para difundir sus demandas emplean las nuevas tecnologías, como

⁵⁴ Con ironía, en sus declaraciones públicas tras el anuncio del programa de amnistía les pedía a los secuestradores, piratas, ladrones... de toda Nigeria que se aprovecharan y entregasen sus armas a cambio de dinero.

el *email* y compiten con el Estado y las empresas transnacionales “por la atención internacional a través de sus acciones, especialmente en redes de noticias como BBC, CNN, Al Jazeera y Fox News” (Adunbi 2015, loc. 4539). Además, al igual que otros grupos insurgentes de la región, sus líderes también se relacionan en el marco del activismo transnacional a través del uso de las retóricas de los derechos humanos y el medioambiente.

Resulta difícil averiguar la constitución de la base militante de este movimiento, que podría oscilar entre los muchos cientos y unos pocos de miles de miembros. Bajo esta organización paraguas se han abrigado muchos subgrupos, algunos de los cuales actúan a veces bajo otros nombres. Debido a que sus demandas coinciden con las de grupos como la NDPVF, hay autores que ven una clara línea de continuidad en los dos movimientos. No obstante, como apunta Nwajiaku, el área de influencia del grupo de Asari es el este del Delta, mientras la del MEND es el oeste (Nwajiaku, 2012).

En una conversación telefónica con IRIN, Brutus Ebipadei, que reclamaba entonces el liderazgo de la organización, señalaba que el requisito para detener sus acciones era la liberación de Asari y otros líderes ijaw, como el que fuera gobernador del estado de Bayelsa entre los años 1999 y 2005 acusado de corrupción, Diepreye Alamieyeseigha, en un plazo de 48 horas. “De lo contrario, atacaremos las instalaciones petroleras y frenaremos las exportaciones de petróleo nigerianas” (“Militants threaten to cripple oil exports if demands not met”, 2006) advirtió en esa declaración, en la que apuntó también que su grupo se había “embarcado en la Operación Cambio Climático para recuperar nuestro petróleo y mostrarle al gobierno nigeriano que la gente del Delta del Níger no es tonta”. Diecinueve días después del secuestro, y sin haber recibido respuesta a su demanda, el MEND liberaba a los 4 trabajadores retenidos, y señalaba en un *email* enviado a medios internacionales que lo hacía “puramente por razones humanitarias” (“Militants free foreign oil workers but vow more attacks”, 2006).

Shell evacuó a más de 300 miembros de su personal tras estos ataques mientras la respuesta del gobierno nigeriano fue atacar por aire algunas poblaciones ijaw. En respuesta a los bombardeos aéreos del ejército nigeriano, a inicios de febrero el MEND volvía a secuestrar a 9 trabajadores de la empresa Willbros (socia de Shell) y, por primera vez, enviaba fotografías de los mismos a los medios de comunicación internacionales,

acompañando un *email* en el que afirmaba su objetivo de “destruir totalmente la capacidad del gobierno nigeriano de exportar petróleo” y les advertía a las empresas transnacionales: “dejen nuestra tierra mientras puedan o mueran en ella” (“Shell evacuates Nigeria workers”, 2006). Seis de ellos fueron liberados a los once días, mientras los otros tres, nacionales de Estados Unidos y Reino Unido, eran retenidos hasta finales de marzo, para llamar la atención de sus gobiernos sobre la situación en el Delta (“Delta militants free remaining foreign hostages, vow fresh attacks”, 2006). Después de la liberación, el MEND detuvo sus ataques durante algo más de un mes, pero siguió informando a la prensa internacional de sus demandas.

Debido a que su agenda política no estaba muy definida inicialmente, hay autores que sostienen que los militantes del MEND sólo responden a sus intereses personales de acumulación. No obstante, inicialmente al menos, sí existían claros objetivos políticos (Watts, 2007, p. 646; Nwajiaku, 2012, p. 304). En febrero de 2006 una declaración del grupo pedía al gobierno federal la desmilitarización del Delta y a Shell el pago inmediato de 1'5 billones de dólares en compensación por décadas de daño medioambiental. El MEND reclamaba, además, el control de las concesiones petroleras y llegó a plantear la propuesta de que las rentas derivadas de la explotación de crudo las gestionasen las poblaciones a través de fundaciones, y no los gobiernos, a los que acusaban de falta de transparencia (ICG, 2006b). El hecho de que generalmente haya liberado ilesos a los trabajadores de las transnacionales a los que secuestra ha supuesto que se romanticen sus actividades, interpretadas por un sector de la academia como orientadas a “atraer la atención internacional a la injusticia en la región, vista como un importante aspecto en la globalización de la resistencia local” (Adejumobi, 2011, p. 106).

En abril de 2006 Obasanjo se reunió con líderes del MEND en Abuja, a los que anunció la creación de 20.000 puestos de trabajo para los jóvenes del Delta. Esta propuesta consistía en el fortalecimiento de la NDDC a través de la creación de un comité de 50 miembros, el Consolidated Council on Social and Economic Development of Coastal States of the Niger Delta, que lanzó el Niger Delta Development Master Plan, conocido popularmente como “Plan Marshall”: un programa de desarrollo basado en la creación de empleo en el ejército y la policía y la construcción de una amplia red de carreteras. Este comité estaba formado por los gobernadores y elites locales de los estados productores de la zona costera, aquellos que habían sido acusados por las comunidades productoras de

haber robado las rentas petroleras estatales anteriormente, y no se contó con líderes de la sociedad civil local, lo que provocó que este proyecto naciese ya carente de legitimidad. Además, a “los grupos militantes y ciudadanos en general de la región les parece insultante que Obasanjo ofrezca puestos de trabajo precisamente en las mismas fuerzas de seguridad que quemaron pueblos y a sesinaron civiles en la región productora de petróleo durante años” (ICG, 2006a, p. 8).

En reacción a este anuncio, el MEND enviaba un comunicado a la agencia de noticias Reuters en el que declaraba: "no necesitamos más mala gestión de los recursos rápidamente decrecientes de nuestra tierra por la adjudicación de contratos falsos destinados a canalizar la riqueza del Delta del Níger a las manos de aquellos que han saqueado todos estos años" (“Militants reject Niger Delta help”, 2006). Poco después de estas declaraciones, lanzaba su primer ataque con bomba en un área urbana, contra unas instalaciones militares en Port Harcourt, en el que murieron dos civiles, para demandar un mayor control local sobre los recursos. El 30 de abril la organización hacía explotar un nuevo coche bomba junto a una refinería cerca de la ciudad de Warri. Antes de realizar el ataque lo anunció a través del *email* a periodistas locales e internacionales, como "el último aviso a los trabajadores de la industria petrolera", con una advertencia especial a China (“Car blast near Nigeria oil port”, 2006).

Durante los siguientes meses se multiplicaron las acciones del MEND contra Shell y otras compañías por lo que en agosto Obasanjo recrudeció la respuesta militar a sus acciones, algo que, no obstante, algunas de las compañías rechazaban por temor a nuevas represalias de los militantes (“Nigerian army razes oil village”, 2006). En diciembre, el MEND atacaba también una zona residencial de AGIP y otra de Shell con sendos coches bomba (“Two explosions in Nigeria's Delta”, 2006). En esas fechas, según algunas fuentes, las exportaciones de petróleo nigerianas se habían reducido en un 25 % (“Nigeria's oil violence”, 2006).

Durante el mes de enero de 2007, el MEND y otros grupos secuestraron a tantos trabajadores de petroleras como durante todo el año 2006. A medida que se acercaban las elecciones presidenciales estas acciones se multiplicaron. Según Nnamdi Obasi, analista sobre Nigeria en el International Crisis Group, “por un lado, el repunte de los secuestros es impulsado de manera criminal por personas que quieren dinero para sí mismas”. Obasi

señala también que “algunos de ellos están trabajando también para campañas políticas que necesitan fondos. Es como una industria” (“Sharp rise in hostage taking may be linked to upcoming elections”, 2007). De hecho, desde mediados de la década de 2000 algunos de los movimientos armados de jóvenes ijaw se han ido alejando de sus agendas políticas originales. Bajo la retórica del “verdadero federalismo” y el “control de los recursos” se ha hecho cada vez más difícil distinguir entre los militantes que se dicen inspirados en figuras como Isaac Boro o Saro Wiwa, y quienes se mueven únicamente por el interés en obtener acceso a los beneficios derivados del petróleo. Boniface Dumpe confirma la idea de que la militancia, a la que otorga un origen genuino, ha sido infiltrada por “bandas criminales”, que asegura también tiene lazos con individuos del gobierno. Marca una clara línea divisoria entre unos y otros:

Hay algunos grupos organizados que entran en confrontaciones armadas para luchas por el Delta del Níger. Pero también hay otros que están actuando como criminales sin ninguna legitimidad. Sí, hay una brecha, y las comunidades se dan cuenta de eso (Dumpe, 2008).

Auwal Ibrahim Musa, director ejecutivo de CISLAC (Civil Society Legislative Advocacy Centre), una ONG federal con sede en Abuja fundada en el año 2005, difiere un poco en esta cuestión. Aunque considera que la militancia en el Delta surge del hecho de que “la gente que tenía que hacer algo no ha hecho lo que se supone que tenía que hacer”, es decir, entiende que existen motivos para la rebelión, afirma que las acciones armadas actualmente en el Delta responden sólo a actividades criminales, no a una lucha legítima. Desde CISLAC se niega cualquier legitimidad y base social a los grupos militantes, que, nos asegura “solo se dedican a aterrorizar a la gente”. Señala que “los criminales han llegado al Delta porque cualquier cosa que hagan es denominada militancia, lucha, Pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Es solo por interés personal, están robando petróleo, secuestrando a la gente”... Y nos revela que “lo hacen en connivencia con las compañías, que les dan dinero para poder seguir extrayendo petróleo. Es un círculo vicioso, las propias compañías están fomentando este tipo de militancia (Musa, 2008)⁵⁵.

Ese paso de la violencia popular de finales de la década de 1990 a la violencia criminal dominante desde mediados de la década de 2000 se ha visto influido por factores

⁵⁵ Auwal Ibrahim Musa (Rafsanjani), director ejecutivo de CISLAC, entrevista en Abuja, Nigeria, durante la celebración del *Publish What You Pay Africa Regional Meeting* (10/08/2008).

estructurales (el papel del Estado y las empresas transnacionales y la fluidez de las propias resistencias), sociales (fracturas sociales entre jóvenes, mujeres, elites) y socioeconómicos (desigualdades socioeconómicas, proliferación de armas); todos ellos interconectados (Ikelegbe, 2011). Además de la existencia de patrones de violencia previos (Richards, 2005, p. 1), la rebelión se ha insertado en las estructuras estatales neopatrimoniales y ha acabado cayendo en las mismas dinámicas contra las que se originó (Boas, 2011, pp. 116 -177). Dinámicas que se han visto afectadas por las respuestas institucionales y corporativas (locales, estatales e internacionales) al conflicto, que han tendido a la criminalización de la protesta sin atender a las causas que la originan. La entrada del Delta en la “guerra global contra el terrorismo” a partir de 2006 agravó aún más la situación.

4.3.2. El Delta en el marco de la “Guerra global contra el terrorismo”

Las actividades del MEND tuvieron gran repercusión internacional desde sus inicios debido a sus impactos sobre los beneficios de la industria petrolera y los actores internacionales con intereses en el sector han respondido a esta amenaza. Según el International Maritime Bureau⁵⁶, las costas del Delta son consideradas unas de las más peligrosas del mundo debido a las redes criminales que operan en la zona. El MEND ha sido calificado por el Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT) en 2007 como “un grupo terrorista activo que usa medios violentos para apoyar los derechos del pueblo de la minoría ijaw en el Delta del Níger” (Adejumobi, 2011). Algunos de los países con intereses en la industria petrolera nigeriana (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Sudáfrica y Brasil, por ejemplo) han brindado apoyo financiero y entrenamiento a las fuerzas de seguridad nigerianas desplegadas en el Delta (ICG, 2012). Esta presencia militar ha ido aumentando a medida que las acciones del MEND se volvían más coordinadas y sofisticadas, debido a la repercusión que esto ha tenido sobre la subida de los precios internacionales del petróleo.

El gobierno de los Estados Unidos, el principal socio comercial de Nigeria⁵⁷, se ha destacado como uno de los más activos actores internacionales en articular una respuesta

⁵⁶ Estos datos se pueden consultar en su página web: <https://icc-ccs.org>

⁵⁷ Entre 2003 y 2011, Estados Unidos, desde hace décadas el primer socio comercial de Nigeria, importó entre el 9 y el 11% de su petróleo de este país. En 2011 el país de África Occidental era el cuarto suministrador de crudo de EEUU y el principal destino de las exportaciones nigerianas (33% del total). A inicios de la década de 2000 se preveía que en

frente al MEND, en el marco de su estrategia antiterrorista, que está claramente vinculada a su estrategia de seguridad energética⁵⁸. En ese marco, además de haberle proporcionado desde inicios de la década de 2000 varios barcos para ayudar a controlar a los grupos armados y proteger así las instalaciones petroleras *offshore*, desde mediados de la década el gobierno estadounidense ha aumentado la cooperación con el nigeriano en materia de seguridad. El Departamento de Estado se ha centrado, sobre todo, en brindar apoyo en materia de mantenimiento de la paz, seguridad en las fronteras terrestres y marítimas y profesionalización de las fuerzas armadas. Nigeria es el segundo receptor de ayuda bilateral estadounidense después de Kenya, USAID trabaja con empresas como Chevron en temas de desarrollo. La cooperación bilateral en materia de contraterrorismo aumentó en diciembre de 2009, tras el intento de atentado en un avión por parte de un nigeriano en simultáneo a la irrupción del grupo armado Boko Haram en el norte nigeriano.

Desde su creación en 2005, Nigeria forma parte de la TSCTP (Trans Sahara Counterterrorism Partnership), un proyecto entre distintas agencias estadounidenses para fortalecer las estrategias antiterroristas en el área. Además, a petición del gobierno de Obasanjo, en el verano de 2006 el gobierno estadounidense envió a la Marina al Golfo de Guinea para controlar las actividades del MEND. Más tarde estableció un partenariado con la UE en el Golfo con el establecimiento de la GGESS (Gulf of Guinea Energy Security Strategy). En febrero de 2007 empezó a operar en la región el comando para África (AFRICOM) de Estados Unidos. También en 2007 se lanzó la APS (African Partnership Station), que supone acciones coordinadas entre la marina estadounidense, europeas y nigeriana y otras regionales a través del despliegue de barcos que sirven de base marítima para sus operaciones y de escuela de formación para la población del área del Golfo, sobre legislación marítima, seguridad en los puertos y otras instalaciones, asistencia humanitaria, respuesta ante desastres, logística...

el año 2015, el llamado “Triángulo Petrolero de África Occidental” pasaría de proveer el 15% de las importaciones estadounidenses de petróleo al 25%, unas predicciones que no se han cumplido. Si en el año 2010 EE UU importó 1’023 millones de barriles al día de petróleo de Nigeria, esa cifra descendió en 2012 a menos de la mitad, hasta los 441.000, a niveles del año 1973 y 1986. Tan sólo en la primera mitad del año 2012 las importaciones de crudo nigeriano por parte de Estados Unidos habían descendido al 5% del total de sus importaciones. Datos extraídos de: www.eia.gov

⁵⁸ En 2001 la National Energy Policy Development Group (NEPDG), un grupo de trabajo creado por el entonces presidente Bush y encabezado por el vicepresidente Dick Cheney, había advertido de que “los Estados Unidos debían mirar hacia el triángulo petrolero de África Occidental como una fuente futura de suministro fiable” (Lubeck et al., 2007, p. 3). En el *Informe Nacional de Política Energética* de 2001, Cheney aseguraría que “se espera que África Occidental sea una de las más rápidas y crecientes fuentes de petróleo y gas natural para el mercado americano...” (citado en Lubeck et al., 2007, p. 1). Desde el 11 de septiembre de 2001 la estrategia de seguridad energética estadounidense, que Michael Klare ha denominado “economización de la seguridad”, se ha combinado con otro de los ejes de la política exterior de los Estados Unidos, la Guerra Global contra el Terrorismo (Klare, 2004) puesta en marcha en África con el apoyo del *lobby* African Oil Policy Initiative Group (AOPIG).

En abril de 2007 tuvieron lugar las terceras elecciones presidenciales desde el fin de la etapa militar, unos comicios electorales a los que se presentaron 16 partidos, de los cuales sólo 5 tuvieron alguna representatividad. La violencia electoral de las anteriores elecciones se replicó y multiplicó y estas fueron calificadas como fraudulentas por parte de todos los observadores, tanto locales como internacionales. Los políticos locales fueron acusados nuevamente de armar a las milicias de jóvenes para ganar las elecciones locales. En el plano federal, los intentos de Obasanjo por retener el poder terminaron por alzar a su protegido, Umaru Musa Yar'Adua, exgobernador del Estado de Katsina, al gobierno federal a la cabeza del PDP. En su discurso inaugural del mes de mayo de 2007, el flamante presidente afirmó:

La crisis en el Delta del Níger demanda nuestra atención urgente. Terminar con ella es un asunto de importancia estratégica para nuestro país. Usaré todos los recursos que estén en mi mano, con vuestra ayuda, para gestionar esta crisis con un espíritu de imparcialidad, justicia y cooperación (citado en Obotetukudo, 2011).

Nada más asumir la presidencia, el gobierno de Yar'Adua lanzó la Agenda de Siete Puntos (2008-2011), en línea con los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y en continuidad con las políticas económicas de Obasanjo: energía, seguridad alimentaria, generación de riqueza, transporte, reforma de la tierra, seguridad y educación. Además, contaba con dos temas nucleares: Delta del Níger y grupos en desventaja. Bajo la idea de un “compromiso constructivo”, Yar'Adua decidió reabrir el diálogo con los principales grupos armados y otras organizaciones del Delta y tomar una serie de medidas inmediatas, como la puesta en libertad de Asari y de Alamieyeseigha (ICG, 2007, p. 5). En respuesta a esta medida, el MEND le concedía en junio un alto el fuego temporal al gobierno.

En julio de 2007 el nuevo presidente inauguró un Comité de Paz y Resolución de Conflictos para el Delta, presidido por un senador, David Brigidi, muy respetado entre los ijaw. En septiembre constituyó el Ministerio para los Asuntos del Delta, un ente de carácter regional concebido para formular y ejecutar programas y proyectos para el desarrollo con un doble mandato: empoderamiento juvenil e infraestructuras. Sus prioridades son la construcción de carreteras y centros de formación, proyectos de abastecimiento de agua y electrificación, planes de vivienda, iniciativas

medioambientales y programas de desarrollo agrícola e industrial. Además, el Ministerio es el encargado de coordinar las actividades de todos los organismos, agencias donantes, poblaciones locales y otros actores involucrados en el desarrollo de la región. El problema es que hay quien denuncia la existencia de duplicidad con las funciones de la NDDC, y el Ministerio ha recibido críticas por su falta de transparencia y por convertirse en un incentivo que para otras regiones comiencen a solicitar la creación de sus propios ministerios (Ibeanu, 2006).

En agosto de 2007 se multiplicaron los enfrentamientos entre militantes del NDV y otros grupos y las operaciones de la JTF provocaron que muchas personas tuviesen que abandonar la ciudad de Port Harcourt (“Residents flee heavy fighting in Niger Delta’s main city”, 2007). Hubo muchos muertos y el MEND acusó a la JTF de estar asesinando a civiles. Durante este período, el movimiento comenzó a fragmentarse y algunas de sus facciones empezaron a solicitar la intervención de negociadores internacionales. En septiembre Henry Okah, líder de una de las principales facciones de la organización que firma sus declaraciones con el nombre de Jomo Gbomo (“Tensions rise with start of trial of Delta leader”, 2008), era detenido en Angola y era extraditado a Nigeria en febrero de 2008 para enfrentar cargos de tráfico de armas, contrabando de petróleo y traición. Esta facción mandó entonces un *email* a la prensa internacional en el que aseguraba que no volvería a participar en procesos de negociación hasta que Okah fuese liberado. Además, pidió a George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, que interviniese en el conflicto (“Intervene in Nigeria, Bush urged”, 2008).

A partir de 2008 el conflicto comenzó a extenderse a países vecinos, como Camerún y las aguas del Golfo de Guinea, tras el fin de la disputa histórica por la península de Bakassi que finalmente Nigeria le cedió a Camerún en agosto de 2008. Entonces, grupos armados del Delta, como el Niger Delta Defence and Security Council (NDDSC), que demandaba la independencia para la península de Bakassi o algún tipo de autodeterminación y que tenía “una experiencia táctica indirecta, si no apoyo logístico directo, de la insurgencia y criminalidad en el Delta” (ICG, 2009, p. 5), comenzaron a atacar la costa de Camerún y Guinea Ecuatorial. En mayo el MEND de Okah aseguraba que Jimmy Carter había aceptado su invitación a ser mediador en el conflicto, y que si esto se hacía efectivo establecerían un alto el fuego. Carter negó haber aceptado pero ofreció su colaboración si el gobierno también la solicitaba (“Niger Delta push for US mediator”, 2008).

La transnacionalización de la violencia asociada a la lucha por el control de las rentas petroleras provocó nuevas respuestas estatales. En junio de 2008 Yar'Adua anunció la celebración del Niger Delta Summit y nombró a un asesor especial de Ban Ki Moon para dirigirlo y responder así a las demandas de algunas de las organizaciones más representativas de la región de que en la resolución del conflicto hubiese mediación internacional. El MEND fue crítico con esta última propuesta y aseguró que iba a fracasar por estar pensada sólo hacia fuera, para atraer atención internacional (Isine, 2008). A inicios de julio de 2008, durante la cumbre del G8 en Japón el primer ministro británico realizó unas declaraciones a la prensa en las que prometió ayuda al gobierno nigeriano para combatir el desorden en el Delta. Poco después Gordon Brown y su homólogo nigeriano mantuvieron conversaciones tras las cuales el primer ministro británico prometió entrenamiento militar y financiero a través del DFID (Department for International Development). Yar'Adua afirmó que restaurar la seguridad en el área permitiría a Nigeria exportar 1'2 millones más de barriles al día. En respuesta al compromiso británico, el MEND declaró que el Reino Unido tendría que “atenerse a las consecuencias” (“Brown outlines Niger Delta help”, 2008).

En septiembre de 2008, Yar Adua estableció el Niger Delta Presidential Technical Committee, que elaboró un informe para el gobierno federal. Este no llegó a publicarse pero su presidente, Ledum Mitee, líder histórico del MOSOP, leyó a la prensa algunas partes y señaló que en 9 meses de 2008 murieron 1.000 personas por la violencia en el Delta (“Nigeria oil unrest kills 1,000”, 2008). Este informe recomendaba al gobierno la apertura de un proceso de amnistía a los grupos insurgentes del Delta a través de un programa de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), más asignación de recursos económicos a la región y la promoción de un desarrollo sostenible. La propuesta encontró legitimidad entre algunas organizaciones del Delta ya que el informe es muy completo y recoge las demandas históricas de las minorías pero, según el MEND, que a pesar de sus críticas lo acató, este estaba suavizado, ya que no mencionaba nada de federalismo fiscal, una de sus principales demandas. La Conference of Ethnic Nationalities of Niger Delta (CENND), organización paraguas interétnica, aún fue más crítica al solicitar el incremento del principio de derivación al 50% hasta lograr un control total de los recursos al final del proceso.

Ese mismo mes, el 14 de septiembre, el MEND declaraba una “guerra petrolera” en la que amenazaba a la industria con que destruiría todas sus instalaciones y les daba un plazo a las transnacionales para que se fuesen y retirasen a su personal de la zona. La JTF respondería bombardeando el estado de Rivers, lo que suscitó en la zona recuerdos de Biafra y provocó que el MEND recibiese un mayor respaldo social. Sin embargo, en febrero de 2009, el movimiento ijaw atacó una planta de gas de Shell en el estado de Delta, lo que provocó la condena por parte de algunas comunidades ijaw, como los izon-be, que proponían “un acercamiento intelectual no agresivo” a la industria petrolera.

Desde entonces comenzarían a surgir nuevas fragmentaciones en la población local. Poblaciones que se habían mostrado solidarias y representadas por el MEND al inicio de sus operaciones comenzaron a cuestionarla públicamente y a denunciar sus actos y desvincularse de él, denunciando el uso de medios violentos. El MEND y el IYC se enemistaron a partir de este momento porque la segunda acusó a la primera de haberse criminalizado y por ello perdido las simpatías internacionales, a lo que el MEND respondería: “no nos importa ningún tipo de simpatía foránea en este momento porque esos mismos extranjeros son parte del problema que estamos sufriendo hoy” (Amaize, 2009).

En abril de 2009, el gobierno federal inauguró un cambio de perspectiva institucional, que se vio influida por las presiones de aliados internacionales influyentes (Ukiwo, 2011, p. 17) y que supuso el paso de la criminalización de las actividades militantes a la aceptación de sus motivos políticos.

4.4. Abordajes institucionales: el *Programa de Amnistía del Delta del Níger (2009-2015)*

Como primer paso de este cambio de perspectiva, Yar’Adua decidió liberar a algunos líderes de los grupos militantes y realizó unas declaraciones en las que garantizaba la amnistía a aquellos que entregasen sus armas y municiones (Olusola & Odiegwu, 2009). No obstante, en simultáneo a este anuncio el gobierno federal agudizó la militarización de la región a través de la JTF. En mayo esta lanzó un operativo militar por tierra, mar y aire contra campamentos militantes en torno al reino de Gbaramatu, en el estado de Delta, que ya habían sido reprimidos militarmente en 2006. El resultado del ataque de la JTF

fue la destrucción de numerosas viviendas, la muerte de un elevado número de mujeres, niños y ancianos y el desplazamiento de un gran número de personas (Luqman, 2011, p. 39).

En respuesta a este ataque, el 15 de mayo el MEND declaraba una “guerra petrolera total” y en junio lanzaba la “Hurricane Piper Alpha” y “Hurricane Moses”, dos operativos que tenían el objetivo de hacer explotar oleoductos y otras instalaciones petroleras “con el objetivo de dañar la economía nacional” (Luqman, 2011, p. 40). Fue uno de los meses en los que más acciones del MEND hubo y sus actividades tuvieron mucha repercusión internacional por sus impactos sobre los beneficios de la industria petrolera: ya en marzo de 2009 las exportaciones de crudo habían descendido a 1’6 millones de barriles al día, frente a los 2’6 millones de 2006 (Nwajiaku, 2012, p. 304).

Por fin, el 26 de junio de 2009 Yar’Adua prometía que su gobierno “haría cualquier cosa para asegurar que las condiciones que provocan que la gente tome las armas contra la nación y se sometan a sí mismos a condiciones inhumanas en los pantanos sean mejoradas” (citado en Ukiwo, 2011, p. 17) y anunciaba una amnistía de 60 días que aseguraría el perdón a quienes hubiesen estado relacionados con las actividades armadas realizadas por milicias como el MEND a cambio de su desmovilización y desarme. Como incentivo, se les proporcionaría capacitación y una asignación económica durante cuatro años. La narrativa oficial tras el *Programa de Amnistía del Delta del Níger* supuso un punto de inflexión en un acercamiento a estos grupos por parte de los sucesivos gobiernos, que tendían a negar sus motivos políticos y se centraban en su criminalización.

Inicialmente, este anuncio generó tantas expectativas como suspicacias entre los propios militantes. En julio de 2009, en un nuevo comunicado, el MEND afirmaba que los problemas que enfrentaba Nigeria “no tienen nada que ver con los militantes que luchan por la libertad sino con el liderazgo político corrupto y ciertas tribus arrogantes que siguen viviendo en la gloria del pasado” (“Nigeria rebels claim Lagos attack”, 2009). El 11 de julio el gobierno liberaba a Henry Okah y lo dejaba libre de cargos, ese mismo día el MEND reivindicaba un nuevo ataque a un tanque cerca de Lagos, tras el cual murieron 5 personas. En octubre Yar’Adua se reuniría por primera vez con Okah y anunciaría un nuevo paquete financiero para la construcción de escuelas y hospitales en el Delta.

Gracias a esta medida, durante los siguientes años se redujo considerablemente la actividad militante en la región; hasta 2013 esta tregua supuso que hubiese un descenso exponencial de ataques a instalaciones petroleras y secuestros de personal de la industria, lo que facilitó que las cifras de producción y exportación de petróleo regresasen a los niveles de 2006 (Nwajiaku, 2012, p. 302) y se reestableciese cierta confianza por parte de los actores con intereses económicos en la región. De los 700.000 barriles al día producidos a mediados de 2009, se pasó a los entre 2'2 y los 2'4 millones de barriles al día desde el año 2011 (ICG, 2015, p. 2).

A pesar de que una gran parte de sus miembros aceptó la amnistía, el MEND siguió reivindicando algunas acciones, sobre todo una vez que Yar'Adua cayó enfermo. Entretanto, en noviembre de 2009 Yar'Adua era incapacitado de sus funciones por su grave estado de salud. El Senado le transfirió entonces sus poderes a su vicepresidente Goodluck Jonathan, un ijaw originario del estado de Bayelsa, quien tres meses antes de la muerte de Yar'Adua en mayo de 2010, se convertiría en el primer presidente de Nigeria originario del Delta del Níger. En octubre de 2010 todo hacía pensar en un regreso a la situación de 2008, tras el primer ataque reivindicado por el MEND fuera del Delta durante la celebración del Día de la Independencia en Abuja, en la que dos coches bomba mataron a 12 personas. Días antes envió un comunicado a los medios en los que amenazaba con atacar contra las celebraciones, ya que no hay "nada que celebrar tras 50 años de fracaso. Durante 50 años la gente del Delta ha visto como le robaban su tierra y sus recursos" ("Nigeria independence celebrations marred by blasts", 2010).

El gobierno federal trató de desvincular al movimiento ijaw de este acto y culpó a Henry Okah de estar actuando en nombre del MEND por intereses particulares. Pero Okah también desligó al MEND del ataque y él y otros miembros del MEND incluso lo condenaron ("Nigerian police names suspects in Abuja car bombings", 2010). En noviembre hubo otro ataque reivindicado por el MEND en el estado de Akwa Ibon, contra una compañía británica ("Nigerian militants seize workers from oil rig", 2010).

En abril de 2011 se celebraron nuevas elecciones federales y aunque tanto los observadores estatales como los internacionales se congratularon de que había habido una mejora con respecto a las anteriores, en esta ocasión se reportaron también numerosos incidentes de violencia electoral en distintas partes de Nigeria, sobre todo en el norte, y

hay fuentes que estiman que en ellos murieron en torno a unas 1.000 personas (ICG, 2014). Esta violencia se vio agravada por discrepancias en torno al *zoning*, un acuerdo tácito en el seno del PDP por el que para concurrir a las elecciones federales se deben alternar candidatos del norte y el sur con el objetivo de estabilizar las luchas por el poder y el acceso a los recursos (ICG, 2011, p. 4). Según las elites del PDP del norte, Jonathan llegó accidental e ilegítimamente al poder y ya tras los dos mandatos de Obasanjo la candidatura a la presidencia le habría correspondido a un representante del norte.

Mientras en el norte la elección de Jonathan ampliaba las fracturas internas en el PDP y despertaba nuevas tensiones sociales, en el Delta su elección pareció calmar a los *ijaw*, y de hecho fue interpretada como una estrategia de relaciones públicas encaminada precisamente a este objetivo (Nwajiaku, 2012). Dieciocho meses después del inicio del programa de amnistía, el hecho de que la violencia relacionada con la celebración de las elecciones federales y estatales en el Delta no afectase a los beneficios de la industria petrolera (“Nigeria militants claim oil strike, army blames youths”, 2011) provocó que se difundiese la idea de que la región se había pacificado, algo que dista mucho de la realidad.

Durante el periodo en el que relevó de sus funciones a Yar’Adua, Jonathan respetó la agenda de su antecesor, hasta que una vez asumida oficialmente la presidencia tras las elecciones de mayo de 2011, lanzó un nuevo plan de desarrollo llamado la Agenda de la Transformación (2011-2015), basado en tres ejes: crecimiento inclusivo y no inflacionario, generación de empleo y alivio de la pobreza y reorientación del valor de la ciudadanía y la llamó “la década del desarrollo” (Haynes, 2005). El programa se centró en la diversificación de la economía para no depender tanto del petróleo y puso un foco especial en el Delta del Níger, a través de un programa para generar empleo, reducir los niveles de pobreza y contribuir al fin del conflicto. La propuesta de Jonathan recibió muchas críticas por ser un enfoque de arriba-abajo que no contaba con las poblaciones.

4.4.1. Las ambivalencias del proceso de “amnistía”

Durante su mandato, Jonathan le dio continuidad al programa de amnistía. Sin embargo, estas medidas, que responden a la implementación de las recomendaciones del Niger Delta Presidential Technical Committee, recibieron muchas críticas por parte de distintas

organizaciones sociales por ser “superficiales, azarasas y descoordinadas en su puesta en práctica” (Ahonsi, 2011, p. 39). Las críticas se dirigen fundamentalmente al hecho de que el programa no haya tenido en cuenta a la población no combatiente, sobre todo a las mujeres, pese a su rol en el conflicto, pues además de víctimas de la violencia, las mujeres también forman parte de los grupos insurgentes con roles específicos y limitados, desde combatientes, emisarias y traficantes de armas, hasta guías espirituales.

También se critica el hecho de que no se ha llevado un recuento fiable de las armas entregadas y las que aún quedan en circulación. Además, se denuncia la falta de transparencia en los criterios de elegibilidad: el gobierno le promete a los líderes contratos de seguridad de oleoductos, algunos de los que se registran no son militantes y otros que sí lo son no entregan sus armas. Por otro lado, aunque se ha etiquetado como un programa de DDR, la parte de rehabilitación ha quedado descuidada. Eso sin olvidar que a pesar de la amnistía, el Delta sigue fuertemente militarizado, no se ha detenido la actividad armada y los conflictos inter e intracomunitarios siguen inflamando la vida en la región.

En mayo de 2011 el gobierno de Jonathan realizó unas declaraciones en las que aseguraba que se habían destruido todas las armas entregadas por los militantes, dando así por finalizada la fase de Desarme del programa de DDR. Afirmaba que toda actividad armada en curso debía ser interpretada a partir de ahora como meramente criminal. Desde entonces, cuando algún grupo militante como el MEND ha reivindicado actos de sabotaje contra los intereses de la industria petrolera han sido deslegitimados por el gobierno, que ha dicho que sus ejecutores son solo jóvenes criminales sin motivaciones políticas (Tife, 2011). Pero se siguen cometiendo ataques contra instalaciones petroleras bajo el nombre del MEND: a inicios de febrero 2012, desde una cuenta de correo a nombre de Jomo Gbomo, se reivindicaba un ataque contra un oleoducto como un “recordatorio de nuestra presencia en los pantanos del Delta y un símbolo de lo que vendrá” (“Nigeria oil militants Mend 'hit Eni Bayelsa pipeline', 2012).

Además, “muchas de la militancia se ha simplemente movido *offshore* – la piratería es el nuevo lugar para los militantes armados”, según comentó el entonces investigador de Platform London, Ben Amunwa, a IRIN News en 2011 (“Niger Delta still unstable despite amnesty”, 2011). Cuando lo entrevistamos en enero de 2013, este activista había dejado la organización y trabajaba para un despacho de abogados de Londres que enfrentaba

demandas contra empresas como Shell por sus actividades en el Delta. Nos decía entonces que consideraba que “la amnistía es un respiro para el gobierno, las transnacionales, los gobiernos extranjeros, las ONGs, las comunidades locales, los militantes... Es algo así como un mensaje de ‘¿podemos simplemente relajarnos por un rato?’ Pero en realidad, ¿qué ha cambiado? La JTF sigue funcionando igual, sigue habiendo muchísimas armas ligeras circulando... (Amunwa, 2013). En la misma línea, la abogada y activista originaria del Delta y afincada en Londres desde 1970 Alice Ukoko⁵⁹, entrevistada también para esta investigación, señalaba que:

Quando hablan de la amnistía yo me siento insultada, porque se habla de amnistía cuando alguien ha cometido un crimen, pero nosotros no somos criminales. Le han dado la amnistía a los mismos a los que habían armado. Es la misma gente. Han llevado armas a un lugar en el que la situación es ya muy tensa. La gente no tiene trabajo y le das armas. Y ahora ¿cómo pretendes quitárselas. Así que ¿amnistía para quién? ¿Para ti o para mí? Porque tú me has robado todo, has destruido mi vida, mi medioambiente, has destruido Nigeria, me has privado de todo lo que tenía... La mayor parte de los jóvenes han sido pacíficos, pero el mundo los ha ignorado, porque los han metido a todos en el grupo militante MEND y la amnistía ha sido para ellos (Ukoko, 2012)⁶⁰.

En el mismo sentido, miembros del equipo nigeriano del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en Londres afirman que “se dice que el dinero invertido en este programa es para tener las cosas en calma, para que las compañías petroleras puedan seguir con sus operaciones” (Kamara 2012)⁶¹. Apuntan también que su organización no aprueba ese tipo de amnistía. Además, afirman que han comprobado cómo “muchas veces cuando un militante consigue la tarjeta de amnistía la policía lo sabe y va detrás de él para arrestarlo al salir” (Freeman, 2012)⁶².

Joseph Croft, de la organización Stakeholders Democracy Network, afirma también que la amnistía no ha supuesto ningún cambio en la situación económica de los jóvenes del Delta, y todavía menos en lo que respecta a “las expectativas de mejorar los esquemas de alivio de la pobreza, el desarrollo socioeconómico y la limpieza del devastado

⁵⁹ Alice Ukoko es una abogada defensora de los derechos humanos originaria de Uzere, una pequeña población del estado de Delta. Emigró al Reino Unido en el año 1970. En septiembre de 1994 fundó la ONG Women of Africa, para “proporcionar una plataforma a las mujeres africanas para hacer *lobby* en los esfuerzos políticos para return Nigeria al gobierno civil”. Más tarde comenzó a colaborar también con mujeres nigerianas en el Reino Unido. Según la *website* de su organización, su foco ha sido traer conciencia a la comunidad internacional sobre los abusos de derechos humanos en Nigeria y el Delta en particular

⁶⁰ Alice Ukoko, directora de Women of Africa, entrevista personal, Londres (22/11/2012).

⁶¹ Makmid Kamara, investigador del Equipo de África Occidental del Programa de África en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, entrevista personal, Londres (03/12/2012).

⁶² Lucy Freeman, subdirectora del Programa de África del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, entrevista personal, Londres (03/12/2012).

medioambiente” (Croft, 2013)⁶³. En el mismo sentido, Alagoa Morris, activista de Environmental Rights Action y Friends of the Earth International señala en una entrevista con IRIN News que el programa de amnistía no había sido elaborado para atajar los problemas políticos y medioambientales del Delta, ya que:

Las prioridades políticas subyacentes que hay detrás del proceso de amnistía eran más estrechas que lo que las intenciones integrales sugerirían. El énfasis parece estar más en los objetivos inmediatos de desarme y desmovilización para asegurar el flujo ininterrumpido de petróleo que en un proceso de reintegración (“Anger over amnesty programme”, 2012).

Gradualmente, la mayoría de los líderes de los principales grupos armados aceptaron la propuesta del gobierno y, a través de terceras partes o directamente con él, negociaron su entrega de armas a cambio de lo prometido. Resulta muy difícil dar con cifras fiables, pero según Croft, podrían ser cerca de unos 30.000 militantes los que acabaron acogidos a la amnistía entre octubre de 2009 y mayo de 2011 (Croft, 2013). A través del uso de la amnistía como estrategia de “cooptación, el Estado incorporó a los antiguos líderes del movimiento insurgente en posiciones en el gobierno o la industria privada, dejándolos de este modo inmóviles” (Adunbi 2015, loc. 4723). Los que entregaron las armas han recibido un estipendio mensual de 439 US\$ y han sido formados para trabajar como electricistas o carpinteros. Muchos de los líderes han conseguido contratos jugosos en las transnacionales o puestos gubernamentales, mientras el resto de la población no ha visto mejoradas sus condiciones de vida:

Los militantes cooptados ya no trabajan más a favor de la autodeterminación de las comunidades, más bien la autodeterminación se ha convertido en algo puramente individualista, una simple cuestión de encontrar la manera de participar en la economía petrolera para beneficio personal (Adunbi 2015, loc. 4942).

El gobierno ha recibido críticas por pagarles millones de dólares al año a ex líderes militantes como Ateke Tom y Asari para que protejan los oleoductos que antes solían atacar, mientras la mayor parte de los jóvenes siguen sin encontrar salidas laborales⁶⁴. Existe un desajuste entre la formación que reciben los exmilitantes y el mercado de trabajo. En marzo de 2015 sólo 151 de los 15.451 que se habían graduado de los cursos

⁶³ Joseph Croft, director de Stakeholders Democracy Network (SDN), entrevista personal, Londres, (22/01/2013).

⁶⁴ La Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) le adjudicó en el año 2012 un contrato por valor de 16’8 billones de nairas (lo que equivale a 108\$) a una empresa propiedad de Tompolo, uno de los líderes del MEND.

de formación habían encontrado trabajo con “organizaciones creíbles en el país”, mientras la mayoría seguían albergando esperanzas de encontrar empleo en el sector petrolero o en compañías aéreas. Esa frustración podría alentar a estos jóvenes a volver a la militancia y/o la actividad criminal, “pero ahora mejor educados y más capaces de conseguir nuevas concesiones del gobierno federal” (ICG, 2015, p. 3). De hecho, algunos de los que han quedado fuera de los beneficios de la amnistía han vuelto a rearmarse en dos facciones rivales, una liderada por Ramsey Umukoro y otra por Kaithy Sese.

A medida que se acercaba el año 2015, finalización prevista del programa de amnistía, la tensión en el Delta se agudizaba. Antes de la celebración de las elecciones federales de marzo de 2015, las quintas desde 1999, ya había fuentes que apuntaban al riesgo de un resurgimiento de la violencia en la región, sobre todo si su candidato, el presidente saliente Jonathan, perdía frente al exmilitar Muhammadu Buhari, apoyado mayoritariamente en el norte. En enero de 2015 los militantes anunciaron que volverían a la lucha armada si Jonathan no ganaba las elecciones y acusaban a Buhari de tener una agenda del norte (Eziukwu, 2015). Estas serían las primeras elecciones en las que el PDP, tras 15 años al mando del gobierno federal y la mayoría de los estados, se enfrentaba a una verdadera contienda electoral frente a otro partido, el APC (All Progressive Congress), una unión de los cuatro partidos de oposición.

En el proceso previo a las elecciones se reprodujeron las mismas prácticas que en los periodos electorales anteriores, con el uso de grupos de jóvenes por parte de los políticos para amedrentar a sus oponentes, que dieron lugar a asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros (una de las nuevas tendencias es el secuestro de políticos y sus familiares por motivos económicos) y otras violaciones de derechos humanos. Los exlíderes militantes llevaron a cabo sus particulares campañas para que Jonathan pudiese disputar un segundo término porque temían que su marcha de la presidencia significase el fin del programa de amnistía, el cierre de la NDDC y el Ministerio para los Asuntos del Delta, como solicitaron los delegados del norte en la Conferencia Nacional. Les preocupaba que ganase la presidencia un nordesteño e incluso el propio Asari amenazó con un nuevo rearme si Jonathan no era reelegido, lo que finalmente sucedió. Una vez que Jonathan aceptó los resultados electorales, el segundo al mando del MEND, Gabriel Asabuja, aceptaba también los resultados señalando que “la victoria de Buhari es lo que Dios quiere. Como líder juvenil del Delta del Níger puedo decir que trabajaremos con el gobierno, a menos

que el gobierno no quiera trabajar con nosotros y que trataremos de empoderar a los jóvenes del Delta y crear empleo para ellos” (Anyadike, 2015).

Nada más asumir su mandato, el presidente Buhari aseguró que, además de combatir al grupo Boko Haram, que desde 2008 se ha convertido en el principal problema de seguridad nacional en Nigeria, durante su mandato prestaría también una especial atención al Delta del Níger (ICG, 2015). Por el momento, ha anunciado que el programa de amnistía concluirá en diciembre de 2015, ha puesto fin a los contratos de seguridad de oleoductos en manos de líderes exmilitantes y ha asegurado que transformará radicalmente las agencias de desarrollo del Delta.

Conclusiones

La llegada de Obasanjo al gobierno federal en mayo de 1999 despertó muchas expectativas entre los actores con intereses económicos en Nigeria. El uso de la retórica de la democracia y la defensa de los derechos humanos, acompañado del lanzamiento de numerosas medidas a favor del desarrollo y la transparencia, consiguió reestablecer la confianza internacional en el Estado nigeriano, lo que supuso también el fortalecimiento de la industria petrolera en el país, que se había resentido durante el régimen de Abacha. Mientras, a nivel doméstico, al igual que la del resto de Nigeria, la población del Delta esperaba que el nuevo marco “democrático” por el que habían trabajado algunas de sus organizaciones más representativas, como el MOSOP, sería por fin el idóneo para llevar a buen término sus reivindicaciones históricas.

El gobierno de Obasanjo tomó distintas medidas encaminadas a la responder a los agravios de las poblaciones afectadas por la extracción de petróleo, como la elevación del principio de derivación al 13 %, un incremento que, además de haber sido visto como insuficiente por las organizaciones y movimientos sociales representativos del Delta, enriqueció a las elites locales y contribuyó a reproducir nuevas dinámicas neopatrimoniales sin atajar las verdaderas causas del conflicto. De este modo, esta y otras medidas puestas en práctica por su gobierno no sólo no contribuyeron a pacificar la región sino que alimentaron aún más los agravios de la población local.

La articulación de movimientos en torno a los agravios percibidos por las poblaciones afectadas por la extracción petrolera se vio facilitada por la apertura de espacios políticos en el nuevo marco institucional. Desde 1999 ha habido una gran proliferación de grupos sociales que llevan a cabo reivindicaciones tanto frente al Estado como a las empresas transnacionales. En particular, comenzaron a surgir grupos que consideraban que el uso de medios pacíficos no había dado los resultados esperados. La aplicación de los planes de ajuste estructural en un contexto de autoritarismo estatal había tenido efectos sobre los órdenes sociales en el Delta, al provocar una brecha intergeneracional que ya se venía dando desde la década de 1970, cuando las élites locales accedieron por primera vez al Estado. A comienzos del siglo XXI, los jóvenes de la región comenzaron a sentirse traicionados por sus propias elites y se articularon para cuestionar, no sólo al tándem formado por el Estado central y las empresas transnacionales, sino a sus propios representantes tradicionales.

Las actividades de las llamadas milicias armadas de jóvenes contra los intereses de la industria petrolera han marcado la etapa postmilitar en el Delta y han despertado mucho interés por parte de actores estratégicos, un interés que ha tenido su reflejo en la academia. Mientras la literatura dominante obvia las trayectorias históricas que subyacen en el surgimiento de estos grupos y afirma que su emerger tiene exclusivamente que ver con la codicia y no con motivaciones políticas, existe otro enfoque cada vez más difundido, que sólo atiende a las continuidades y desprecia cualquier clase de ruptura que se haya podido dar en la articulación de los movimientos sociales del Delta. Ambas visiones, de un modo u otro, invisibilizan algunas de las dinámicas sociales que se están dando en el Delta del siglo XXI, y dificultan el entendimiento del conflicto, en el que intervienen todos los actores del “complejo petrolero”, relacionados entre sí de maneras complejas y contradictorias.

El surgimiento de las políticas de juventud entre las minorías del Delta, en particular la minoría ijaw (la más grande de la región), se relaciona con sus agravios generacionales (pobreza, falta de oportunidades laborales y de representación política) percibidos por estos jóvenes en el marco de la economía del petróleo. Las milicias armadas de jóvenes, que realizan actos de sabotaje y secuestros del personal de la industria para forzar al Estado nigeriano a responder a sus reivindicaciones y se dicen inspirados en dos de los movimientos más representativos de la región, la NDVF de Isaac Boro y el MOSOP,

recuperan las demandas políticas que quedaron difuminadas en la estrategia del movimiento ogoni. Estas se sustentan sobre dos ejes interconectados: le demandan al Estado que emprenda una reestructuración en consonancia con un “verdadero federalismo” que les conceda el derecho de autodeterminación, y el “control de los recursos” que están en su territorio.

El hecho de que estos grupos estén insertados en la compleja red de contrabando de crudo, su medio de subsistencia, ha provocado que la literatura dominante, basada en la visión individualista de la elección racional, los vea como meros criminales. Frente a este enfoque, existe otra corriente de análisis, seguida también en la literatura para-académica de ONGs solidarias con la causa de las minorías del Delta, que trata de marcar una línea de separación entre la militancia armada y los grupos criminales. No obstante, esa línea parece ser más difusa de lo que se plantea desde esta perspectiva. Desde inicios de la década de 2000 muchos de estos grupos se han ido desvinculando de sus agendas políticas originales y se han insertado en las dinámicas neopatrimoniales contra las que aseguran estar combatiendo.

Como apuntan algunos de estos autores críticos con el enfoque dominante, a este paso de la violencia popular a la violencia criminal han contribuido diversas variables. Las que más peso han tenido han sido las de la propia conducta de los principales actores del complejo petrolero. Estos han usado distintas estrategias de desarrollo y relaciones públicas para responder a las demandas de las organizaciones del Delta. Desde el Estado se han orquestado distintos macroplanes económicos, tanto a nivel federal como regional, y se han creado distintas instituciones de desarrollo específicas para el Delta. En cuanto a las transnacionales, estas han llegado a convertirse en verdaderos agentes de desarrollo local. Estas medidas, además de haberse revelado inefectivas, se han acompañado de distintos tipos de represión. La creciente militarización del Delta en el marco de la securitización de la industria petrolera, ha dado lugar a innumerables violaciones de derechos humanos por parte de las distintas fuerzas de seguridad, públicas y privadas, que resguardan los intereses del sector. Esta conducta ha contribuido a la radicalización de los grupos de jóvenes.

No obstante esta visión, que atiende acertadamente a las trayectorias históricas de las poblaciones del Delta agraviadas por la extracción petrolera, no explora en profundidad

las relaciones entre las milicias de jóvenes, el gobierno y las empresas transnacionales, más complejas de lo que sugiere este enfoque, que, aunque más completo que el dominante, ha tendido a la mitificación de las resistencias. No se trata de que queramos negar estas continuidades y desacreditar así las reivindicaciones legítimas de las poblaciones locales pero es fundamental que no olvidemos que las redes criminales en las que se insertan las milicias armadas de jóvenes forman parte de una economía paralela surgida en torno a la explotación de petróleo ya desde la década de 1970, de la que se benefician tanto ellos como las elites políticas y las propias empresas transnacionales, aunque todos estos actores se acusen mutuamente de ser los principales beneficiados de la red transnacional de contrabando de petróleo. Pero además, algunos de los miembros de los grupos insurgentes navegan también en las redes de activismo transnacional articuladas en torno a los derechos humanos y medioambientales, como exploraremos en el próximo capítulo.

Las elásticas alianzas entre la industria y quienes dicen combatir los impactos de sus actividades en la vida de las poblaciones del Delta han desatado nuevos conflictos y contribuido a complejizar los ya abiertos entre estas poblaciones y entre ellas y la industria petrolera. Desde la *Declaración de Kaiama* hasta 2006 surgieron distintas milicias armadas de base ijaw como la NDPVF y la NDV, cuyas actividades fueron combatidas de manera ambigua por los distintos niveles de gobierno y las transnacionales que mientras denunciaban públicamente sus actividades las utilizaban para asegurar sus propios intereses. Esto provocó nuevas divisiones y fragmentaciones sociales en el seno de la propia minoría ijaw y nuevas fricciones con otras minorías de la región, como los itsekiri.

Mientras se daban estos conflictos, se multiplicaban también los surgidos entre algunos de estos grupos y la alianza formada por el gobierno federal y las empresas transnacionales, que enfrentaron sus actividades con la zanahoria del desarrollo y el palo de la represión. Justificando su fundación en respuesta a esta conducta, en el año 2006, el MEND emergía con la sofisticación de la estrategia armada y un nuevo lenguaje bien articulado para resonar más allá de las fronteras nigerianas. Al fortalecimiento de las demandas políticas históricas de las minorías del Delta la organización ijaw unía el uso de novedosas tácticas armadas, como el uso de coches bomba, y una clara estrategia de comunicación orientada a audiencias transnacionales.

Las actividades del MEND fueron pronto categorizadas como meramente criminales por parte del gobierno de Obasanjo, que las combatió con el uso de la fuerza. Sus aliados internacionales, preocupados ante los impactos que estas estaban teniendo sobre los intereses de la industria petrolera, fortalecieron sus apoyos al gobierno federal para combatir al movimiento. A partir de 2006, la creciente militarización del Delta entró a formar parte del contexto de la Guerra Global contra el Terrorismo, liderada por el gobierno de los Estados Unidos, el principal socio comercial de Nigeria. A las fuerzas de seguridad ya desplegadas en la región, comenzaron a unirse otras de carácter transnacional en el contexto de la securitización de la industria petrolera.

A partir del año 2008, el conflicto se extendería a los países vecinos del Golfo de Guinea, donde grupos que se dicen cercanos al MEND comenzaron a realizar acciones armadas contra intereses occidentales. Gradualmente, las presiones de los actores internacionales con intereses estratégicos en el Delta, comenzaron a hacer efecto en la posición institucional, que sufrió un giro a partir del establecimiento del programa de DDR por parte del gobierno de Yar Adua en junio de 2009. En abril de 2011, la llegada al gobierno federal de Goodluck Jonathan, un ijaw del estado de Bayelsa, pareció haber contribuido también a un descenso de la violencia en el Delta, donde había esperanzas de que sus demandas recibirían por fin una respuesta efectiva.

Según algunas fuentes, de este programa de amnistía se beneficiaron unos 30.000 jóvenes militantes, que a cambio de su desarme y desmovilización han recibido formación en Nigeria y el extranjero y una asignación mensual durante 4 años. No obstante, el hecho de que esta respuesta sea parcial, al haber obviado a los no combatientes, como las mujeres; superficial, al haberse despreocupado de la parte de rehabilitación; y dudosa desde el punto de vista ético debido a unos criterios de elegibilidad poco transparentes, ha despertado innumerables críticas, tanto fuera como dentro del Delta.

Lo que evidencia que el programa todavía no ha contribuido a resolver la cuestión del Delta es que la actividad armada no se ha detenido en la región, simplemente se ha fragmentado. Además de que existen grupos que siguen reivindicando sus acciones armadas como parte de organizaciones militantes como el MEND que no han querido someterse al programa de amnistía, los grupos criminales han comenzado a proliferar. El hecho de que no haya habido una respuesta a las demandas políticas esenciales de las

minorías, como el “verdadero federalismo” y el “control de los recursos”, ha seguido generando agravios entre las poblaciones locales, que debido a la conducta de las empresas transnacionales, han seguido teniendo conflictos inter e intracomunitarios. Los jóvenes de la región que no han podido beneficiarse del programa de amnistía siguen viendo alimentados sus agravios generacionales. Muchos de los que sí han sido beneficiados, se han encontrado con que la formación recibida no les asegura un empleo, mientras los exlíderes de sus milicias cuentan con jugosos contratos en el gobierno y las transnacionales.

Durante los 6 años que ha durado el programa de amnistía, el desarme supuso nuevas fragmentaciones sociales, que, gracias a la existencia de un nuevo arsenal disponible en los mercados, contribuyó a un nuevo rearme. Durante el periodo previo a las elecciones de febrero de 2015 se reprodujeron las dinámicas de las de 2003 y 2007 y los incidentes de violencia electoral se multiplicaron. Desde entonces proliferan las opiniones que sostienen que la salida de Jonathan del gobierno federal podría suponer un agudizamiento de la violencia y provocar nuevas dinámicas de conflicto en el Delta.

CAPÍTULO 5

Conexiones transnacionales en el activismo en torno al petróleo: entre la denuncia y la negociación

Introducción: El activismo transnacional en el Delta del Níger

Como ya se ha planteado en el capítulo precedente, el marco institucional que rige el gobierno federal de Nigeria desde el año 1999 afectó de diversas maneras a la articulación de las organizaciones y movimientos sociales del Delta. Junto a la tendencia al despliegue de repertorios de contestación de carácter armado por parte de algunos grupos de jóvenes, desde el fin de la etapa militar tuvo lugar la consolidación de otra tendencia, iniciada ya durante el mandato de Abacha. Entonces, la estrategia de “cambio de escala” (McAdam et al., 2001) puesta en práctica por el MOSOP se convirtió en un modelo para multitud de organizaciones locales y facilitó sus conexiones con redes y coaliciones transnacionales de incidencia política. Estas “formaciones transnacionales” (Latham et al., 2001) han sido menos atendidas por la academia que los grupos armados. De hecho, desde los estudios sobre el movimiento ogoni (Osaghae, 1995b; Olukoshi, 1995; Rowell, 1996; Ibeanu, 1997, 1999; Obi, 1997; Bob 2005), el análisis de las interacciones entre organizaciones locales del Delta y otras organizaciones de carácter transnacional no ha sido demasiado cubierto por la literatura.

Para entender estas nuevas relaciones y sus efectos es necesario atender a la estrategia utilizada por el MOSOP, que abrió canales de cooperación transnacional que comenzaron a ser aprovechados por otras organizaciones y movimientos locales una vez que aquel desapareció de la agenda del activismo transnacional debido al debilitamiento del movimiento a partir del asesinato de los 9 activistas ogoni. La apertura y consolidación de estos canales se vio facilitada por las dinámicas internacionales de la Posguerra Fría, que contribuyeron a la erosión de los apoyos a las dictaduras africanas. En el marco de la nueva agenda del desarrollo promovida desde entonces por las Instituciones Financieras Internacionales, que conectaría el apoyo a los Estados con la promoción de los “derechos humanos”, el “buen gobierno”, la “rendición de cuentas” y la “transparencia” en el seno de los gobiernos, las ONGs⁶⁵ comenzaron a ser celebradas como los principales agentes

⁶⁵ Entendemos las ONGs como “grupos privados, voluntarios, sin ánimo de lucro, cuya intención primaria es influir públicamente en algún tipo de cambio social”. Lo que las distingue de los movimientos sociales es que son “más formales y profesionales” y con “estatus legal y personal remunerado”. En esta investigación distinguiremos entre las

de “desarrollo” y “democratización” y a ser vistas como algo positivo *per se* (Korten, 1990; Diamond, 1994; Fisher, 1998; Clark, 2000; World Bank, 2000). En un movimiento de ida y vuelta, este apoyo recibido por las ONGs locales en el marco de la Posguerra Fría también se utilizó como medio para consolidar la “democracia”, una idea sustentada no sólo por sus principales agentes sino por la propia ciencia social (Dicklitch, 1998; Hudock, 1999).

En el caso nigeriano, gracias en parte a las actividades del movimiento prodemocracia y del movimiento ogoni en el caso específico del Delta, desde 1993 los gobiernos e instituciones internacionales que hasta entonces no prestaban demasiada atención a lo que ocurría en el interior de las fronteras nigerianas, comenzaron a imponer sanciones a los militares. Durante los regímenes de Babangida y Abacha, los fondos hasta entonces transferidos por parte de diversos donantes internacionales a sus gobiernos en el marco del paradigma desarrollista imperante en las relaciones internacionales desde las independencias hasta el fin de la Guerra Fría, que entendía que el desarrollo sería brindado por los Estados, empezaron a ser canalizados a la “sociedad civil”, que desde el Consenso de Washington se consideraría el principal *locus* del desarrollo económico, político y social.

En el momento en el que las ONGs empezaron a ser consideradas por parte de los actores internacionales con intereses en el continente africano como los agentes claves para subsanar los errores de unos gobiernos considerados corruptos e ineficientes, “la habilidad de los nigerianos para ver e interpretar esos cambios en las prioridades de los donantes occidentales”, condujeron “a la dramática multiplicación de las ONGs locales” (Smith, 2010, p. 249). Ya desde 1999, el establecimiento de un marco institucional aceptable para los estándares establecidos por los actores internacionales influyentes, como el FMI, la Commonwealth y los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, que habían presionado por la institucionalidad democrática en Nigeria, permitió la llegada de recursos materiales a aquellas organizaciones locales que se ajustasen a la agenda del desarrollo promovida desde las principales instituciones y organizaciones donantes en esta materia (Bob, 2005). Este fenómeno provocó la emergencia en toda Nigeria, y en

domésticas, que aunque sean de membresía uninacional pueden estar enfocadas internacionalmente, y las internacionales, que “cuentan con una estructura de toma de decisiones de la que forman parte miembros con derecho a voto de al menos tres países y sus objetivos son transnacionales y/o internacionales” (Keck & Sikkink, 1998, p. 7).

particular en el Delta, de multitud de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de naturaleza medioambientalista, además de otro tipo de colectivos de defensa de los derechos civiles, tanto de carácter étnico, como panétnico y no étnico, que comenzaron a autodenominarse ONGs. Desde 1999 las ONGs en el Delta se han convertido en una “industria floreciente” (Adunbi, 2015, l oc. 102). Este proceso de “oenegización” (Álvarez, 1998) ha tenido determinados efectos ya que, teniendo en cuenta “el actual clima de neoliberalismo económico y político en el que están necesariamente insertadas las ONGs, su rol en la democratización es algo bastante más complejo que lo que el modelo liberal democrático sugiere” (Mercer, 2002, p. 6).

Estas organizaciones comenzaron a utilizar lenguajes legitimados internacionalmente como el de los derechos humanos y medioambientales y la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. El uso de estos discursos permitió su conexión con redes y coaliciones transnacionales de activismo, lo que ha tenido determinados efectos, pues para lograr formar parte de estas formaciones, los movimientos y organizaciones locales deben ajustarse culturalmente a los potenciales aliados y adaptar sus lenguajes y tácticas para ser comprendidos, aceptados y potencialmente apoyados. El modelo del MOSOP puso de manifiesto que adoptar “arenas internacionales de discurso”, como la de los derechos humanos, puede servir para lograr generar redes de apoyo transnacional (Latham et al., 2001), pero también dejó claros los potenciales costes que tendría que pagar un movimiento que siguiese esta estrategia. En palabras de Ben Amunwa, desde la ejecución de los 9 ogoni, el MOSOP “está contaminado por el faccionalismo” (Amunwa, 2013). Su relato de una visita a las oficinas de la organización en Port Harcourt, a la que compara con otra organización local a la que considera más representativa en la etapa postmilitar, es ilustrativo:

He estado varias veces en la oficina del MOSOP en Port Harcourt pero ni siquiera para mí es fácil conseguir una reunión. La última vez estuve esperando una hora en la sala de espera, que es muy oscura, un espacio enorme, viejo, para una sola persona. Me encontré con el director en aquel momento. Fue una reunión interesante. Cuando me fui me di cuenta de que había un enorme contraste entre mi visita al MOSOP y el tiempo que pasé trabajando en el Delta con Social Action. A ellos les gusta recibir gente en su oficina, tener contactos internacionales. Siempre llega gente de las comunidades que llegan a contar sus problemas. En el MOSOP no vi mujeres, aquí hay un equilibrio de género. El MOSOP parecía más un museo, abrieron la oficina para mí, Social Action es una oficina abierta, funcional.

El objetivo de este capítulo es visibilizar algunas de las redes y coaliciones transnacionales articuladas en torno a los agravios percibidos por las poblaciones del Delta desde el fin de la etapa militar, explorar sus prácticas y sus lenguajes, así como las contradicciones que estos generan, en el marco del cuestionamiento a los discursos celebrativos sobre la “sociedad civil global” y la “ciudadanía transnacional” (Wapner, 1995; 1996; Falk, 1995). Lo que nos interesa ver es cómo se han traducido los lenguajes de la contestación del Delta a la esfera transnacional y viceversa. Queremos analizar, por un lado, cómo las organizaciones locales han representado sus agravios, cuáles son sus estrategias de conexión transnacional y cómo movilizan a las fuerzas locales e internacionales.

Por otro lado, nos interesa descubrir cómo los lenguajes y estrategias de las organizaciones, movimientos, redes y coaliciones transnacionales han influido en los repertorios y narrativas de contestación de sus aliados locales. El objetivo de este capítulo es, en definitiva, realizar una “etnografía de las conexiones transnacionales” que se han establecido en el marco de la contestación en el Delta a partir de 1999 y explorar cuáles han sido los efectos de estos “encuentros a través de la diferencia” (Tsing, 2005).

5.1. El fenómeno de las ONGs en el Delta desde 1999

La NNNGO (Nigeria Network of NGOs) es según su página web el primer ente “para las organizaciones de la sociedad civil de Nigeria que facilita un trabajo de incidencia política efectivo en cuestiones de pobreza y otras relacionadas con el desarrollo”⁶⁶. La NNNGO, constituida inicialmente por unas 60 organizaciones, fue creada por el gobierno de Babangida en 1992 gracias a la colaboración de instituciones y empresas internacionales como UNICEF, USAID, British High Commission, Ford Foundation, Banco Mundial y Goethe Institute⁶⁷. En 1993 la red fue reconocida por la NPC (National Planning Commission)⁶⁸, un organismo federal nacido contemporáneamente, cuyo departamento de Cooperación Internacional es el encargado de gestionar los planes de cooperación

⁶⁶ Para conocer más sobre esta red, consultar: <http://nnngo.org/content/ngo-list>

⁶⁷ El resto de las instituciones que colaboraron en su creación fueron: SFH, WHO, USIS, British Council, Department For International Development (DFID), UNESCO, UNIC y Friedrich Ebert Foundation.

⁶⁸ La página web de la NPC es: <http://www.npc.gov.ng>

multilateral y bilateral, incluida la ayuda al desarrollo y los programas de asistencia técnica⁶⁹. La NPC otorgó entonces el reconocimiento a la NNNGO como “el cuerpo coordinador de las ONGs en la federación nigeriana” al tiempo que incluía a la red en la propia institución.

La NNNGO, cuyos principales socios multilaterales son el United Nation Development System (UNDS), la UE y el Commonwealth Desk, es miembro de distintas organizaciones internacionales, como Civicus, World Alliance for Citizen Participation; International Council for Social Welfare (ICSW); National Council for Voluntary Organizations (NCVO-UK); International Forum of National NGO Platforms; People in Aid y REPAOC⁷⁰. Hoy, para ser reconocidas, las ONGs en Nigeria deben integrarse en la NNNGO y suscribir su código de conducta. En el año 2015 el número de organizaciones miembro de la red ascendía a las 1.000, desde grupos locales pequeños a grandes redes de ONGs de carácter estatal; aunque junto con los afiliados “nacionales y globales” la cifra alcanzaba los 2.500. La misión de esta red consiste en “identificar, registrar, construir capacidades y movilizar a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la interconectividad y la consecución de equidad, justicia, paz y desarrollo a las comunidades de base a lo largo de Nigeria”.

Puesto que la NNNGO no proporciona en su página web información desglosada acerca de las ONGs que intervienen en el Delta, acudimos a la NPC para tratar de obtener este dato. La división de cooperación multilateral de esta institución publica dos listas diferenciadas de las ONGs locales y las internacionales que operan en territorio nigeriano. Según este listado, en la NPC hay registradas un total de 221 ONGs locales (aunque en 2015 sólo 64 de ellas habían completado el proceso de registro y legalización). Del total de 221 ONGs nigerianas referenciadas en la lista oficial del NPC, el área de intervención

⁶⁹ El departamento de Cooperación Internacional de la NPC cuenta con dos divisiones, la de cooperación económica bilateral y la división multilateral. La primera de ellas se encarga de gestionar las relaciones bilaterales de carácter gubernamental con dos regiones fundamentales: Asia/Pacífico y Europa/América. En el segundo de los casos se enfoca particularmente en las agencias de cooperación al desarrollo bilaterales que trabajan en Nigeria: Agency Francaise de Development (AFD), German International Cooperation (GIZ), Department for International Development (DFID), UK; United States Agency for International Development (USAID) y Canadian International Development Agency (CIDA). Esta división se dedica también a gestionar la ayuda al desarrollo y los programas de asistencia técnica de la ONGs internacionales de Europa, Asia y América, además de las locales.

⁷⁰ Los principales financiadores de la red son la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, el DFID, UBUNTU - World Forum of Civil Society Networks; la Campaña por el Establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas (UNPA) y la World Alliance for Citizen Participation-CIVICUS. Además, en el año 2015 se encontraba en conversaciones con: Office of the Special Adviser to the President on the MDGs; Exxon Mobil; West African Pipeline Company (WAPCO); World Bank- 2nd Urban Water Project; Lagos Metropolitan Development and Governance Project (LMDGP).

de 28 de ellas es el Delta del Níger. De estas 28, 5 cuentan con su sede central en Abuja o Lagos, mientras el resto la tienen en las dos principales ciudades (Port Harcourt o Warri) o en localidades más pequeñas del Delta. De ese total, la mayoría de ellas se dedican a cuestiones de salud (8) y desarrollo comunitario (6), mientras el resto se reparte entre educación y desarrollo, desarrollo comunitario y rural, empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, paz y desarrollo y desarrollo socioeconómico.

En el ámbito de las ONGs nigerianas que intervienen en el Delta, existen cuatro “campos de poder” que interactúan entre sí (Adunbi, 2015). Por un lado están las ONGs con sede en Lagos, la mayor parte de ellas surgidas en la década de 1990 a partir de movimientos estudiantiles. Su ubicación en Lagos respondía en aquellos momentos a su interés en tratar de establecer conexiones con los medios de comunicación locales y centros de poder comercial y así influir en la esfera pública. En segundo lugar, están las ONGs con sede en Abuja, que desde el fin de la etapa militar es el centro de la red de ONGs de derechos humanos en Nigeria. Allí tienen sus sedes centrales tanto las principales ONGs federales como las transnacionales enfocadas en esta cuestión. La ubicación en Abuja supone ganar en capital simbólico, que se traduce en el acceso a distintas esferas de poder. Las conferencias de carácter federal e internacional se realizan en la capital para lograr tener un mayor impacto, atraer a los donantes internacionales y aliarse con agencias gubernamentales para tratar de influir en sus políticas (Adunbi, 2015, loc. 2072).

El tercer campo serían las ONGs del Delta del Níger, la mayoría de ellas con sede en Port Harcourt, que intentan conectar la problemática local con redes transnacionales de defensa de los derechos humanos y el medioambiente en el marco del “compromiso constructivo” con el Estado y las empresas transnacionales (Davies, 2007). La Niger Delta Peace Foundation (NDPF), por ejemplo, ha negociado entre los ogoni, el gobierno federal y Shell. Otras trabajan materia de educación, como la International Foundation for Education and Self-Help (IFESH), en asociación con Chevron Nigeria Limited para proporcionar educación primaria, alfabetización de adultos y formación a maestros de primaria (ChevronTexaco, 2003).

Por último, estarían las “ONGs portafolio”, registradas debidamente ante las autoridades competentes a pesar de que no tienen consejo de miembros o este está inactivo y que no cuentan con oficinas. La mayoría están constituidas por abogados y otros profesionales

que llevan sus documentos en portafolios y solo rinden cuentas ante sí mismos y las agencias que los financian. Se los conoce popularmente como “individuos no gubernamentales”, que responden en gran medida a sus intereses particulares de acumulación (Adunbi, 2012, loc. 2088).

En general, las ONGs nigerianas se han visto afectadas por una crisis de legitimidad (Okafor, 2006), en parte porque fueron fundadas por elites urbanas y están alejadas de la población al estar más orientadas a las prioridades de los donantes de los que reciben fondos. Por otro lado, menosprecian cuestiones como la defensa del medioambiente, los derechos de la mujer y las minorías y los derechos socioeconómicos. Además, muchas de estas organizaciones no son necesariamente antagónicas a las élites locales y estatales y a la propia industria petrolera, con las que mantienen también una relación compleja y contradictoria. El gobierno nigeriano promueve desde 1999 la creación de organizaciones comunitarias, muy cercanas a las Áreas de Gobierno Local. Por otro lado, la membresía en las ONGs locales es fluida, muchos activistas son miembros de varias ONGs en simultáneo, y algunos forman también parte de los movimientos insurgentes.

En cuanto a las organizaciones transnacionales que intervienen en el Delta, estas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: organizaciones de incidencia política y de solidaridad. Estas últimas, sin llegar a ser como las organizaciones de la diáspora, que tienen lazos de sangre con las de sus tierras ancestrales, se identifican mucho con sus socios locales y establecen lazos personales con los llamados grupos insurgentes (Bob, 2005, p. 9). Por otro lado, entre las de incidencia política hay grandes ONGs de derechos humanos, medioambiente y cooperación para el desarrollo, que establecen principios, procedimientos o políticas. De todos modos, estas categorías no son cerradas, ambas confluyen, en todas puede haber algo de las dos estrategias (Bob, 2005, p. 9).

En lo que se refiere a las ONGs internacionales de cooperación para el desarrollo, la NPC tiene registradas 113 en todo el país, de las cuales 86 están debidamente registradas mientras el resto se encontraba en estado avanzado en 2015. De todas ellas, 18 intervienen en el Delta, y de estas 11 tienen su sede en la región, mayoritariamente en Port Harcourt, mientras las otras 7 la tienen en Abuja. De ellas, la mayoría se dedican a salud (6) o educación (6), mientras el resto se reparte en investigación y desarrollo, comercio y

gobernanza⁷¹. Desde la transición al multipartidismo la actividad internacional en el Delta se ha visto incrementada, pero pocas de las organizaciones representativas de la región se han beneficiado directamente de este hecho. Las que lo han hecho han sido aquellas que se han ajustado a la nueva agenda del desarrollo, utilizando el lenguaje de los derechos humanos, la defensa del medioambiente, la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno; no las organizaciones de carácter étnico, que son las más representativas a nivel local. Este fenómeno se relaciona en parte con el hecho de que para las ONGs internacionales la militancia armada no es aceptable. De todos modos, en el Delta sigue habiendo experiencias no violentas que tampoco captan la atención internacional.

5.1.1. Estrategias y lenguajes de denuncia frente a los impactos de la industria petrolera

Como vimos en el capítulo 3, la retórica de los derechos humanos, popularizada desde el mandato de Buhari entre organizaciones, movimientos sociales y activistas, se consolidó durante el de Babangida desde mediados de la década de 1980 en los grandes centros urbanos de Nigeria. Desde entonces y hasta el fin de la etapa militar, la articulación entre el contexto internacional de la Posguerra Gria y el contexto local, marcado por la represión ejercida por los regímenes militares contra la población, facilitó que emergieran en el país múltiples organizaciones sociales autodenominadas ONGs de defensa de los derechos humanos, una tendencia que se fortaleció una vez iniciada la etapa multipartidista. Entre mediados de 1980 y 2014 se crearon en Nigeria en torno a unas 200 ONGs de defensa de los derechos humanos (Nzarga, 2014, p. 146). Desde el punto de vista federal, las pioneras fueron el CLO y el CRP, que articularon la campaña prodemocracia.

Siguiendo su estela, a lo largo de la década de 1990 tuvo lugar el nacimiento de muchas organizaciones enfocadas en la defensa y promoción de los derechos civiles y políticos, en tónica con las dinámicas globales. Aunque durante esa época la mayoría de ellas se

⁷¹ Según este listado, estas son: Medecins Sans Frontieres (Francia); Médicos sin Fronteras (España); Medecins Sans Frontiers (Holanda); Wildlife Conservation Society (WCS); Tulsi Chanrai Foundation; Centre for Community Development (C4CD); Konrad –Adenauer Foundation (Germany); Genius of Africa organization (GOA); Concern Universal; Inter. Foundation for Education & Selfhelp (IFES); Mississippi Consortium Development Agency; Children of Rural Africa (CORAFRICA); Center for Community Development; Success in Your Business; Angel’s Health Care Foundation; Mary Slessor Foundation (MSF); International Centre for Eye Care Education (Africa) Trust; Centre for Education, research and Conservation of Primate and Nature (CERCOPAN) y Badamia France.

establecieron en Lagos, surgieron algunas en otros puntos del territorio, como el Human Rights Monitor en el Norte (fundada en Kaduna en 1992), o en el propio Delta el Institute for Human Rights and Humanitarian Law (creada en 1988 en Port Harcourt), que a diferencia de la tendencia general en aquellos momentos, prestaba algo de atención a los derechos de las minorías y a la defensa del medioambiente (Okafor, 2006).

Entre 1995 y 1999 la mayoría de estas organizaciones se dedicó fundamentalmente a proporcionar asistencia legal y a trabajar cuestiones de incidencia política legislativa, así como al monitoreo de los derechos humanos y a la realización de actividades de investigación y de sensibilización. Una vez finalizada la etapa militar muchas de ellas desaparecieron, mientras otras redirigieron sus esfuerzos a incluir no sólo incidencia política en derechos civiles y políticos sino en derechos sociales y económicos. Ya hacia finales de la década de 1990 comenzaron a surgir algunas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos socioeconómicos, como el Socioeconomic Rights Initiative (SRI), el Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) y el Empowerment and Action Research Centre (EMPARC). Algunas de ellas se centrarían particularmente en cuestiones en género, como BAOBAB (cuyas actividades se enfocarían especialmente en el norte nigeriano), WACOL (Women's Aid Collective), creada en 1997 en Enugu y con sedes en Abuja y Port Harcourt, y WRAOA (Women's Rights Advancement and Protection Alternatives, fundada en 1999).

En el caso específico del Delta, el uso del lenguaje de los derechos humanos por parte de organizaciones, movimientos sociales y activistas tardaría algo más en popularizarse, como exploramos en el capítulo 3. Habría que esperar al régimen de Abacha para que gracias en gran medida a la estrategia desplegada por el MOSOP a partir de 1993, la denegación de acceso a los beneficios derivados de la extracción de petróleo que sufren las poblaciones del Delta por parte del Estado federal y las empresas transnacionales empezase a ser tratada como un asunto de derechos humanos. Tras la represión ejercida por el régimen contra el MOSOP, el uso de la retórica de los derechos humanos y medioambientales por parte de muchas ONGs del Delta comenzó a servirles para conectarse transnacionalmente y formar parte de distintas redes y coaliciones de activismo pues en general, en toda África, la legitimación de los discursos sobre los derechos humanos y la protección del medioambiente “ha proporcionado plataformas,

espacios e idiomas”, que han facilitado que los movimientos “hayan fortalecido sus luchas y ganado apoyo global a sus preocupaciones locales” (Obi, 2005b, pp. 1-2).

Estas ONGS locales trabajan en la articulación de los lenguajes transnacionales sobre esas cuestiones con narrativas locales de carácter mítico. En sus discursos conectan imaginarios locales que consideran el petróleo como una “promesa ancestral” legada por sus antepasados a los lenguajes transnacionales sobre los derechos humanos y medioambientales y “esa conciencia de los derechos transforma a los miembros de las poblaciones ricas en petróleo en ciudadanos petroleros, que ven al petróleo como una propiedad de la comunidad” (Adunbi, 2015, loc. 1500). De este modo, las prácticas que llevan a cabo estas organizaciones en el plano local han servido para crear conciencia sobre los derechos humanos y el medioambiente y han tenido como resultado la conexión de las poblaciones de la región con distintas ONGs de carácter transnacional, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

5.1.2. La negociación con la industria como estrategia

Como ya se ha apuntado anteriormente, algunas organizaciones que intervienen en el Delta, tanto locales como transnacionales, han desarrollado, junto a las estrategias de denuncia, estrategias de “compromiso constructivo”, esto es, han establecido procesos de negociación tanto con las empresas petroleras como con los distintos niveles del gobierno nigeriano, como es el caso de SDN. En el marco de estas estrategias, las organizaciones se han apropiado de lenguajes legitimados en el seno de las empresas, gobiernos y otras instituciones. La retórica de la RSC y los discursos surgidos en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno serían dos de los ejemplos más claros de estos lenguajes.

El de la transparencia y la rendición de cuentas es, no obstante, un lenguaje que cala más entre las organizaciones que trabajan desde Abuja (Adunbi, 2015), donde “la comunidad de la sociedad civil ha estado a la vanguardia de la lucha para entronizar la rendición de cuentas y la responsabilidad en la gobernanza y someter la acción e inacción de los funcionarios a un escrutinio público” (Aderonmu, 2011, p. 76). En el plano local las organizaciones tienden a usar más el concepto de corrupción, un concepto que ha sido

explotado sobremanera en los análisis sobre el Estado nigeriano, de manera que ha reforzado los estereotipos sobre el continente. La corrupción en África ha sido relacionada con el “primitivismo” de sus sociedades sin tener en cuenta otras dinámicas históricas de desigualdad política y económica⁷².

La corrupción se ha convertido en el foco tanto de académicos como de políticos; instituciones internacionales, gobiernos de todo el mundo y ONGs han desarrollado iniciativas para combatirla. Desde 1999 muchas organizaciones de carácter federal, como el Movement Against Corruption, Transparency in Nigeria, Zero Corruption Coalition, Integrity Group, Procurement Watch, Transition Monitoring Groups, y Budget Transparency Network, han llevado a cabo “cruzadas anticorrupción”, compuestas de iniciativas, campañas y medidas para luchar contra la falta de transparencia de los distintos niveles de gobierno y las empresas transnacionales.

De hecho, muchas de las investigaciones sobre la transparencia de la industria petrolera realizadas por parte de organizaciones e instituciones transnacionales han sido resultado de las presiones de organizaciones, movimientos sociales y medios de comunicación locales que han demandado rendición de cuentas y que han sido capaces de generar una corriente de opinión pública consciente de y contraria a las prácticas gubernamentales y empresariales consideradas corruptas. Estas investigaciones han llevado al señalamiento y persecución de funcionarios además de que “la campaña masiva y agresiva de la sociedad civil también ha ayudado a reforzar valores anticorrupción de honestidad e integridad en la sociedad” (Aderonmu, 2011, p. 82), lo que ha sido un elemento nuclear de todos los discursos oficiales de los sucesivos gobiernos federales desde el fin de la etapa militar.

Obasanjo, en particular, tuvo una fijación especial por asociar la promoción del desarrollo con la lucha contra la corrupción, en la línea de lo marcado por las IFIs. En ese sentido, el primer gobierno de la etapa multipartidista prometió que se llevaría la transparencia y la rendición de cuentas a las instituciones, a través de una serie de medidas, el

⁷² Existen dos visiones dominantes sobre la corrupción en África. Por un lado, una visión economicista que considera que la principal causa de la corrupción africana es la falta de recursos materiales y el empobrecimiento de la población, por lo que la corrupción seguirá mientras no existan esos recursos. Por otro lado, la visión institucionalista, que mantiene que corrupción es endémica por la falta de buen gobierno. De ahí que la solución pase por introducir el buen gobierno en sus instituciones.

establecimiento de nuevos marcos legales (la Public Procurement Act y la Fiscal Responsibility Act) y la creación de diversos organismos, como la Economic and Financial Crime Commission (EFCC), la Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) y otros departamentos antifraude y anticorrupción en algunos ministerios y empresas paraestatales.

Todas estas medidas fueron recibidas inicialmente con altas expectativas por parte de la sociedad nigeriana, seducida por la idea de la “democracia” tras 16 años de gobierno militar (Iliffe, 2011, p. 238), pero no tuvieron demasiado éxito⁷³. Además, Obasanjo aprovechó su cruzada “anticorrupción” para acabar con sus enemigos y oponentes políticos (Aderonmu, 2011; Smith, 2007). Esas instituciones fueron luego investigadas por malversación de fondos y el propio Obasanjo fue investigado por haber desviado fondos para su entorno, amigos, familia y aliados. Una investigación de la Cámara de Diputados nigeriana reveló que su administración gastó unos 16 billones de US\$ de recursos públicos en el sector de la energía, que no se concretaron en ninguna mejora del mismo (Aderonmu, 2011, p. 81).

A lo largo de su segundo mandato, el gobierno de Obasanjo se sumó también a diversas iniciativas de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias extractivas. En febrero de 2004, Nigeria fue uno de los primeros países en entrar a formar parte de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). La NEITI realizó la primera auditoría de la industria petrolera nigeriana para el período 1999-2004. En diciembre de 2004 se introdujo un proyecto de ley en la Asamblea Nacional y tras el proceso legislativo incumbente fue firmada por el presidente Obasanjo el 28 de mayo de 2007, por lo que Nigeria se convertía en el primer país con una ley de salvaguarda de la EITI. La Nigeria Extractive Transparency Initiative Act “otorga el mandato a la NEITI de promover el debido proceso y la transparencia en las rentas extractivas pagadas y recibidas por el gobierno, así como asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación” de esas mismas rentas.

Esta institución funciona con un mecanismo tripartito entre las transnacionales, el gobierno y la “sociedad civil” local, con la que se trabaja sobre la base de un MOU

⁷³ Como se refleja en el índice anticorrupción de Transparency International, ya que en 2000, 2001 y 2003 Nigeria aparecía como el segundo país más corrupto del mundo.

firmado en junio de 2014, que define los términos de la relación para la puesta en marcha de la NEITI. En el año 2011 la EITI aseguró que Nigeria había cumplido con los criterios mínimos exigidos para declarar sus rentas en el sector petrolero.

Otra de las medidas que se ha tomado desde 1999 es el lanzamiento de la Petroleum Industry Bill (PIB,) publicada tras un largo proceso por el gobierno de Jonathan en julio de 2012. La PIB trata de armonizar diversas leyes y regulaciones preexistentes, busca modificar el régimen fiscal, revisa el NNDC y otras agencias reguladoras y ejecutivas, establece el marco para la desregulación de las actividades *downstream* y medidas para la mejora de la transparencia y rendición de cuentas. Es el resultado de varios años de negociaciones en la regulación del sector petrolero, pues la lanzó inicialmente Obasanjo en el año 2000 a través del establecimiento del Oil and Gas Implementation Committee (OGIC), que publicó un informe y un documento de políticas que sería aprobado por el gobierno de Yar' Adua en 2008 en el Petroleum Industry Bill 2008. Este documento sería debatido en la Asamblea Nacional, que finalmente no lo aprobó, por lo que tendría que pasar por varias revisiones y una enmienda total. La PIB estuvo en suspenso durante casi 4 años hasta que en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio petrolero de enero de 2012 se estableció finalmente un comité técnico para armonizarla y llevarlo nuevamente a la Asamblea Nacional en julio de 2012. La PIB ha generado mucha controversia, porque mientras las transnacionales piden un régimen fiscal que les otorgue los máximos beneficios, las organizaciones sociales abogan porque le genere más rentas al gobierno federal.

Analizaremos ahora algunas de las prácticas desarrolladas en el marco de las redes transnacionales de activismo y coaliciones de incidencia política surgidas en torno al Delta del Níger y los lenguajes que estas están generando, así como las ambivalencias y contradicciones emanadas de estas conexiones entre lo local, lo estatal y lo transnacional.

5.2. Prácticas y lenguajes en torno a los derechos humanos y medioambientales: de lo “universal” a lo “occidental”

En lo que concierne al activismo en torno a los derechos humanos no podemos dejar de mencionar a H RW (Human Rights Watch), una las principales organizaciones transnacionales que ha intervenido de manera regular en el Delta. HRW, que se define en

su *website* como “una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos”⁷⁴, comenzó sus relaciones con el Delta del Níger durante la represión a las actividades del MOSOP y desde entonces ha llevado a cabo diversas campañas y publicado distintos informes, como se ha referido en el capítulo 3.

Desde 1999 la organización ha elaborado numerosos informes sobre la situación de los derechos humanos en la región (HRW 1999a, 1999b, 1999c, 2002a, 2002b, 2003a, 2005, 2007a y 2008), además de haber realizado distintas acciones de incidencia política. Nada más iniciar la legislatura de Obasanjo, HRW se unió a la CLO y el CRP para enviar una carta abierta al flamante presidente en la que le sugerían la puesta en marcha de una serie de medidas, entre ellas el inicio de un proceso transparente para la elaboración de una nueva Constitución, dar fin a los decretos represivos de la etapa militar y la devolución de los cuerpos de los 9 activistas ogoni.

Al mismo tiempo, la organización de derechos humanos publicó un informe de 25 páginas en el que se analiza la situación de los derechos humanos en el Delta (1999b). Ya en febrero de ese mismo año había publicado un extenso informe centrado en el análisis de las estrategias de RSC de las empresas transnacionales de petróleo que operan en la zona (1999a) y en diciembre se haría eco de la represión gubernamental en Odi (1999c). Además, en varios de sus informes generales sobre Nigeria de este periodo postmilitar, el Delta ha ocupado un lugar especial (2003b, 2004, 2005b, 2007b, 2007c, 2010 y 2011).

Dada la relevancia de la organización para nuestro caso de estudio, en el mes de noviembre de 2012 nos acercamos a uno de los miembros de su equipo en la sede central de Nueva York, que había asistido a una mesa redonda sobre el grupo armado Boko Haram en Londres. Aunque inicialmente accedió a nuestra solicitud de una entrevista, finalmente esta no pudo llevarse a cabo por cuestiones de agenda. Tras haber tratado de realizarla virtualmente a través de *skype*, la respuesta vía *email* fue: “creo que no somos los más apropiados para responder a sus preguntas ya que en los últimos años la mayor

⁷⁴ La página web de la organización es: www.hrw.org

parte de nuestro trabajo ha sido en el norte y centro de Nigeria, y no en el Delta del Níger” (Guttchuss, 2012)⁷⁵.

Con quien sí nos fue posible entrar en contacto es con el equipo nigeriano en Londres de otra de las principales organizaciones de la red transnacional de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, que comenzó a intervenir en el Delta una vez que la situación encajó con su mandato tras la encarcelación de los nueve activistas del MOSOP. Desde la ejecución de los “9 ogoni” y hasta el fin de la etapa militar, la intervención de AI en la región prosiguió a través del lanzamiento de diversas acciones urgentes relacionadas con la detención arbitraria de distintos “presos de conciencia” de la región petrolera.

Desde el fin de la etapa militar, la intervención en el Delta de AI, que se define en su página web como “un movimiento global con más de 3 millones de apoyos, miembros y activistas en unos 150 países y territorios que hacen campaña para terminar con graves abusos de los derechos humanos”⁷⁶ ha tenido dos focos principales: los impactos de las industrias extractivas sobre los derechos humanos de la población local y las demoliciones de viviendas, fundamentalmente en la ciudad de Port Harcourt, donde existen planes estatales de demolición a gran escala.

Entre los años 2001 y 2011 en algunos de los informes dedicados a analizar la situación de los derechos humanos en Nigeria, el Delta ocupó un lugar preeminente (AI, 2001, 2010b, 2011b). Además, entre 2003 y 2013, la organización dedicó varios informes a explorar en particular la situación de los derechos humanos en la región (AI 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2009a, 2010a, 2011a y 2013). En febrero de 2003, AI publicaba un informe breve en el que recogía la represión de las protestas protagonizadas por grupos de mujeres contra empresas transnacionales petroleras en los estados de Rivers y Bayelsa durante los meses de julio y agosto de 2002 (AI, 2003). En un nuevo informe de 2004, hacía públicos los resultados de sus investigaciones sobre la relación entre la explotación petrolera y las violaciones de derechos humanos en toda la región (AI, 2004). En 2005 publicaba dos nuevos informes: uno de ellos es un documento extenso y detallado dedicado a analizar

⁷⁵ Eric Guttchuss, investigador del equipo sobre Nigeria en Human Rights Watch, respuesta recibida por correo electrónico (20/12/2012)

⁷⁶ Consultar: www.amnestyinternational.org

la situación de los derechos humanos 10 años después de la ejecución de los 9 activistas ogoni (AI, 2005a). En 2009 hacía público un nuevo informe de más de 140 páginas (AI, 2009) y en 2010 publicaba otro sobre desalojos forzados en Port Harcourt (2010a).

Sus dos últimos informes hasta la fecha se centran en el análisis de los impactos de las fugas de petróleo en la región (2011a y 2013); en ambos, AI trabajó conjuntamente con el CEHRD (Centre for Environment, Human Rights and Development), una organización local que realiza investigaciones sobre la situación del medio ambiente del Delta desde 1999. Para la realización de estos documentos, AI y el CEHRD llevaron a cabo trabajo de campo, tanto individual como conjunto, que incluyó misiones de investigación en terreno de AI, la realización de entrevistas con expertos internacionales y la colaboración de otras organizaciones locales como SACA (Shareholders Alliance for Corporate Accountability), ERA (Environmental Rights Action), GASIN (Gas Alert for Sustainable Initiative) y NACGOND (Nigerian National Coalition on Gas Flaring and Oil Spills).

En el marco de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos existe una en particular que ha llamado nuestra atención y con la que pudimos establecer contacto en dos ocasiones. Se trata de Stakeholders Democracy Network (SDN), una organización que se considera “medio nigeriana, medio británica” (Croft 2013) y que cuenta con sedes en Londres y Port Harcourt. Desde el año 2005 SDN “trabaja con y apoya a muchas organizaciones locales y comunidades en el Delta del Níger en las cuestiones que les afectan”. Esta organización ha publicado numerosos informes sobre el Delta, tanto en solitario como en colaboración con otras organizaciones e instituciones, como el International Institute for Environment and Development (IIED) y el United States Institute of Peace (USIP).

Sus informes más exhaustivos se han centrado en el análisis de la regulación medioambiental en Nigeria (SDN 2013a), las actividades de refinado “ilegal” de petróleo en el Delta (SDN 2013b), las percepciones sociales acerca de la militancia en la región petrolera (SDN 2014) y las Investigaciones Conjuntas en materia de vertidos petroleros (SDN 2015a). Además, ha publicado lo que denomina *Spotlight Issues* sobre la Petroleum Industry Bill (SDN 2015b) y el llamado subsidio petrolero (SDN 2015c), entre otras. SDN es un ejemplo claro de “compromiso constructivo” (Davies, 2007), ya que considera que “sólo cuando la sociedad civil, el gobierno y la industria trabajen juntos se podrán

encontrar soluciones verdaderamente sostenibles para construir una paz duradera”⁷⁷. En su *website* señala que su manera de trabajar es “inclusiva, abierta y constructiva” porque su organización funciona como puente entre distintos *stakeholders* basándose en el conocimiento local. Trabaja con unas 12 o 15 organizaciones en el Delta y en el marco de grandes redes como “Enough is Enough”, enfocada en buen gobierno y rendición de cuentas⁷⁸.

Las tres organizaciones referidas han intervenido en el Delta de diversas maneras, y han establecido relaciones con organizaciones locales. Unas y otras han intercambiado sus visiones acerca de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Las conexiones transnacionales establecidas en el marco de esta retórica han tenido determinados efectos sobre los repertorios y lenguajes de contestación desplegados en el Delta. Como veremos a continuación, “la construcción y deconstrucción del lenguaje de los derechos humanos y medioambientales produce nuevas prácticas y significados que a menudo resultan en reclamaciones y contrareclamaciones en conflicto” (Adunbi, 2015, loc. 542). La red transnacional de defensa de los derechos humanos y medioambientales difunde esos conceptos con un pretendido carácter universal, unos conceptos que son:

Importantes componentes del neoliberalismo. Su difusión les da a los miembros de las comunidades la falsa esperanza, anclada en la creencia de que las corporaciones pueden ser forzadas a respetar esos derechos. El respeto por los derechos humanos y medioambientales sin el respeto al derecho de las comunidades a controlar sus recursos y determinar cómo estos deberían ser gestionados sólo puede terminar protegiendo los intereses de las corporaciones y no de las comunidades (Adunbi 2015, loc. 5208).

Durante la entrevista que mantuvimos con el equipo nigeriano del Secretariado Internacional de AI en Londres sus portavoces nos contaron cómo a la hora de trabajar en red con organizaciones locales del Delta, la organización establece los contactos de manera bidireccional. En ocasiones una o un grupo de organizaciones y/o movimientos les requiere apoyo puntual para llevar a buen término alguna demanda y otras veces es la organización transnacional la que se pone en contacto con estas. Según Lucy Freeman, esta relación está siempre guiada por el respeto mutuo y por compartir información. Freeman señala que con algunas de estas organizaciones “el trabajo es *ad hoc* y con otras

⁷⁷ Consultar en: www.stakeholderdemocracy.org

⁷⁸ Consultar en: <http://eie.ng>

la relación es de largo término. Y en otros casos son individuos que mantienen el contacto con nosotros” (2012).

Al preguntarle sobre las dificultades que enfrenta AI a la hora de trabajar en el Delta, la activista amplía el *zoom* a toda Nigeria para apuntar que considera que el “proceso de democratización” no ha llegado acompañado de un mejor conocimiento sobre los derechos humanos en el país. Se lamenta de que trabajar en estas cuestiones es un reto, “no sólo para AI sino para las organizaciones de la sociedad civil nigeriana, porque la población en general no tiene conciencia de sus derechos” (Freeman, 2012). Según Freeman, el motivo de esta falta de “conciencia” es el hecho de que dada la represión sufrida por las organizaciones sociales durante la etapa militar la gente sigue temiendo al gobierno (2012). En esa misma línea, Joseph Croft considera que la “sociedad civil en Nigeria está luchando por redefinirse” (Croft, 2013). El director de SDN afirma que bajo el régimen militar existía un fuerte movimiento prodemocracia pero que desde 1999 “el discurso de qué es la sociedad civil no está claramente definido”. Para Croft, “hay un fallo a la hora de definir ese lenguaje y crear ese espacio, hace falta una transición en los líderes, que ahora están consiguiendo puestos en el gobierno y la empresa privada” (Croft, 2013).

Otros de los investigadores del equipo nigeriano de AI apunta que “operar en una sociedad tan arraigada a las tradiciones como Nigeria es un desafío” (Kamara, 2012). Para este activista oriundo del Delta del Níger, explicar que los derechos humanos son indivisibles y universales no es una tarea sencilla: “hace falta mucha educación en derechos humanos, no sólo para las comunidades con las que trabajamos, sino también para nuestros socios. Tratar de trasladar esa narrativa es difícil porque la gente te dice que respetar su cultura y su tradición también es su derecho humano...”. Kamara, responsable del trabajo en materia de DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de AI en Nigeria, afirma que el principal escollo en ese sentido es que los DESC todavía no son comprendidos por la “sociedad civil” nigeriana. Cuando le pedimos que nos explique esta idea, señala que “hay una línea muy fina entre los DESC y el desarrollo”, lo que provoca que tanto entre la población como en el gobierno se generen expectativas que superan el mandato de la organización:

La gente te pregunta, ‘si estáis haciendo esto, ¿qué estáis haciendo para traernos esos derechos, si habláis del derecho a la educación, ¿estáis construyendo escuelas para nosotros?’ La cuestión que siempre se genera es *¿bueno, y que estáis haciendo para ayudarnos?* (Kamara, 2012).

Además, Kamara señala que muchos de los derechos que son justiciables en Nigeria, como sucede en otros países, son los civiles y políticos, porque los DESC no lo son, así que sostenerlos legalmente es complicado, lo que ha sido un desafío tanto para AI como para las organizaciones de la “sociedad civil” nigeriana, por eso la mayoría de los casos van a cortes internacionales o regionales, como ECOWAS. Y realiza una pequeña autocrítica a la organización en la que trabaja cuando señala que “incluso para Amnistía es algo relativamente nuevo, hace falta aumentar la conciencia sobre los DESC” (2012).

Según se desprende de las declaraciones de sus portavoces, la visión de AI es a menudo interpretada por parte de las organizaciones nigerianas como la imposición de una agenda “occidental”. Otro de los miembros del equipo nigeriano añade a este respecto que existen prominentes activistas o grupos de derechos humanos que consideran que determinados asuntos no pueden ser abordados como una cuestión de derechos humanos, como el tema de la pena de muerte, por ejemplo, que causa mucha división, pues “para ellos hay una fina línea entre derechos humanos e influencia occidental” (Popoola, 2012)⁷⁹. Kamara añade al respecto:

El debate sobre los derechos humanos en Nigeria ha estado enfocado en los derechos civiles y políticos y cuando te mueves de ahí es visto como una agenda occidental. Tratar de cambiar esas narrativas, esas mentalidades, es problemático. Sucede con los derechos LGTB, o la gente nos pregunta que por qué trabajamos con derechos de vivienda, que hay cosas más importantes en las que concentrarse (2012).

No obstante, Freeman quiere puntualizar que aunque AI sea considerada por las organizaciones sociales del Delta como una organización “occidental” y esto resulte problemático en ocasiones, cuando hablan con ellos “siempre hemos encontrado su apoyo. Y compartimos la idea de que el enemigo común es el gobierno, y en algunos casos las fuerzas de seguridad. Y eso está bastante claro” (2012). ¿Y cuál es la postura de lo que la activista califica como “enemigo común”? Durante una conferencia celebrada el 21 de noviembre en Londres, el entonces Jefe de Estado Mayor de Defensa de Nigeria,

⁷⁹ Oluwatosin Popoola, investigador del Equipo de África Occidental del Programa de África en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, entrevista personal, Londres (03/12/2012).

el almirante O.S. Ibrahim, criticó el trabajo de AI en su país. En concreto, se refería a un informe sobre el conflicto en el norte nigeriano entre las fuerzas armadas y la organización islámica Boko Haram publicado en aquellas fechas por la organización transnacional (AI, 2012). Durante su alocución, el ponente criticó lo que consideró “las injerencias poco respetuosas” por parte de una organización extranjera en sus asuntos internos. La autora del informe citado, Lucy Freeman, que se encontraba entre el público, respondió al militar argumentando que AI sí había contado con la postura oficial del gobierno nigeriano y que la organización a la que ella representa era independiente y desarrollaba su trabajo con rigor. A lo que el jefe de las Fuerzas Armadas respondió: “ustedes vienen a nuestro país creyéndose superiores, con intenciones neocoloniales” (Ibrahim, 2012)⁸⁰.

Esa postura encuentra eco también entre las propias organizaciones locales y las de la diáspora del Delta. La activista Alice Ukoko opina que las organizaciones internacionales “deberían conformarse con servir de vehículos” pero dado que “no son de allí y que aquella no es su realidad, pueden trabajar con nosotros si quieren hacer la diferencia para reformar y reconstruir. El problema es que todo el mundo llega con su propia agenda bajo el brazo y ningún país se desarrolla gracias a la filantropía...” (Ukoko, 2012). Lo que parece emerger de dos visiones diversas sobre los derechos humanos y de una conflictividad en las agendas es visto por el aliado internacional como un desconocimiento por parte de las organizaciones locales acerca de los lenguajes considerados universales mientras desde el activismo de la diáspora del Delta es interpretado como la imposición de una agenda ajena.

En la misma línea que Ukoko, Croft critica el hecho de que muchas ONGs llegan al Delta en visitas de tres días y luego se van sin tomarse el tiempo de hablar con la gente con la excusa de que “tienen fondos y tienen que hacerlo ya”. SDN, según Croft, funciona de otra manera pues todo lo que hace se hace desde una perspectiva de largo plazo pues “el verdadero cambio social lleva una generación”, así que de lo que se trata es de establecer un equilibrio entre recursos, resultados e impactos. Nos proporciona un ejemplo de un

⁸⁰ Conferencia del almirante O.S. Ibrahim, “Shaping the Armed Forces of Nigeria to effectively tackle emerging security challenges”, King's College London, 21 de noviembre de 2012, Londres.

proyecto de 6 años que les ha permitido ver cómo algunas mujeres líderes de la comunidad han pasado a ser parte del proceso de toma de decisiones cuando antes no lo eran, o ni siquiera se les permitía asistir a las reuniones. Para Croft “eso es cambio social” (Croft, 2013). Señala también que “lamentablemente muchas ONGs están más preocupadas por la autopromoción y la codicia”. Para el director de SDN, el principal punto fuerte de la organización que dirige es que “a diferencia de otras ONGs que trabajan intensamente en una sola cuestión y luego, en cinco años, la abandonan y se dedican a otra cosa y se van a otro lugar, nosotros sólo trabajamos en el Delta”. Croft describe el papel que considera que juega su organización en el Delta:

Creo que jugamos un papel facilitador que nadie más puede realmente jugar. Nuestro papel es de enlace. No somos un movimiento social, sino que apoyamos a otras redes de movimientos sociales existentes a nivel de base para comunicar a los *stakeholders* lo que ellos no son capaces de comunicar. La mejor manera de describirlo es como un reloj de arena. SDN es la parte estrecha en el medio. En la parte de abajo tienes toda la arena, los hechos, la información y las redes. En la parte superior tienes a los funcionarios de gobierno, la comunidad internacional y las compañías petroleras, que son quienes toman las decisiones que impactan en las vidas de esas personas. Nosotros somos esa parte estrecha en el medio del reloj de arena que pasa la información a los lugares correctos. Somos una organización facilitadora de redes (Croft 2013).

Al preguntarle a Ukoko qué opina en particular del trabajo de SDN, señala que no se fía “de las ONGs que dicen que ellas son las que están haciendo bien el trabajo” (Ukoko, 2012). Ante la misma pregunta, Ben Amunwa apunta que por mucho que SDN se otorgue el mérito de hacer lo que otras organizaciones no hacen, “quizás trabaja bien, sí, pero trabaja para su gente” (Amunwa, 2013), algo que Ukoko opina de todas las organizaciones locales del Delta en general, ya que considera que “todas quieren algo para sí mismas”. La abogada afirma que no trabaja con ninguna organización porque no quiere sentirse comprometida y asegura: “yo puedo decir con el corazón en la mano que yo represento a la gente, y creo en lo que la gente siente en el terreno, no en lo que dicen las ONGs sobre sí mismas” (Ukoko, 2012).

Como acabamos de ver, en el marco del activismo transnacional articulado en torno a la defensa de los derechos humanos en el Delta existen una serie de fricciones, pues en estas redes “los objetivos de justicia social deben ser negociados no solo a través de la clase, la raza, el género, nacionalidad, cultura y religión, sino también entre el sur global y el norte global, y entre las grandes megaciudades del mundo y sus áreas rurales (Tsing, 2005, p.

13). Ya que no descansan en el marco unificador del Estado, las organizaciones, movimientos y activistas que forman parte de redes transnacionales de defensa de los derechos humanos usan lenguajes entendidos como universales. Cualquier coalición construida por activistas en este sentido se ha dado sobre su compromiso con los considerados derechos universales, lo que, como acabamos de ver, genera tensiones en ocasiones.

5.2.1. Discursos sobre los derechos de las minorías

En el Delta, para muchas de las organizaciones locales las demandas políticas de las poblaciones de la región (autodeterminación y control de los recursos) son consideradas nucleares. En ese sentido, para las organizaciones entrevistadas para esta investigación, como NDEBUMOG, CSCR, y organizaciones de la diáspora como Ijaw People's Association of Great Britain and Ireland, la Cuestión Nacional juega un papel central en el conflicto entre las poblaciones y las "élites transnacionales" (Robinson, 2003). En palabras de un historiador nigeriano:

La cuestión nacional es el eterno debate sobre la forma de ordenar las relaciones entre los diferentes grupos étnicos, lingüísticos y culturales para que puedan tener los mismos derechos y privilegios, acceso al poder y una parte equitativa de los recursos nacionales; debate en torno a si estamos o no en el camino correcto para la nación, debate acerca de si nuestra Constitución facilita o inhibe nuestra marcha hacia la nacionalidad, o en torno a si el objetivo está equivocado y debemos buscar otros acuerdos políticos para facilitar la búsqueda de la legitimidad y el desarrollo (Ajayi, 1992, p. 14)

Según esta visión, el Estado es cuestionado por las diversas nacionalidades étnicas por su escasa representatividad política y administrativa, por la escasa participación de sus comunidades en los beneficios de las rentas petroleras y por la poca atención que se les presta desde el gobierno central en materia de desarrollo. En ese sentido, aunque también se denuncie el papel de las empresas transnacionales, el Estado nigeriano resulta ser el último responsable de la situación en el Delta para organizaciones como NDEBUMOG:

Una de las cosas que han dicho las comunidades es que su empobrecimiento y subdesarrollo tiene sus raíces en algunas leyes, por ejemplo la *Land Use Decree* y el *Petroleum Decree*. Esas leyes dicen que incluso los recursos que están en las comunidades pertenecen al gobierno federal. La manera apropiada para actuar es terminar con esas leyes. Además, el gobierno tiene la responsabilidad de regular las operaciones

de las compañías en términos de asegurar mejores prácticas en cuestiones medioambientales, pero el gobierno se ha negado a hacer nada de esto (Hill, 2008).

Tanto el portavoz de la organización de base ijaw NDEBUMOG como el de la Ijaw People's Association en la diáspora en Reino Unido e Irlanda subrayan, como vimos en el capítulo anterior, la necesidad de que el Estado nigeriano responda a las demandas de las minorías del Delta en lo que se refiere al “control de los recursos” y el “verdadero federalismo”. En el otro polo de estas conexiones, para las organizaciones transnacionales solidarias con las poblaciones del Delta afectadas por la extracción de petróleo, esas cuestiones son vistas a menudo como uno de los principales frenos a la resolución del conflicto. Las demandas de autonomía étnica se ven como obstáculos a las grandes luchas transversales, “globales”, enmarcadas en los lenguajes de los derechos humanos y el medioambiente.

Eso es precisamente lo que llevó al MOSOP a tomar la “decisión estratégica de desenfatar los antiguos agravios étnicos mientras subrayaba asuntos importantes, pero previamente secundarios” (Bob, 2005, p. 56). El enfoque inicial dado por Wiwa a la campaña internacional del movimiento ogoni era el mismo que el que adoptaba en Nigeria: mencionaba los impactos medioambientales de Shell pero hacía especial hincapié en los problemas políticos, económicos y culturales que enfrentaban los ogoni como minoría en Nigeria y tenía como principal demanda lograr la autodeterminación. Este enfoque pareció no encajar en las agendas de las ONGs transnacionales. Amnistía Internacional rechazó inicialmente entrar en campaña con el MOSOP dado que su mandato era la prevención de violaciones de derechos humanos (sobre todo violencia física contra particulares) que en aquel momento en Nigeria no estaban dirigidas especialmente contra los ogoni sino contra todas las minorías.

Las demandas sobre el control de los recursos no resuenan entre las organizaciones internacionales que realizan campañas a favor de una resolución del conflicto del Delta “por su complejidad y provincialismo” (Bob, 2002, p. 109). Cuando las organizaciones transnacionales se hacen eco del lenguaje del “control de los recursos”, es si empre colocándolo en la boca de las organizaciones locales. Amnistía Internacional, por ejemplo, de todos los informes que ha dedicado al Delta, tan solo en uno menciona, y en

una sola ocasión, el término “control de los recursos”, para relacionarlo con la militancia y la criminalidad:

Los grupos armados y bandas criminales han buscado el control de los recursos explícitamente a favor de las áreas productoras de petróleo, y se han implicado en robo de crudo y en actos de violencia que son reclamados a veces como una retribución por el tratamiento que recibe la gente del Delta por parte de la industria petrolera (AI, 2010, p. 13).

La visión del peso de la etnicidad en el espacio de la “sociedad civil” del Delta como algo problemático es compartida por los representantes de las organizaciones internacionales entrevistadas. Los portavoces de Amnistía Internacional y SDN coinciden al señalar que el principal desafío en trabajar con organizaciones y movimientos nigerianos, y del Delta en particular, es la polarización, un fenómeno que es visto como el responsable de la falta de coordinación y la incapacidad de trabajar en red con una agenda común. La portavoz de AI asegura, por ejemplo, que en el Delta “no hay ninguna organización que coordine, porque están muy polarizadas en líneas regionales, religiosas y tribales; tienen sus afiliaciones sociopolíticas y eso sale cuando se trata de movilizarse” (Freeman, 2012). Apunta que además existen divisiones sectoriales, dado que hay organizaciones enfocadas en cuestiones medioambientales, de derechos civiles y políticos, algunas son de base comunitaria, otras se dedican al *lobby*, etc, por lo que “tratar de combinar y yuxtaponer todas esas experiencias y afiliaciones es una tarea complicada y es muy difícil que todas se unan, a no ser que haya una cuestión nacional de mucha importancia” (Freeman, 2012).

En un informe de 2003, AI destaca en particular la represión por parte de las fuerzas de seguridad de la que fueron objeto un grupo de mujeres itsekiri, ijaw y urhobo concentradas pacíficamente el 8 de agosto de 2002 ante las instalaciones de las petroleras Shell Petroleum Development Company (SPDC) y Chevron Nigeria Limited en Warri. Unas protestas a las que consideraba:

... un hito en la lucha por garantizar los derechos de la mujer, ya que por primera vez las mujeres de varios grupos étnicos de la región del delta del Níger han dejado a un lado toda rivalidad étnica y se han unido para reclamar mejores condiciones de vida, indemnizaciones apropiadas para las comunidades que viven en zonas de explotación petrolera, así como medios de vida sostenibles para sus familias (AI, 2003, p. 1).

En el mismo sentido, Joseph Croft considera que la movilización de cada una de las múltiples identidades en función del terreno de la contestación juega en contra de una posible agenda común: “depende de dónde estés. Si estás en Abuja, la gente se verá a sí misma como originaria del Delta del Níger, si estás en Port Harcourt se verán como de sus grupos étnicos y si estás en el pueblo como parte de sus clanes”. Señala el director de SDN que “el fallo colectivo es la armonización de los grupos étnicos para una mejor gobernanza y un mejor uso de los recursos” (Croft, 2013).

5.2.2. Visiones sobre el medioambiente

En el Delta, las demandas políticas de las minorías locales se han articulado con la defensa del medioambiente, de ahí que los movimientos medioambientalistas no pueden ser separados de los movimientos democráticos (Obi, 2005b, p. 2). En el marco de la retórica de los derechos humanos, la conexión de estos con la protección del medioambiente ha sido uno de los principales lenguajes usado por organizaciones, movimientos sociales y activistas para articular sus demandas frente a la industria petrolera en el Delta. Una de las organizaciones más representativas de la región en materia de defensa del medioambiente es ERA (Environmental Rights Action), el afiliado local de Friends of the Earth International. Cuando contactamos con su aliado transnacional para tratar de fijar una entrevista en Londres, nos remitieron directamente a la organización en el Delta, asegurándonos que ERA era el único que podía hablarnos de su trabajo en la región. Dado que finalmente no nos resultó posible viajar hasta el Delta, y a que nunca respondieron a nuestros correos electrónicos, para entender el papel que juega la organización medioambientalista nos remitimos a literatura secundaria y a la visión que ofrece de sí misma la organización en los documentos publicados en su *website*⁸¹.

ERA surgió como una escisión del CLO y se convirtió en la primera ONG independiente de defensa de los derechos medioambientales cuando estos se convirtieron en una preocupación central de las redes transnacionales. Cuenta con oficinas en Lagos, Benin City, Port Harcourt y Yenagoa. A través de diversos programas multidisciplinares la organización trabaja en 6 áreas principales: conservación de la naturaleza, legislación

⁸¹ Para saber más, consultar la web de la organización: www.eraaction.org

medioambiental, mejora de las tecnologías para la explotación de petróleo, reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, reducción de los derrames de petróleo y educación y conciencia medioambiental. Uno de sus proyectos más importantes desde mediados de la década de 1990 son los Community Resource Centres (CRCs), que entre otras actividades construyen escuelas, otorgan microcréditos para pequeños negocios, forman en gobernanza a la población local y actúan como centros de investigación para académicos nacionales e internacionales. Estos CRCs “fomentan la acción de la comunidad, crean estructuras de gobernanza y enlazan a las comunidades, a los miembros de ERA y a las ONGs que trabajan en temas medioambientales” (Adunbi, 2015, loc. 1761). Los CRCs se han convertido en una forma de gobernanza alternativa y proporcionan servicios que el gobierno no está ofreciendo a la población. Así, gracias a su estrategia, ERA descentraliza el poder y establece nuevos espacios de gobernanza en lugares donde el Estado no es visible.

La organización medioambientalista ha adoptado las recomendaciones de la Agenda 21 surgida de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río, que plantea una nueva agenda de desarrollo para el siglo XXI que reconozca la fragilidad del medioambiente y el rol de las ONGs en la redistribución e recursos. Pero adapta estas recomendaciones a la realidad local, introduciendo la idea de la propiedad colectiva de los recursos sobre la base de la herencia y la propuesta de una gobernanza de base comunitaria. De este modo, ERA se convierte en un ejemplo claro de conexiones transnacionales que articula la retórica de los derechos con la retórica de la promesa ancestral del petróleo como el cumplimiento de una profecía (Adunbi 2015, loc. 1919). A través de esta articulación, ERA defiende la idea de que la lucha de las poblaciones del Delta tiene un carácter local pero está legitimada internacionalmente. Esta narrativa es reproducida por Alice Ukoko cuando señala que:

El propietario de la tierra y el universo es Dios. El petróleo lo puso ahí el Creador y nuestros ancestros nos lo transfirieron a nosotros. Nuestra responsabilidad es devolvérselo a las próximas generaciones. ¿En interés de quién vienes a contaminar nuestra tierra? Si quieres llevarte el petróleo de mi tierra reconócame a mí como el propietario de la tierra. Si no respetas la tierra no respetas a la gente. Mi padre era un hombre orgulloso de su tierra y yo derramaré cada gota de mi sangre para que él mantenga ese orgullo. Y yo les digo: puedes matarme si quieres pero yo voy a tratar de impedir que colonices mi tierra. No puedes robarme la dignidad de mi padre (Ukoko, 2012).

El medioambiente ha sido uno de los espacios en los que ha existido una mayor colaboración en el marco de las redes transnacionales de activismo. En agosto de 2011, el UNEP publicó el primer estudio científico independiente que se ha hecho de los efectos de la contaminación por petróleo del Delta del Níger (UNEP 2011). Se revela en él el devastador impacto en los derechos humanos de los vertidos de petróleo que se han producido en la zona durante decenios. Asimismo, se determina que la contaminación por petróleo es generalizada y grave, y que la población del Delta del Níger lleva décadas expuesta a ella de diversos modos.

Uno de los hechos más graves que ha sacado a la luz el informe es la magnitud de la contaminación del agua potable, que entraña graves riesgos para la salud de la población local, que recurre a los pozos creyendo que el agua de ellos es segura, algo que el UNEP pone en duda. Según el informe, el petróleo se ha filtrado a las capas inferiores del suelo y ha contaminado los acuíferos de Ogoniland. En el documento se menciona también el aumento de las concentraciones de hidrocarburos del petróleo en el aire. Los efectos a largo plazo no se conocen todavía bien, pero podrían incluir cáncer y neurotoxicidad (UNEP, 2011, P. 99).

En relación con las buenas prácticas de la industria petrolera existen una serie de estándares internacionalmente aceptados, como los establecidos por la IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), de la que forman parte todas las transnacionales que intervienen en el Delta; o por el American Petroleum Institute y la American Society of Mechanical Engineering, todos ellos recogidos por la ley nigeriana. El problema es que este tipo de iniciativas no son vinculantes y mientras las empresas transnacionales no aplican los estándares adecuados, el gobierno nigeriano está fallando en controlar a la industria y prevenir los daños medioambientales y los abusos de derechos humanos que se dan en el marco de la extracción de petróleo, como han destacado muchas instancias, como distintas agencias de Naciones Unidas y ONGs locales y transnacionales. Nigeria ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 29 de julio de 1993 y es signatario de otros tratados de derechos humanos de ámbito internacional y regional. No obstante, el incumplimiento de la normativa por parte de las empresas transnacionales, “así como la falta de medidas del gobierno nigeriano para hacer cumplir esa normativa,

constituyen un ataque permanente a los derechos económicos, sociales y culturales de la población del Delta del Níger” (AI, 2011a, p. 10).

La industria del petróleo nigeriana está sujeta a varias leyes federales específicas, como la Ley de Oleoductos (1956), el Reglamento sobre el Petróleo (Perforación y Producción) (1969) y la Ley del Petróleo (1969). Existen dos organismos federales encargados de regular las actividades de la industria. La principal es el Ministerio de Recursos Petroleros a través del Departamento de Recursos Petroleros (DPR, por sus siglas en inglés). El Ministerio es el encargado de la puesta en marcha, supervisión e implementación de las políticas que conciernen al sector petrolero y gasístico en Nigeria y la función de las agencias y compañías paraestatales que se encuentran bajo su paraguas es asegurar el cumplimiento de estas políticas. El DPR es el departamento técnico del Ministerio encargado de la regulación y monitoreo de todas las operaciones desarrolladas en el sector: exploración, producción y comercialización de crudo y productos refinados de petróleo. La encomienda del DPR es asegurar el cumplimiento de las regulaciones establecidas por el Ministerio, regular los procesos de aplicación de licencias, contratos de arrendamiento y permisos y establecer y hacer cumplir las regulaciones medioambientales⁸².

AI considera que “la inacción del gobierno a la hora de proteger los derechos humanos frente a los daños causados por las empresas constituye una violación del derecho internacional”. El gobierno de Nigeria está sujeto a la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos. La Constitución nigeriana de 1999 establece que la industria petrolera debe beneficiar a las poblaciones locales y que “el Estado debe proteger y mejorar el medioambiente y salvaguardar el agua, aire y tierra, bosques y vida salvaje de Nigeria”. Mientras, las empresas también tienen su responsabilidad. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado que se trata de “una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen. Existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos” y “de una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos” (AI, 2011, p. 25). La mayor parte de las transnacionales que operan en el Delta han firmado los *Principios*

⁸² Para más información, consultar su página web: www.mpr.gov.ng

Voluntarios para la Seguridad y los Derechos Humanos en el sector extractivo⁸³. En 2003 se adscribieron también a las *Normas de Responsabilidad de las Empresas Transnacionales y Otras empresas de Negocios en materia de Derechos Humanos* de Naciones Unidas⁸⁴, incluidas Shell y Chevron, las empresas más cuestionadas tanto local como internacionalmente precisamente en estas cuestiones.

El DPR elaboró en 1992 una normativa en materia medioambiental, las EGASPIN (Environmental Guidelines and Standards for the Petroleum Industry in Nigeria), que enumera las obligaciones que tienen las empresas petroleras que operan en el país y que incluyen la inspección mensual de los oleoductos, el establecimiento de medidas para impedir la contaminación y la elaboración de un plan de emergencia para combatir los vertidos de petróleo (AI, 2011). No obstante, el DPR no ejerce en la práctica “casi ningún control regulador significativo con respecto al medio ambiente y la contaminación, pese a las responsabilidades que le asigna la ley” (AI, 2011). El UNEP señala al respecto que “hay un claro conflicto de intereses en un ministerio que, por un lado, tiene que elevar al máximo los ingresos aumentando la producción y, por el otro, garantizar el respeto medioambiental” (UNEP, 2011, p. 139). En el Delta tienen lugar cientos de derrames de petróleo cada año, lo que tiene impactos claros sobre el medioambiente y los derechos humanos de las poblaciones locales. Según AI (2011a):

Los vertidos de petróleo son un problema endémico en el Delta del Níger. La contaminación consiguiente lleva decenios afectando a la zona, con daños en el suelo, el agua y la calidad del aire. Se han visto afectadas centenares de miles de personas de la región, en especial las que sufren mayor pobreza y las que dependen de medios de vida tradicionales como la pesca y la agricultura (p. 19).

Estos vertidos tienen unos impactos contundentes sobre los derechos humanos de las poblaciones afectadas: violaciones del derecho a un estándar de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación (afectado por la contaminación sobre la agricultura y la pesca); del derecho a ganar una vida a través del trabajo; al agua, que no se puede usar para uso doméstico, y a la salud (AI, 2013, p. 13). Las causas de estos vertidos van desde la corrosión por el paso del tiempo, el deficiente mantenimiento de las infraestructuras petroleras y las averías hasta las actividades de sabotaje y robo de petróleo. Todas las empresas transnacionales que operan en el Delta son responsables de un mayor o menor

⁸³ Ver: www.voluntaryprinciples.org

⁸⁴ Ver: www.un.org

número de vertidos petroleros. Durante los últimos 10 años, empresas como Shell se han defendido de las denuncias de las que han sido objeto aduciendo que la mayoría de los derrames que sufren sus instalaciones son debidos a actos de sabotaje y robo de petróleo (Shell, 2009, 2010). No obstante “no hay una base legítima para esta reclamación” (AI, 2013, p. 5).

Aunque la determinación de la causa de un vertido de petróleo es muy importante para las reclamaciones de indemnización, en virtud de la normativa nigeriana las empresas petroleras tienen que limpiar el vertido de todos modos, independientemente de su causa. Si el vertido se debe a sabotaje, las autoridades tienen que pagar la limpieza, pero no la indemnización. Si se debe a una avería, la empresa tiene que pagar la limpieza y una indemnización. Aunque una cantidad de los derrames se deba a actividades de sabotaje, las empresas transnacionales magnifican esta cuestión para desviar la atención de sus propias responsabilidades. Además, más allá de tener la obligación de mantener sus instalaciones en buen estado para prevenirlos, las empresas petroleras tienen también la obligación de prevenir esos mismos actos de sabotaje (AI, 2013, p. 6). Shell se defiende de las acusaciones afirmando que:

... los derrames de petróleo en el Delta del Níger son una tragedia y Shell Petroleum Development Company of Nigeria (Shell) se los toma muy en serio. Por eso siempre hemos aceptado nuestra responsabilidad pagando compensaciones cuando ocurren como resultado de fallos operativos (citado en AI, 2011, p. 3).

En Nigeria existe el Plan Nacional de Emergencia sobre Vertidos de Petróleo, en línea con el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos. La NOSDRA (National Oil Spill Detection and Response Agency), el organismo regulador en materia de medioambiente dependiente del Ministerio de Medioambiente creado en 2006 para velar por el cumplimiento de la legislación medioambiental en el sector petrolero, es la encargada de realizar “actividades de vigilancia, denuncia, alerta y otras formas de respuesta relativas a los derrames de petróleo” (citado en AI, 2011). En ese sentido, tiene que realizar una evaluación del derrame y sus efectos, asesorar a las autoridades sobre los posibles efectos para la salud y ayudar a mediar entre la población afectada y la empresa petrolera. Pero la NOSDRA:

... no tiene capacidad proactiva de detección de vertidos de petróleo, por lo que depende de la información de las empresas petroleras o la sociedad civil sobre su aparición. Tiene además muy poca capacidad de reacción, incluso para enviar personal al lugar del vertido una vez informada de él (UNEP, 2011, p. 140).

El responsable de la limpieza de los vertidos es la empresa petrolera, que tiene la obligación de “restaurar cualquier entorno afectado en la medida de lo posible al estado original”⁸⁵. Después de sucedido el vertido, la empresa debe presentar un informe de evaluación medioambiental ante un grupo de expertos del DRP y la empresa operadora, contenerlo para impedir que se propague más, iniciar las operaciones de limpieza en un plazo de 24 horas desde que se produce el vertido, registrar diariamente los acontecimientos hasta que se termina la limpieza, comunicar los costes de la misma al DRP y realizar un estudio de evaluación medioambiental (AI, 2011, p. 29).

Al mismo tiempo que se limpia se hace una investigación conjunta en la que participan representantes de las agencias reguladoras (NOSDRA, DRP, ministerios estatales de medioambiente), la empresa petrolera, las fuerzas de seguridad y la población afectada (casi siempre representada por hombres). Este equipo de investigación conjunta debe elaborar un informe que detalle la causa del vertido y documente los efectos del mismo estableciendo el volumen y la zona afectada. De este modo, las poblaciones afectadas cobrarían indemnización. Según la *Oil Pipelines Act*: “el titular de una licencia debe pagar una indemnización a cualquier persona que sufra un daño (...), como consecuencia de cualquier rotura o fuga de la tubería o una instalación auxiliar”⁸⁶. No obstante, el pago de esta indemnización sólo es posible si se llega a determinar que la causa ha sido responsabilidad de la empresa, por avería o material defectuoso. En el caso de que la causa sea sabotaje, la limpieza la abonan las autoridades y no ha y ningún tipo de indemnización a los afectados.

En el Delta suele dirigir la investigación la empresa (que decide cuando se lleva a cabo la investigación, proporciona los medios de transporte hasta el lugar del vertido, y la experiencia técnica) y no las autoridades reguladoras, como la NOSDRA, que carecen de medios independientes para iniciar investigaciones sobre vertidos de petróleo:

⁸⁵ EGASPIN, Part VIII B, 4.1. Las normas pueden consultarse en la página web del Departamento de Recursos Petroleros: <https://dpr.gov.ng>

⁸⁶ Oil Pipelines Act, 1990, Clause 11 (5). El Acta puede también puede ser consultada en la página web del Departamento de Recursos Petroleros

El papel dominante de la empresa en el proceso de investigación genera un preocupante conflicto de intereses. En efecto, la empresa, en tanto que parte potencialmente responsable, tiene un control considerable sobre un proceso en el que se establecen muchos de los parámetros de la responsabilidad. Entre estos figuran la causa del vertido, el volumen derramado, la zona afectada y la magnitud y extensión de los efectos (AI, 2011, p. 32)

AI ha encontrado “muchas deficiencias y abusos” en el proceso de investigación (AI, 2013, p. 5). Es el caso de dos grandes vertidos en sucedidos en Bodo, una localidad de unos 70.000 habitantes en la región ogoni, en el estado de Rivers ocurridos en agosto y diciembre de 2008 (AI, 2011a). Estos vertidos se prolongaron durante semanas antes de que los detuvieran y se calcula que el volumen de petróleo derramado fue tan grande como el del derrame del Exxon Valdez ocurrido en Alaska en 1989 (AI, 2011a). Shell asumió la responsabilidad del vertido, causado, según el informe del grupo de investigación conjunta dirigido por la empresa, por fallos de corrosión. La investigación conjunta se inició diez semanas más tarde, lo que va en contra de las EGASPIN. Tras años de pedir justicia en Nigeria, en abril de 2011 la comunidad de Bodo acabó llevando su reclamación por daños y perjuicios a un tribunal británico. Poco después, Shell (Shell Petroleum Development Company, SPDC) admitió formalmente la responsabilidad de los vertidos y reconoció la jurisdicción del Reino Unido.

El abogado de la comunidad de Bodo en el Reino Unido, el exactivista de Platform London, Ben Amunwa, se refirió a la rápida respuesta de Shell una vez presentada la reclamación en este país, señalando que “este es uno de los vertidos de petróleo más devastadores que se han producido en el mundo, y sin embargo pasó casi desapercibido hasta que recibimos instrucciones de presentar una demanda contra Shell en este país” (AI, 2011a, p. 3). En Bodo, que en 2009 fue galardonada por Shell con el “Premio Ogoni de la Paz” por “ofrecer un entorno pacífico para el mantenimiento de instalaciones activas e inactivas de Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited”, tres años después del vertido muchos jóvenes han empezado a participar en actividades delictivas para ganarse la vida (robo y refinado ilegal de petróleo), algo que según la población no hacían antes de los vertidos (AI, 2011a, p. 18).

Por otro lado existen las divisiones de las comunidades. Todos los miembros de las organizaciones entrevistadas, tanto las del Delta como las de carácter estatal y transnacional coinciden en que las empresas transnacionales favorecen la división entre

las poblaciones locales para asegurar sus propios intereses. Musa señala que las compañías “están generando conflicto y confusión, poniendo a un grupo en contra de otro” (Musa, 2008). Esta visión es compartida por Hill, de NDEBUMOG, quien afirma que en el Delta “Shell usa tácticas de divide y vencerás” (Hill, 2008). En esa línea, Dumpe las acusa también de alentar las divisiones entre la población local:

En teoría, las compañías necesitan un buen entorno para operar y sacar beneficios pero te das cuenta de que las compañías son parte de la crisis de las comunidades. Cuando una comunidad no puede hablar con una sola voz, en esa situación ellas hacen su negocio y se van sin hacer lo que se supone que tienen que hacer por las comunidades. Esas divisiones son buenas para ellos porque desmovilizan, y así ellas pueden coger el petróleo e irse (Dumpe, 2008).

Para AI “cuando las compañías socavan o abusan de los derechos humanos, a veces es el resultado de una genuina falta de conocimiento, pero más a menudo es una consecuencia de la falta de diligencia debida y una planeación apropiada, o debido a acciones deliberadas” (AI, 2009, p. 56). Para AI algunas de las transnacionales que operan en el Delta se aprovechan de las carencias del sistema regulador nigeriano (AI, 2009, p. 57). Ben Amunwa, difiere con esa idea cuando afirma que “más bien se trata de una ingenuidad por parte de las compañías, una falta de entendimiento de los lugares en los que están operando”. Para este abogado y exmiembro de Platform London, las empresas transnacionales “están desconectadas de la realidad local, sus interacciones con las comunidades son mínimas, igual que en el caso de las ONGs, por otra parte. Pero en cualquier caso, es una ingenuidad inexcusable e imperdonable”. Y nos proporciona el ejemplo de una iniciativa de la compañía Chevron (Amunwa, 2013), que regaló una lancha rápida a una comunidad para responder a sus demandas y después descubrió que era usada por los militantes para atacar sus propias instalaciones.

5.3. Prácticas y lenguajes en torno a la industria petrolera: de la RSC a la transparencia

El objetivo central de la retórica de los derechos humanos y medioambientales desplegada por las redes transnacionales que intervienen en el Delta ha sido la industria petrolera, cuyos actores principales son las empresas transnacionales y el gobierno nigeriano. Estas redes transnacionales han creado su propia agenda, llevando a cabo acciones como boicots de consumo y manifestaciones tanto frente a las casas matrices de las empresas

transnacionales como frente a las instalaciones de la industria en el propio Delta. Estas acciones se han enmarcado en el contexto de las movilizaciones que se han dado en todo el mundo en contra de cuestiones como la deuda externa, el cambio climático o las reglas del comercio internacional, que se convirtieron en los agravios movilizadores de multitud de organizaciones y movimientos sociales del mundo a finales del siglo XX. La conformación de un mundo unipolar marcado por las dinámicas de la globalización neoliberal dio lugar a un movimiento transnacional de protesta, visible en las llamadas “contracumbres” llevadas a cabo desde la de Birmingham contra el G8 en el año 1998, que responde a un cambio de tendencia en la moralidad global, que ha pasado de una “mentalidad caritativa” a la idea de la “solidaridad global” (Bendell, 2004, p. 5).

Estos debates empezaron también a encontrar su reflejo en la academia, donde han surgido nuevas críticas al capitalismo (Hardt & Negri, 2001), desde el marxismo y el anarquismo, algunas centradas en el uso de los recursos naturales, y perspectivas que ponen en foco del problema en los derechos de propiedad. Activistas del movimiento contraglobalizador y de fuera de él coinciden en que las empresas transnacionales son un obstáculo para la consecución de metas sociales y medioambientales. El hecho de que existan múltiples organizaciones y coaliciones que tienen como objetivo a estos actores ha provocado que estas organizaciones y redes hayan sido enmarcadas bajo el nombre de Corporate Accountability Movement, no obstante, este movimiento es difuso y heterogéneo.

De hecho, ha habido una gran diversidad de acercamientos a la cuestión, que oscilan entre los que buscan la “responsabilidad corporativa” de las empresas transnacionales, y los que promueven la “rendición de cuentas corporativa”. En el primer caso, destacan los partenariados que se han dado entre organizaciones sociales y corporaciones, en los que las primeras aconsejan sobre buenas prácticas a las segundas. Gracias a estos trabajos, en 1990 se establecieron códigos de conducta e iniciativas *multistakeholder* como la Global Reporting Initiative (GRI), un marco para resolver cuestiones sociales y medioambientales. También ha habido acuerdos con sindicatos, como el International Federation of Chemical Energy, Mine and General Workers Union (ICEM) y Statoil. El problema de esta modalidad es que ha sido capitalizada por las propias empresas, que

dotaron a esta estrategia de una racionalidad comercial poniendo en marcha la nueva industria de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en auge desde 1999⁸⁷.

No obstante, uno de los efectos positivos de la industria de la RSC es que contribuyó a mover el discurso tanto de las empresas transnacionales como de los gobiernos que percibieron que ya no se podía asumir ser considerado un buen profesional sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales generados por sus actividades. Eso llevó al surgimiento del Corporate Responsibility Movement (Bendell, 2004, p. 16). El clímax de esta clase de partenariados se dio en el WSSD de 2002 en Johannesburgo, cuando entraría en escena el movimiento de la RSC y los partenariados *multistakeholder*.

Por otro lado, la corriente más crítica del llamado Corporate Accountability Movement, critica el concepto de RSC, promueve la rendición de cuentas corporativa y otorga una especial responsabilidad en este asunto a los gobiernos y a los propios consumidores y sus hábitos de consumo. El argumento esgrimido por estos colectivos en contra de la industria de la RSC es que se trata de iniciativas “defensivas” de carácter voluntario y distractoras de la verdadera problemática (Bendell, 2004, p. 17). En la esfera internacional, durante la década de 1990 surgieron pequeños *think tanks* y ONGs en Estados Unidos, como el Program on Corporations, Law and Democracy; el Transnational Resource and Action Center (Corpwatch); Reclaim Democracy; y en Europa, como Corporate Watch y Business and Human Rights (en Reino Unido); Corporate Europe Observatory (CEO, en Holanda) y la World Economy, Ecology and Development Association (WEEDS, en Alemania)⁸⁸. Existen además otras organizaciones de derechos humanos y cooperación al desarrollo que han comenzado a prestar una atención especial a esta cuestión, como HRW, Christian Aid, CUTS india, Amnistía Internacional, Earth Council y Oxfam. Y también se han articulado distintas coaliciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, como Publish What You Pay (PWYP), creada por Open Society y Global Witness en el año 2002, a la se sumaron

⁸⁷ Esta industria ha dado a luz a multitud de instituciones, como Business for Social Responsibility (1992), New Academy of Business (1995), Institute for Social and Ethical Accountability (1996), CSR Europe (1996), Ethical Trading Initiative (1997), GRI (1997), Fair Labor Association (1999) y Social Accountability International (1997); además de publicaciones, como el *Journal of Corporate Responsibility* (Bendell, 2004).

⁸⁸ En América Latina también han aparecido grupos como el colombiano *Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos*, o centrados en sectores específicos como *OilWatch*, que ya tiene presencia también en África. En Suráfrica, surgido del movimiento del apartheid, existe el *Interfaith Center on Corporate Responsibility*. Y en España, podemos mencionar el trabajo del *Observatorio de la Deuda en la Globalización* sobre empresas transnacionales españolas. Ver: Campos (2011a).

inicialmente AI, Oxfam, Friends of the Earth y 27 grupos de África y otros lugares, muchos de ellos ya afiliados a otros grupos internacionales.

5.3.1. El lenguaje de la RSC: oportunidades y limitaciones

La industria petrolera se ha convertido en un ejemplo paradigmático para testar la credibilidad de la RSC. Siguiendo esa tendencia global, desde inicios de la década de 2000 han surgido en el Delta multitud de organizaciones enfocadas en el monitoreo y la observación de las estrategias de RSC de las compañías del sector petrolero en la región. Una de ellas es el CSCR (Center for Social and Corporate Responsibility), una pequeña organización con sede en Port Harcourt, fundada por un cura católico irlandés en el año 2001. Su director, Boniface Dumpe, asegura que la misión de esta organización es “tratar de hacer responsables a las compañías en las áreas en las que no lo están haciendo bien, en las que no están respondiendo a las necesidades de la gente y hacerlas responsables en términos de prácticas de derechos humanos, transparencia...” (Dumpe, 2008).

El CSCR cuenta con dos aliados internacionales fundamentales, el Ecumenical Council for Corporate Responsibility (ECCR), con sede en el Reino Unido, y el estadounidense Interfaith Center on Corporate Responsibility, que facilitan que esa demanda de responsabilidad viaje transnacionalmente. La organización comparte con sus socios la información que recaba, en forma de documentales de video e informes, para que estos puedan presentar evidencias para ejercer presión sobre las compañías también en sus países de origen. El portavoz de esta pequeña organización considera que esta estrategia transnacional ha dado sus frutos, porque:

Las compañías aquí, es decir, las subsidiarias nigerianas, a veces hacen algunos juegos dudosos, dicen que lo están haciendo bien cuando no es así. Y eso es problemático, ya que la información que tienen en sus sedes centrales es la que ellas les pasan (Dumpe, 2008).

Las denuncias que han recibido las empresas petroleras que intervienen en lugares como el Delta en el marco de la industria de la RSC, han erosionado la imagen del sector en sus países de origen, lo que ha provocado que hayan tenido que innovar para asegurar que su relación con las poblaciones locales no sea un obstáculo para la continuidad de sus operaciones. Las empresas transnacionales, individualmente o en asociación con los distintos niveles de gobierno nigerianos y otros actores locales y foráneos, han seguido

diversas estrategias para enfrentar las protestas de las poblaciones del Delta y sus repercusiones en la opinión pública internacional, y esas estrategias han ido evolucionando en función de esas mismas protestas y otra serie de variables. De este modo, han llevado a cabo acciones de “filantropía estratégica” (Barnes, 2005).

Cada vez más, las transnacionales utilizan los servicios de agencias y consultoras privadas de desarrollo como Citizens International y Chemonics para elaborar sus estrategias de acción social, mientras usan especialistas de desarrollo internacionales y ONGs para la implementación de proyectos cofinanciados en el campo (Frynas, 2009, p. 112). Desde el fin de la etapa militar, este campo de inversión social se ha profesionalizado y sofisticado, lo que ha provocado una transformación en las relaciones de las poblaciones locales con las compañías⁸⁹.

Shell, en particular, sufrió una grave crisis de imagen tras la ejecución de los 9 líderes ogoni, lo que provocó que las transnacionales comenzasen a adoptar un enfoque de “asociacionismo” que pretende ser más participativo y atender a los agravios locales de una manera más eficiente que los enfoques anteriores (desde el *pay as you go* a los proyectos de desarrollo). Tras lo sucedido con los ogoni, Shell puso en marcha una campaña de comunicación a largo plazo, para reconstruir su reputación y “alterar la percepción pública de sí misma” pasando de la de “un villano corporativo a una compañía solidaria” (Rowell et al., 2005, p. 116). En 1996 emprendió un proceso de transformación a través de la puesta en marcha del proyecto “Society’s Changing Expectations”, que suponía la realización de una amplia encuesta a los diversos *stakeholders* sobre su visión acerca de la compañía, incluidas diversas organizaciones de defensa de los derechos

⁸⁹ En el contexto de estas nuevas prácticas de las transnacionales, un proyecto con enfoque participativo fundado por Statoil y BP (ahora por Chevron), financiado por estas transnacionales, gobiernos extranjeros, fundaciones, la UE y el Banco Mundial e implementado por la ONG ProNatura International (Nigeria) en asociación con la organización local comunitaria Akassa Development Foundation (ADF), se ha convertido en un modelo de buenas prácticas (Frynas, 2009). El Akassa community development project, creado en 1997 en esta localidad del estado de Bayelsa, fue aceptado por 19 poblaciones del reino de Akassa. En 2001 el modelo se extendió a otros reinos de la zona. Según algunos analistas, el éxito de este proyecto se debe en parte al hecho que de la ONG no ha sufrido interferencias por parte de los directivos de las compañías: el proyecto, a diferencia de la mayoría, ha sido hecho desde abajo, dirigido por los locales (Frynas, 2009). La ONG llevó a cabo un proceso de consulta con las comunidades centrado en sus necesidades y las causas de sus problemas, una consulta que se realizó durante un proceso de inmersión de los trabajadores de la ONG con todos los miembros de la comunidad, incluidos los jóvenes y las mujeres, no sólo los líderes, como suele ser habitual. Los beneficiarios son unas 30.000 personas de diferentes poblaciones, lo que lo diferencia de lo habitual, que se escoge uno o varias comunidades. La ONG también quiere desarrollarlo con Total y Nexem. Pero este modelo ha sido analizado por otras compañías y expertos en desarrollo que dicen que no se puede exportar a otras partes del Delta y del mundo ya que en realidad en Akassa el impacto de las operaciones petroleras no se da sobre las comunidades, ya que la mayoría de ellas se realizan *offshore*. Además, parece que la zona ha disfrutado de una paz prolongada (Frynas, 2009, p. 114-115).

humanos que habían estado a la vanguardia de las protestas contra la empresa por su implicación en el caso de los 9 ogoni (Frynas, 2003a). En 1997 Shell creó un Comité de RSC y modificó los principios de negocio generales en los que se mostraba el respeto a los derechos humanos y se afirmaba que sus valores centrales eran la honestidad, la integridad y el respeto a la gente (Shell, 1998, p. 6).

Además, Shell buscó el aval de ONGs de medioambiente como Living Earth Foundation, Pro-Natura International y Conservation Foundation. En 2002 la empresa estableció el WAC Global Service, en el marco del cual contrató a una consultora externa para analizar el impacto de sus operaciones en el Delta. El informe de 2003 de esta consultora le recomendaba un cambio de estrategia debido a que su licencia social para operar seguía amenazada, y reconocía que la compañía ya era parte del conflicto. Shell rechazó sus conclusiones, pero incorporó algunas de sus recomendaciones en sus códigos de conducta y estableció 13 Grandes Reglas que guiarían sus relaciones con las “comunidades de acogida”⁹⁰.

En 2004 la angloholandesa reestructuró su unidad de desarrollo comunitario renombrándola unidad de desarrollo comunitario sostenible (SDC por sus siglas en inglés), con el propósito de enfatizar su compromiso a largo plazo en sus proyectos con las poblaciones. Esta transformación respondía a un cambio de enfoque de la compañía, que pasaría entonces de la realización de proyectos de infraestructuras (como escuelas, carreteras y hospitales) a pequeños proyectos de microcréditos apoyándose en el conocimiento de especialistas en desarrollo provenientes de agencias multilaterales como el PNUD y la práctica de ONGs locales y transnacionales. Los resultados de esta estrategia fuera de Nigeria fueron palpables ya en 2004, pues “la compañía había pasado de ser un paria corporativo a un líder verde, de ser vilipendiada a ser alabada” (Rowell et al., 2005, p. 128).

Chevron, por su parte, lanzó en octubre de 2010 la campaña global titulada "We agree", que quería destacar "lo que Chevron comparte con la gente alrededor del mundo en cuestiones clave con respecto a la energía" y "las acciones que la compañía toma a la hora de producir responsabilidad energética y en apoyar a las comunidades en los sitios donde

⁹⁰ Consultar en la página web de la empresa: www.shell.com

opera” (citado en Adunbi 2015, loc. 2819). Como parte de la campaña se proyectaron spots publicitarios en canales de televisión de todo el mundo, en los que ponía de manifiesto sus esfuerzos en mejorar sus estrategias de RSC⁹¹.

Además, desde 2005, como adelantamos en el capítulo anterior, las petroleras introdujeron la figura del GMOU en su relación con las poblaciones. Para la puesta en marcha de este nuevo tipo de acuerdo las compañías han buscado el aval de ONGs, que actúan como “facilitadores neutrales” entre las dos partes. Las empresas organizan grupos de “comunidades” y crean nuevas instituciones, Regional Development Councils (RDCs), en el caso de Chevron; y Cluster Development Boards (CDBs) en el caso de Shell, de los que forman parte miembros de la NDDC, ONGs, agencias donantes, la propia empresa y la población (Adunbi, 2015, loc. 3253). Estos entes se han convertido en instituciones autoreguladas, nuevos centros de poder con legitimidad social dado que proporcionan acceso a servicios que el gobierno no está ofreciendo: construyen carreteras, escuelas y centros cívicos; aseguran el acceso a agua potable, proporcionan servicios médicos y otorgan microcréditos para pequeños negocios.

Las ONGs contribuyen a que a través del uso de de la retórica de la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas y la sostenibilidad medioambiental, las poblaciones se sientan parte de estas nuevas instituciones de gobierno, de manera que se reconfiguran las relaciones de poder entre las transnacionales y las poblaciones y entre las propias poblaciones (Adunbi, 2015, loc. 3383). A través de estos mecanismos, las propias “comunidades” se convierten en "socios de negocio” de las transnacionales y se vuelven cómplices de la explotación de sus recursos y de degradación de su medioambiente de modo que se “epitomiza la tradición colonialista de hacer a los sujetos socios de su propia colonización" (Adunbi 2015, loc. 3378) a través de la idea de desarrollo.

En la actualidad, SPDC proporciona un presupuesto de desarrollo a los contratistas con los que trabaja: cada vez que construye un nuevo oleoducto, su contratista puede emprender el proyecto en la comunidad, lo que condiciona la continuidad de la construcción. Cuando esta termina, el presupuesto de desarrollo se cierra, lo que da cuenta del verdadero interés de la compañía. El principal problema de esta práctica es que estos

⁹¹ Para saber más sobre esta campaña, consultar la página web de la empresa: www.chevron.com

proyectos no se guían por las necesidades a largo plazo de las poblaciones y están sometidos a la inexperiencia de los contratistas en la materia. Frynas pone el ejemplo de un caso en el que SPDC, para facilitar la construcción de un oleoducto, construyó tres ayuntamientos en un pueblo del Delta “porque tres líderes comunitarios querían beneficiarse personalmente de contratos de construcción” (Frynas, 2009, p. 118).

Por otro lado, los propios proyectos de desarrollo se han revelado como parte de la estrategia de relaciones públicas de las compañías y son recogidos en otro de los pilares en torno a los que despliegan estas estrategias de marketing: los informes corporativos. Una de las principales debilidades de las transnacionales en la rendición de cuentas es que hay un “marcado desequilibrio” entre lo que reportan en materia medioambiental y social. Mientras los informes medioambientales incluyen una serie de medidas cuantitativas de carácter científico (para medir las fugas de petróleo, por ejemplo), los informes de contenido “social” tienden a enfocarse en ejemplos escogidos, o “historias” de personajes afectados positivamente por programas sociales emprendidos por la compañía, sin ninguna medida de éxito que permita verificar estas historias (Frynas, 2009, p. 111). Las transnacionales también ha sido acusadas de pagar a las elites locales para que difundan una imagen favorable de la empresa entre la opinión pública local (Watts, 2007).

Al ser preguntado sobre la eficacia del concepto Responsabilidad Social Corporativa, que lleva en su propio nombre la organización que dirige, Dumpe señala que “este y otros de esos instrumentos son voluntarios y en ese sentido las compañías los usan como máscaras, pero desde mi punto de vista al menos sirven a los accionistas para presionar a favor de mejoras” (Dumpe, 2008). Para iluminar esta afirmación comparte con nosotros que alguno de los informes que ha publicado su organización se han usado para tratar de ejercer presión sobre Shell durante sus asambleas anuales y cuestionar sus prácticas en el Delta:

Esta influencia es esencial y esto ha llevado a Shell, por ejemplo, a moverse desde la asistencia a las comunidades hasta hablar de desarrollo, luego de desarrollo sostenible y ahora de ‘memorando global de entendimiento’, un acuerdo que negocia con las comunidades algunos proyectos sociales. Para nosotros eso representa un movimiento desde la simple filantropía a una especie de participación negociada de la comunidad, pero no es suficiente porque no es algo basado en la equidad, en la presuposición de lo que se debe hacer, desde el punto de vista ético (Dumpe, 2008).

Esta visión la comparte, aunque con un enfoque más negativo, el portavoz de AI, que afirma que desde el surgimiento de la industria de la RSC, muy pocas cosas han cambiado en el Delta, “de hecho la situación es hoy aún peor” (Kamara, 2012). Kamara señala que las compañías actúan bajo una total impunidad porque sólo tienen contraídas obligaciones con el gobierno federal, que es con quien han firmado los contratos, mientras no rinden cuentas frente a las “comunidades”:

En los últimos años la actividad de compañías como Shell ha causado muchísima contaminación, sin ningún intento serio por parte de la compañía de frenar la polución, porque lo achacan todo a la criminalidad, al sabotaje, pero esto lo están usando como cubierta para poder seguir haciendo beneficios sin resolver los problemas de las comunidades. Y porque piensan que las comunidades no tienen voz. El gobierno tampoco está haciendo lo posible para hacer a las compañías responsables de sus acciones (Kamara, 2012).

En un informe de 2009 AI se hace eco de la postura de John Ruggie, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en el asunto de los derechos humanos y otras empresas en su informe de 2008 al Consejo de los Derechos Humanos, una postura que apunta a que “el consenso emergente en materia de responsabilidad corporativa en lo que se refiere a los derechos humanos es que las compañías deberían – como mínimo – respetar todos los derechos humanos” (citado en AI, 2009, p. 56). Según Ruggie: “la responsabilidad de respetar exige la debida diligencia. Este concepto describe los pasos que una empresa debe seguir para tomar conciencia de, prevenir y abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos” (Ruggie, 2008).

Una responsabilidad que no están asumiendo pues según el director de CISLAC: “las compañías están rechazando ejercer una verdadera Responsabilidad Social Corporativa. No están haciendo lo que se supone que tienen que hacer en relación con los informes de impacto medioambiental. De hecho, lo que mejor hacen las compañías es devastar el medioambiente” (Musa 2008). Musa afirma que su organización pretende que las empresas lleven a cabo “mejores prácticas en lo que se refiere a los derechos humanos y la protección del medioambiente”, algo con lo que no están cumpliendo debido “a la corrupción oficial, por negligencia y también por la falta de capacidad del gobierno para controlar lo que están haciendo. (Musa, 2008). Señala que dependen de lo que diga la

compañía con respecto a cuánto petróleo se están llevando y que existe una falta total de capacidad gubernamental

5.3.2. La retórica de la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno: ambivalencias y contradicciones

Otro de los principales lenguajes que les ha permitido articularse transnacionalmente a diversas organizaciones locales del Delta para tratar de combatir los efectos de la extracción de petróleo sobre las poblaciones de la región desde el fin de la etapa militar es el de la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. NDEBUMOG (Niger Delta Budget Monitoring Group)⁹², una organización fundada en 2005 en Port Harcourt es una de las organizaciones del Delta que trabajan en materia de transparencia. En la región sus socios son el West African Civil Society Forum, Civil Society Action on Education for All, MOSOP, The Anti-Corruption Revolution, Public Private Development Centre y “las comunidades del Delta del Níger”. Fue una de las organizaciones pioneras en liderar la coalición Coalition for Accountability and Transparency in Extractive Industries, Forestry and Fisheries in Nigeria (CATEIFFN) de 2010 a 2011, una de las coaliciones federales que trabajan en cuestiones de transparencia. Forma parte también de la Nigeria Resource Governance Group y del NEITI.

También en ese marco, una organización creada en Abuja en 2005 ha sido la encargada tanto de promover la implementación de la NEITI y, en particular, del monitoreo del cumplimiento de la ley, como del lanzamiento de la PIB. El CISLAC (Civil Society Legislative Advocacy Centre) tiene su sede central en Abuja y cuenta con una oficina regional en Kano y una oficina de enlace en Lagos. CISLAC es claramente un modelo de conexiones transnacionales; trabaja en red con distintas organizaciones internacionales con sede en Abuja: British Council, Canadian High Commission, Canadian International Development Agency (CIDA), Heinrich Boll Foundation (HBF), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Embajada de los Estados Unidos de América; OXFAM Reino Unido y Justice for All (DFID).

⁹² Para saber más sobre la organización, consultar su página web: www.nigerdeltabudget.org

Además, cuenta con enlaces internacionales (individuos particulares) en Reino Unido, Bruselas y Estados Unidos, es miembro consultivo del ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) y tiene múltiples socios en el resto de África, Europa y Estados Unidos. Además, forma parte de diversas redes y coaliciones, tanto estatales, como regionales, africanas e internacionales, como la coalición Publish What You Pay (PWYP), de la cual es la coordinadora en Nigeria. Es también el socio nigeriano de Transparency International (TI), de hecho ambas organizaciones comparten director general. Además, trabaja en red con multitud de organizaciones nigerianas y en el Delta en particular se asocia al Centre for Advanced Social Science (CASS), el Niger Delta Budget Monitoring Group (NDEBUMOG), Social Action y Koyenum Immalah Foundation (KIF) y la organización británico/nigeriana Stakeholder Democracy Network. Los discursos que despliega la organización son un reflejo de esta visión “global”. En su Plan Estratégico 2012-2017, CISLAC enmarca la problemática nigeriana en un contexto de “aldea global” y marca tres cuestiones de relevancia: los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, la recesión económica global y la información desclasificada por *wikileaks* como cuestiones que “han impactado en todas las esquinas del globo, tanto económica como políticamente”.

CISLAC pretende jugar un papel de bisagra entre los distintos *stakeholders*, por eso también trabaja con distintas instancias gubernamentales. Según su director, sus relaciones con los ministros federales, las asambleas nacional y estatales, las áreas de gobierno local, el sector privado, los medios de comunicación, las ONGs y otras organizaciones de “la sociedad civil y las propias comunidades han abierto una ventana a través de la cual los funcionarios públicos y de políticas pueden interactuar” (Musa, 2008).

Además de la elaboración de diversas publicaciones (la *newsletter* mensual “Legislative Digest” dirigida a las organizaciones de la sociedad civil para que hagan incidencia política en asuntos que requieren intervención legislativa y “Policy Briefs”, que analizan políticas que requieren mejoras y dan recomendaciones; además de diversos libros), la organización es muy activa en las redes sociales como Twitter y Facebook y envía regularmente comunicados y notas de prensa sobre distintas cuestiones. Organiza también conferencias de prensa para implicar a los medios de comunicación en sus actividades y

financia los viajes de miembros de organizaciones y funcionarios nigerianos a otros países africanos para informarlos sobre la experiencia nigeriana en la EITI.

CISLAC ha contribuido a la conversión de ley de decretos como Fiscal Responsibility Act, Public Procurement Act y la Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative Act y la domesticación de convenios internacionales a nivel federal y estatales. Ha participado en foros en otros países de África y en particular sobre la EITI para que esta pase a ser ley en algunos países de África Occidental, en los que también ha proporcionado formación para periodists, legisladores y miembros de organizaciones sociales.

Para CISLAC los principales escollos para la implementación del proceso NEITI son la NNPC y el DPR, en lo que se refiere sobre todo a cuestiones de remediación y la puesta en práctica de las recomendaciones hechas en las auditorías independientes hace ya 10 años. CISLAC se lamenta de que no se ha creado un National Stakeholders Working Group para vigilar el trabajo de NEITI, como marcaba la ley de NEITI de 2007, que se asegure de que se lleven a cabo las recomendaciones propuestas tras la realización de las auditorías y que se cumpla la la ley. La organización lamenta también que las sanciones previstas por esta son débiles y no desalientan a los potenciales morosos, lo que ha reducido la capacidad del NEITI de vigilar efectivamente este proceso. Para CISLAC hace falta, además, una descentralización efectiva del NEITI a los estados y gobiernos locales⁹³.

El 27 de agosto de 2015 la organización emitió una nota de prensa en la que condena la persecución política que sufre la secretaria permanente del Ministerio del Delta del Níger, Fatima Bamidele, tras haber denunciado un fraude de enormes dimensiones cometido por parte del equipo del Ministerio. La firman individualmente el director ejecutivo y otros representantes de la coalición a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno⁹⁴. CISLAC también ha liderado las denuncias sobre la falta de transparencia en la NNPC, que “durante los últimos 16 años ha estado en el centro de una

⁹³ Ver la web de la organización: www.cislac.org

⁹⁴ La coalición nigeriana a favor de la transparencia está integrada por las siguientes organizaciones: Say No Campaign, Centre for Information Technology and Development (CITAD), Zero Corruption Coalition (ZCC), Protest to Power, African Union State of the Union (SOTU), Resource Centre for Human Rights & Civic Education (CHRICED)/Transition Monitoring Group (TMG), Centre for Democracy and Development (CDD), Environmental Rights Action (ERA), West Africa Civil Society Forum (WACSOF), Nigeria National Platform, National Procurement Watch Platform (NPWP), Tax Justice, Advocacy Nigeria, Action Aid Nigeria, Community Action for Popular Participation (CAPP), Accountability for Maternal, Newborn and Child Health in Nigeria (AMHiN), y Procurement Observation and Advocacy Initiative.

corrupción monumental que le ha robado a las naciones los tan necesarios ingresos y las dificultades infligidas a nuestra población”⁹⁵.

CISLAC es la coordinadora de la coalición PWYP en Nigeria⁹⁶. La coalición PWYP nació en junio de 2002 como una campaña conjunta de las organizaciones Global Witness, CAFOD, Open Society Institute, Oxfam GB, Save the Children UK y Transparency International UK. La campaña llamaba a las industrias extractivas a desglosar los pagos realizados a los gobiernos. Más tarde se unieron a la campaña Catholic Relief Services, Human Rights Watch, Partnership Africa Canada, Pax Christi Netherlands y Secours Catholique/CARITAS France, y muchas organizaciones de países en vías de desarrollo.

Según su página web, PWYP es “una red global de organizaciones de la sociedad civil unidas en su llamamiento por un sector extractivo abierto y accountable de manera que los ingresos derivados del petróleo, el gas y la minería mejoren la vida de las mujeres, hombres y jóvenes en los países ricos en recursos naturales”. Está conformada por 650 organizaciones miembro de alrededor de 50 países, entre organizaciones de derechos humanos, desarrollo, medioambiente y organizaciones con base de carácter religioso. Aunque la membresía es individual, en 30 países sus organizaciones han creado coaliciones nacionales. En estos lugares sus miembros pueden usar el nombre de PWYP o no, en algunos casos conservan sus nombres y están afiliados a la coalición. La campaña está financiada por entes privados, Open Society Foundation, Revenue Watch, Cordaid, Oxfam NOVIB, William and Flora Hewlett Foundation, Global Witness, CAFOD, Secours Catholique y fondos de Alemania, Francia, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, entre otros. La coordinación y secretariado internacional se realiza desde la sede de Open Society en Londres.

⁹⁵ Conferencia de prensa de CISLAC sobre la situación del sector del petróleo y el gas en Nigeria (06/08/2015). Documento disponible en su página web.

⁹⁶ Algunas de las organizaciones miembro de PWYP Nigeria son: Africa Centre for Geoclassical Economics; Africa Centre for Sustainable Livelihoods; African Foundation for Environment and Development; African Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ); CAFSO-WRAG for Development; Community Development and Welfare Agenda (CODWA); Commuter Rights Project; Democratic Action Group (DAG); Development Information Network; Helping Hands Group; Koyenum Immalah Foundation (KIF); Rural Integrated Development Initiative (RIDI); Justice, Development and Peace/CARITAS Nigeria; Niger Delta Anti-Corruption Forum; Rahama Women Development Programme; Rural Communities Development Association; Transparency and Economic Development Initiatives; Women’s Right to Education Programme y Youth Afrik International.

Las actividades de PWYP se centran en la realización de campañas por la transparencia y rendición de cuentas en los países ricos en recursos naturales; la verificación de la calidad y adecuación de los marcos legales nacionales y la mejora de los mismos cuando sea necesario. También trata de darle un rol a las poblaciones y la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales; promover la transparencia y rendición de cuentas en la implementación de Consentimiento Libre, Pervio e Informado, especialmente para los pueblos indígenas; abogar por procesos de contratación y licitación transparentes; realizar incidencia política para que se firmen acuerdos de desarrollo que beneficien a las comunidades; monitorear los impactos de las actividades extractivas en el medioambiente y los derechos humanos y realizar incidencia política para lograr poner remedio a esos abusos y daños.

Además de las organizaciones y coaliciones referidas, el lenguaje de la transparencia es usado también por otras organizaciones que intervienen en el Delta. Para AI, con el fin de asegurar que las acciones corporativas respeten los derechos humanos es esencial que estas actúen con transparencia y lleven a cabo un desglose de la información en lo que se refiere a los impactos que tendrán las actividades extractivas sobre los derechos humanos de la población local. En ese sentido, “una mayor transparencia y acceso a la información en el sector extractivo son factores críticos para construir confianza y una mejor cooperación con las comunidades” (AI, 2009, P. 61). El problema en este sentido es que en Nigeria no existe ninguna ley que obligue a la publicación de un monitoreo medioambiental, hasta que el desglose no sea contemplado por la ley, las empresas petroleras no están obligadas a llevarlo a cabo. La única compañía que realiza un verdadero desglose de manera sistemática cada año es SPDC. AI se queja de que la mayoría, y cita en particular a ExxonMobil y Total, se niegan a dar esta información y aunque muchas afirman que han hecho estudios sobre distintas cuestiones como los impactos sobre la salud, los bancos de pesca, etc, estos no están disponibles a los requerimientos de las organizaciones (AI, 2009). Para el representante de CISLAC, la transparencia de los ingresos, en particular de la industria extractiva, es uno de los principales problemas que enfrenta Nigeria “debido a la corrupción”:

Si analizas la crisis que existe en Nigeria, que en gran medida está en áreas donde están teniendo lugar actividades extractivas, esta es una cuestión de corrupción y negligencia. No hay rendición de cuentas por parte de la gente que está gobernando en esas áreas. No han hecho nada para aliviar la pobreza o generar desarrollo en esos lugares. Cuando se

descubrió el petróleo mucha gente no sabía hacer uso de las rentas que estaban llegando, por la ausencia de líderes del desarrollo (Musa, 2008).

Musa afirma que su organización está realizando actividades de incidencia política para una mayor distribución de los recursos y trabajando “porque se haga justicia en términos de redistribución de rentas y por hacer que nuestros líderes rindan cuentas” (Musa, 2008). Estas organizaciones dedicadas a la transparencia han tenido que enfrentar múltiples desafíos en el contexto nigeriano. Uno de los principales escollos ha sido la falta de acceso a información válida, debido a la opacidad del Estado nigeriano. Además, ha existido una falta de coordinación entre las propias organizaciones, que la mayor parte de las veces llevan a cabo acciones reactivas más que proactivas y poco difundidas. Ese fenómeno ha provocado que no se haya llegado a las bases, porque el hecho de que estas acciones se den en lenguas extranjeras supone que en torno a un 70% de la población no tenga acceso a ellas. Según Aderonmu: “los grupos de la sociedad civil deberían enlazar la batalla en contra de la corrupción con la lucha por la consolidación de la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos; en lugar de concentrar sus energías en arrestar, denunciar y perseguir a unos pocos elementos corruptos en la sociedad” (Aderonmu, 2011, p. 85).

La falta de recursos también ha sido un obstáculo, porque estas organizaciones se sostienen gracias a donaciones de agencias, políticos particulares, empresas y las propias instituciones a las que investigan, lo que genera efectos perversos. Uno de los principales efectos de las dinámicas de la Posguerra Fría en el nuevo contexto del Delta es el hecho de que desde 1999 el gobierno nigeriano ha tenido un diálogo más abierto con las organizaciones de movimientos sociales. El diálogo puede tener el efecto positivo de que las demandas de estos grupos sean satisfechas, pero también “la fraternización entre el estado y las organizaciones de la sociedad civil podría llevar a la complacencia por parte de uno o ambos, y la definitiva corrupción de las organizaciones de la sociedad civil, las cuáles podrían llegar a identificarse más con sus socios en el gobierno que con sus miembros constitutivos” (Falola & Heaton, 2008, p. 212).

Otra de las contradicciones surgidas en este marco es que algunas de las organizaciones dedicadas al asunto de la transparencia han estado sometidas al llamado “enigma de la corrupción” (Aderonmu, 2011), que se refiere al hecho de que en el seno de estas mismas organizaciones se dan prácticas corruptas. Tanto en la academia como entre algunas

organizaciones transnacionales que intervienen en Nigeria, y en particular en el Delta, circula la opinión de que algunas de las ONGs locales surgidas a lo largo de la primera década y media del siglo XXI podrían haber sido creadas por el mero interés en el acceso a los fondos proporcionados por los donantes internacionales (Bob, 2005). El hecho de que muchas de las investigaciones que llevan a cabo están dirigidas por el donante sin que este tenga en cuenta la realidad del país ha tenido determinadas consecuencias.

A este respecto, Carlo Merla, coordinador para África de PWYP, señala, por ejemplo, que a la hora de articular la coalición en países como Nigeria “ha habido una equivocada facilitación por parte de las organizaciones que apoyan el proceso, proporcionando fondos sin haber creado una base antes. Donde la campaña realmente ha conseguido resultados es donde no se hablaba de dinero, donde realmente se hacía incidencia política para la transparencia...” (Merla, 2013)⁹⁷. Cuenta que las campañas llevadas a cabo por la coalición han funcionado en los lugares en los que se ha apoyado en los movimientos sociales existentes, no donde se ha sustentado sólo “en relaciones donante-receptor”, como ha sido en el caso nigeriano. Menciona que el problema es que esto se ha convertido en un negocio:

... la existencia de fondos ha permitido el nacimiento de muchas coaliciones en África del Oeste, el vicio es que muchas se han formado porque había una oportunidad de la financiación, no era algo espontáneo. Muchos de los problemas han venido de ahí, porque Open Society u otros donantes, tienen las patas cortas (Merla, 2013).

Le preguntamos sobre si existen problemas de falta de transparencia en la coalición nigeriana y titubea antes de responder que “ha habido un caso de malversación de fondos que no sé si está comprobado. Pero era por mal control del donante” (al cual prefiere no mencionar). Según su testimonio, una de las debilidades de la marcha de la coalición hasta 2013 era la presencia de un líder controvertido, “que había introducido a organizaciones dentro de PWYP sólo para tener más, más de 200 organizaciones de las que no sabemos cuántas están realmente interesadas en el proceso” (Merla, 2013). A pesar de que esta persona sigue ejerciendo cierta influencia en algunos grupos de la coalición, Merla considera que el cambio de liderazgo contribuirá a una mejora sustancial en las prácticas de PWYP en Nigeria. La organización que coordina la coalición en Nigeria es CISLAC. Dado que PWYP no tiene personalidad jurídica, es esta organización nigeriana la que

⁹⁷ Carlo Merla, coordinador para África de la coalición PWYP desde 2010, entrevista personal, Londres (23/01/2013).

gestiona los fondos. Según palabras del propio coordinador “es la única organización de la que realmente me fío en Nigeria” (Merla, 2013).

De la coalición forman parte organizaciones que no trabajan en cuestiones de transparencia porque eso les permite conectarse con otros colectivos locales y transnacionales; mientras hay otras organizaciones con demandas políticas más radicales que no se integran en ella. ¿Cómo se explica eso? Según Carlo Merla: PWYP “quiere ser una plataforma abierta a toda organización interesada en el asunto, de diferentes sectores de la sociedad civil. No solo ONGs, asociaciones, comunidades de base, la prensa, universidades, etc. Todos los actores de la sociedad civil que tengan un interés en la transparencia de las industrias extractivas” (Merla, 2013). PWYP evita así la retórica anticorporativa, para poder “unir a gente y grupos con visiones divergentes acerca del poder corporativo – de la oportunidad a la obscenidad. Tiene una táctica dual de tanto restringir el poder corporativo como de redireccionarlo” (Bendell, 2004, p. 28). El problema es que, como me relató un activista nigeriano durante el encuentro de PWYP en Abuja, la coalición “es un saco sin fondo”.

El caso de Nigeria es especialmente complejo según Merla, ya que “es una democracia muy reciente y la sociedad civil es grande y está muy dividida entre distintos marcos políticos. Hay diferentes grupos que se ocupan de los mismos temas y tienen sensibilidades distintas y abren una competencia en el mercado de la cooperación internacional”. De hecho, como nos cuenta, en Nigeria hay varias coaliciones que se ocupan de lo mismo, como la Coalition for Accountability and Transparency in Extractive Industries y la Forestry and Fisheries in Nigeria (CATEIFFN), liderada por NDEBUMOG, que no forma parte de PWYP.

Al comentarle mi experiencia durante la reunión de la coalición en Abuja, me cuenta que ha habido tensiones entre las organizaciones de África del Oeste, que se han ido limando desde 2008 hasta 2013. Entonces “se logró un consenso en la reunión de trabajar sobre contenidos en lugar de estructuras y ha habido buenos resultados, una madurez que no había, hay que dar tiempo al tiempo y dar tiempo a crear confianza”. En opinión de Merla, una de las razones de ese nuevo estadio en el que se encuentra es que “hay un grupo de líderes muy estimados ahora. En Nigeria también ha habido cambios, algunos líderes controvertidos se han ido”.

Además han establecido un mínimo básico para las nuevas organizaciones miembros, y pretenden establecer un sistema de autoevaluación y regulación interna, un plan de buenas prácticas. En concreto, en África cuentan con un comité de pilotaje de 7 miembros que van a asegurar que las coaliciones “se porten”. Cada región tiene un representante que controla que lo que PWYP establece sean principios de acción interna y da las líneas estratégicas de incidencia política a nivel también de la UA y protección de los activistas. Para él es fundamental que “antes de pedir a los otros que nos rindan cuentas las rindamos nosotros mismos” (Merla, 2013).

Por su parte, la portavoz de AI señala que es problemático el hecho de que las organizaciones estén “comprometidas financieramente. Particularmente las que trabajan en las industrias extractivas, muchas de ellas encuentran sus fondos en Shell, así que te encuentras con que algunas organizaciones son menos vocales de lo que deberían ser”. Pero puntualiza: “de todos modos también es difícil decir que porque una organización esté financiada por una compañía va a ver necesariamente comprometida su independencia” (Freeman, 2012). Su compañero afirma: “ellos les llaman GONGOs (Gubernamental Non Gubernamental Organizations), porque las financia el gobierno o las compañías (Kamara, 2012). Los integrantes de AI aseguran que prefieren no trabajar “con las organizaciones que hayan podido estar comprometidas por las compañías o por gobiernos” (Freeman, 2012). En esa misma línea Croft, de SDN dice que el principal desafío que enfrenta la sociedad civil nigeriana son “las NGBs (non governmental business), hay una gran cantidad, es un gran negocio en Nigeria, hay muy pocas organizaciones dirigidas por una ética... (Crift, 2013).

Como acabamos de evidenciar, la desconfianza mutua que existe en el seno de las redes y coaliciones que trabajan por la transparencia de las industrias extractivas se presenta como un freno para el trabajo conjunto.

Conclusiones

En este capítulo hemos analizado las prácticas y los lenguajes desplegados en el marco del activismo en torno al Delta del Níger desde el fin de la etapa militar. Hemos explorado cómo se han traducido los lenguajes de la contestación del Delta a la esfera transnacional

y viceversa. Por un lado, hemos visto cómo las organizaciones locales han representado sus agravios, cuáles son sus estrategias de conexión transnacional y cómo tratan de movilizar a las fuerzas locales e internacionales. Por otro lado, hemos descubierto cómo los lenguajes y estrategias de las organizaciones, movimientos, redes y coaliciones transnacionales han influido en los repertorios y lenguajes de contestación de sus aliados locales. En particular, las ONGs conectadas transnacionalmente tienden a crear formas de gobernanza alternativa que compiten con el Estado.

En primer lugar, hemos visto cómo la articulación entre el contexto global de la Posguerra Fría y el contexto local en la Nigeria de los regímenes de Babangida y Abacha dio lugar a la emergencia de un nuevo actor heredero del MOSOP. Desde el fin de la etapa militar el sector de las ONGs floreció al calor de la realineación de las prioridades de los donantes internacionales, que comenzaron a transferir fondos a las organizaciones que se ajustasen a los lenguajes de los derechos humanos y medioambientales y la rendición de cuentas, la transparencia y el buen gobierno.

Nos hemos acercado después a cada uno de estos lenguajes. Por un lado, hemos explorado las dinámicas de las redes transnacionales de activismo que intervienen en el Delta utilizando la retórica de los derechos humanos, con un énfasis especial en los derechos de las minorías y en la articulación de esta retórica con la defensa del medioambiente. En este caso, hemos visto cómo se da cierta convergencia entre diversos actores en el uso del concepto de derechos humanos, pero cómo también existen grandes desacuerdos en la materia. En particular, hemos comprobado como en ocasiones, estos lenguajes pretendidamente universales son interpretados por organizaciones locales como sintomáticos de una injerencia por parte de las ONGs con dimensiones transnacionales que parecen quererles imponer su propia agenda.

En lo que se refiere en particular a los derechos de las minorías, se ha comprobado cómo las organizaciones sociales locales estudiadas, así como las organizaciones y activistas en la diáspora en el Reino Unido, tienden a enfatizar sus demandas políticas de autodeterminación y control de los recursos, demandas que para sus aliados internacionales, como Amnistía Internacional, suponen un obstáculo para la consecución

de metas de carácter global. En lo que tiene que ver con el medioambiente, no obstante, los acuerdos parecen ser mayores.

Por otro lado, hemos explorado los diversos lenguajes que se han desplegado en torno a la industria petrolera, desde la retórica de la Responsabilidad Social Corporativa hasta la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. En el primer caso, nos hemos detenido en el análisis de las oportunidades y limitaciones que han supuesto las prácticas de RSC puestas en práctica por las empresas petroleras que intervienen en el Delta. En el segundo de los casos, hemos explorado las ambivalencias y las contradicciones surgidas en el marco de las organizaciones, movimientos y coaliciones que abogan por la transparencia de las industrias extractivas.

CAPÍTULO 6

Consideraciones finales

Este último capítulo recogerá las principales conclusiones emanadas de lo estudiado en la presente investigación. Presentaremos aquí una recapitulación de todo lo que se ha expuesto que nos permitirá visualizar los principales hallazgos empíricos a los que hemos llegado. Estos hallazgos serán situados en el contexto de la literatura, con el fin de apuntar algunas ideas que pueden contribuir a profundizar en algunas de las líneas trazadas por las perspectivas africanistas en torno a las dinámicas sociales surgidas en el marco de la explotación de los recursos naturales. Mi objetivo en estas páginas es apuntar algunas direcciones que considero necesarias, tanto desde el punto de vista de la investigación como de las políticas, para un abordaje lo más completo posible del conflicto del Delta del Níger. En ese sentido, el proceso de investigación que ha alimentado la realización de esta tesis nos arroja las siguientes consideraciones.

1. Recursos naturales y conflicto: la importancia de las conexiones transnacionales

Como se ha evidenciado, las perspectivas dominantes que exploran la relación entre la explotación de recursos naturales y el conflicto en el continente africano no logran capturar las dimensiones transnacionales de lo que sucede en torno al petróleo del Delta del Níger. Bajo estos marcos teóricos, que invisibilizan las dinámicas específicas en cada caso concreto, la inestabilidad política y la violencia se habrían instalado en la realidad nigeriana en general y en la de nuestra región de estudio en particular debido, fundamentalmente, a las carencias de sus propias instituciones. No obstante, como se ha puesto de manifiesto en esta investigación, teniendo en cuenta las dimensiones transnacionales del modelo de extracción, producción, comercialización y consumo de petróleo, la supuesta “maldición de los recursos” que desde esta literatura se le adscribe a los Estados africanos tiene unas dimensiones transnacionales obviadas por el paradigma dominante.

En esta tesis hemos explorado también cómo otros enfoques enfatizan la importancia de la movilización de los agravios colectivos por parte de las poblaciones del Delta en la explicación de los conflictos que asolan la región. Algunas de estas visiones, que alimentan los discursos de muchas de las organizaciones y movimientos sociales locales,

han tendido a analizar la cuestión desde marcos también estatistas. Otras, nacidas de las perspectivas críticas sobre la globalización neoliberal, que nutren los lenguajes de organizaciones que forman parte de redes, coaliciones y movimientos sociales transnacionales, han puesto el énfasis en el papel que juegan actores externos, como las empresas transnacionales, en las dinámicas de conflicto; olvidando el rol del Estado nigeriano en ellas y victimizando a las poblaciones locales.

Frente a estas visiones, existe en la literatura toda una línea de análisis que, sin despreciar lo apuntado por las perspectivas anteriores, pone el foco en las conexiones transnacionales. Partiendo desde ese lugar, en esta investigación hemos podido comprobar cómo en el Delta, las poblaciones afectadas por la extracción petrolera se hacen cada vez más partícipes de la industria transnacional del petróleo. Y lo hacen en un doble sentido, por un lado, en demanda de una mayor justicia social, y/o por otro, inspirados por el interés en aprovecharse de las propias dinámicas del “complejo petrolero”, generadoras de desigualdades, degradación medioambiental y violencia. Las políticas de contestación en el Delta están caracterizadas por la fluidez y la complejidad, y se redefinen constantemente en relación con el petróleo.

Organizaciones ecologistas, sindicatos, grupos de carácter étnico, de mujeres, de jóvenes, han ido configurando un tejido social diverso en sus objetivos, estrategias y discursos. Además, el interés por hacerse con el petróleo y sus rentas ha suscitado, en una relación dialéctica, el surgimiento de actores sociales locales movidos por el mero interés en el aprovechamiento de la riqueza petrolera. Las redes criminales nacidas al calor de esta coyuntura se alimentan tanto de las propias dinámicas de la industria petrolera transnacional, desafiándola, o alineándose estratégicamente con ella; como de las de población local, instrumentalizando a, o confundiendo con, algunos de los movimientos sociales que se enfrentan a aquella.

Estas respuestas sociales surgidas en los lugares con una importante oferta de recursos petroleros tienen, como hemos comprobado, efectos indirectos sobre la demanda internacional; haciendo confluir así las lógicas transnacionales del modelo de producción y consumo de hidrocarburos. El papel que juega el Delta del Níger en la estrategia de seguridad energética global hace de él un escenario en combustión y precisamente el

propio carácter de la industria petrolera deriva, a su vez, en que sus impactos locales cobren una dimensión transnacional.

2. La contestación en torno al “complejo petrolero”: de lo local a lo global

En base a esas consideraciones iniciales, hemos realizado un análisis en perspectiva histórica del proceso que condujo a la construcción del Estado nigeriano, haciendo un énfasis especial en las dimensiones transnacionales del mismo. Nos hemos enfocado particularmente en las trayectorias históricas del Delta del Níger entendiendo esta región como el centro de una serie de procesos transnacionales. Este enfoque nos ha permitido comprobar cómo las distintas conexiones transnacionales que la han atravesado desde mediados del siglo XV hasta el año 2015 han influido de diversos modos en los órdenes desplegados en el plano local. Se ha argumentado en este punto que la inserción del Delta en distintos procesos económicos de carácter transnacional (la trata esclavista en la etapa precolonial, el comercio de palma aceitera durante el periodo colonial y la explotación de los recursos petroleros desde la independencia del Estado nigeriano) ha generado dinámicas de cambio y continuidad.

El foco se ha puesto a partir de entonces en el análisis de la economía petrolera y todas las implicaciones que esta ha tenido en el proceso de construcción federal, en particular, la evolución de distintas políticas puestas en marcha por los sucesivos gobiernos nigerianos. Hemos estudiado las complejas relaciones entre lo local, lo estatal y lo global surgidas en el marco de la extracción de petróleo y hemos tratado de arrojar algunas luces en torno a la configuración del “complejo petrolero” nigeriano, los actores que lo componen y sus relaciones mutuas. Gracias a esta exploración hemos comprobado que en torno al petróleo desfilan una serie de actores que compiten por lograr el acceso a los beneficios generados por su explotación y hemos visto cómo las relaciones entre estos actores son complejas, fluidas y contingentes y oscilan entre la cooperación y el conflicto.

La industria petrolera, en la que intervienen elites estatales y locales y empresas transnacionales, se ha convertido en el objeto de las protestas de las poblaciones afectadas por sus actividades, que se han quejado de no haber sido tenidas en cuenta en las distintas fórmulas de redistribución de las rentas petroleras. El análisis de la evolución del sector nos ha permitido descubrir que la legislación y las políticas puestas en práctica desde el Estado central han tendido a asegurar los intereses de los sucesivos gobiernos, las elites

locales y las empresas extranjeras, en detrimento del grueso de la población, tanto la nigeriana en general, como la del Delta en particular.

Las políticas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos federales desde la Guerra de Biafra dieron lugar a la centralización progresiva del Estado en el marco de la nacionalización de los recursos petroleros, lo que unido a las medidas de carácter administrativo, como la creación de estados, dio lugar a que las una parte de la población del Delta viese negados sus derechos al petróleo de la región. Este fenómeno derivó en el surgimiento de reivindicaciones sociales articuladas en torno al concepto de “minorías petroleras”.

Hemos visto también cómo durante la primera mitad de la década de 1980 el Estado nigeriano comenzó a sufrir los efectos de su dependencia de las rentas petroleras. La crisis económica derivada de este hecho provocó la puesta en marcha de distintas políticas económicas que encontraron oposición por parte de algunos sectores de la sociedad nigeriana, lo que a su vez derivó en la puesta en práctica de distintas estrategias represivas por parte de los sucesivos gobiernos. Nos hemos acercado a este periodo a través de un análisis de las organizaciones y movimientos sociales del Delta más representativos del momento para analizar la evolución de sus repertorios de contestación y la articulación de nuevos lenguajes en torno al petróleo a partir de mediados de la década de 1980.

Hemos visto cómo en el plano estatal, esta fue la etapa dorada del activismo dado el surgimiento del llamado movimiento prodemocracia, que planteó un desafío al gobierno de Ibrahim Babangida al movilizarse frente a sus dos principales políticas, el Plan de Ajuste Estructural y el programa de transición a la democracia puestos en práctica en un marco de autoritarismo. Las movilizaciones sociales se vieron también alentadas por la consolidación de nuevas dinámicas surgidas en el contexto global del fin de la Guerra Fría. Esta exploración nos ha permitido comprobar cómo diversas organizaciones y movimientos aprovecharon estas oportunidades para articular sus agravios desde lo local a lo global, pasando por lo estatal, al emplear lenguajes legitimados transnacionalmente, como el de los derechos humanos y medioambientales.

3. Entre la continuidad y la ruptura: el petróleo como catalizador de la violencia

Se ha puesto de manifiesto también que el petróleo ha sido un catalizador de la violencia en el Delta, un fenómeno comolejo y multicausal. La explotación de este recurso, el proceso de redistribución en el territorio estatal de los beneficios derivados de su exportación, y particularmente las controversias suscitadas por su control, han dibujado un escenario de conflicto permanente en la región. Desde la Guerra de Biafra, un periodo crucial en la historia del Delta, las políticas estatales puestas en marcha a partir de inicios de la década de 1970, coincidentes con el *boom* petrolero, tuvieron efectos sobre las relaciones de clase y contibuyeron a agudizar las fracturas en la población del Delta, particularmente entre las elites de ancianos los jóvenes.

Las brechas surgidas entre las “minorías petroleras” del Delta se agravaron todavía más cuando la aplicación del PAE provocó transformaciones notables en las relaciones entre los diversos actores que conforman el “complejo petrolero”. Las contradicciones surgidas en el marco de estas políticas, puestas en práctica en un contexto fuertemente represivo, impactaron en la región de un modo particular, al convertirse en oportunidades políticas contingentes que facilitaron la emergencia de políticas identitarias de carácter étnico. El ajuste provocó un agravamiento de las diferencias de clase, lo que dio lugar a la emergencia de nuevas identidades en competencia por el acceso al poder y los recursos, que comenzaron a desplegar nuevos lenguajes y repertorios de contestación.

Más tarde, la *Declaración de Kaiama* de diciembre de 1998 impactó de un modo determinante sobre la movilización de agravios entre los jóvenes del Delta, particularmente los ijaw, que comenzaron a emplear repertorios armados de contestación contra los intereses de la industria petrolera. El establecimiento de un gobierno multipartidista a partir de mayo de 1999 con el exmilitar Olusegun Obasanjo a la cabeza provocó transformaciones de trascendencia en los órdenes sociales desplegados en la región. Una de las tendencias que emergió fue la proliferación de grupos armados de jóvenes ijaw que han recuperado las demandas políticas históricas de las minorías étnicas locales, articuladas en el lenguaje del “control de los recursos” y la autodeterminación.

Las actividades de las llamadas milicias de jóvenes han despertado el interés de la academia y de los actores con intereses estratégicos en el Delta, como los principales receptores de las exportaciones de petróleo nigeriano. La literatura dominante tiende a obviar las trayectorias históricas que subyacen en el surgimiento de los grupos armados,

y afirma que estos solo se mueven por intereses económicos y no por motivaciones políticas. La otra perspectiva dominante, que se centra en el análisis de los agravios colectivos y que es la que despliegan en gran medida muchas organizaciones locales, subraya en cambio las trayectorias históricas, pero tiende a ver sólo las continuidades que han hecho del Delta un escenario de conflicto permanente, sin atender a las rupturas. Estas visiones oscurecen algunas de las dinámicas complejas que se han venido dando en la región, porque olvidan que las relaciones en el marco del “complejo petrolero” son, como hemos apuntado repetidas veces, contradictorias, fluidas y contingentes.

Teniendo en cuenta que estos grupos se benefician del contrabando de petróleo, la literatura de la “maldición de los recursos” los toma como meros criminales y como ejemplos de las teorías de la “elección racional”. Mientras desde la perspectiva de los agravios, se marca una línea de separación entre los “militantes” y los “criminales”. En esta tesis, hemos argumentado que en realidad esa línea es difusa, como también lo es la que separa al gobierno y las empresas transnacionales petroleras de estos grupos. En realidad, todos esos actores están interconectados desde la década de 1970 a través de la economía paralela surgida en torno al petróleo. Desde la década de 2000 algunos de los grupos militantes se han ido olvidando de sus agendas políticas originales y se han insertado en las dinámicas que dicen estar combatiendo. La conducta de la industria ha contribuido a este paso de la violencia popular a la criminal a través de sus estrategias de desarrollo, relaciones públicas y represión. Los grupos armados han sido combatidos de manera ambigua y utilizadas por el gobierno y las transnacionales para proteger sus propios intereses.

El surgimiento del MEND a finales del año 2005 provocó la entrada de la región en la Guerra Global contra el Terrorismo. En el contexto de la securitización de los intereses de la industria petrolera, a las fuerzas de seguridad desplegadas en la región, comenzaron a unirse otras de carácter transnacional. En 2008 el conflicto comenzó a expandirse por el Golfo de Guinea en el marco de las redes criminales que operan en la zona. Las acciones de grupos como el MEND afectaron de tal manera a los beneficios de la industria petrolera que los aliados tradicionales del Estado nigeriano presionaron al gobierno de Yar’Adua, que realizó un cambio de acercamiento al conflicto y estableció un programa de DDR, del que durante el mandato de Jonathan se han beneficiado decenas de miles de jóvenes. Este programa de “amnistía”, ha sufrido muchas críticas en los 6 años que ha durado, pues no

ha tenido en cuenta a los no combatientes, en particular a las mujeres, no ha cumplido con la parte de rehabilitación y ha sido poco transparente en la puesta en práctica de sus criterios de elegibilidad. Muestra de su escasa efectividad es que no ha logrado frenar la actividad armada en la región.

4. Conexiones transnacionales de ida y vuelta: el MOSOP como modelo

Esta investigación nos ha permitido comprobar también cómo las conexiones transnacionales que caracterizan la explotación de los recursos petroleros en el Delta del Níger son fundamentales en dos sentidos: por un lado, los impactos que la industria petrolera genera en el Delta responden a las necesidades mundiales, no a las locales; y por otro lado, el activismo local que ha florecido en reacción a este fenómeno también debe ser analizado en conexión con un de carácter global movimiento global.

En ese sentido, hemos explorado cómo a principios de la década de 1990, en el marco del surgimiento del movimiento prodemocracia a nivel federal, en el Delta nació el MOSOP. Hemos analizado la evolución de su estrategia desde su creación en 1990 hasta 1995, cuando la ejecución de nueve de sus líderes por parte del régimen militar de Sani Abacha supuso la proyección internacional del conflicto del Delta al tiempo que debilitaba internamente el propio movimiento. Este análisis nos ha permitido trazar la evolución de sus repertorios y sus lenguajes de contestación, con el paso de los discursos iniciales centrados en la autonomía étnica y reflejados en la Ogoni Bill of Rights, a una retórica de carácter pretendidamente “universal”, centrada en la defensa del medioambiente y los derechos humanos, en particular los derechos de los pueblos indígenas.

Los conocimientos de su líder, Ken Saro-Wiwa, fueron esenciales en el giro que dio el MOSOP a partir del año 1993. Además de documentar mejor sus agravios para responder a las exigencias de las ONGs transnacionales, comenzó a articular unos lenguajes en boga en el momento. La estrategia del MOSOP contribuyó, además de a universalizar la lucha del pueblo ogoni, a transformar las dialécticas de las políticas identitarias en el Delta. Gracias a sus esfuerzos, se generó una red transnacional de incidencia política en torno a la causa ogoni, de la que formaron parte distintas ONGs, universidades e instituciones de Norteamérica y Europa gracias a que líderes ogoni expatriados facilitaron acceso a estas conexiones.

Hemos puesto de manifiesto cómo este apoyo transnacional fue posible, entre otras cuestiones, porque al adaptarse a arenas transnacionales de discurso, las demandas del MOSOP lograron encajar con las agendas de las grandes ONGs de derechos humanos y medioambiente, que se convirtieron en avales de otras más pequeñas. En particular, el señalamiento a la empresa Shell fue esencial en lograr esos apoyos, dado que en ese momento en los discursos críticos con la globalización, el objetivo principal eran las empresas transnacionales. La ejecución de los 9 activistas ogoni provocó la transnacionalización del conflicto del Delta y el surgimiento de un movimiento global de solidaridad.

Durante la segunda mitad de la década de 1990, otras minorías del Delta emularon al MOSOP y empezaron a buscar aliados transnacionales. La exploración de esta tendencia, fortalecida desde 1999, nos ha permitido comprobar cómo los agravios de las poblaciones del Delta han sido traducidos a la esfera transnacional al tiempo que hemos visto cómo los lenguajes “universales” de la democracia, los derechos humanos y medioambientales, la Responsabilidad Social Corporativa y la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno, se han trasladado al plano local. Nos hemos detenido en particular en el análisis de los lenguajes que distintas organizaciones locales y transnacionales despliegan en torno a la industria petrolera presente en el Delta para examinar sus alianzas y sus conflictos.

Este enfoque nos ha permitido observar sobre todo las tensiones surgidas en el marco de las redes transnacionales de activismo. En particular, hemos comprobado que existen convergencias en el uso del concepto de los derechos humanos, pero también hay desacuerdos que dan lugar a tensiones entre las organizaciones y movimientos articulados en torno a los impactos de la industria petrolera en el Delta. En el caso del medioambiente parece que los acuerdos son más generalizados. En el caso de la RSC esta se conecta con los derechos humanos y el medioambiente pero desde la idea del compromiso constructivo, y en cuanto a la transparencia hay muchas contradicciones.

Hemos visto cómo las ONGs conectadas transnacionalmente tienden a crear formas alternativas de gobernanza que compiten con el Estado. Las empresas transnacionales se han convertido en agentes de desarrollo local y han sustituido al Estado en muchos

lugares, contribuyendo a agudizar y generar nuevas divisiones sociales entre las poblaciones al llegar incluso a elaborar sus propias categorías sociales.

Una reflexión final

Como ha quedado en evidencia en esta tesis, en los conflictos relacionados con el petróleo del Delta intervienen el Estado nigeriano; las empresas transnacionales; los líderes, organizaciones y movimientos locales y las ONGs internacionales. De todos ellos, las empresas transnacionales y las ONGs internacionales (aunque estas en menor medida) son los únicos que no están fragmentados; las fuerzas estatales y locales, en cambio, forman alianzas complejas y contradictorias debido a un conjunto de factores históricos, políticos, económicos y culturales. Mientras los líderes locales y estatales se alían a las fuerzas del capital transnacional para defender sus intereses, los movimientos sociales locales cuentan con las ONGs internacionales como aliados, pero esta alianza contiene complejidades y contradicciones.

Los discursos celebrativos acerca de la llamada “sociedad civil global” han tendido a aplaudir su presunto potencial transformador en los contextos locales. Sin embargo, como hemos argumentado en esta tesis, ese potencial no parece haber contribuido a una mejora en las vidas de las poblaciones del Delta del Níger, afectadas por los numerosos y variados impactos generados por las actividades de explotación de petróleo. Las conexiones transnacionales surgidas en el marco del activismo no han estado exentas de contradicciones y ambigüedades. Los discursos hegemónicos acerca de los derechos humanos y medioambientales, o la RSC y la transparencia, podrían estar siendo funcionales a la agenda de los gobiernos, instituciones, agencias y empresas transnacionales con intereses estratégicos en esta región.

Reconocer todo lo anterior se nos ha revelado como un punto de partida esencial para que las organizaciones y movimientos sociales solidarios con las poblaciones locales puedan contribuir realmente a los cambios sociales tan necesarios en el Delta del Níger.

ANEXO

En el siguiente anexo se ofrece documentación complementaria acerca de algunas de las organizaciones sociales cuyos representantes han servido de fuentes primarias de información para esta investigación.

Stakeholder Democracy Network (SDN)

Desde sus cinco áreas de trabajo (gobernanza de los recursos, democratización, medioambiente, acceso a la energía y comunidades resistentes), las actividades de SDN se encaminan a la mediación en conflictos intercomunitarios, a la facilitación del acceso a la energía, monitoreo de elecciones, y la lucha contra la corrupción y la justicia social y medioambiental.

En lo que tiene que ver con **“Gobernanza de los recursos”**, trabaja por la consecución de una “mayor participación y representación de los ciudadanos en la gobernanza de la riqueza de sus recursos naturales y en los procesos de responsabilidad social corporativa y compensación, para asegurar ganancias equitativas”. En el área de **“Medioambiente”** asegura trabajar conjuntamente con “las comunidades y las agencias gubernamentales para proteger el medioambiente y los recursos naturales que están soportando las formas de vida sostenibles y el bienestar del Delta del Níger”. En materia de **“Democratización”** sus actividades se encaminan al “empoderamiento de los ciudadanos para demandarles a sus representantes políticos unas instituciones más transparentes, capaces y legítimas que sean capaces de satisfacer sus necesidades básicas y respeten los derechos políticos, sociales, económicos y medioambientales de todos los nigerianos”.

Otra de sus áreas de trabajo es el **“Acceso a la energía”**, en la que pone a prueba “soluciones innovadoras para proveer de la necesaria infraestructura para el futuro del Delta del Níger, demostrando que los acercamientos a la pobreza energética basados en una perspectiva comunitaria pueden ser exitosos”. En ese sentido, proponen convertir la quema de gas en energía y “apoyar tecnologías y a sus emprendedores de energías renovables”. En la última de sus áreas de trabajo, **“Comunidades resistentes”**, SDN aborda “las causas de la militancia y el conflicto a través de la reintegración económica sostenible, la reconciliación al nivel de las comunidades de base y el fortalecimiento del papel de las mujeres en la construcción de la paz y la estabilización en el Delta del Níger”.

Civil Society Legislative Advocacy Centre (CISLAC)

CISLAC se define en su *website* como “una organización no gubernamental, sin fines de lucro” que realiza incidencia política legislativa y actividades de investigación. Su trabajo, de amplitud federal, consiste en fortalecer la labor de las organizaciones de la “sociedad civil” nigeriana en el Parlamento. Más concretamente, su misión se dirige a “trabajar para salvar la distancia entre la legislatura y el electorado; a través de la mejora de las **estrategias de lobby**, implicación en la elaboración de los proyectos de ley antes de su aprobación, el desarrollo de recursos humanos para legisladores, asesores legislativos, políticos y sociedad civil, así como educación cívica en los principios de la democracia y los derechos humanos”. Su visión es la de “una Nigeria en la que los ciudadanos participen en la gobernanza; el gobierno salvaguarde los derechos y el bienestar de la gente, y los actores no estatales proporcionen espacio a los ciudadanos para demandar rendición de cuentas”.

Principales donantes

Oxfam Novib, Oxfam International, Oxfam GB, Ford Foundation, McArthur Foundation, PACT Nigeria/USAID, United Nations Millennium Campaign (UNMC), Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), Heinrich Boll Foundation (HBF), United Nations Development Programme (UNDP), Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Canadian International Development, Friedrich Ebert Stiftung, The Federal Public Administration Reform (FEPAR)/DFID, T.Y Danjuma Foundation, National Endowment for Democracy, y Nigeria Stability and Reconciliation Programme.

El trabajo de la organización se enfoca en las siguientes cuestiones: monitoreo presupuestario, transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, derechos humanos (igualdad de género, igualdad y mejora en la educación, salud sexual y reproductiva, infancia y otros grupos vulnerables, incluidos mendigos, pensionistas, refugiados y desplazados internos), política comercial e intervención, seguridad/gestión de conflictos y medioambiente y medios de subsistencia.

Las actividades de CISLAC van desde la realización de **acciones de incidencia política** hasta la **formación** de miembros de organizaciones nigerianas, miembros de la Asamblea Nacional y los distintos accionistas que se encuentran en el marco de la NEITI, tanto a través de cursos como a través de la elaboración de **publicaciones**.

CISLAC cuenta con multitud de socios en Nigeria, África, Europa y Norteamérica.

Socios en Nigeria

Advocacy Nigeria, African Centre for Media & Information Literacy (AFRIMIL); African Centre For Leadership, Strategy & Development (CENTRE LSD); Africa Leadership Forum; Alliance for Credible Elections (ACE) Nigeria; Bayelsa Non-governmental Organisations Forum; Centre for Democracy and Development (CDD), Abuja; Centre for Information Technology and Development (CITAD), Kano; Centre for Legislative Studies in Africa, Abuja; Centre for Public-Private Cooperation (CPPC), Ibadan; Centre for Research and Documentation (CRD), Kano; Centre for Social Justice (CSJ), Abuja; Community Health and Research Initiative (CHR), Kano; Development Research and Projects Centre (DRPC), Kano; Environmental Rights Action (ERA); Federation of Muslim Women's Associations in Nigeria (FOMWAN); CLEEN Foundation; Interfaith Mediation Centre (IMC), Kaduna; International Press Centre (IPC), Lagos; International Republican Institute (IRI), Nigeria; Leads – Nigeria; Media Rights Agenda (MRA), Lagos; National Democratic Institute (NDI), Nigeria; Nigeria Labour Congress (NLC); Nigeria Union of Journalists (NUJ); Nigerian Association of Women Journalists (NAWOJ); Nigerian Economic Summit Group; Women Advocates Research and Documentation Centre (WARD C), Lagos; Women's Aid Collective (WACOL), Enugu State; Women's Right Advancement and Protection Alternative (WRAPA), Abuja; PACT Nigeria; Pan African Strategic & Policy Research Group (PANAFSTRAG) y TY Danjuma Foundation, Abuja.

Aliados en el gobierno y agencias gubernamentales nigerianas

Budget Office; Bureau of Public Procurement (BPP); Central Bank of Nigeria (CBN); EFCC, Strategy and Re-Oriented Unit (SARU), formerly Fix Nigeria Initiative; Federal Ministry of Finance; Independent Corrupt Practices and other Related Offences Commission (ICPC); Independent National Electoral Commission; National Commission for Refugees; National Health Insurance Scheme; National Human Rights Commission; National Planning Commission; Nigerian Debt Management Office; Nigerian Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI) Secretariat; Nigerian Police; Office of the Special Advisor to the President on Civil Society; Office of the Special Advisor to the President on Millennium Development Goals; Technical Unit on Governance & Anti-corruption Reforms (TUGAR); National Institute For Legislative Studies.

Socios en el resto de África

Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), Kenya; Egyptian Centre for Economic and Social Rights (ECESR), Egypt; National Accountability Group (NAG) – Sierra Leone; Tax Justice Network-Africa (TJN-A), Kenya; Third World Network-Africa (TWN-A), Ghana; Southern & Eastern African Trade, Information and Negotiations Institute (SEATINI), Uganda; Roseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgetaire (ROTAB), Niger; NIYEL, Senegal; WACAM-Ghana y West Africa Civil Society Institute (WACSI) – Ghana.

CISLAC forma parte de diversas redes y coaliciones, tanto federales, como regionales, africanas e internacionales.

Socios en el resto del mundo

ACTIONAID International; Advocacy Forum, NEPAL; Amnesty International, Article 19, Asian Centre for Human Rights (ACHR) India; Conflict Security and Development Group (CSDG) of King's College, University of London; Department for International Development (DFID), UK; FRIDE (Spain); Friedrich Ebert Stiftung (FES); Human Rights Watch, US; Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) Geneva, Switzerland; ITAD (UK); Norwegian Refugee Centre; Open Society Justice Initiative (OSJI); Open Society Initiative for West Africa (OSIWA); OXFAM America; OXFAM Novib, NETHERLANDS; OXFAM Spain; United Nations Millennium Campaign (UNMC); USAID; World Bank; The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, African Studies, John Hopkins University, Washington; Transparency International; Publish What You Pay (PWYP); Revenue Watch Institute (RWI); Right to Know, Centre for Democratic Research and Training; Christian Aid; Civil Resources Development & Documentation Centre (CIRDDOC); Community Action and Popular Participation (CAPP); Gender and Development Action (GADA); Global Call to Action against Poverty (GCAP); Justice, Development and Peace Commission (JDPC); Nasarawa NGO Network (NANGONET); Justice, Development and Peace Commission (JDPC); Public and Private Development Centre (PPDC); Institute For Democratic Governance (IDEG) y State of the Union (SOTU).

Participación en redes y coaliciones

Publish What You Pay (PWYP), Africa Public Health Rights Alliance 15 Percent Campaign, Citizens' Forum for Constitutional Reform (CFCR), Civil Society Action Coalition on Education for All (CSACEFA), Civil Society Platform for Advocacy on Internal Displacement, Electoral Reform Network (ERN), Freedom of Information Coalition (FOI), National Coalition on Affirmative Action (NCAA), National Procurement Watch Platform (NPWP), Nigeria Economic Summit Group (NESG), Nigeria Gender Budget Network (NGBN), Tax Justice Network, Africa, Trade Network Initiative (TNI), Transition Monitoring Group (TMG), West African Civil Society Forum (WACSOF), West African Network for Peacebuilding (WANEP), Zero Corruption Coalition (ZCC) y United Action For Democracy (UAD).

Niger Delta Budget Monitoring Group (NDEBUMOG)

Según su *website*, la misión del NDEBUMOG consiste en “promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública de recursos a través de la realización de campañas a favor de los pobres y campañas anticorrupción para el desarrollo sostenible en el Delta del Níger y la consolidación democrática en Nigeria”. Trata de “movilizar al público mostrándole cómo los presupuestos se relacionan con asuntos que afectan a la vida diaria de las personas desde la salud y la educación hasta la distribución de la riqueza”. Su objetivo es “simplificar y diseminar información presupuestaria; identificar y establecer prioridades presupuestarias; influenciar las políticas de ingresos; identificar las tendencias presupuestarias y proporcionar proyecciones; destacar buenas prácticas; rastrear los ingresos y los gastos”.

Sus socios fundamentales son, además de CISLAC, la ONG nigeriana Centre for Public-Private Cooperation, tres capítulos nacionales de ONGs internacionales (Actionaid Nigeria, PACT-Nigeria, NDI –National Democratic Institute), dos agencias de desarrollo internacionales (DFID-UK Department for International Development, USAID-Nigeria); el OSSAP-MDGs National Monitoring and Evaluation Team (Office of the Special Adviser to the President on the Millennium Goals). Además, en el caso del gobierno, trabaja en asociación con una agencia gubernamental dependiente del Ministerio de Finanzas que tiene la responsabilidad de dar marco legal e institucional y capacitación pública para la contratación pública en Nigeria, el Bureau for Public Procurement; el Budget Office of the Federation; la Asamblea Nacional y los gobiernos de Cross Rivers, Rivers, Delta y Bayelsa.

BIBLIOGRAFÍA

- Abrahamsen, R. & Williams, M. (2005): *The Globalisation of Private Security: Country Report: Nigeria*. Aberystwyth: University of Wales.
- Adejumobi, S. (2011). *State, Economy, and Society in Post-Military Nigeria*. New York: Palgrave Macmillan.
- Adekson, A. O. (2004). *The Civil Society problematique. Deconstructing Civility and Southern Nigeria's Ethnic Radicalization*. New York & London: Routledge.
- Adunbi, O. (2015). *Oil Wealth and Insurgency in Nigeria* [Kindle Versión]
- Aghalino, S.O. (2000): British colonial policies and the oil palm industry in the Niger Delta region of Nigeria, 1900-1960. *African Study Monographs*, 21(1): 19-33.
- Ahonsi, B. A. (2011). Capacity and Governance deficits in the response to the Niger Delta crisis. In C. Obi and S.A. Rustad (eds.), *Oil and insurgency in the Niger Delta: managing the complex politics of petro-violence* (pp. 28-41). Uppsala: Nordic Africa Institute/ London: Zed Books.
- Akpan, G., & Umodong, E. (2003). Majority Rule over Minority Right: Subversion of Derivation Criterion in Revenue Allocation in Nigeria. In A. H., Ekpo, & E. Ubok-Udom (eds.), *Issues in Fiscal Federalism and Revenue Allocation in Nigeria* (pp. 335-375). Uyo, Nigeria: University of Uyo.
- Alagoa, E.J. (1986). The slave trade in Niger Delta oral tradition and history. In Curtin, P. D.; & P. E. Lovejoy, Paul E., *Africans in bondage: studies in slavery and the slave trade: essays in honor of Philip D. Curtin on the occasion of the twenty-fifth anniversary of African Studies at the University of Wisconsin* (pp. 127-134). Wisconsin, Madison: University of Wisconsin Press.
- Álvarez, S. E. (1998). Latin American Feminisms “go global”: Trends of the 1990s and challenges for the New Millenium. In S. E., Alvarez, S. E., E. Dagnino, & A. Escobar, A. (eds.), *Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements* (pp. 293-324). Boulder: Westview Press.
- Álvarez, S. E.; Dagnino, E. & Escobar, A. (eds.) (1998). The cultural and the political in latin american social movements In S. E., Alvarez, S. E., E. Dagnino, & A. Escobar, A. (eds.), *Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements* (pp. 1-29). Boulder: Westview Press.
- Amenta, E., Carruthers, B. G. & Zylan, Y. (1992). A Hero for the Aged? The Townsend Movement, the Political Mediation Model, and U.S. Old Age Policy, 1934-1950. *American Journal of Sociology*, 98: 308-339.
- Amin, S. (1975). *La acumulación a escala mundial*. Buenos Aires y México: Siglo XXI.

-Amnesty International (AI):

(2013). Bad information. Oil spill investigations in the Niger Delta. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2012). Nigeria: trapped in the cycle of violence. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2011a). The true ‘tragedy’. Delays and failures in tackling oil spills in the Niger Delta. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2011b) Nigeria human rights agenda 2011-2015. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2011c). Loss of life, insecurity and impunity in the run-up to Nigeria’s elections. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2010a). ‘Just move them’. Forced evictions in Port Harcourt, Nigeria. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2010b). 50 years of independence: making human rights a reality in Nigeria. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2009). Nigeria: petroleum, pollution and poverty in the Niger Delta. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2005a). Claiming rights and resources. Injustice, oil and violence in Nigeria”, Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2005b) “*Ten years on: injustice and violence haunt the oil Delta*. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2004). Are human rights in the pipeline? Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2003). Nigeria. Repression of women’s protests in oil-producing Delta region. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(2001). Nigeria. Time for justice and accountability. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(1995a): Nigeria. The ogoni trials and detentions. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK.

(1995b): Nigeria: A travesty of justice: secret trials and other concerns. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

(1994): Nigeria. Military government clampdown on op position. Amnesty International Publications International Secretariat: London, UK

- Anyanwu, J. C. (1992). President Babangida's Structural Adjustment Programme and Inflation in Nigeria. *Journal of Social Development in Africa*, 7 (1), 5-24.
- Ashton-Jones, N. S. Arnott & O. Douglas (1998). *The Human Eco-Systems of the Niger Delta*. Benin City: Environmental Rights Action.
- Auty, R. (1993): *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, London, Routledge.
- Bach, D. (1989). Managing a Plural Society: The Boomerang Effects of Nigerian Federalism. *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 27 (1-2), 218-245.
- Bassey, C., & Akpan, F. (2012). The Politics of Resource Control in Nigeria. *European Journal of Social Sciences*, 27 (2), 222-232.
- Bayart, J. F. (2000). Africa in the World: a History of Extraversion. *African Affairs*, 99, 217-267.
- Bayart, J. F., Ellis, S., & Hibou, B. (1999). *The criminalization of the state in Africa*. Suffolk, U.K: James Currey.
- Bebbington A, & Riddell, R. (1997). Heavy Hands, Hidden Hands, Holding Hands? Donors, Intermediary NGOs and Civil Society Organisations. In D. Hulme & M. Edwards, *NGOs, States and Donors. Too Close for Comfort?*. London: St Martin's Press/the Children.
- Beckman, B. (1982). Whose State? State and Capitalist Development in Nigeria. *Review of African Political Economy*, 23, 37-51.
- Bendell, Jem (2004). *Barricades and Boardrooms. A Contemporary History of the Corporate Accountability Movement*. Geneva, Switzerland: United Nations Research Institute for Social Development:
- Berlant, L. (1991). *The Anatomy of National Fantasy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Boas, M. (2011). 'Mend me': the Movement for the Emancipation of the Niger Delta and the empowerment of violence. In C. Obi and S.A. Rustad (eds.), *Oil and insurgency in the Niger Delta: managing the complex politics of petro-violence* (115–124). Uppsala: Nordic Africa Institute/London: Zed Books.
- Bob, Clifford. (2005). *The marketing of rebellion. Insurgents, media and international activism*. New York: Cambridge University Press.
- Boele, R. (1995). *Ogoni: Report of the UNPO Mission to Investigate the Solution of the Ogoni in Nigeria*. The Hague: Unrepresented Nations and Peoples Organization.
- Bradley, M. T. (2005). Civil Society and Democratic Progression in Postcolonial Nigeria: The Role of Non-Governmental Organizations. *Journal of Civil Society*, 1(1), 61-74.

- Bratton, M. (1994). Civil society and political transitions in Africa. In J. W., Harbeson, John W., D. Rothchild, Chazan, N. (eds), *Civil Society and the State in Africa* (p. 51-81). Boulder, United States: Lynne Rienner Publishers Inc.
- Braudel, F. (1958). Histoire et Sciences sociales: La longue durée. In *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 4: 725-753.
- Brautigam, D. (1991). Governance and economy: a review. Policy, Research working papers, n° WPS 815. Policy and review. Washington, DC : The World Bank.
- Campbell, A. (1997). *Western Primitivism: African Ethnicity*, London: Cassell.
- Campos, A. (2011a). Derechos Humanos y Empresas: un enfoque radical, *Relaciones Internacionales*, 17: 41-65.
- Campos, A. (2011b): *Petróleo y Estado postcolonial: transformaciones de la economía política en Guinea Ecuatorial, 1995-2010. Implicaciones para la coherencia de políticas españolas*. Madrid: Fundación Carolina.
- CISLAC (2007). *Enhancing CSOS's participation in the NEITI Audit Process in Nigeria*. Abuja, Nigeria: CISLAC.
- Clark, J. (2000). *Civil society, NGOs and development in Ethiopia: a snapshot view*. Washington DC: World Bank.
- Cohen, A. (1993). Culture as Identity: An Anthropologist's View. *New Literary History*, 24, 195–209.
- Collier, P. & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers*, 56(4): 563-595.
- Collier, P. & Hoeffler, A., (2003). *Breaking the conflict trap: civil war and development policy*. Washington, DC: World Bank/Oxford: Oxford University Press.
- Cooper, F. (2004). *Africa since 1945. The past of the present*. Cambridge University Press.
- (2001). What is the Concept of Globalization Good for? An African Historian's Perspective. *African Affairs*, 100: 189-213.
- Crow, M. (1995). The Ogoni Crisis: A case study of military repression in south-eastern Nigeria", *Human Rights Watch*, 7(5).
- Chabal, P. & Daloz, J. P. (1999). *Africa Works: Disorder as Political Instrument*. Suffolk, U.K: James Currey and Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
- Davies, J.E. (2007). *Constructive engagement?: Chester Crocker & American policy in South Africa, Namibia & Angola 1981-8*. Suffolk, U.K: James Currey.

- Diamond, L; Kirk-Greene, A. & Oyediran, O. (eds.) (1997). *Transition without end: Nigerian politics and civil society under Babangida*, London: Lynne Rienner.
- Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: toward democratic consolidation. *Journal of Democracy* 5, 4–18.
- (1982). Cleavage, Conflict, and Anxiety in the Second Nigerian Republic. *Journal of Modern African Studies*. 20(4): 629-68.
- Dicklitch, S. (1998). *The elusive promise of NGOs in Africa: lessons from Uganda*. London: Macmillan.
- Dollard, J., Miller, N. E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., Sears, R. R. (1939). *Frustration and aggression*. New Haven, CT, US: Yale University Press.
- Duffield, M. (2004). *Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia entre desarrollo y seguridad*. Madrid: La Catarata.
- ECCR (2010). *Shell in the Niger Delta: A Framework for Change. Five case studies from civil society*. Oxford, UK: ECCR.
- Echart, E. (2008). *Movimientos sociales y relaciones internacionales: la irrupción de un nuevo actor*. Madrid: La Catarata.
- Edozie, R. K. (2002). *People, power and democracy: The popular movement against military despotism in Nigeria, 1989-1999*. Laurenceville, NJ: Africa World Press.
- Ejobowah, J. B. (1999). Who owns the oil? The politics of Ethnicity in the Niger Delta of Nigeria. *Africa Today*. 47(1): 28-47.
- Ekine, S., (2001). *Blood and oil: testimonies of violence from women of the Niger Delta*. London: Centre for Democracy and Development.
- Environmental Rights Action/Friends of the Earth, Nigeria (2002): *A Blanket of Silence: Images of Odi Genocide*. Nigeria: ERA/FOE-Nigeria.
- Escobar, A. (2006). Difference and Conflict in the Struggle over Natural Resources: A political ecology framework. *Development*, 49(3): 6–13.
- Escobar, A., Rocheleau, D., & Kothari, S. (2002). Environmental Social Movements and the Politics of Place, *Development*, 45(1): 28-36.
- Falk, R. A. (1995). *On Humane Governance: Toward a New Global Politics: The World Order Models Project Report of the Global Civilization Initiative*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Falola, T. & Heaton, M. M. (2008). *A History of Nigeria*. Edimburgh, UK: Cambridge University Press.

- Fisher, J. (1998). *Non governments: NGOs and the political development of the Third World*. West Hartford: Kumarian Press.
- Fleshman, M. (2002). The International Community & the Crisis in Nigeria's Oil Producing Communities, *Review of African Political Economy*, 29(91): 153-163.
- Florini, Ann M. (ed.) (2000). *The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society*. Tokyo: Japan Center for International Exchange/Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Forrest, T. (1986). The Political Economy of Civil Rule and the Economic Crisis in Nigeria (1979-84). *Review of African Political Economy*, 35: 4-26.
- Fowler, A. (1993). NGOs as Agents of Democratization: An African Perspective. *Journal of International Development*, 5 (3): 325–339.
- Frank, A. G. (1981). *Crisis: In the Third World*, New York: Holmes. & Meier.
- Frynas, J. G. (2009). *Beyond Corporate Social Responsibility. Oil Multinationals and Social Challenges*. New York: Cambridge University Press.
- (2001). Corporate and State responses to anti-oil protests in the Niger Delta. *African Affairs*, 100: 27-54.
- Frynas, J. G., Beck, M. P., Mellahi, K. (2000). Maintaining Corporate Dominance after Decolonization: The “First Mover Advantage” of Shell-BP in Nigeria. *Review of African Political Economy*, 27(85): 407-425.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis*. New York: Harper.
- Gurr, T. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Harvey, D. (2007). Neoliberalism as creative destruction. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 610(21): 22–44.
- Haynes J. (ed.) (2005). *Development Studies*. New York: Palgrave Macmillan.
- Healy, J. & M. Robinson (1992). *Democracy, Governance and Economic Development: Sub-Saharan Africa in Comparative Perspective*. London: ODI.
- Hoben, M., Kovick, D., Plumb, D., Wright, J. (2012). Corporate and Community Engagement in the Niger Delta: Lessons Learned From Chevron Nigeria Limited’s GMOU Process. Cambridge: Consensus Building Institute.
- Horowitz, D. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Hudock, A. (1999). *NGOs and civil society: Democracy by proxy?* Cambridge, UK: Polity Press.

-Hulme, D. & Edwards, M. (1997). NGOs, States and Donors. An Overview. In D. Hulme & M. Edwards, *NGOs, States and Donors. Too Close for Comfort?* (pp. 3-22). London: St Martin's Press/the Children.

-Human Rights Watch (HRW). (2011). *Corruption on Trial? The Record of Nigeria's Economic and Financial Crimes Commission*. Washington, DC: HRW.

-(2010). "Everyone's in on the Game". *Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force*. Washington, DC: HRW.

-(2008). *Politics as War. The Human Rights Impact and Causes of Post-Election Violence in Rivers State, Nigeria* 20(3). Washington, DC: HRW.

-(2007a). *Chop Fine. The Human Rights Impact of Local Government Corruption and Mismanagement in Rivers State, Nigeria* 19(2). Washington, DC: HRW.

-(2007b). *Criminal Politics: Violence, "Godfathers" and Corruption in Nigeria*. Washington, DC: HRW.

-(2007c). *Election or "Selection"? Human Rights Abuse and Threats to Free and Fair Elections in Nigeria*. Washington, DC: HRW.

-(2005). *Rivers and Blood: Guns, Oil and Power in Nigeria's Rivers State*. A Human Rights Watch Briefing Paper. Washington, DC: HRW.

-(2003a) *The Warri Crisis: Fueling Violence* 15(18). Washington, DC: HRW.

-(2003b). *Testing Democracy: Political Violence in Nigeria*. Washington, DC: HRW.

-(2002a). *The Niger Delta: No Democratic Dividend*. Washington, DC: HRW.

-(2002b). *Nigeria. The Bakassi Boys: The Legitimization of Murder and Torture* 14(5). Washington, DC: HRW.

-(1999a) *The Price of Oil. Corporate Responsibility and Human Rights Violations in Nigeria's Oil Producing Communities*. Washington, DC: HRW.

-(1999b). *Nigeria. Crackdown in the Niger Delta* 11(2). Washington, DC: HRW.

-(1999c). *The Destruction of Odi and Rape in Choba*. Washington, DC: HRW.

-(1997). "Transition or travesty. Nigeria's Endless Process of Return to Civilian," 9(6). Washington, DC: HRW.

-(1996). "Permanent transition". *Current Violations of Human Rights in Nigeria*. 8(3). Washington, DC: HRW.

-(1995). *The ogoni crisis. A Case-Study of Military Repression in Southeastern Nigeria* 7(5). Washington, DC: HRW.

- (1994). *The Dawn of a New Dark Age. Human Rights Abuses Rampant as Nigerian Military Declares Absolute Power* 6(8). Washington, DC: HRW.
- Hyden, G. (1992). *Governance and the Study of Politics*. In G. Hyden & Michael Bratton (eds.), *Governance and Politics in Africa*. Boulder, London: Lynne Rienner Publishers.
- Ibeanu, O. (2006). *Civil Society and Conflict Management in the Niger Delta: Scoping Gaps for Policy and Advocacy*. Lagos, Nigeria: Cleen Foundation.
- Ibeanu, O. & Luckham, R. (2006). *Niger-Delta. Political Violence, Governance and Corporate Responsibility in a Petro-state*. Abuja, Nigeria: Center for Democracy and Development.
- Ihonvbere, J. O. & Shaw, T. M. (1998). *Illusions of Power. Nigeria in transition*. Trenton-Eritrea: Africa World Press Inc.
- Ikelegbe, A. (2006). Beyond the threshold of civil struggle: youth militancy and the militarization of the resource conflicts in the Niger Delta region of Nigeria. *African Study Monographs*, 27(3): 87-122.
- (2005). The construction of a leviathan: state building, identity formation and political stability in Nigeria. In W. Fawole and C. Ukeje (eds) *The crisis of the state and regionalism in West Africa: identity, citizenship and conflict* (pp. 71–91). Dakar: CODESRIA.
- (2001). The perverse manifestation of civil society: evidence from Nigeria, *The Journal of Modern African Studies*, 39(1): 1–24.
- Ikeji, C. C. (2011). Politics of revenue allocation in Nigeria: a reconsideration of some contending issues. *Sacha Journal of Policy and Strategic Studies*, 1(1): 121-136.
- Iliffe, John (2011). *Obasanjo, Nigeria and the World*. Suffolk, U.K: James Currey.
- International Crisis Group (ICG). (2015). *Curbing Violence in Nigeria (III): Revisiting the Niger Delta*. Africa Report N° 231.
- (2012). *The Gulf of Guinea: The New Danger Zone*. Africa Report N°195.
- (2011a): *Nigeria's Elections: Reversing the Degeneration?* Africa Briefing N°79.
- (2011b): *Nigeria's elections: avoiding a political crisis*. Africa Report N°123.
- (2007): *Nigeria: failed elections, failing state*. Africa Report N°126
- (2006a). *Nigeria's faltering federal experiment*. Africa Report N°119.
- (2006b). *Nigeria: want in the midst of plenty*. Africa Report N°113.
- Jordan, G. & W. Maloney (1997). *The Protest Business*. Manchester: Manchester University Press.

- Jorgensen, L. (1996). What are NGOs doing in civil society? In A. Clayton, *NGOs, Civil Society and the State: Building democracy in transitional societies* (pp. 36-54). Oxford: INTRAC.
- Joseph, R. (1987). *Democracy and Prebendal Politics in Nigeria: The Rise and Fall of the Second Republic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kalu, N. Kalu (2008). *State Power, Autarchy and Political Conquest in Nigerian Federalism*. Plymouth: Lexington Books.
- Keck, E. & Sikkink K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Khagram S., Riker, J. V. & Sikkink, K (eds.) (2002). From Santiago to Seattle: Transnational Advocacy Groups Restructuring World Politics. In S. Khagram, J. V. Riker, & K Sikkink, *Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms* (pp. 3-23). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Korten, D.C. (1990). *Getting to the 21st century: voluntary action and the global agenda*. West Hartford: Kumarian Press.
- Klare, M. T. (2004). *Blood and Oil*. New York: Henry Holt.
- Kraxberger, B. (2004). The Geography of Regime Survival: Abacha's Nigeria. *African Affairs*. 103(412): 413–430.
- Latham, R., Kassimir, R. & Callaghy, T. (2001). Introduction: Transboundary formations, intervention, order and authority. In T. Callaghy, R. Kassimir, & R. Latham (eds.), *Intervention and Transnationalism in Africa. Global-Local Connections* (pp. 1-20). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Lipsky, M. (1970). *Power in City Politics*. Chicago: Rand McNally.
- Lovejoy, P. E. (2000). *Transformations in Slavery*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Lubeck, P. (1990). Restructuring Nigeria's urban-industrial sector within the West African region: the interplay of crisis, linkages and popular resistance. Paper presented at the XII World Congress of Sociology, Madrid, Spain, July 9-13, 1990.
- Lujala, P. (2010). The spoils of nature: armed conflict and rebel access to natural resources. *Journal of Peace Research*, 47(1): 15–28.
- Luqman, S. (2011). Managing Nigeria's Niger Delta crisis under democratic rule. *African Security Review*, 20(3): 33-44.
- MacAdam, D., Tarrow, S & Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.

- MacAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- MacCarthy, J. & Zald, M. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82: 1212-1241.
- Madujibeya, S. A. (1975). Nigerian Oil: A Review of Nigeria's Petroleum Industry. *Standard and Chartered Review*, (may): 2-10.
- Martínez-Alier, J. (2002). *El ecologismo de los pobres*. Madrid: Icaria Editorial.
- Meagher, K. (2010). *Identity Economics: Social Networks and the Informal Economy in Nigeria*. Suffolk, UK: James Currey/Ibadan, Nigeria: Heinemann Educational Books.
- Mercer, C., Page, B., & Evans, M. (2009). Unsettling connections: transnational networks, development and African home associations. *Global Networks* 9(2): 141–161.
- Mercer, C., (2002). NGOs, civil society and democratization: a critical review of the literatura. *Progress in Development Studies*, 2(1): 5–22.
- Mittelman, James H. (1998). Globalisation and environmental resistance politics. *Third World Quarterly*. 19(5): 847- 872.
- Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) (1991): *Ogoni Bill Of Rights Presented To The Government And People Of Nigeria with an Appeal to the International Community by The Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP)*. Port Harcourt, Nigeria: Saros International Publishers.
- Murray, T. L. (2004). Environment, indiginity and transnationalism. In R. Peet & M. Watts, *Liberation ecologies. Environment, development, social movements* (pp. 309-337). London/New York: Routledge.
- Niezen, R. (2003). *The origins of indigenism. Human Rights and the Politics of Identity*. Berkeley, Los Angeles, London: California University Press.
- Niger Delta Development Commission (2006). *Niger Delta Regional Development Master Plan*. Port Harcourt: NDDC.
- Nwajiaku, K. (2012). The political economy of oil and ‘rebellion’ in Nigeria's Niger Delta, *Review of African Political Economy*, 39(132): 295-313.
- Nwajiaku, K. (2005). Between Discourse and Reality. The Politics of Oil and Ijaw Ethnic Nationalism in the Niger Delta. *Cahiers d'Études Africaines*. 45(178): 457-496.
- Obi, C. & Rustad, S. A. (2011). Introduction. Petroviolence in the Niger Delta – the complex politics of an insurgency. In *Oil and Insurgency in the Niger Delta. Managing the Complex Politics of Petroviolence* (pp. 1-14). London: Zed Books.

-Obi, C. I. (2011). *Beyond Electoral Democracy: An Anatomy of Ethnic Minority Insurgency in Nigeria's Oil Niger Delta*. In S. Adejumobi, *State, Economy, and Society in Post-Military Nigeria*. New York: Palgrave Macmillan.

(2010a). The petroleum industry: A paradox or (sp)oilier of development?, *Journal of Contemporary African Studies*, 28(4), 443-457.

(2010b). Oil Extraction, Dispossession, Resistance, and Conflict in Nigeria's Oil-Rich Niger Delta. *Canadian Journal of Development Studies* 30(1-2), 219-236.

(2007). Democratising Nigerian Politics: Transcending the Shadows of Militarism. *Review of African Political Economy*, 34(112): 379-384.

(2005a). Globalization and Local Resistance: The Case of Shell versus the Ogoni. In L. Amoore (Ed.), *The Global Resistance Reader*. Oxon: Routledge.

(2005b). Environmental Movements in Sub-Saharan Africa. A Political Ecology of Power and Conflict, Civil Society and Social Movements Programme Paper Number 15 January 2005, United Nations Research Institute for Social Development.

(2001a). *The changing forms of identity politics in Nigeria under economic adjustment. the case of the oil minorities movement of the Niger Delta*, Research Report, n° 119. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

(2001b). Global, state and local intersections: power, authority, and conflict in the Niger Delta oil communities. T. Callaghy, R. Kassimir, & R. Latham (eds.), *Intervention and Transnationalism in Africa. Global-Local Connections* (pp. 173-193). Cambridge: Cambridge University Press.

(1997). *Structural Adjustment, Oil and Popular Struggles: The Deepening Crisis of State Legitimacy in Nigeria*, Dakar: CODESRIA.

-Obotetukudo, S. W. (2011). *The Inaugural Addresses and Ascension Speeches of Nigerian Elected and Non-elected Presidents and Prime Minister, 1960-2010*. University Press of America.

-Ogbeide, U. (2011). The Minority Syndrome: Ethnic Mobilization and the Politics of Regional States Creation in Nigeria's Second Republic, 1979-83. *European Journal of Social Sciences*, 21(4).

-Okafor, O. C. (2006): *Legitimizing Human Rights NGOs. Lessons from Nigeria*, Africa World Press Inc.: Trenton, New York, Asmara, Eritrea.

-Okome, M. O. (1999). State and civil society in Nigeria in the era of structural adjustment program, 1986-93. *West Africa Review*. 1(1).

-Olawaniyi, O. (2011). Women's protests in the Niger Delta region. In *Oil and Insurgency in the Niger Delta. Managing the Complex Politics of Petroviolence* (pp. 150-166). London: Zed Books.

- Olukoshi, A & Abdulraheem, T. (1985). Nigeria, Crisis Management under the Buhari Administration. *Review of African Political Economy*, 34: 95-101.
- Olukotun, Ayo (2002). Authoritarian state, crisis of democratization and underground media in Nigeria. *African Affairs*. 101: 317-342.
- Olusanya, G. O. (1966). The Zikist Movement-A Study in Political Radicalism, 1946-50. *Journal of Modern African Studies*. 4(3).
- Omotola, J. S (2010). Elections and democratic transition in Nigeria under the Fourth Republic. *African Affairs*, 109(437): 535–553.
- Osaghae, E. E., Ikelegbe, A., Olarinmoye, O. O. & Okhomina, S. I. (2011). *Youths Militias, Self Determination and Resource Control Struggles in the Niger-Delta Region of Nigeria*. Dakar: CODESRIA.
- Osaghae, E. (2010). Social movements and rights claims: the case of action groups in the Niger Delta. In L. Thomson; C. Tapscott (eds.). *Citizenship and social movements: perspectives from the global South*. New York: Zed Books.
- Osaghae, E. E. (1991). A Re-Examination of the Conception of Ethnicity in Africa as an Ideology of Inter-Elite Competition. *African Study Monographs*, 12(1): 43-60.
- Osterweil, M. (2005). Place-Based Globalism: Locating women in the alternative globalization movement'. In W. Harcourt, & A. Escobar (eds.), *Women and the Politics of Place* (pp.174-89). Bloomfield, CT: Kumarian Press, pp.174-89.
- Osumah, O. & Ikelegbe, A. (2009). The Peoples Democratic Party and Governance in Nigeria, 1999- 2007. *Journal of Social Sciences*, 19(3): 185-199.
- Othman, S. & Williams, G. (1999). Politics, power and democracy in Nigeria. In J. Hyslop, (ed.) *African democracy in the era of globalisation* (pp. 15–71). Johannesburg: Witwatersrand University Press.
- Oyefusi, A. (2007). Oil and the Propensity to Armed Struggle in the Niger Delta region of Nigeria, *Post-conflict Transitions Working Papers n° 8*, Washington DC: World Bank.
- Pasha, M. K., & Blaney, D. L. (1998). Elusive Paradise: The Promise and Peril of Global Civil Society. *Alternatives*, 23: 417-450.
- Raufu, A. M. (1986). The National Question and Radical Politics in Nigeria. *Review of African Political Economy*, 37: 81-96.
- Reno, W. (2011). *Warfare in independent Africa. New Approaches to African History*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- (2001). Economías clandestinas, violencia y Estados en África. En M. Aguirre, Mariano y M. González, *Políticas mundiales, tendencias peligrosas*, Barcelona: CIP.

- (1993). Old Brigades, Money Bags, New Breeds and the Ironies of Reform in Nigeria', *Canadian Journal of African Studies*, 27(1): 65-87.
- Risse-Kappen, T. (1995). *Bringing transnational relations back in: Non-state actors, domestic structures and international institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robinson, W. I. (2003). *Transnational Conflicts. Central America, Social Change, and Globalization*. London/New York: Verso.
- Robinson, M. (1993). Governance, democracy and conditionality: NGOs and the new policy agenda. In A. Clayton, *Governance, Democracy and Conditionality: What role for NGOs?* (pp. 35-52). Oxford: INTRAC.
- Ross, M. L. (2001). Does Oil Hinder Democracy? *World Politics*, 53(3): 325-361.
- Rosser, A. (2006). The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Review. Brighton: Institute of Development Studies (IDS), Working Paper 268.
- Rostow, W.W. (1960). *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rowell, A., Marriot, J., & Stockman, L. (2005). *The next Gulf. London, Washington and oil conflict in Nigeria*. London: Constable.
- Rowell, A. (1996). *Green Backlash: Global Subversion of the Environmental Movement*. London: Routledge.
- Rowell, A. (1994). *Shell Shocked: The environmental and social costs of living with Shell in Nigeria*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Ruggie, J. (2008). Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. A/HRC/8/5.
- Sachs, A. (1995). *Eco-Justice: Linking Human Rights and the Environment*. Worldwatch Paper n°. 127, Washington, DC: Worldwatch Institute.
- Sara-Wiwa, K. & Saro-Wiwa, K. (1995). Nigeria, Oil and the Ogoni. *Review of African Political Economy*, 22(64): 244-246.
- Saro-Wiwa, K. (1995). *A Month and a Day: A Detention Dairy*. London: Penguin Books.
- Saro-Wiwa, K. (1992). *Genocide in Nigeria*, Port Harcourt, Nigeria: Saros International Publishers.
- Schmitz, H. P. (2001). When networks blind: human rights and politics in Kenya T. Callaghy, R. Kassimir, & R. Latham (eds.), *Intervention and Transnationalism in Africa. Global-Local Connections* (pp. 149-172). Cambridge: Cambridge University Press.

- Sellier, J. (2005). *Atlas de los Pueblos de África*. Barcelona: Paidós.
- Shaxson, N., (2007). *Poisoned wells: the dirty politics of African oil*. New York and Hampshire: Palgrave-Macmillan.
- Sheahan, J. (1980). Market oriented economic policies and political repression in Latin America. *Economic Development and Cultural Change*, 28, 267-91.
- Sklar, R. (1967). Ethnic relations and social class. *Journal of Modern African Studies*. 5(1): 1-11.
- Smith, D.J. (2010). Corruption, NGOs, and Development in Nigeria. *Third World Quarterly*. 31(2), 243–258.
- Smith, D.J. (2007). *A Culture of Corruption: Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria*. Princeton: Princeton University Press.
- Snow, D. & Soule, S. (2000). *A Primer on Social Movements*. London: W.W. Norton.
- Soares de Oliveira, R. (2007): *Oil and politics in the Gulf of Guinea*. London: Hurst and Company.
- Tar, U. A. & Zack-Williams, A. B. (2007). Nigeria: Contested Elections & an Unstable Democracy. *Review of African Political Economy*, 34(113): 540-548.
- Tarrow, S. & Della Porta, D (2005). *Transnational protest and global activism*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Trivedy, R. & Acharya, J., (1996). Constructing the case for an alternative framework for understanding civil society, the state and the role of NGOs. In Clayton, A. (ed.), *NGOs, Civil Society and the State: Building democracy in transitional societies* (pp. 12-33). Oxford: INTRAC.
- Tsing, A. L. (2005). *Friction: an ethnography of global connection*. Princeton & Oxford: Princeton University Press.
- Ukeje, C. (2004). From Aba to Ugborodo: Gender Identity and Alternative Discourse of Social Protest Among Women in the Oil Delta of Nigeria. In S, Arnfred, *Gender Activism and Studies in Africa* (pp. 66-97). Dakar: CODESRIA.
- Ukiwo, U. (2011). The Nigerian state, oil and the Niger Delta crisis. In *Oil and Insurgency in the Niger Delta. Managing the Complex Politics of Petroviolence* (pp. 17-27). London: Zed Books.
- (2007). From ‘pirates’ to ‘militants’. *African Affairs*. 106(425): 587–610.
- (2003). Politics, Ethno-Religious Conflicts and Democratic Consolidation in Nigeria. *The Journal of Modern African Studies*, 41(1): 115-138.
- UNDP (2006): *Nigeria Human Development Report*, Geneva, Switzerland: UNDP.

-UNEP (2011). *Environmental Assessment of Ogoniland*. United Nations Environment Programme: Kenia.

-Wallerstein, I. (1999). *El moderno sistema mundial*. Siglo XXI de España.

-Wapner, P. (1995). Politics beyond the State: Environmental Activism and World Civic Politics. *World Politics*, 47(3): 311-40.

-Watts, M. (2007). Petro-Insurgency or Criminal Syndicate? Conflict & Violence in the Niger Delta, *Review of African Political Economy*, 34(114): 637-660.

(2004). Violent environments. Petroleum conflict and the political ecology of rule in the Niger Delta, Nigeria. In R. Peet & M. Watts, *Liberation ecologies. Environment, development, social movements* (pp. 250-272). London/New York: Routledge.

-World Bank (2000). *World development report 1999/2000: entering the 21st century*. Washington DC: World Bank.

(1992). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.

NOTICIAS en PRENSA DIGITAL

-Amaize, E. (21/02/2009). Niger-Delta struggle: 'Ijaw is losing sympathy' – Dr Chris Ekiyor, IYC President", *Vanguard*. Consultado en: www.vanguardngr.com

-Ebelo, Goodluck (01/12/1999). What Army Did in Bayelsa. *Tempo*. Consultado en: <http://allafrica.com>

-Eziukwu, A. (24/01/2015). Niger Delta militants meet in Yenagoa, threaten war should Jonathan lose presidential election. *Premium Times*. Consultado en: www.premiumtimesng.com

-Guest, R. (15/01/2000). Oil Alone Doesn't Make you Happy. *The Economist*. Consultado en: www.economist.com

-Howden, D. (17/01/2006). Shell may pull out of Niger Delta after 17 die in boat raid, *The Independent*. Consultado en: www.independent.co.uk

-Isine, I. (06/07/2008). Niger Delta Summit is diversionary. *Punch*. Consultado en: www.punchng.com

En IRIN News: www.irinnews.org

-Anyadike, O. (09/04/2015). Oil-rich Delta poses first big test for Nigeria's new leader.

-Anger over amnesty programme (27/09/2012)

- Niger Delta still unstable despite amnesty (25/11/2011)
- Anger over amnesty programme (27/09/2012)
- Under-development continues to fuel oil theft (17/11/2008)
- Tensions rise with start of trial of Delta leader (15/04/2008)
- Sharp rise in hostage taking may be linked to upcoming elections (05/02/2007)
- Delta militants free remaining foreign hostages, vow fresh attacks (27/03/2006)
- Militants free foreign oil workers but vow more attacks (30/01/2006)
- Militants threaten to cripple oil exports if demands not met (17/01/2006)
- Oil facilities open again as militiamen withdraw threat of attacks (27/09/2005)
- Olojede, D. (30/10/2004). Oil-rich Nigerian delta demanding self-determination.
- Niger Delta militia surrendering weapons for cash Niger (29/10/2004)
- Militia group vows to attack oil workers if firms stay in Delta (28/09/2004)
- Self-styled rebel seeks independence for oil-producing Niger delta (16/07/2004)
- Obasanjo declared winner in vote marred by fraud (23/04/2003)
- Ijaw militants say halting fighting (27/03/2003)
- Ijaw militants seize oil facilities (24/09/2002)
- IRIN Background report on Niger Delta crisis (11/06/1999)

En *BBC News*: news.bbc.co.uk

- Nigeria oil militants Mend 'hit Eni Bayelsa pipeline' (05/02/2012)
- Nigerian militants seize workers from oil rig (09/11/2010)
- Nigerian police names suspects in Abuja car bombings (04/10/2010)
- Nigeria independence celebrations marred by blasts (01/10/2010)
- Brown outlines Niger Delta help (16/07/2008)
- Nigeria rebels claim Lagos attack (13/07/2009)

- Niger Delta push for US mediator (07/05/2008)
- Nigeria oil unrest 'kills 1,000' (10/04/2008)
- Intervene in Nigeria, Bush urged (18/02/2008)
- Two explosions in Nigeria's Delta (18/12/2006)
- Nigerian army *razes oil village* (6/10/2006)
- Nigeria's oil violence (05/10/2006)
- Car blast near Nigeria oil port (30/04/2006)
- Militants reject Niger Delta help (19/04/2006)
- Shell evacuates Nigeria workers (16/01/2006)

En Reuters: <http://af.reuters.com>

- Tife, S. (17/03/2011). Nigeria militants claim oil strike, army blames youths.
- Nigeria militants claim oil strike, army blames youths (17/03/2011)